

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES  
SEDE ECUADOR  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS  
CONVOCATORIA 2011-2013**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS  
POLÍTICAS**

**EL CAMPO DE PODER REGIONAL:**

**TRAYECTORIAS DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y CARLOS CASTAÑO GIL  
EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS  
DE ANTIOQUIA Y CÓRDOBA**

**JORGE ANDRÉS DÍAZ LONDOÑO**

**MAYO DE 2014**

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES  
SEDE ECUADOR  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS  
CONVOCATORIA 2011-2013**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS  
POLÍTICAS**

**EL CAMPO DE PODER REGIONAL:**

**TRAYECTORIAS DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y CARLOS CASTAÑO GIL  
EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS  
DE ANTIOQUIA Y CÓRDOBA**

**JORGE ANDRÉS DÍAZ LONDOÑO**

**ASESOR DE TESIS:  
FRANKLIN RAMIREZ GALLEGOS**

**LECTORES/AS:  
MARÍA CRISTINA CIELO  
MANUEL ALBERTO ALONSO**

**MAYO DE 2014**

## **DEDICATORIA**

A mi familia, novia, amigos y estudiantes porque con su presencia y apoyo me alentaron a desarrollar este proyecto de investigación.

## **AGRADECIMIENTOS**

Al profesor Franklin Ramírez quién con sus conocimientos, recomendaciones y ejemplo se convirtió en un académico que incentivó la reflexión, la autocrítica y el análisis riguroso en la presente investigación. A la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador por sus importantes aportes al desarrollo de un comunidad académica e investigativa en América Latina. Y a los Institutos de Estudios Políticos y de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia porque con sus investigaciones y entrevistas contribuyeron a esclarecer el objeto del presente estudio.

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	8
<b>Contexto y problema de investigación</b> .....	8
<b>Teoría y método</b> .....	13
<b>Estrategia metodológica: Biografía Relacional</b> .....	16
<b>Trabajo de campo y técnicas de investigación</b> .....	17
<b>Delimitación de los capítulos</b> .....	23
<b>PRIMERA PARTE</b> .....	24
<b>RELACIONES HISTÓRICAS DE PODER Y ORIGEN SOCIAL ARTICULACIÓN ENTRE CONDICIONES OBJETIVAS Y DISPOSICIONES SUBJETIVAS</b> .....	24
<b>Introducción</b> .....	24
<b>CAPÍTULO I</b> .....	27
<b>EL FRENTE NACIONAL: UNA LECTURA DESDE LA TEORÍA DE LOS CAMPOS</b> .....	27
<b>Introducción</b> .....	27
<b>El Campo Político</b> .....	30
<b>El nacimiento de las guerrillas</b> .....	35
<b>El Campo Militar</b> .....	36
<b>EL Campo de Poder Estatal</b> .....	41
<b>CAPÍTULO II</b> .....	44
<b>EL ORIGEN SOCIAL Y LA GÉNESIS DE LOS HABITUS POLÍTICOS Y GUERREROS</b> .....	44
<b>Introducción</b> .....	44
<i>Familia Uribe Vélez: un mundo de haciendas, caballos, ganado, peones y participación política.</i> .....	45
<i>Familia Castaño Gil: la finca, la familia y el trabajo como un reflejo de un mundo de campesinos propietarios de tierra.</i> .....	49
<b>Encuentro entre condiciones subjetivas y objetivas: la confluencia de las familias Uribe Vélez y Castaño Gil con las relaciones de fuerza y de violencia imperantes en el campo de poder estatal y regional a mediados del siglo XX.</b> .....	52
<i>Socialización en medio de la Violencia Bipartidista y el conflicto armado entre el Estado y las Guerrillas Comunistas.</i> .....	53
<b>Secuestro y Extorsión</b> .....	69

<b>Estrategias personales de lucha contra las guerrillas y su articulación con las estrategias de conservación de los agentes dominantes del campo de poder estatal.....</b>	<b>72</b>
<b>SEGUNDA PARTE.....</b>	<b>78</b>
<b>REPRODUCCIÓN SOCIAL Y AGENCIA</b>	
<b>LA CONFLUENCIA DE LO POLITICO Y LO MILITAR EN LAS BIOGRAFIAS RELACIONALES.....</b>	<b>78</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>78</b>
<b>CAPÍTULO III.....</b>	<b>81</b>
<b>TRAYECTORIA DE UN POLÍTICO REGIONAL EN ASCENSO.....</b>	<b>81</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>81</b>
<b>El campo político en Antioquia y la trayectoria política de Álvaro Uribe.....</b>	<b>82</b>
<b>El capital político de Álvaro Uribe y las estrategias para su acumulación.....</b>	<b>93</b>
<b>Álvaro Uribe Vélez: ganadero, caballista y terrateniente de Antioquia y Córdoba.....</b>	<b>95</b>
<b>Redes de poder y articulaciones entre lo legal y lo ilegal.....</b>	<b>101</b>
<b>CAPÍTULO IV.....</b>	<b>109</b>
<b>TRAYECTORIA DE UN PARAMILITAR.....</b>	<b>109</b>
<b>El Campo Militar colombiano.....</b>	<b>109</b>
<b>El campo militar en Antioquia y la trayectoria paramilitar de Carlos Castaño.....</b>	<b>112</b>
<b>Las Autodefensas del Magdalena Medio y la incursión de los hermanos Castaño Gil en el proyecto paramilitar.....</b>	<b>118</b>
<b>Muerte a Revolucionarios del Nordeste antioqueño: expansión paramilitar y consolidación del Ejército de los hermanos Castaño Gil.....</b>	<b>123</b>
<b>La lucha por el control del sur de Córdoba y la consolidación de la estrategia de guerra paramilitar.....</b>	<b>127</b>
<b>La guerra contra Pablo Escobar y transformación del proyecto paramilitar a mediados de la década de los noventa del siglo XX.....</b>	<b>134</b>
<b>CAPÍTULO V.....</b>	<b>141</b>
<b>LA “PACIFICACIÓN DE URABÁ”.....</b>	<b>141</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>141</b>
<b>Urabá: una historia de reproducción de violencia.....</b>	<b>141</b>
<b>Confluencia del proyecto paramilitar de Carlos Castaño y del proyecto político de Álvaro Uribe.....</b>	<b>145</b>
<b>CAPÍTULO VI.....</b>	<b>159</b>
<b>EL CAMPO DE PODER REGIONAL.....</b>	<b>159</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>159</b>
<b>De las biografías relacionales al campo de poder regional.....</b>	<b>161</b>

<b>El campo de poder regional y los “Ordenes” en disputa .....</b>	<b>166</b>
<b>El campo de poder regional y la configuración del Estado colombiano.....</b>	<b>172</b>
<b>Aportes de la teoría de los campos a la comprensión del fenómeno estudiado, límites y nuevos problemas de investigación.....</b>	<b>173</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>176</b>

## INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como objetivo develar las condiciones estructurales y subjetivas que permitieron el ingreso, como agentes activos, de Álvaro Uribe en el campo político y de Carlos Castaño en el campo militar, durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, en medio del conflicto armado presentado en los departamentos de Antioquia y Córdoba, así como la confluencia del conjunto de luchas políticas y militares en el campo de poder regional durante este periodo.

Para poder responder a dicho problema de investigación se articuló la teoría de los campos de Pierre Bourdieu con la elaboración de una biografía relacional de ambos autores. Este abordaje teórico-metodológico fue el eje central de la investigación, puesto que por medio de las biografías relacionales se analizó las condiciones estructurales (entendidas como campos) y los factores subjetivos (percepciones y apreciaciones de los agentes) que confluyen (en forma de habitus) en la configuración del poder de estos dos agentes (a través de los capitales acumulados y las estrategias desarrolladas en cada campo) a nivel regional.

En este sentido, sobre la base del entendimiento de las trayectorias de vida, así como de las percepciones, apreciaciones y acciones desplegadas por Álvaro Uribe y Carlos Castaño, la reflexión se orientó a develar también los conflictos, relaciones de poder, antagonismos, alianzas y dinámicas de los campos donde estos agentes fueron activos.

### **Contexto y problema de investigación**

En Colombia entre mediados de la década de los noventa y comienzos del siglo XXI se desarrolló la mayor confrontación armada entre el Estado y las organizaciones guerrilleras del país, paradójicamente, durante este mismo periodo, específicamente entre los años 1998 y 2002, se llevó a cabo un proceso de paz por parte del Gobierno del presidente Andrés Pastrana con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.



Durante estos años la guerrilla de las FARC había tenido los éxitos militares más importantes de toda su historia, con lo cual lograron pasar de una guerra de guerrillas a una guerra de control territorial y se acercaban cada vez más a la toma del poder del Estado por medio de un ejército revolucionario, objetivo que se habían propuesto desde 1982, cuando en su VII Conferencia definieron la estrategia político militar para lograrlo.

Fue así como en 1985 las FARC habían realizado 95 acciones armadas en 61 municipios, pero ya para el año 2002 esta organización realizó 1873 acciones en un total de 444 municipios del país. De los 48 miembros iniciales de las FARC en los años sesenta, se habían pasado, a finales de los años ochenta a 8000 y en 2003 se contabilizaban alrededor de 16500 combatientes distribuidos en 62 frentes y siete bloques que cubrían casi todo el territorio nacional (PNUD, 2003: 53-56). Según Eduardo Pizarro durante los años noventa las FARC realizaron una gran ofensiva en contra de las Fuerzas Militares Colombianas con un complejo aparato militar de más de dieciséis mil hombres armados:

Las FARC van a instalar en el sur del país (en particular en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo), su retaguardia estratégica. Para ello, en esta amplia región se pasa de una estrategia centrífuga a una estrategia centrípeta, consistente en crear unidades militares capaces de cercar y aniquilar bases y tropas de élite del Ejército oficial... La primera experiencia tendrá lugar el 14 de abril de 1996 en Puerres (Nariño), en donde fue emboscada una compañía adscrita al grupo mecanizado “Cabal”, compuesta por 49 soldados. Tras esta acción que puso de relieve los avances tácticos alcanzados por las FARC, los siguientes éxitos en el terreno de batalla van a ser impactantes: Las Delicias (Putumayo), La Carpa (Guaviare), Patascoy (Nariño), El Billar (Caquetá), Miraflores (Guaviare), La Uribe (Meta) y tantos otros en los cuales murieron decenas y decenas de miembros de unidades de élite de las Fuerzas Armadas y centenares fueron tomados como rehenes<sup>1</sup>. Los éxitos militares de las FARC eran de tal envergadura que, en los Estados Unidos, tanto la Agencia de Inteligencia de Defensa como el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos llegaron a afirmar que el Ejército estaba perdiendo la guerra interna y que a ese ritmo preveían su derrota en cinco años (Pizarro, 2011: 232).

---

<sup>1</sup> Durante este periodo sobresalieron las siguientes acciones militares: en 1996 la toma de la base militar de Las Delicias (Putumayo), con 27 muertos y más de sesenta militares secuestrados. En 1997, la toma de la base de Patascoy (Nariño), con alrededor de veinte muertos y varios secuestrados. En 1998, la destrucción de una unidad militar en El Billar (sobre el río Cagúan), que dejó 65 militares muertos y 43 secuestrados; el ataque a Miraflores (Guaviare), con treinta muertos y 127 secuestrados; el ataque a La Uribe, 33 muertos y ocho secuestrados; el ataque a Mitú, capital del Vaupés, en la frontera con Brasil, que causó cuarenta muertos y decena de secuestrados. Fue así como en poco tiempo, las FARC capturaron a más de quinientos militares y policías (Pécaut, 2008: 114).

En su objetivo de toma del poder por medio de un ejército revolucionario, las FARC comenzaron a expandirse de zonas de consolidación hacia regiones de mayor importancia económica, política y militar, para ello desdoblaron frentes y constituyeron una economía de guerra.

La estrategia de las FARC era clara: por un lado, el fortalecimiento de su “centro de despliegue” estratégico en torno a la Cordillera Oriental, tendiente a cercar a Bogotá, para lo cual convirtieron al Bloque Oriental en el más fuerte en términos de hombres y frentes; por otro lado, continuaron desplegando nuevos frentes a todo lo largo de la geografía nacional con el objeto de dispersar a las Fuerzas Armadas y, por último, en el sur del país pasaron de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, con objeto de aniquilar las débiles unidades militares para copar este territorio y garantizar corredores estratégicos y sus fuentes de financiamiento, ante todo la economía de la droga (Pizarro, 2011: 233).

En el marco de este ascenso del poder militar de las FARC y de las derrotas sufridas por el Ejército Colombiano se inició el proceso de paz entre esta guerrilla y el gobierno de Andrés Pastrana. Pero paralelamente diferentes agentes legales e ilegales se opusieron a la negociación política del conflicto armado, puesto que veían en él un triunfo político y militar de la guerrilla, así como la posibilidad de su reinserción a la sociedad civil por medio de su articulación a los medios legales de participación política y lucha por el poder a través de mecanismos de elección popular, aspectos que no compartían muchos de los opositores, entre los cuales se encontraban el ex Gobernador de Antioquia y candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez y el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Carlos Castaño Gil.

Para esta época Uribe Vélez ya se había convertido en un dirigente político que promovía la lucha contrainsurgente del Estado colombiano y la implementó como Gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Durante estos años avaló la creación de alrededor de sesenta Convivir<sup>2</sup>, promovió el nombramiento de alcaldes militares y la creación de una Zona Especial de Orden Público en el Urabá antioqueño, a su vez, como candidato presidencial prometió una lucha frontal contra las guerrillas, de esta manera antepuso una derrota militar ante cualquier proceso de negociación política.

---

<sup>2</sup> Las Convivir son las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada que fueron concebidas como organizaciones de seguridad, reguladas por el Estado, para reforzar la lucha principalmente contra las organizaciones guerrilleras.

Por otra parte, Carlos Castaño fue un comandante paramilitar que promovió junto a sus hermanos, la creación de una de las organizaciones paramilitares más importantes del país, conocida como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, de igual manera apoyó el desarrollo de las Convivir en Antioquia durante la Gobernación de Álvaro Uribe (1995-1997) y lideró el proceso de unificación nacional de los paramilitares en una organización confederada denominada las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el marco de la lucha contrainsurgente desarrollada en el país a mediados y finales del siglo XX.

La postura crítica frente al proceso de paz y el desarrollo de una propuesta de mano dura para enfrentar a las guerrillas en medio de la evidencia del fracaso de las negociaciones le permitieron a Álvaro Uribe Vélez ganar las elecciones presidenciales del año 2002, desarrollar la Política de Seguridad Democrática y profundizar el modelo de desarrollo capitalista neoliberal en el país.

Álvaro Uribe obtuvo una importante victoria, en primera vuelta, en las elecciones presidenciales de 2002, con el 53% del total de votos, en 2006 fue reelecto con el 62,3% de la votación, después de promover una reforma constitucional para poder reelegirse; durante este periodo fue un gobernante mediático, preocupado por los sondeos de opinión y por el manejo simbólico del poder; fue también un presidente que realizó la guerra con las guerrillas y negoció acuerdos de paz con los paramilitares.

Paralelamente, durante el periodo de negociaciones de paz, las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por Carlos Castaño, llevaron a cabo una amplia ofensiva en todo el territorio nacional contra las guerrillas, así como frente a quienes consideraban sus colaboradores, generando con ello un aumento del desplazamiento forzado, de las masacres y las desapariciones, lo que posteriormente les permitió controlar militarmente importante regiones del país y paralelamente construir un proyecto de toma del poder político regional y nacional, por medio de pactos llevados a cabo entre políticos, narcotraficantes y paramilitares, como en el caso del Pacto de Ralito<sup>3</sup>, fenómeno que fue denominado como parapolítica.

---

<sup>3</sup> El Pacto de Ralito fue un acuerdo firmado el 23 de julio de 2001 entre los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Diego Murillo, Edward Cobo Tellez y Rodrigo Tobar Pupo, miembros del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia, con políticos de diferentes regiones del país, entre ellos siete

En este escenario, Carlos Castaño fue el comandante paramilitar más representativo de las organizaciones de Autodefensa Campesina en el periodo 1994–2004, años en los cuales el paramilitarismo tuvo su mayor auge y poderío político, económico y militar. Durante el primer gobierno presidencial de Álvaro Uribe comenzaron un proceso de negociación de paz y en el año 2005, por medio de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, varias de las organizaciones paramilitares iniciaron el proceso de desmovilización.

Pero estos dos agentes que lograron desarrollar una muy importante influencia a nivel nacional en la primera década del siglo XXI, previamente habían coincidido en otros aspectos, a nivel regional, durante su trayectoria de vida:

Ambos nacieron en el departamento de Antioquía y desde allí comenzaron a construir un poder político o militar emergente que gradualmente les permitió obtener una influencia regional y nacional. Sus familias laboraban en el campo colombiano y fueron socializados en un contexto bipartidista, especialmente conservador, de tradición colonizadora y católica, en medio de luchas entre terratenientes, ganaderos y campesinos por la tenencia de la tierra, el acceso a los recursos naturales y las condiciones laborales en la agroindustria.

Ellos fueron también víctimas directas de la violencia producida por el conflicto entre el Estado y las guerrillas; sus padres fueron asesinados por las FARC y se convirtieron en objetivos militares de esta organización. Ambos decidieron apoyar a las Fuerzas Militares en su estrategia antisubversiva en los departamentos de Antioquia y Córdoba, posteriormente, lo hicieron a nivel nacional. A su vez, coincidieron en señalar la necesidad de construir unas Fuerzas Militares fuertes capaces de derrotar a las guerrillas y sobre esta base poder encaminar el desarrollo del país por una vía capitalista neoliberal.

---

representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores, cinco alcaldes y otros funcionarios públicos, cuyo objetivo era refundar la patria y firmar un nuevo contrato social. Según Salvatore Mancuso y Vicente Castaño, más del 35% de los congresistas elegidos en el año 2002 eran “amigos” de los paramilitares.

En el marco de esta confluencia de factores y conflictos que relacionan las trayectorias de vida de ambos agentes con factores históricos y estructurales más amplios, es de donde nace el objeto de estudio de la presente investigación:

¿Cuáles fueron las condiciones tanto objetivas como subjetivas que permitieron el ingreso, como agentes activos, de Álvaro Uribe en el campo político y de Carlos Castaño en el campo militar, durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, en medio del conflicto armado presentado en los departamentos de Antioquia y Córdoba? De igual manera ¿En qué medida las estrategias llevadas a cabo por ambos agentes y la confluencia de luchas políticas y militares por el control territorial, en el nivel departamental, contribuyeron a la configuración de un campo de poder regional?

La decisión de orientar y delimitar el trabajo investigativo hacia el periodo de surgimiento de este fenómeno se sustenta en un postulado metodológico del socioanálisis propuesto por Pierre Bourdieu, que señala la necesidad de identificar y entender la génesis del objeto de estudio, para a partir de allí develar su esencia y comprender los mecanismos más ocultos que determinan el fenómeno estudiado.

En este sentido, sobre la base del entendimiento de las percepciones, apreciaciones, y acciones desplegadas por Álvaro Uribe y Carlos Castaño, la reflexión se orientará a develar también los conflictos, relaciones de poder, antagonismos, alianzas y dinámicas de los campos donde estos agentes fueron activos.

### **Teoría y método**

El presente estudio se fundamenta en el estructuralismo genético de Pierre Bourdieu, el cual por medio de la articulación de los conceptos de campo, capital y habitus contribuye a develar la realidad social. A su vez, el abordaje metodológico será la biografía relacional que por medio del análisis de la trayectoria de vida de los agentes seleccionados permitirá definir y comprender qué campos, qué capitales y sobre qué dinámica de luchas fue posible el surgimiento y consolidación del proyecto político de Álvaro Uribe Vélez y del proyecto paramilitar de Carlos Castaño.

En este sentido, se entiende que durante su trayectoria de vida ambos agentes hicieron parte de varios campos, definidos estos como espacios sociales de conflicto y de competencia, análogos a un campo de batalla, en el que los participantes luchan por establecer un control o monopolio sobre el tipo de capital que es efectivo en él y por definir la jerarquía y las normas que rigen el campo mismo.

Un campo puede definirse como una trama o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Esas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder o de capital, cuya disposición comanda el acceso a los beneficios específicos que están en juego dentro del campo y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posiciones: dominación, subordinación, homología (Bourdieu; Wacquant, 1995: 64).

Según Pierre Bourdieu, el campo:

Es igualmente un campo de luchas por la conservación o la transformación de la configuración de sus fuerzas. Como estructura de relaciones objetivas entre posiciones de fuerza, el campo subyace y orienta las estrategias mediante las cuales los ocupantes de esas posiciones intentan, individual o colectivamente, salvaguardar o mejorar su posición e imponer el principio de jerarquización más favorable a sus propios productos (Bourdieu; Wacquant, 1995: 68).

Por su parte, el capital hace referencia a los recursos que reportan beneficios y dan poder a los agentes dentro del campo, es aquello por lo que se lucha y lo que permite ejercer una influencia dentro de un campo. Por lo tanto, el poder de Carlos Castaño y de Álvaro Uribe se produce a partir de los capitales acumulados, la red relaciones que van configurando, las estrategias llevadas a cabo dentro de los campos, lo cual finalmente les permite convertirse en agentes dominantes en dichos campos.

Un capital sólo existe y funciona en relación a un campo: confiere un poder sobre el campo, sobre los instrumentos materializados o incorporados de producción o de reproducción, cuya distribución constituye la estructura misma del campo; así como sobre las regularidades y las reglas que definen el funcionamiento ordinario del campo y, de ahí, sobre las ganancias que se generan en el mismo (Bourdieu; Wacquant, 1995:67).

Pero es importante entender, teórica y metodológicamente, que existe una articulación entre el campo y el agente, es decir, que si bien el campo puede estructurar el comportamiento de los agentes y reproducir el orden establecido, al mismo tiempo, las

acciones de los agentes son las que estructuran el campo, le dan su dinámica y pueden llevar a su transformación. Para dar cuenta de ello, Bourdieu elaboró el concepto de habitus:

El habitus es tanto el elemento generador de la práctica, como el factor primordial de la reproducción cultural o simbólica... El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes de cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir (Bourdieu, 1988: 54).

Este concepto “da cuenta del hecho de que los agentes sociales no son ni partículas de materia determinadas por causas externas, ni tampoco pequeñas mónadas guiadas exclusivamente por motivos internos, que llevan a cabo una suerte de programa de acción perfectamente racional” (Bourdieu; Wacquant, 1995: 93). En este sentido, podemos entender que las biografías de Álvaro Uribe y Carlos Castaño pueden expresar, de manera simultánea, la reproducción de un orden estructural y social establecido y, a su vez, manifestar su capacidad de transformación de las relaciones de fuerzas y posiciones dentro del mismo campo.

Por lo tanto, el concepto de habitus es central para entender la relación y articulación entre el campo y el agente, entre los factores estructurales y los subjetivos, los cuales influyen en la acción y en las estrategias de los agentes.

Finalmente, este concepto de habitus, en relación con el de campo y capital, se articula con el enfoque metodológico propuesto de la biografía relacional, debido a que el análisis biográfico pretende comprender los determinantes sociales presentes en la construcción de una vida, pero al mismo tiempo concibe el trabajo que el propio individuo efectúa para producir su propia existencia (Roberti, 2012: 132). En este sentido, teórica y metodológicamente se tienen los elementos necesarios para entender los factores estructurales y subjetivos que hicieron posible el ingreso y consolidación de Álvaro Uribe como agente activo dentro del campo político y de Carlos Castaño dentro del campo militar.

En la primera parte de la presente investigación, capítulos I y II, se introdujo los conceptos de campo de poder estatal, campo político y campo militar como herramientas teórico metodológicas para comprender las relaciones históricas de fuerza, oposición y poder desde el periodo del Frente Nacional hasta los años ochenta del siglo XX, las cuales nos sólo antecedieron sino que influyeron en el ingreso de Álvaro Uribe al campo político y de Carlos Castaño al campo militar.

Posteriormente, en la segunda parte de la investigación, capítulos III, IV y V, se analizó las trayectorias de Álvaro Uribe y Carlos Castaño en los departamentos de Antioquia y Córdoba durante los años ochenta y noventa del siglo XX, así como su respectiva vinculación y evolución en los campos político y militar a nivel regional, finalmente se estudió la confluencia de las relaciones históricas de poder con sus trayectorias de vida en el campo de poder regional.

Este concepto de campo de poder regional nos permitió ilustrar y entender el espacio social de relaciones de fuerza y de antagonismo presentadas entre mediados y finales del siglo XX en los departamentos de Antioquia y Córdoba, orientadas al control militar del territorio, así como hacia la imposición e inculcación de un orden social, político y económico en él, por parte de élites del campo de poder estatal, élites regionales, organizaciones guerrilleras, carteles del narcotráfico y agrupaciones paramilitares, las cuales a partir de la acumulación de suficiente capital político, económico y militar lograron convertirse en agentes activos dentro de dicho campo.

### **Estrategia metodológica: Biografía Relacional**

El análisis por medio de la biografía relacional permite comprender, a partir de trayectorias de vida, quiénes son los agentes dentro de un campo y de dónde provienen ellos, a su vez, entender las estructuras sociales y las constricciones externas a las que ellos se enfrentan. En este sentido, las explicaciones biográficas pretenden conocer tanto las decisiones y las prácticas de los agentes, así como las estructuras jerárquicas y las instituciones en las que operan. Este tipo de estudios contribuye a develar la relación existente entre lo que dicen los agentes y sus propias posiciones dentro del campo.



El uso de biografías en la investigación social revaloriza al sujeto como objeto de investigación, en su búsqueda por rescatar la trayectoria vital del actor, sus experiencias y su visión particular; permitiendo aprehender, al mismo tiempo, aquella vida como el reflejo de una época, las normas sociales y los valores propios de la comunidad de la que el sujeto forma parte. De este modo, se plantea una mediación entre la historia individual y la historia social (Roberti, 2012: 132).

Según Dezalay y Garth el propósito de la biografía relacional es “descubrir una biografía colectiva de campos relativamente autónomos. Desde esta perspectiva, no sólo existen los individuos per se, sino que ellos también proporcionan caminos para examinar y decodificar las divisiones y los conflictos complejos que caracterizan un escenario particular en un tiempo determinado” (Delezay, Garth, 2002: 34-35). En este sentido, se entiende que la trayectoria personal de los agentes Álvaro Uribe Vélez y Carlos Castaño Gil son una representación de la dinámica de los campos en los cuales se encontraron inmersos.

Por lo tanto, la biografía relacional se configuró como el eje central de la investigación al permitirnos articular la teoría seleccionada con el problema de estudio, puesto que por medio del análisis biográfico conocimos las condiciones estructurales (entendidas como campos) y los factores subjetivos (percepciones y apreciaciones de los agentes) que confluyeron (en forma de habitus) en la configuración del poder de estos dos agentes (a través de los capitales acumulados y las estrategias desarrolladas en cada campo).

### **Trabajo de campo y técnicas de investigación**

Teniendo en cuenta la apuesta teórica y metodológica de la presente investigación, a continuación se expondrá la selección y el manejo de las fuentes de recolección de información, así como los mecanismos que se utilizaron para su posterior procesamiento e interpretación.

Las elecciones técnicas más “empíricas” son inseparables de las elecciones más “teóricas” de construcción del objeto. Siempre es en función de cierta construcción del objeto que se impone tal método de muestreo, determinada técnica de acopio o de análisis de datos, etc. Más precisamente, un dato empírico cualquiera sólo puede funcionar como prueba o, como dicen los anglosajones, como *evidence*, en función de un cuerpo de hipótesis derivado de un conjunto de premisas teóricas (Bourdieu; Wacquant, 1995: 167-168)

Esta labor de recolección de información estuvo orientada por un *análisis genético*, el cual, desde la perspectiva bourdiana, busca articular los estudios fenomenológicos con los estructuralistas, a través de un doble y articulado análisis ontogenético y sociogenético. La biografía relacional se configuró como el medio principal para hacer esta articulación, la cual tuvo la ventaja de permitirnos establecer un orden cronológico y espacial tanto de las trayectorias de vida como de los campos.

En primer lugar, los *estudios ontogenéticos* estuvieron centrados en las trayectorias de vida y los procesos de socialización de los agentes Álvaro Uribe Vélez y Carlos Castaño Gil, allí fue importante la comprensión de las percepciones, apreciaciones y acciones que contribuyeron en la estructuración o reproducción de los campos en los que estuvieron inmersos.

En esta fase, las principales fuentes de recolección de información fueron las biografías autorizadas de estos dos agentes: *No hay causa perdida* elaborada por Álvaro Uribe Vélez con la colaboración del periodista Brian Winter, así como *Del escritorio de Uribe: textos selectos*, una recopilación de los discursos y políticas realizadas por Uribe Vélez durante la Gobernación de Antioquia. Por otra parte, *Mi confesión, Carlos Castaño revela sus secretos* basada en la narración de Carlos Castaño Gil sobre su vida personal y la creación tanto de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá como de las Autodefensas Unidas de Colombia, a partir de entrevistas realizadas por el periodista Mario Aranguren, de igual forma *En Secreto* una entrevista a profundidad concedida por Carlos Castaño a German Castro Caycedo.

Complementariamente, se analizaron las biografías no autorizadas e investigaciones centradas en estos agentes, como: *El señor de la sombra. Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez* realizada por los periodistas Joseph Contreras y Fernando Garavito, por otra parte, *Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia* investigación realizada por Gustavo Duncan y *Paramilitares y autodefensas 1982- 2003* estudio elaborado por Mauricio Romero.

Lo fundamental de las biografías es que rescatan la voz de los agentes, son ellos mismos los que cuentan la historia y, a través de ella, dejan ver sus percepciones, apreciaciones y acciones sobre los asuntos más relevantes de sus vidas y los que más los han afectado.

Se convierten por un lado, en historias de vida y, por otro, en entrevistas a profundidad, en donde de manera abierta y reflexiva los agentes expresan sus opiniones y relatan su propia historia.

Metodológicamente se considera que el punto de vista de los agentes se encuentra estrechamente relacionado con la posición que ostentan dentro del campo, por lo tanto, no sólo expresan un aspecto particular y subjetivo, sino que también son una manifestación de la estructura misma.

El campo de las posiciones es metodológicamente inseparable del campo de las tomas de posición, entendido como el sistema estructurado de las prácticas y expresiones de los agentes. Los dos espacios, el de las posiciones objetivas y el de las tomas de posición, deben ser analizados juntos y tratados como «dos traducciones de la misma frase», según la fórmula de Spinoza. Dicho esto, en situación de equilibrio el espacio de las posiciones tiende a comandar el espacio de las tomas de posición (Bourdieu; Wacquant, 1995: 70).

En este sentido, las biografías tienen la ventaja de presentar de manera extensa el punto de vista de Álvaro Uribe y Carlos Castaño en relación a su origen social, su trayectoria de vida personal y su trayectoria dentro del campo, en ellas se expresa tanto lo subjetivo como lo objetivo.

Por otra parte, las biografías autorizadas y no autorizadas permitieron develar la red de relaciones familiares, de amistad y político-militares que los agentes Álvaro Uribe y Carlos Castaño fueron construyendo en el transcurso de su trayectoria de vida y que fueron esenciales tanto en las estrategias como en las acciones desarrolladas dentro del campo<sup>4</sup>, elemento que Pierre Bourdieu denomina como acumulación de capital social.

El capital social está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizada de conocimientos y reconocimientos mutuos. Se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo...La red de relaciones es el producto de estrategias individuales o colectivas de inversión, consciente o inconscientemente dirigidas a establecer y mantener relaciones sociales que prometan, más tarde o más temprano, un provecho inmediato (Bourdieu, 2000: 148 y 151)

---

<sup>4</sup> Por ejemplo, Álvaro Uribe señaló que algunos de sus colaboradores más cercanos durante la Gobernación de Antioquia fueron: Andrés Uriel Gallego, Pedro Juan Moreno, Any Vásquez y el general Carlos Alberto Ospina (Uribe, 2012: 109), por su parte Carlos Castaño resaltó como sus colaboradores más leales en la fundación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá a los jefes paramilitares Rodrigo “Doble cero”, Ernesto Báez, Fredy Rendón “El Alemán”, Adolfo Paz, Salvatore Mancuso y a sus compañeros Rodrigo García y Hernán Gómez (Aranguren, 2001).

En segundo lugar, los *estudios sociogénéticos* buscaron reconstruir históricamente los campos en los cuales dichos agentes fueron socializados y actuaron, es decir, las estructuras sociales generadoras de constricciones externas y de disposiciones sociales, así como de estrategias y prácticas que llevaron a cabo estos dos agentes. Para ello, fue importante el análisis de fuentes históricas que permiten develar los factores estructurales de larga duración que confluyeron y permitieron el desarrollo tanto del campo político como del campo militar a nivel regional, así como la articulación de Álvaro Uribe y Carlos Castaño en ellos.

Sobre esta base se realizó un análisis sociogénético del campo político para entender las raíces de Álvaro Uribe en el Partido Liberal Colombiano, su trayectoria política, la importancia de las facciones y partidos políticos tradicionales, así como del clientelismo y de los barones electorales regionales, en el marco de los acuerdos bipartidistas surgidos desde el Frente Nacional.

De igual manera, se desarrolló un análisis sociogénético del campo militar colombiano con el objetivo de entender los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, develar qué relaciones de fuerza y de conflicto permitieron el desarrollo de una política antisubversiva por parte del Estado colombiano y de las Fuerzas Militares que contribuyeron al desarrollo de las Autodefensas Campesinas durante los años ochenta del siglo XX, así como la articulación de ganaderos, terratenientes, políticos regionales y narcotraficantes a la lucha contrainsurgente, de igual forma para entender la trayectoria paramilitar de Carlos Castaño y su incursión en el conflicto armado.

Metodológicamente para poder llevar a cabo este *estudio sociogénético* se realizó un profundo y articulado análisis de fuentes secundarias sobre los tres tópicos que transversalizan toda la investigación: I) el campo político, II) el campo militar y III) los estudios regionales.

En primer lugar, en el análisis del campo político se tuvo en cuenta, entre otras, las siguientes fuentes bibliográficas, que fueron el producto de importantes trabajos de investigación: los estudios de historia política contemporánea de Álvaro Tirado Mejía, Hector Lara Romero y Gabriel Silva Luján, las investigaciones de Francisco Leal

Buitrago *Clientelismo: el sistema político y su expresión regional; Estado y política en Colombia*; de Francisco Gutiérrez Sanín y Andrés Dávila *Clientelismo y representación política*; de Eduardo Pizarro *La atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las microempresas electorales*; de Patricia Pinzón de Lewin *Pueblos, regiones y partidos. La regionalización electoral*; de Claudia López *La ruta de expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia*, entre otros.

Por su parte, para el estudio del campo militar se analizaron investigaciones, como las de Gustavo Gallón *La República de las armas*; de Francisco Leal Buitrago *La seguridad nacional a la deriva*; de Carlos Medina *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia*; de Gustavo Duncan *Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*; de Mauricio Romero *Paramilitares y autodefensas 1982- 2003*; de Eduardo Pizarro *Las FARC (1949-2011). De guerrilla campesina a máquina de guerra; Elementos para una sociología de la guerrilla en Colombia*; Informes del PNUD *El conflicto. Callejón con salida*; y del Grupo de Memoria Histórica *¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*, entre otras.

En tercer lugar, se analizaron las investigaciones regionales sobre estos dos fenómenos, elaboradas por el Instituto de Estudios Políticos y por el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, así como los trabajos de la Corporación Región y el Instituto Popular de Capacitación, entre ellos se resaltan las investigaciones de Mary Roldán *A sangre y fuego: la violencia en Antioquia*; de Clara Inés García *Antioquia en el marco de la guerra y la paz*; de María Teresa Uribe *Urabá ¿región o territorio?*; de Manuel Alberto Alonso *Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio*; de Juan Carlos Vélez y Manuel Alberto Alonso *Guerra, soberanía y ordenes alternos*; de Clara Inés Aramburo y Clara Inés García *Geografías de la guerra, el poder y las resistencias. Oriente y Urabá antioqueño*, de Vilma Liliana Franco *Poder regional y proyecto político: el caso de la ciudad metropolitana de Medellín y su entorno regional*, entre otras.

Finalmente, con el objetivo de analizar los datos recopilados durante el trabajo de campo se llevó a cabo un proceso de triangulación de información, lo cual nos permitió tanto verificar como relacionar los hallazgos encontrados. Metodológicamente la

triangulación busca aumentar la validez de los resultados y mitigar los problemas de sesgo en la investigación.

La triangulación, es por encima de todo, un proceso de ampliación y verificación de los resultados. En su desarrollo se tratan de identificar y corregir las limitaciones metodológicas, los sesgos de los datos y de los investigadores. No es por lo tanto de un mero puente entre los métodos cuantitativos y cualitativos, sino un principio inspirador de la investigación orientado invariablemente hacia el progreso científico (Oppermann, 2000)

La triangulación en ciencias sociales tiene como principio que cuanto mayor sea la variedad de metodologías y datos utilizados en el análisis de un problema de estudio, mayor será la fiabilidad de los resultados finales. En este sentido, promueve la aplicación y convergencia de una pluralidad de enfoques e instrumentos de investigación, con el objetivo de analizar un mismo fenómeno a partir de acercamientos diversos. En conclusión, la triangulación permite relacionar diferentes conocimientos de un fenómeno con el fin de dilucidar la totalidad del mismo y también de poder poner a prueba la validez de los datos obtenidos desde enfoques e instrumentos de investigación diversos.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante todo el desarrollo de la investigación se hizo un uso permanente del proceso de triangulación de datos a partir de las diversas fuentes ontogenéticas y sociogenéticas recopiladas:

En primer lugar, se trianguló los datos ontogenéticos entre sí, es decir, la información de las biografías autorizadas con las no autorizadas y con las investigaciones centradas en las trayectorias y estrategias de los agentes Álvaro Uribe y Carlos Castaño. En segundo lugar, se trianguló, de la misma forma, los datos sociogenéticos, es decir, las diversas fuentes históricas sobre el origen del campo político, del campo militar y del campo de poder a nivel regional, al igual que las relaciones encontradas entre ellos. Finalmente, se trianguló la información ontogenética con la sociogenética.

Este método de triangulación y de procesamiento de información, en relación con la biografía relacional, tuvo como objetivo permitir que en los capítulos apareciera de manera más clara, válida y fiable las reflexiones sobre las múltiples relaciones que hicieron posible el ingreso de Álvaro Uribe al campo político y de Carlos Castaño al

campo militar, así como la confluencia del conjunto de luchas políticas y militares en el campo de poder regional durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX.

### **Delimitación de los capítulos**

La presente investigación se divide en dos grandes partes, íntimamente relacionadas:

La primera, correspondiente a los capítulos I y II, se centra en conocer los determinantes sociales de la acción, es decir, la dinámica de los campos y de las relaciones históricas de poder que antecedieron al ingreso de Álvaro Uribe al campo político y de Carlos Castaño al campo militar, así como en comprender los procesos de socialización a los que ellos fueron objeto, puesto que dan cuenta de las disposiciones transmitidas por el origen social que posteriormente influyeron en su acción. Comprendemos que este proceso es el fundamento de la reproducción social.

En la segunda parte de la investigación, que corresponde a los capítulos III, IV y V, el análisis se centra en entender la capacidad de agencia de Álvaro Uribe y Carlos Castaño, las estrategias que llevaron a cabo, las luchas que enfrentaron, las leyes que rigen los campos donde fueron activos, así como su capacidad de movilidad y transformación dentro de los campos. Interpretamos que esta capacidad de agencia y transformación se da en el marco de las relaciones históricas de poder dentro de los campos donde participan y, por lo tanto, conservan también rasgos de ese pasado socializado. Finalmente en el capítulo VI se exponen las conclusiones de la investigación.

En este sentido, entendemos la trayectoria y la historia personal como un reflejo de la historia del campo donde ella se produce, por lo tanto, las relaciones de poder y la dinámica de los campos estructuran a los agentes, pero, a su vez, los agentes pueden transformar los campos, debido a que la historia y las estructuras son construidas, apropiadas e instituidas por hombres y mujeres de carne y hueso.

## **PRIMERA PARTE**

### **RELACIONES HISTÓRICAS DE PODER Y ORIGEN SOCIAL ARTICULACIÓN ENTRE CONDICIONES OBJETIVAS Y DISPOSICIONES SUBJETIVAS**

#### **Introducción**

A partir de la década de los ochenta del siglo XX Álvaro Uribe y Carlos Castaño se configuraron como agentes activos dentro del campo político y del campo militar colombiano, respectivamente. El primero de ellos se integró al Partido Liberal y como dirigente de esta colectividad ocupó cargos públicos en el poder ejecutivo y legislativo del país, tanto a nivel regional como nacional: fue Alcalde (1983) y Concejal (1984) de Medellín, Senador (1986-1994), Gobernador de Antioquia (1995-1997) y Presidente de la República (2002-2010).

El segundo se orientó hacia una lucha militar contra las guerrillas, lo cual le permitió construir relaciones con militares, ganaderos, terratenientes y narcotraficantes, para ello creó, junto con sus hermanos, un grupo armado familiar con el objetivo de vengarse de las guerrillas que asesinaron a su progenitor (1980), luego se vinculó como informante del Ejército y cooperó en la estrategia contrainsurgente del Batallón Bomboná en Puerto Berrío (1981), integró la organización Muerte a Secuestradores, promovida por narcotraficantes (1981-1982), realizó operaciones conjuntas con las Autodefensas de Puerto Boyacá (1982), participó en la organización Muerte a Revolucionarios del Nordeste (1985), fundó las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (1994), hasta que llegó a ser Comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (1997-2004).

Estas trayectorias que reflejan una movilidad social y capacidad de agencia, son también el producto de procesos de socialización, reproducción y relaciones de poder que antecedieron los años ochenta y que definieron las estrategias de conservación y subversión dentro de los campos político, militar y de poder colombianos.

En este sentido, es que la presente investigación involucra el estudio de procesos de análisis estructural, macrosociológico, combinado con el estudio de las disposiciones



particulares de los agentes, sus estrategias y tomas de posición, es decir, los aspectos microsociológicos. Por lo tanto, no sólo nos interesa analizar los agentes y sus subjetividades, sino también la historia y la estructura de los campos donde ellos se estructuran, dando sentido así a su trayectoria y a su época.

De esta manera, como lo señala Pierre Bourdieu en la obra *Autoanálisis de un sociólogo*, será necesario comenzar la investigación por el estudio de la dinámica de los campos y a partir de allí articularla con el análisis de los agente, sus estrategias, posiciones y tomas de posición dentro de ellos.

Comprender significa comprender primero el campo con el cual y contra el cual uno se ha ido haciendo. Por eso, y aun arriesgándome a sorprender a un lector que tal vez espere verme comenzar por el comienzo, es decir, por la evocación de los años de mi niñez y del universo social de mi infancia, tengo que, ortodoxamente, examinar en primer lugar el estado del campo en el momento en que ingresé en él (Bourdieu, 2004: 17).

Sobre esta base, iniciaremos con el estudio y definición de la estructura y dinámica de los campos político, militar y de poder colombianos desde el periodo del Frente Nacional hasta los años ochenta del siglo XX, momento en el cual Álvaro Uribe y Carlos Castaño ingresaron como agentes activos en dichos campos<sup>5</sup>.

Es el campo lo que debe estar en el centro de las operaciones de investigación, esto no implica de ninguna manera que los individuos sean puras «ilusiones», que no existan. Pero la ciencia los construye como agentes, y no como individuos biológicos, actores o sujetos; estos agentes se constituyen socialmente como activos y actuantes en el campo por el hecho de que poseen las cualidades necesarias para ser eficientes en él, para producir efectos en él. E incluso a partir del conocimiento del campo en el que están insertos se puede aprehender mejor aquello que hace a su singularidad, su originalidad, su punto de vista como posición (dentro de un campo), a partir de la cual se instituye su visión particular del mundo, y del campo mismo (Bourdieu; Wacquant, 1995: 71)

---

<sup>5</sup> Metodológicamente el primer capítulo de la investigación sigue la lógica de la obra *Autoanálisis de un sociólogo*, en la cual Pierre Bourdieu pretende poner en práctica lo que denomina la objetivación del sujeto objetivante (desarrollada en *El oficio de sociólogo*), para ello orienta su análisis a “explicarse y comprenderse sobre la base de la objetivación sí mismo”. En este estudio Bourdieu antes de reflexionar sobre su origen social o su trayectoria escolar comienza analizando las relaciones de poder y dominación imperantes en el campo académico y universitario francés hacia los años cincuenta, especialmente en la Escuela Normal Superior. El análisis de la Institución (Escuela Nacional Superior), de la carrera (Filosofía), los docentes dominante (Jean Paul Sartre, Heideger), subversivos (Deleuze, Foucault) y dominados (Bachelard, Canguilhem, Koyré), los ritos de iniciación, la *illusio* y las reglas de juegos del campo, le servirán, posteriormente, para entender la posición de sí mismo dentro de la estructura de dicho campo (becario vs heredero), así como sus estrategias, los capitales heredados o adquiridos, el efecto de titulación, las propias relaciones de poder donde surge su obra, entre otros elementos.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el primer capítulo estudiaremos cómo el acuerdo del Frente Nacional transformó las relaciones de fuerza dentro del Estado colombiano, lo que conllevó a un proceso de diferenciación de los campos político, militar y de poder en el país, constituyéndose cada uno de ellos con sus propias dinámicas y objetos de lucha, pero conservando fuertes relaciones entre ellos.

Para que un campo funcione es preciso que haya objetos en juego y personas dispuestas a jugar el juego, dotadas con los habitus que implican el conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes del juego, de los objetos en juego, etc.” (Bourdieu, 2003: 113).

Por su parte, en el segundo capítulo, buscaremos develar cómo los conflictos, relaciones de poder y de violencia presentados en el Frente Nacional terminaron por afectar directamente a los agentes Uribe Vélez y Castaño Gil, así como a sus familias, factores que influyeron no sólo en su ingreso en estos campos previamente establecidos, sino también en sus percepciones, apreciaciones y acciones.

# CAPÍTULO I

## EL FRENTE NACIONAL: UNA LECTURA DESDE LA TEORÍA DE LOS CAMPOS

### Introducción

El acuerdo del Frente Nacional, llevado a cabo en 1958, fue producto de una alianza entre agentes dominantes del campo político, económico y militar colombiano cuyo objetivo fue mantener la estabilidad del campo de poder estatal imperante en el país, especialmente en la medida en que las confrontaciones partidistas del periodo de La Violencia<sup>6</sup> y la Dictadura Militar de Gustavo Rojas Pinilla<sup>7</sup> pusieron en peligro la estabilidad y la posición de los agentes dominantes. Se sostenía por parte de sus promotores que darle continuidad al pacto bipartidista y hacer eficaces sus disposiciones acerca de la distribución del poder político y burocrático, desactivaría la violencia bipartidista y conllevaría a un proceso de modernización del Estado y la economía del país.

Pero si bien el Frente Nacional puso fin al antagonismo entre Liberales y Conservadores, así como proporcionó estabilidad a la élite dominante, también creó nuevos conflictos y reestructuró tanto las reglas como las relaciones de poder imperantes en los campos político, militar y de poder en el país, ahora sobre la base, especialmente, del antagonismo Capitalismo versus Comunismo. Nuevos agentes y nuevos objetos de lucha aparecieron, en medio de las estrategias de conservación y de subversión promovidas dentro del campo de poder estatal.

---

<sup>6</sup> Este conflicto se enmarcó en un antagonismo sobre los principios de orientación del Estado, la economía y la sociedad que diferenciaba a los dirigentes y militantes del Partido Liberal y del Partido Conservador durante los años treinta y cincuenta del siglo XX. Por un lado, en general, el Partido Conservador representaba una sociedad terrateniente, católica, agraria, con valores tradicionales y, por otro, el Partido Liberal, una sociedad en proceso de transformación debido a la naciente dinámica de urbanización, industrialización e impulso de valores seculares. Se calcula que en esta confrontación sectaria entre los dos partidos políticos tradicionales murieron entre 180.000 y 300.000 colombianos, además aproximadamente dejó dos millones de personas desplazadas, afectando principalmente el área rural del país.

<sup>7</sup> Con el objetivo de frenar la Violencia bipartidista el General Gustavo Rojas Pinilla realizó en 1953 un golpe militar al gobierno de Laureano Gómez, con el apoyo de las facciones conservadoras Ospinistas y el Alzatistas, así como de la dirigencia del Partido Liberal y la anuencia del sector financiero e industrial del país que comenzaban tomar distancia de la política represiva del gobierno conservador de Laureano Gómez.

En primer lugar, es importante señalar que el acuerdo del Frente Nacional no sólo fue un pacto de alternación del poder entre liberales y conservadores o de repartición milimétrica del aparato burocrático del Estado entre ellos<sup>8</sup>, sino que también se desarrolló en un momento en el que las élites políticas, económicas y militares coincidieron en profundizar la inserción de la economía colombiana al modelo de desarrollo capitalista.

En el transcurso del siglo XX, el afianzamiento del desarrollo del país por la economía de mercado, especialmente después de los años veinte, permitió una mayor integración económica y social de las clases dirigentes, que veían cada vez más innecesario recurrir a los conflictos abiertos entre los dos partidos. En la medida en que fue desapareciendo la diferencia de intereses por la orientación del Estado a favor de un sector de la élite, las diferencias entre los partidos para esos sectores perdían importancia y por consiguiente era más factible realizar coaliciones y gobiernos compartidos. De ahí la necesidad explícita de buscar una salida al tradicional conflicto violento entre los dos partidos, por parte de esas mismas élites gobernantes, creando un ambiente de estabilidad política. En caso contrario se corría el riesgo de arrasar la reproducción del sistema social y de su dirigencia política (Lara, 1992: 114).

En este sentido, los procesos de homogenización y división del trabajo entre las élites políticas y económicas permitieron orientar la economía del país, sin una confrontación violenta<sup>9</sup>, por la vía capitalista, específicamente a través de la implementación de la política de industrialización por sustitución de importaciones impulsada por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.

De igual forma se promovió, por parte de los partidos políticos tradicionales, el control clientelista y patrimonial de la población como medio de sujeción y dependencia de los electores, así en la medida en que aumentó el aparato burocrático del Estado se configuró también un sistema político clientelista. La burocratización y el clientelismo sustituyeron al sectarismo como fuente principal de reproducción de los partidos políticos y se excluyó a la oposición política democrática.

---

<sup>8</sup> Durante este periodo la alternación del poder ejecutivo se desarrolló de la siguiente manera: inició como Presidente el Liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), continuó el Conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), luego ingresó el Liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), y finalizó el Conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974).

<sup>9</sup> Es importante resaltar que en Colombia no se presentó el clásico conflicto entre élites terratenientes e industriales debido a la peculiaridad de la economía cafetera del país, las divisas obtenidas por los productores y exportadores de café fueron invertidas en actividades industriales esto generó una gran fluidez entre en las relaciones entre sectores agroexportadores, industriales, banqueros y latifundistas. Al respecto véase (Uprimny, 2001, 268; Arango, 1981: 215; Kalmanovitz, 1988: 240).

La novedad del clientelismo como fenómeno contemporáneo radicó, sobre todo, en que logró convertirse en el principal soporte de funcionamiento del sistema político... Se caracterizó por la apropiación privada de recursos oficiales con fines políticos. Esta característica central se ejerce por medio de una vasta red de relaciones de tipo clientelar que cumple el papel de articulador del sistema político (Leal, 1989).

Finalmente, para garantizar estos acuerdos políticos y económicos se delegó en las Fuerzas Militares el control y coordinación de la política de orden público, lo que conllevó a un control coactivo de la población, especialmente orientado hacia los movimientos sociales y las organizaciones guerrilleras.

El proceso de despolitización bipartidista, estimulado por el reparto paritario de la burocracia estatal entre liberales y conservadores, permitió a los militares adquirir cierta autonomía política, que se reflejó en su manejo del orden público y en la conservación y adquisición de prerrogativas institucionales... Este manejo se volvió estratégico a medida que avanzó la confrontación armada entre las guerrillas y las Fuerzas Militares, y se ampliaron y diversificaron las violencias (Leal, 2002).

En este sentido, los acuerdos que permitieron la institucionalización del Frente Nacional fueron el producto de una alianza entre los agentes dominantes de los campos político, económico y militar del país, con el objetivo de promover el desarrollo de un Estado capitalista, la reproducción de las élites bipartidistas y su protección a través del control coactivo por parte de los Militares.

Una de las razones de la estabilidad política colombiana, en especial durante el llamado periodo del Frente Nacional que se inició en 1958, fue la “repartición del Estado entre agentes dominantes”, la cual buscaba evitar conflictos dentro de los sectores en el poder, asegurando a los más poderosos contendores sociales el control de una determinada parcela estatal: la administración pública a los partidos Liberal y Conservador, la economía a los gremios empresariales en forma diferenciada según su peso, y el orden público a los militares. Sin embargo, ese reparto se tradujo en un fraccionamiento institucional cada vez mayor de la gestión estatal (Uprimny, 2001: 270).

Esta repartición de las funciones y del poder del Estado por parte de los gremios económicos, los dirigentes de los partidos políticos tradicionales y los altos mandos militares transformó completamente el campo de poder estatal colombiano porque contribuyó al desarrollo de varios campos relacionados entre sí pero con una autonomía relativa: el campo económico centrado en el direccionamiento de la política económica capitalista del país, el campo político concentrado tanto en el aparato burocrático del

Estado como en el dominio de los recursos públicos y el campo militar orientado al manejo del orden público y el conflicto armado interno.

Esta transformación del campo de poder estatal que estableció nuevas normas dentro del campo y que redefinió la posición de los agentes dominantes en él, conllevaron resistencias por parte de agentes dominados dentro del Estado, como fueron, especialmente, los campesinos, estudiantes y trabajadores, los cuales comenzaron a manifestar su inconformismo con la nueva estructura del campo de poder estatal a través de la conformación de movimientos sociales y movimientos políticos críticos al Frente Nacional, los cuales actuaron principalmente dentro del campo político. Pero surgieron también otros agentes, como las guerrillas comunistas, que se orientaron a sustituir por la vía armada el orden vigente y lo hicieron participando activamente dentro del campo militar y del campo de poder estatal.

Esta reconfiguración del campo de poder es la que nos interesa analizar en el presente capítulo porque a partir de ella podremos develar cómo se desarrolló el antagonismo entre las élites dominantes del Estado y las guerrillas comunista, conflicto que afectó directamente a los agentes Álvaro Uribe Vélez y Carlos Castaño Gil durante los años ochenta, fenómeno que contribuyó en el tipo de estrategias que adoptaron dentro del campo político y del campo militar, respectivamente, cuando ingresaron como agentes activos.

A continuación analizaremos las características del campo político, del campo militar y del campo de poder estatal durante el periodo de configuración del Frente Nacional, así como los factores estructurales que contribuyeron al nacimiento de las guerrillas comunistas, para finalmente discutir sobre las relaciones de lucha, de fuerza y de competencia que se dieron entre los agentes dominantes del campo de poder estatal contra las guerrillas comunistas.

## **El Campo Político**

Según Pierre Bourdieu un campo puede entenderse como un espacio social de luchas, de competencias y de relaciones de poder entre agentes con posiciones objetivamente definidas, tales como dominación, subordinación u homología, y con disposiciones

subjetivas para participar en él. Las posiciones objetivas de los agentes se determinan por el volumen de los capitales<sup>10</sup> que logran acumular y las disposiciones subjetivas se refieren a las percepciones, apreciaciones y habilidades adquiridas socialmente y que les permite a los agentes entender la dinámica del campo y actuar en él.

En este sentido, el campo es un espacio de relaciones de fuerza, de sentido y de luchas tendientes a transformarlo, por lo tanto, es un lugar de un cambio permanente. La historia y las luchas dentro del campo se establecen por las estrategias de los agentes orientadas a obtener el monopolio del capital que es efectivo en él y para llegar a dominarlo.

En Colombia el campo político se configuró, desde el periodo del Frente Nacional, como un espacio social de relaciones de poder y de competencia entre las facciones de los partidos políticos Liberal y Conservador por el monopolio de la administración pública, el aparato burocrático y los recursos oficiales, que de acuerdo a la votación obtenida por cada una de ellas, buscaban una representación equivalente en el Congreso, los Ministerios, las gobernaciones, las asambleas departamentales, las alcaldías, los concejos municipales y, en general, en el aparato burocrático del Estado.

Por lo tanto, en este campo, fundamentado en el clientelismo, cada facción política luchaba por tener mayor acceso a la administración pública, así como mayor volumen del aparato burocrático del Estado y de los recursos públicos, puesto que ello era la base de su reproducción. Este era el capital político en disputa. Su proceso histórico de configuración se desarrolló de la siguiente manera:

Con la creación de la institución del Frente Nacional se eliminó, en la práctica, la posibilidad de participación política y democrática de partidos políticos diferentes al Liberal y al Conservador, puesto que constitucionalmente debía existir paridad en los miembros de las corporaciones públicas: Senado, Cámara, Asambleas y Concejos, así como repartición mecánica de todos los cargos de la administración pública, entre ellos el gabinete ministerial, las gobernaciones y las alcaldías; el único cargo de libre

---

<sup>10</sup> “Un capital o una especie de capital es aquello que es eficiente en un campo determinado, como arma y como apuesta de lucha, lo cual permite a su portador ejercer un poder, una influencia, por lo tanto, existir en un campo determinado” (Bourdieu; Wacquant, 1995).

remoción era el del Presidente de la República, pero este se alternaba entre los dos partidos tradicionales. De esta manera, se creó un monopolio por parte de ambos partidos del capital y del campo político.

Este hecho desplazó la lucha entre los dos partidos por el dominio del campo político a la lucha entre las facciones de cada partido por la primacía para acceder al poder central, lo que generó un proceso de faccionalización dentro del Partido Liberal y del Partido Conservador.

El acuerdo del Frente Nacional también tuvo una importante consecuencia política, la pérdida de legitimidad y poder cohesionador de los partidos políticos tradicionales: sus bases se habían adscrito como liberales o conservadores porque estos partidos representaban una visión particular de sociedad, Estado y economía, la cual era opuesta a la de su adversario político, por ello el Frente Nacional se presentó para muchos militantes como una traición a sus principios políticos y morales, a su vez, se fue constituyendo la imagen del político profesional como politiquero, lo que generó un desencanto general en la “política”, desde este momento comenzó un importante proceso de abstención electoral y apatía política<sup>11</sup>.

El pacto bipartidista que rigió al país entre 1958 y 1974 tuvo indudables logros al apagar los odios partidistas, poner a los militares bajo el control civil y propiciar un desarrollo económico más o menos constante, en medio de una creciente modernización que se manifestó desde los años de la posguerra. Estos logros sin embargo, se vieron oscurecidos por la exclusión política de grupos al margen del bipartidismo, la pérdida de identidades partidistas, la autonomización de los militares, la desatención a los actores sociales y el consiguiente aumento de la brecha social. Todo ello condujo a una despolitización generalizada y a una debilidad del sistema político. (Archila, 2000: 12).

Para hacer frente a esta situación, los dirigentes del Partido Liberal y del Partido Conservador promovieron la configuración de un campo político fundamentado en el clientelismo, el cual se orientó hacia la apropiación privada de los recursos oficiales y de la burocracia estatal con fines políticos y electorales. En este sentido, la obligación

---

<sup>11</sup> Según Ricardo García Duarte “la abstención electoral es una característica crónica del comportamiento político de los colombianos. Casi nunca es menor al 50% del potencial electoral” (García, 1994: 21). También Daniel Zovatto concluyó que Colombia tiene el promedio más bajo y es el único país en América Latina que posee una participación electoral inferior al 50% en toda la región (Zovatto, 2006).



de identificación partidista, para ingresar y mantenerse en la burocracia, se constituyó en la base para la reproducción de la debilitada afiliación a los partidos políticos.

El medio clientelista no es un factor más dentro de la política. Con el fin de cumplir su función de apoyo para que el liberalismo y el conservatismo prácticamente monopolicen el sistema político, se requirió que las relaciones de clientela se convirtieran en el articulador principal de éste, es decir, de la manera como se ponen en práctica las normas que regulan el ejercicio de la política. De esta forma, el sistema colombiano ha llegado a ser el "sistema político del clientelismo". Los inicios de este proceso pueden fijarse en 1958, con el cambio de régimen del Frente Nacional y sus efectos de debilitamiento del sectarismo bipartidista. Más adelante, a partir de la coyuntura electoral de 1970, el sistema comenzó a funcionar de manera articulada por las relaciones clientelistas que se habían expandido (Leal, 1989: 9).

Sobre la base de esta institucionalización del clientelismo dentro del campo político se fue desarrollando un crecimiento del aparato burocrático del Estado. Según Fernando Uricoechea en Colombia había 130.000 empleados públicos para el año 1957, los cuales en 1972 se acercaban a los 500.000 y para finales de los años ochenta llegaron a aproximadamente un millón de funcionarios del Estado (Uricoechea, 1986: 74). Esta fue, junto con el presupuesto público, la fuente de poder del sistema político.

Por otra parte, con los acuerdos que dieron origen al Frente Nacional las "Jefaturas naturales" del nivel nacional del bipartidismo perdieron su efectividad<sup>12</sup>, puesto que sin sectarismo, sin autoridad suficiente y sin capacidad de articulación efectiva, el nivel nacional cedió su puesto al nivel regional, controlado por los gamonales locales, lo que generó que el sistema de reproducción de los partidos políticos descendió al nivel regional y se estructuró en torno al uso político del clientelismo.

Desde ese momento los conocidos "barones regionales", élite política regional y local, comenzaron a convertirse en jefes políticos muy importantes del bipartidismo y acumularon una enorme influencia a nivel nacional.

---

<sup>12</sup> Según Francisco Leal Buitrago a comienzos del siglo XX, el nivel nacional bipartidista se objetivó en las llamadas "Jefaturas naturales" de los partidos, estas fueron la expresión política de una sociedad elitista, en la cual las autoridades en cada uno de los dos partidos pudieron mantener sectariamente la disciplina de sus colectividades a nivel nacional. Estas jefaturas naturales, propias de una sociedad agraria atrasada, lograron entretejer y articular verticalmente una amplia red de relaciones políticas en la sociedad, fenómeno que comenzó a perder su capacidad cohesionador con el origen del Frente Nacional.

Pero si bien los partidos políticos liberal y conservador lograron constituir una prolongada posición dominante dentro de este campo, también tuvieron resistencia y emergieron grupos con menor peso y una posición dominada dentro del campo político<sup>13</sup>.

En esta posición dominada del campo se establecieron dos movimientos políticos que a pesar de pertenecer a fracciones de la élite dominante se opusieron a los acuerdos del Frente Nacional y a las nuevas reglas de juego del campo político, estos fueron el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, coordinado por el liberal Alfonso López Michelsen y la Alianza Nacional Popular, ANAPO, liderada por el general Gustavo Rojas Pinilla.

En segundo lugar, surgieron movimientos políticos críticos de la alianza bipartidista del Frente Nacional y a los efectos del desarrollo capitalista del país como fueron el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, MOEC, fundado en 1960, el Frente Unido en 1963, y el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR en 1971. Estas organizaciones emergieron paralelamente a la activación de los movimientos campesinos, obreros y estudiantiles entre los años sesenta y setenta del siglo XX y en el marco de importantes cambios sociales del país a mediados del siglo, como fueron los procesos acelerados de urbanización, industrialización, secularización y el desarrollo de un sistema político excluyente. Estos movimientos se convirtieron en grupos de presión política.

Finalmente, durante este periodo se presentó un importante acontecimiento: el Frente Nacional prohibió la participación electoral y el acceso a cargos públicos por parte del Partido Comunista, organización que se había constituido desde la década de los treinta del siglo XX con una pequeña participación electoral, lo que significó su exclusión del campo político. Este hecho influyó de manera significativa en el desarrollo y evolución de las organizaciones guerrilleras de los años sesenta, especialmente de las FARC, el ELN y el EPL.

---

<sup>13</sup> “Los que dominan en un campo dado están en posición de hacerlo funcionar en su provecho, pero deben tener siempre en cuenta la resistencia, la protesta, las reivindicaciones, las pretensiones, «políticas» o no, de los dominados” (Bourdieu y Wacquant, 1995).

La exclusión política que generó el acuerdo frente nacionalista permitió el acercamiento de agentes provenientes del Partido Comunista con agentes excluidos de la tenencia de la tierra y de los beneficios del capitalismo, esto conllevó a que en regiones periféricas del país, especialmente en Cundinamarca, Tolima o Antioquia, surgieran grupos guerrilleros que optaron por la transformación del Estado a través la vía armada al no encontrar posibilidades de su transformación dentro de las reglas imperantes dentro del campo político, lo que conllevó a que se convirtieran en agentes activos dentro del campo militar y a la transformación de las relaciones de fuerza del campo de poder.

### **El nacimiento de las guerrillas**

Durante el periodo del Frente Nacional nacieron las organizaciones guerrilleras de mayor importancia y duración que ha tenido el país, estas fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC (1964), el Ejército de Liberación Nacional, ELN (1965), el Ejército Popular de Liberación, EPL (1967), y el Movimiento 19 de Abril, M-19 (1970), las cuales orientaron su estrategia político militar hacia la obtención del monopolio del campo de poder estatal a través de un ejército revolucionario.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, emergieron en los primeros años de la década de los sesenta, como una respuesta a la represión militar en las zonas de autodefensa campesina de las regiones de Sumapaz y Tequendama (Cundinamarca). En este sentido, constituyeron el subproducto más directo de la época de la Violencia. Ya en la siguiente década, esta guerrilla se multiplicó cubriendo varios frentes a lo largo de todo el territorio nacional. Por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, surgió en 1965 como consecuencia directa de la atrofia política que sufrió el movimiento estudiantil, al no encontrar salidas políticas legales a la búsqueda de espacio público ante el ensanche policlasista de la universidad. En alguna medida, el Ejército Popular de Liberación, EPL, como tercer ejemplo, puede inscribirse en esta misma lógica. Finalmente, el cuarto caso guerrillero se ubica en el Movimiento 19 de Abril, M-19, nacido de la frustración del ahogado triunfo electoral de la ANAPO en 1970 (Leal, 1984: 157).

Desde los años sesenta las organizaciones guerrilleras se configuraron como el enemigo público del Estado colombiano, lo que generó una lucha a vida y a muerte por imponer los principios de visión y división del mundo social de las élites políticas, económicas y militares del país frente a los de las nacientes guerrillas comunistas.

Estas organizaciones guerrilleras fueron la expresión más radical de la exclusión política y de la exclusión económica que la alianza del Frente Nacional llevó consigo.

Debido a la imposibilidad de participar en el campo político, crear partidos, participar en elecciones, acceder a la propiedad de la tierra y a condiciones de trabajo dignas, las organizaciones guerrilleras optaron por la transformación del Estado a través la lucha armada, lo que conllevó a que se convirtieran en agentes activos dentro del campo militar y del campo de poder estatal.

Como forma de expresión y como producto de lo social, la guerrilla en Colombia conjuga de distinta manera el elemento militar y político a través del eje central de lo social. En este nivel, la presencia de la guerrilla significa para los campesinos sin tierra y los trabajadores asalariados una posibilidad de resistencia que les permite enfrentar de manera efectiva a las élites terratenientes y empresariales. La acción de las guerrillas se nutre de las problemáticas locales, entre las cuales sobresalen la escases relativa de tierras frente a una población desposeída en constante crecimiento, la insatisfacción de las demandas sociales, los altos niveles de desempleo, la falta de representación política de los sectores populares y la incapacidad del Estado para responder a sus demandas. De esta manera, es claro que el movimiento guerrillero, en su origen y consolidación responde, en primer lugar, a los desarrollos que tiene lo social y, en segundo lugar, a sus propias estrategias políticas y militares de acción; estrategias que se encuentran inscritas dentro del terreno delimitado por las prácticas políticas y armadas del Estado respecto a lo social (Alonso, 1992: 132).

Estas organizaciones guerrilleras que comenzaron a consolidarse en la periferia rural de Colombia, se orientaron a fortalecer sus bases sociales de apoyo, especialmente campesinos, obreros agroindustriales y estudiantes, con la participación del Partido Comunista y conformaron ejércitos para defenderse tanto de las incursiones militares como para poder consolidarse en sus territorio, posteriormente, con el fomento de una economía de guerra (secuestro, extorsión, narcotráfico), buscaron expandirse a otras regiones del país.

Este desafío al monopolio de la violencia física y al control del campo de poder estatal por parte de las élites políticas, económicas y militares del país, conllevó al desarrollo de una guerra interna sobre la base del antagonismo Estado versus Guerrillas, lo cual se profundizó con el conflicto internacional de la Guerra Fría que dividió el espacio social entre capitalistas y comunistas.

### **El Campo Militar**

El campo militar colombiano se configuró como el espacio social de enfrentamiento y de lucha entre los ejércitos estatales (Fuerzas Militares: Policía y Ejército) y

contraestatales (particularmente los ejércitos guerrilleros en este periodo) con presencia en el país durante el Frente Nacional. Este es un campo de batalla, en el cual se llevan a cabo estrategias de guerra, como los son: control de población, control de territorios, operaciones contrainsurgentes, acciones cívico militares, juicios en tribunales de guerra, operaciones de guerrillas móviles, conformación de autodefensas campesinas armadas, asesinatos selectivos, masacres, secuestros y desplazamiento forzado, entre otras. En este campo prevalece la lógica de la guerra y en él se reproduce un habitus guerrero.

El capital militar es el capital de la coacción física, por medio de él se puede garantizar la soberanía jurídica y territorial del Estado o también defender proyectos de resistencia alternativos a los propuestos por las élites dominantes del campo de poder estatal (por ejemplo, los de las guerrillas comunistas). Este capital está compuesto por la capacidad de acceso a armamento (fusiles, municiones, explosivos, equipos de inteligencia, entre otros), creación de ejércitos y formación de los integrantes en técnicas y tácticas militares (trasmisión de conocimientos y habilidades para la guerra).

Inicialmente el Frente Nacional consolidó el poder de los militares dentro del Estado colombiano al otorgarles una autonomía en el manejo del orden público y la coordinación de la cartera del Ministerio de Defensa por parte de un militar activo<sup>14</sup>. Todo ello después de que la Junta Militar de Gobierno pusiera fin a la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla y permitiera el retorno del poder estatal a manos de civiles por medio del plebiscito de 1957 que dio origen al Frente Nacional.

Los acuerdos del Frente Nacional definieron ceder a las Fuerzas Militares el control de la política de orden público como medio para asegurar la reproducción de las élites políticas y económicas, debido a la posibilidad de pérdida del control del aparato estatal con las nacientes organizaciones guerrilleras y especialmente por las dificultades para asegurar la cohesión social a través de mecanismos políticos.

El juego medianamente libre de los partidos políticos y la posibilidad de hacer efectivo derechos y garantías sociales se combinan en esa época con una creciente intervención de los militares en el manejo del Estado, como ejercicio de un poder directo y orgánico de la institución armada en el mismo, y con la pretensión de ampliar esa autonomía mediante la creación de bases sociales de apoyo de la

---

<sup>14</sup> Desde 1965 hasta 1991 se destinó Ministerio de Guerra, actualmente Ministerio de Defensa Nacional, a un militar en servicio activo, generalmente el más antiguo del escalafón.

organización castrense... Se trata de una verdadera repartición de competencias entre militares y civiles, incluidos partidos políticos y gremios empresariales, en la que las partes mantienen una mutua y necesaria relación de dependencia (Gallón, 1983: 101).

Debido a la confluencia de factores como el conflicto internacional de la Guerra Fría, la Revolución Cubana (1959) y el surgimiento de las guerrillas colombianas durante los años sesenta, Estados Unidos promovió en Sudamérica la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional<sup>15</sup>.

Esta Doctrina sustenta que a partir del control militar del Estado se logra la seguridad de la sociedad, a su vez concibe como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales (Leal, 2003). Por medio de ella se presentó una sustitución del enemigo externo: el comunismo internacional combatido por Estados Unidos, hacia el enemigo interno: los agentes locales del comunismo que debían ser repelido por los países de América del Sur.

La implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia significó la definición de las Guerrillas de las FARC, el ELN, el EPL y el M19 como el enemigo interno del Estado Colombiano, así como el enemigo de los Estados Unidos y sus aliados. Sobre esta base, la política de orden público que promovieron las Fuerzas Militares colombianas se fundamentó en la coacción física.

La acción del Estado frente al desafío guerrillero de los años sesenta se estructuró a través de una estrategia netamente contrainsurgente dentro de la cual a la violencia por la sustitución del orden y por la participación social se responde con la violencia institucional para la conservación del orden... Por la incapacidad del Estado para dar un manejo civil adecuado a los conflictos que plantea lo social, el ejército se perfila como la institución fundamental de intervención institucional (Alonso, 1992: 138).

Ante esta incapacidad de generar cohesión social por medio de los partidos políticos, la participación electoral, complementado con un efectivo sistema judicial, fundamento de la dominación política en los Estados modernos, las Fuerzas Militares diseñaron una estrategia antsubversiva fundamentada en los siguientes elementos:

---

<sup>15</sup> A nivel regional, los acuerdos sobre seguridad promovidos por Estados Unidos se objetivaron en la Junta Interamericana de Defensa de 1942, el Colegio Interamericano de Defensa, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, el Sistema Militar Interamericano y la Escuela de las Américas fundada en 1963, entre otros. En Colombia, la Doctrina se fomentó en los años sesenta a partir del desarrollo del Plan Lazo, el Plan Soberanía y el Plan Andes orientados a eliminar las nacientes guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL.

- Ejecución de amplias operaciones contrainsurgentes frente a las nacientes guerrillas comunistas. Durante los años sesenta sobresalieron el Plan Lazo, el Plan Soberanía y el Plan Andes<sup>16</sup>. Por medio de las operaciones contrainsurgentes, definidas “como acciones militares, políticas, sociales, económicas y psicológicas tomadas por un gobierno para modificar y eliminar las causas de la insurgencia” (CINEP, 2004), se buscó movilizar todos los recursos del Estado para eliminar a las nacientes organizaciones guerrilleras definidas como el enemigo interno. La población civil se vinculó así como objeto de la guerra.
- Implementación de acciones cívico-militares. Estas acciones se dirigieron fundamentalmente a la construcción de obras de infraestructura y a la prestación de servicios básicos a la comunidad por parte de las Fuerzas Armadas. Este tipo de acciones son muestra de la forma como el Estado va delegando en los militares funciones que son exclusivas del poder civil (Alonso, 1992).
- Nombramiento por parte del gobierno nacional de alcaldes militares, al igual que el sometimiento de las gobernaciones a la autoridad de los comandantes de brigada.
- Expedición de manera prolongada de Estados de Excepción, lo que permitió a tribunales militares el juzgamiento de civiles<sup>17</sup>. Por medio de la declaración de Estados de Excepción se ampliaron las funciones de los militares en el control del orden público, puesto que se les permitió juzgar a civiles a través de Consejos Verbales de Guerra, lo que significa que por medio de la Justicia Penal Militar se podía condenar a civiles colombianos por delitos contra el Estado.

---

<sup>16</sup> El Plan Lazo fue un plan militar de envergadura nacional y con objetivos a largo plazo, especialmente la pacificación del país y la eliminación de las guerrillas que se llevó a la práctica en 1964 con las operaciones militares en contra de las “Repúblicas Independientes”, entre ellas la “República de Marquetalia”, donde se concentraban las autodefensas campesinas de tendencia comunista. Fue complementado con el Plan Soberanía, orientado hacia operaciones militares y conformación táctica de compañías antiguerrilleras, así como del Plan Andes que pretendía aislar los núcleos subversivos y eliminar los problemas sociales que eran el combustible de la violencia (Leal, 2002).

<sup>17</sup> El Estado de Excepción consiste en la supresión o limitación de la división de los poderes públicos, esencialmente el legislativo y judicial, fundamento del Estado de derecho, por el fortalecimiento del poder ejecutivo y, a su vez, del mando militar; es una situación en la que el ejecutivo puede limitar el ejercicio de los derechos fundamentales y expedir nuevas normas conforme lo exija la situación establecida como peligrosa, en interés de la represión del adversario.

Según Francisco Leal Buitrago la declaración del estado de excepción facilitó las iniciativas militares, propició la autonomía de las acciones castrenses al eliminar las limitaciones jurídicas y estimuló una dinámica violatorio de los derechos humanos (Leal, 2002: 49). Todos estos elementos son un reflejo de la autonomía relativa de los militares dentro del campo de poder estatal colombiano, así como una evidencia del reparto del poder entre elites políticas, altos mandos militares y gremios económicos.

En este sentido, el capital militar se comenzó a convertir en un capital esencial no sólo para establecer la posición de los agentes dentro del campo militar, sino que también influyó en la posición de los agentes dentro del campo de poder estatal (esto es una consecuencia de la pérdida del monopolio de la violencia física por parte del Estado y por la creación de ejércitos revolucionarios promovidos por las guerrillas comunistas para sustituir el Estado imperante).

En este mismo sentido, también se puede establecer que el campo político y el campo militar se configuraron como campos íntimamente relacionados pero cada uno de ellos cuenta con sus propias lógicas de funcionamiento y con una autonomía relativa. Para poder tener movilidad dentro del campo político se requiere ingresar a un partido político (principalmente el Liberal o el Conservador), crear alianzas y establecerse en una facción política, crear redes clientelistas, ganar elecciones, repartir adecuadamente el aparato burocrático del Estado, etc. En el campo militar sucede algo diferente, los agentes deben ingresar a un ejército, adquirir las habilidades y destrezas para la lucha armada, controlar poblaciones y controlar territorios, ganar batallas (tener “positivos”), etc.

Pero es en el campo de poder estatal donde se articulan las luchas políticas, económicas y militares por la definición del Estado, la sociedad y la economía entre los agentes con visiones y proyectos antagónicos, los cuales luchan por el dominio de este campo para poder imponer e inculcar a toda la sociedad sus principios de visión y división del mundo social.



## **EL Campo de Poder Estatal**

El campo de poder estatal se configuró como un espacio social, de competencia y de lucha, por obtener el monopolio de la violencia física y la dominación política, entre los agentes que aspiran a definir los principios de visión, división y orientación del Estado, la economía y la sociedad colombiana<sup>18</sup>.

El análisis del campo de poder estatal pretende dar cuenta de los conflictos en torno a la incapacidad del Estado colombiano para obtener el monopolio de la violencia física, esencial para ejercer la soberanía jurídica y territorial al interior de las fronteras del Estado, así como su incapacidad para legitimar un proyecto de dominación política capaz de generar cohesión social en todo el territorio nacional, sobre la base de los principios de visión y división del mundo social de los agentes dominantes de este campo<sup>19</sup>.

Durante el Frente Nacional, los agentes dominantes del campo de poder estatal fueron los dirigentes del Partido Liberal y del Partido Conservador, los gremios económicos y los altos mandos de las Fuerzas Militares, los cuales, en conjunto, promovieron un Estado de economía capitalista y fundamentado en una democracia restringida, la cual alternaba el poder entre liberales y conservadores, excluyendo cualquier otra alternativa política. La garantía de estabilidad para este régimen la aportaban las Fuerzas Militares con sus recursos, armas y técnicas de control del orden público. Debido a que este proyecto promovió simultáneamente el desarrollo del capitalismo y la lucha contra el comunismo, recibieron el apoyo internacional de los Estados Unidos y sus aliados.

Sobre la base de los acuerdos que dieron origen al Frente Nacional, la élite dominante del campo pudo combinar un alto volumen de capital político, capital económico y capital militar para sostenerse en el poder.

---

<sup>18</sup> No todos los agentes son activos dentro del campo de poder estatal, para participar en él se requiere acreditar alto volumen de capital económico, capital político o capital militar, pero especialmente, se requiere una variada combinación de ellos.

<sup>19</sup> En los siguientes capítulos iremos señalando como los poderes legales e ilegales en el nivel regional se fueron configurando también como importantes agentes en la definición del Estado.

Pero este proyecto dominante no logró legitimarse en todo el territorio nacional y como no resolvió los agudos procesos de exclusión política, exclusión económica y la ausencia del Estado en amplias regiones del país, esto permitió el desarrollo de importantes movimientos de resistencia política, económica y social.

La expresión más radical de este inconformismo fueron las guerrillas comunistas, las cuales promovieron la toma del Estado por medio de ejércitos revolucionarios como medio para inculcar e imponer su propio proyecto de Estado, economía y sociedad<sup>20</sup>.

En este periodo, las organizaciones guerrilleras se configuraron como los agentes dominados del campo de poder estatal, ellas promovieron la constitución de un Estado comunista, buscaron desarrollar una reforma agraria y transformar las relaciones de explotación laboral, para ello contaron con el apoyo del Partido Comunista. Excluidas de la posibilidad real de participar en la competencia electoral y por la transformación del Estado dentro del campo político, estas guerrillas se propusieron subvertir el orden estatal establecido por medio de sus propios ejércitos, esto las llevó a ubicarse en la periferia geográfica del país, lugares donde crearon zonas de consolidación.

Inicialmente, las organizaciones guerrilleras contaron con poco capital económico (especialmente proveniente de una economía campesina)<sup>21</sup>, pequeño capital político (principalmente de campesinas de regiones caracterizadas por agudos conflictos agrarios y con ausencia histórica del Estado, así como de estudiantes universitarios y de militantes de movimientos de izquierda), pero contaron con un importante y creciente capital militar, lo cual acompañado por las ventajas de la geografía colombiana (zonas para resguardarse durante ofensivas militares), les permitieron permanecer como agentes activos de este campo.

---

<sup>20</sup> Los movimientos sociales de campesinos, estudiantes y población trabajadora asalariada tuvieron una importante participación durante este periodo y se convirtieron en grupos de presión política. Participaron como agentes dominados del campo político pero no fueron agentes activos del campo de poder estatal, en primer lugar porque no buscaron sustituir el Estado vigente, por el contrario, buscaron presionar social y políticamente a las élites dominantes para que respetaran sus derechos económicos, políticos y sociales, en segundo lugar porque no optaron por la vía armada para reivindicar sus derechos.

<sup>21</sup> Por ejemplo, según Eduardo Pizarro “las FARC se ubican casi exclusivamente en las zonas de colonización. Los recursos económicos con los cuales contaba la organización guerrillera en esta época eran muy limitados y su poder de fuego se basaba, ante todo, en las armas que podían recuperar en el campo de batalla” (Pizarro, 2011:193). Un cambio significativo se presentará a finales de los años setenta cuando las guerrillas constituirán una economía de guerra basada en la consecución de recurso por extorsiones, secuestros, cobro de impuestos a narcotraficantes, hasta su inmersión en la economía del narcotráfico.

Debido al antagonismo que se configuró durante el Frente Nacional, el campo de poder estatal se convirtió en el espacio de lucha y de expresión de este conflicto por inculcar los principios de visión, división y orientación del Estado colombiano. La violencia fue el común denominador de la dinámica de este campo. De igual manera, se convirtió en la mayor evidencia de la ausencia de un proyecto efectivo de dominación política y de cohesión social.

Finalmente es importante advertir desde ahora, un elemento que se desarrollará en el siguiente capítulo: la trayectoria política de Álvaro Uribe y la trayectoria paramilitar de Carlos Castaño se van a enmarcar en torno a las relaciones de poder, de competencia, de lucha a vida y a muerte, que se originaron en el campo de poder estatal desde los años sesenta.

Por un lado, Álvaro Uribe se orientará a promover la recuperación del monopolio de la violencia física por parte del Estado a través del fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de la incorporación de los civiles a la guerra contrainsurgente, por su parte, Carlos Castaño y sus hermanos, se articularán a la estrategia de las Fuerzas Militares orientada a impulsar la conformación de Autodefensas Campesinas, con el apoyo de terratenientes, políticos y narcotraficantes, para enfrentar los procesos de expansión de las guerrillas comunistas presentada desde finales de los años setenta.

Por lo tanto, desde esta perspectiva de análisis, ambos agentes van a confluir inicialmente en las estrategias de los agentes dominantes del campo de poder estatal orientadas a eliminar a sus oponentes dentro de este campo: las guerrillas comunistas y, a su vez, a garantizar la permanencia del Estado capitalista y bipartidista en el país.

## CAPÍTULO II

### EL ORIGEN SOCIAL Y LA GÉNESIS DE LOS HABITUS POLÍTICOS Y GUERREROS

#### Introducción

Si bien hasta ahora la investigación se ha centrado especialmente en un análisis de los factores objetivos y estructurales, es decir, en las relaciones de fuerza, de competencia y de lucha al interior de los campos político, militar y de poder donde Álvaro Uribe y Carlos Castaño van a ingresar como agentes activos a partir de los años ochenta del siglo XX, a continuación, se articulará a lo anterior, el análisis de los factores subjetivos, es decir, de las disposiciones sociales duraderas que fueron heredadas, socializadas y reproducidas por el origen social y que son naturalizadas por los agentes en la forma de percepciones, apreciaciones y acciones, más concretamente, en forma de habitus.

El habitus es tanto el elemento generador de la práctica, como el factor primordial de la reproducción cultural o simbólica... El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes de cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir<sup>22</sup> (Bourdieu, 1988: 54).

En este sentido, entendemos las trayectorias biográficas de Álvaro Uribe y de Carlos Castaño como la expresión de un orden estructural y social establecido, el cual es reproducido, pero a su vez, sus trayectorias son un reflejo de la capacidad de los agentes para transformar las relaciones de fuerzas y de poder imperantes dentro de los mismos campos donde participan.

Dentro de este análisis de las disposiciones sociales duraderas, socializadas y reproducidas por el origen social será fundamental el estudio de la familia y el entorno social y cultural cercano en donde ella se desenvuelve, porque ambos son fuente de

---

<sup>22</sup> “El concepto de habitus da cuenta del hecho de que los agentes sociales no son ni partículas de materia determinadas por causas externas, ni tampoco pequeñas mónadas guiadas exclusivamente por motivos internos, que llevan a cabo una suerte de programa de acción perfectamente racional” (Bourdieu; Wacquant, 1995:93).

transmisión y acumulación de capitales, principios de visión y división del mundo social, así como de habilidades y actitudes tanto para la vida cotidiana como para la actividad política, económica y/o guerrera.

El origen social define las posibilidades de escolarización, determina modos de vida y de trabajo completamente diferentes y es, entre los factores que intervienen en la configuración de la vida escolar y profesional, el único cuya influencia se irradia en todas las direcciones y alcanza todos los aspectos de la vida. Del origen social dependen el hábitat y la forma de vida correspondiente; la cuantía de los recursos y la distribución de los presupuestos; y la manera en que se siente la dependencia de la familia, factores todos que, a su vez, refuerzan la eficacia de aquel (Bourdieu y Passeron, 1969: 37)

En este sentido, para Pierre Bourdieu el origen social es, entre todos los factores de diferenciación social, el que más influencia tiene en las percepciones, apreciaciones, aptitudes y acciones de los agentes.

***Familia Uribe Vélez: un mundo de haciendas, caballos, ganado, peones y participación política.***

El 4 de julio de 1952 nació Álvaro Uribe Vélez, su infancia transcurrió entre la hacienda familiar ubicada en el municipio de Salgar y la ciudad de Medellín. Durante estos primeros años estudió en la Escuela Rural Integral y vivió en la hacienda la Pradera. Su nacimiento se produjo en pleno auge de la violencia bipartidista y a pocos años de concretarse el Frente Nacional, acuerdo al que su madre apoyó de manera activa.

Sus padres fueron Alberto Uribe Sierra y Laura Vélez Escobar, quienes tuvieron cinco hijos: Álvaro, Jaime, Santiago, María Teresa y María Isabel. Ellos vivieron en la finca La Pradera, una hacienda ubicada en el municipio de Salgar, suroeste de Antioquia<sup>23</sup>.

La encarnación más indeleble de la Colombia maravillosa ha sido siempre, para mí, la finca idílica de mis padres en Antioquia, el lugar donde pasé mis primeros años. Todos los días me levantaba temprano para ayudar con las tareas de la finca. Me quitaba el frío de encima, desayunaba arepa con café o chocolate caliente y corría al establo. Ordeñábamos las vacas y luego ensillábamos a los caballos. Cabalgábamos por la

---

<sup>23</sup> Esta tradición de vida en el campo se remontaba varias generaciones atrás, puesto que los padres de Laura Vélez, Martín y Alicia, eran oriundos de los municipios de Andes y Titiribí, en el departamento de Antioquia, donde se dedicaron a la ganadería, al cultivo de café y caña de azúcar. Los padres de Alberto Sierra se establecieron en la misma zona y comerciaron productos a lomo de mula por las trochas antioqueñas.

finca, pescábamos y nadábamos en los ríos, mientras respirábamos el esplendor verde de la Antioquia rural (Uribe, 2012: 47).

Desde pequeño los padres promovieron su involucramiento en las labores productivas de la hacienda, la cual contaba con “varios cientos de trabajadores” dedicados a las actividades de la agricultura, especialmente a los cultivos de café y caña de azúcar, así como a la ganadería y la cría de caballos. La exigencia de su padre en estas labores era hacer bien el trabajo y a tiempo.

Con varios cientos de trabajadores ocupados en los cultivos de caña de azúcar y café o del ganado, era necesario, decía mi padre “supervisar constantemente cada detalle, trabajar hombro a hombro con los empleados y conocer el oficio mejor que ellos”. Y nosotros debíamos dar ejemplo constituyéndonos en buenos miembros del equipo y permaneciendo alerta las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana. En cualquier momento podía nacer una yegua o una vaca salirse de la finca; un error y los cultivos podían echarse a perder, o un animal quedar cojo para siempre. Todo podía perderse con enorme facilidad. No todas las personas están hechas para este tipo de trabajo, pero a mí me encantaba. Me sentía en un paraíso. Trabajaba con mi familia y me dedicaba con entusiasmo a todas las tareas... Me alegraba poder ayudar en la administración de un sistema productivo grande y complejo, y saber que lo hacía bien. Esta etapa de mi vida fue decisiva en la formación de lo que soy (Uribe, 2012: 47-48).

Su padre, Alberto Uribe Sierra, fue un ganadero, terrateniente, comerciante de fincas, caballista y aficionado a la tauromaquia “era un hombre jovial y carismático, la personificación misma de la salud, la felicidad y el vigor. Consumado jinete y aficionado a la tauromaquia... Don Juan y poseedor de un gran encanto, era una fuente de alegría para quienes lo rodeaban” (Uribe, 2012: 18). Este gusto por los caballos y las ferias fue heredado por su hijo Álvaro Uribe que en varias ocasiones ganó concursos de jinetes infantiles en Medellín.

Él le transmitió valores como la disciplina, el rigor en el trabajo y se caracterizó por tener una personalidad fuerte y de imponente autoridad “mi papá era un enemigo de la pereza, eso también me marcó. Me regañaban por muchas cosas en el proceso de formación... Mi padre era muy bravo, había que trabajar todas las vacaciones. Es bueno lograr que los hijos trabajen pero que se sientan en un ambiente de más cariño” (Semana, mayo 26 de 2002).

La vida de terrateniente, ganadero, criador de caballos y de toros buscó ser inculcada en su hijo. Debido a que este tipo de profesión y de estilo de vida tiene sus propias reglas,

habilidades y destrezas, los ritos de iniciación son fundamentales para adherir y preparar a los nuevos agentes, la iniciación de Álvaro Uribe ocurrió en una plaza de toros<sup>24</sup>.

¡Álvaro! Miré a la multitud y vi a mi padre. ¡Firme Álvaro! Yo estaba de rodillas en la arena. Esperaba la salida del toro. Se trataba de un poco de tremendismo y de espectáculo con el fin de impresionar a la multitud y tal vez de intimidar un poco al animal. La puerta se abrió y el toro salió veloz. Pero en lugar de venir hacia mí, se desvió hacia un lado del ruedo. ¡Quédate arrodillado, Álvaro! Me gritó mi padre por encima del rugido de la multitud. ¡Quédate ahí!

Mi padre siempre intentó prepararme para la vida que me esperaba. Al igual que muchas personas de su generación, sabía que el peligro era parte de la vida cotidiana en Colombia; que era una constante... Creía que era algo que se podía superar: o bien haciendo ajustes según la necesidad o bien retirándose para intentarlo otro día. Pero nunca permitir que el peligro te acobardara.

Sospecho que ese día, en la plaza de toros, mi padre me enseñaba el modo de enfrentar una amenaza: burlarme, mirarla directamente a los ojos y guiñarle un ojo, aunque mi corazón palpitara con fuerza. Permanecí de rodillas, giré hacia el toro que dio una vuelta y, finalmente me miró. Pisoteó con fuerza, se dispuso a embestirme y el farol salió bien. Porque –tal como había dicho mi padre- sólo hay dos formas dignas de salir de la plaza de toros: en un ataúd hacia el cementerio o sobre los hombros de la multitud. En este tipo de vida no existe el camino del medio (Uribe, 2012: 45-46).

Pero Álvaro Uribe no sólo tuvo una socialización como ganadero y terrateniente, sino que también le fue transmitida una disposición hacia la participación política, particularmente en el Partido Liberal, proceso en el cual su madre, Laura Vélez Escobar, tuvo un papel fundamental.

Él la describe como una mujer erudita, la mejor bachiller en el año 1950 del colegio Madres de la Presentación, muy buena declamadora, con amplios conocimientos en literatura y poemas, conocedora de las humanidades, quién le inculcó la afición a la lectura. Según Álvaro Uribe, Laura Vélez sabía de memoria discursos de Simón Bolívar, Jorge Eliecer Gaitán y en los ratos de esparcimiento se los repetía para que los aprendiera.

Esta interacción con la madre no sólo le brindó un capital cultural, sino que poco a poco le fue brindando un capital lingüístico que pondrá a prueba en sus discursos electorales, fundamento de un liderazgo carismático, que lo distinguirá durante su carrera política.

---

<sup>24</sup> Los ritos de iniciación crean y recrean una comunidad pertenencia, contribuyen a generar un sentido de afiliación a un grupo social homogéneo.

A mediados del siglo XX, en un momento de violencia bipartidista, Laura Vélez promovió activamente la participación en las elecciones del plebiscito del primero de diciembre de 1957 que daría nacimiento constitucional a los acuerdos del Frente Nacional y que confirmaría el derechos al voto de la mujer.

Aprobado este plebiscito, posteriormente ella se presentó como candidata al Concejo municipal de Salgar vinculada al Partido Liberal y su hermana mayor, Cecilia Vélez participó en elecciones legislativas nacionales para llegar a la Cámara de Representantes como dirigente del Partido Conservador.

Mi madre hizo parte del primer grupo de mujeres colombianas en ocupar cargos de elección popular: llegó al Consejo Municipal de Salgar como miembro del Partido Liberal y poco después fue su presidenta. También su hermana mayor, Cecilia Vélez, fue elegida legisladora del Partido Conservador. Este espíritu democrático fue transmitido a la siguiente generación como una religión (Uribe, 2012: 49-59).

La actividad política de su madre fue una fuente de inspiración para la carrera política de Álvaro Uribe, igualmente lo fue su consejo permanente sobre la constancia en sus actividades.

Yo fui de la mano de mi madre a muchos sitios donde ella hacía campaña, y después en la primera elección ella se presenta y sale elegida concejala y después la eligen presidenta de ese Consejo. Entonces yo recuerdo todo el proceso: la campaña, su elección, su ejercicio como concejala, su ejercicio como presidenta de ese Consejo (entrevista a Álvaro Uribe, documental Canal Bio).

Durante los años siguiente las familias Vélez Escobar, Uribe Vélez y Uribe Escobar se irían convirtiendo en los más representativos dirigentes del Partido Liberal en el municipio de Salgar y comenzarán a tener importante representación en Medellín y Bogotá, debido a la incursión en el campo político de los primos Álvaro Uribe Vélez y Mario Uribe Escobar, quienes en conjunto tuvieron importante participación en el Concejo de Medellín, la Asamblea de Antioquia, la Cámara de Representantes y el Senado de la República, con lo cual en el transcurso de dos generaciones pudieron acumular un importante capital político familiar.

En su vida adulta, Álvaro Uribe combinará la participación política como dirigente del Partido Liberal con los negocios de la ganadería y la agricultura, para ello comprará,



iniciando los años ochenta, la hacienda El Ubérrimo. En algunas ocasiones fusionará ambas actividades, como lo refleja la siguiente reseña de la Revista Semana:

En Chigorodó, Urabá, por ejemplo, le organizaron un remate de ganado para conseguir recursos para su campaña. Los ganaderos llegaron con su ganado y la gente humilde quiso aportar un pato —que se subastó varias veces pues quien lo compraba lo volvía a regalar— algunas gallinas y unos cuantos caballos de mala calidad para rematar. Uribe no se aguantó las ganas y pidió que le ensillaran uno de esos ‘táparos’ y en un picadero diminuto salió a desplegar sus dotes de jinete en medio de los aplausos del centenar de personas que lo sintieron como uno de ellos. Eso es algo que sabe hacer, pues aseguran sus amigos que en el trato no diferencia entre gente elegante o importante y el más humilde y confía en la capacidad de progreso de cada cual (Reportaje Semana: Un hombre complejo, mayo 26 de 2002).

***Familia Castaño Gil: la finca, la familia y el trabajo como un reflejo de un mundo de campesinos propietarios de tierra.***

El 15 de mayo de 1965 nació Carlos Castaño Gil en el municipio de Amalfi, nordeste de Antioquia. Su niñez transcurrió entre la finca La Blanquita y los estudios rurales en la escuela pública municipal. Nació en uno de los momentos de mayor deslegitimación del Frente Nacional, a mediados de los años sesenta tuvieron un importante impulso los movimientos sociales campesinos, de trabajadores y de estudiantes, además también fue el momento del origen de las guerrillas comunistas.

Sus padres fueron Jesús Antonio Castaño y Maria Rosa Gil, quienes tuvieron doce hijos, entre ellos Fidel, Vicente y Carlos, fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. La familia vivió hasta los años ochenta en la finca La Blanquita ubicada en el municipio de Amalfi.

La familia Castaño no era rica. Todos nacimos en la finca “La Blanquita” de doscientas cincuenta hectáreas en tierra fría y dos animales por cada tres hectáreas, lo que no sumaba más de 150 animales. Uno admira al viejo que madrugaba para sostener a doce hijos. Su única ventaja era que sólo requería comprar la sal porque en la finca manteníamos gallinas y cuando una res se quebraba una pata, nos quedaba carne para mucho tiempo. Teníamos vacas lecheras, se hacía mantequilla y queso. La quebrada que pasaba cerca era cristalina y uno podía pescar; la caza de güagüas, armadillo y conejo era normal. Eso sin contar los cultivos de pan coger, plátano, frijoles y yuca. Mi padre tenía el concepto que entre más hijos engendrara más personas trabajarían para el bienestar de la familia... Los hijos eran un instrumento, con la diferencia que en casa se respiraba mucho amor y una profunda fe católica (Aranguren, 2001: 58).

El sistema productivo de la finca La Blanquita se fundamentaba entonces en la división familiar del trabajo, propio de una economía campesina, en la cual el alto número de hijos es fundamental para su reproducción, en ella la familia Castaño Gil se dedicó al negocio de producción y venta de ganado e instaló una economía de subsistencia basada en los cultivos tradicionales de la región. Su padre incentivó el trabajo de todos los hijos en la finca y promovió el valor de la austeridad.

En la casa siempre fue importante trabajar, por eso él nos pagaba salario por nuestra ayuda en la finca, los fines de semana. Nos daba dos pesos semanales, ahorrábamos y luego él le completaba a uno con el fin de comprar los cuadernos para estudiar. Desde niños nos enseñó que uno debía ganarse el dinero para mantenerse. En la finca madrugaba a poner el agua, y me decía: “Carlitos a echar el agua”. Tenía que coger por toda la acequia hasta la toma y encausarla. Luego me correspondía ir a enjear las vacas, pues no sabía ordeñar bien, estaba muy pelao, de ocho años. Después me tocaba recoger la boñiga vieja y llevarla a una huerta para abonarla, regresaba de llevar cuatro o cinco viajes y nos gritaba mamá: “Carlitos y Reinaldo a Garitiar”... a llevar la comida a los trabajadores de la finca, que estaban rozando en un tajo de nuestra tierra. En una olla llevábamos la sopa y en un “jiquera” o “catanga”, cargábamos el seco envuelto en hojas de plátano: arroz, carne, tajadas y arepa (Aranguren, 2001: 78-79).

Su padre, Jesús Antonio Castaño fue un mediano propietario de tierra y modesto ganadero, caracterizado por un sencillo y solidario estilo de vida, él era descrito como:

Uno de los ciudadanos más apreciados del municipio de Amalfi, en el nordeste antioqueño. Ganadero tradicional, un hombre amable que nunca se granjeó la enemistad de nadie. Su trabajo honesto le permitió ir acumulando unos pesos con los que hizo una mediana fortuna, que no cambió su sencillo estilo de vida ni su solidaridad con quienes tenían menos que él (Semana, mayo 1991).

Jesús Antonio Castaño representaba la autoridad familiar, promovía una disciplina en el trabajo y junto con su esposa profesaba una ética religiosa “él sigue siendo mi ejemplo ideal de rectitud, ética y valores. Recio, implacable; una autoridad, un patriarca. En esa época se iba a misa de cinco de la mañana y se rezaban los tres rosarios a las cinco de la tarde” (Aranguren, 2001: 77). También promovía un fuerte sentimiento nacionalista y los idearios del Partido Conservador, especialmente como seguidor de Laureano Gómez.

Mi papá me enseñó de pequeño que no se decía “Colombia” sino “mi Colombia”; nunca le oí decir “el país”, siempre decía “nuestro país”. Él tenía sentido de pertenencia y repetía que esto era nuestro y que me correspondía cuidarlo. Quizá de ahí venga algo de fascinación por lo que hago y por los símbolos patrios (Aranguren, 2001: 80).

Su madre, Maria Rosa Gil, se caracterizó por ser una mujer sencilla, humilde y por compartir fuertes creencias católicas. Ella se dedicó especialmente al cuidado de sus doce hijos y a las labores del hogar.

Mi mamá es lo más camandulera del mundo; y es que ha sufrido mucho, se le ve el dolor en el rostro. Se le murió su esposo y la guerra ya le ha quitado cinco hijos, cuatro hombres y la niña menor. Lo de papá fue lo más duro para ella, casi se nos muere. Ellos habían logrado formar un hogar católico y conservador laureanista (Aranguren, 2001: 77).

Su hermano mayor, Fidel Castaño, fue un importante referente en la trayectoria de vida de Carlos, puesto que él asumió el liderazgo de la familia después del asesinato de su padre, tomó la decisión de iniciar una guerra contra las FARC para vengar la muerte de su progenitor, previamente se había relacionado con el Cartel de Medellín y era amigo personal de Pablo Escobar. Fue, a su vez, quién involucró a Carlos Castaño en las actividades del narcotráfico y paramilitarismo.

Fidel siempre me mantuvo económicamente... Fui el hijo que nunca tuvo y heredé su iniciativa. La campaña antisubversiva la comenzó Fidel, yo me vi abocado a seguirla, él me dejó la tarea empezada. Y para eso si soy bueno, para terminar lo que alguien empezó, sucedió con los PEPES y ahora con la Autodefensa. A pesar de mi corta edad, me convertí en su sombra, a los tres años de comenzar la lucha antisubversiva, la responsabilidad en lo militar la tuve siempre yo, Fidel nunca estuvo pendiente de dónde se compraban las municiones y los fusiles, tampoco de la gente. Se concentraba en sus negocios y en la próxima región que penetraríamos (Aranguren, 2001: 164).

Carlos Castaño, por lo tanto, nació en un hogar típico de la colonización antioqueña y de los valores promovidos por ella, como son el trabajo duro basado en el principio religioso “ganarás el pan con el sudor de tu frente” y en una economía familiar donde los campesinos son dueños de la tierra, su hogar católico se adscribió al ala más radical del Partido Conservador, los seguidores de Laureano Gómez<sup>25</sup>, quien promovió abiertamente la violencia contra los liberales y su exclusión de la participación política. Dicha violencia tuvo un alto impacto en la zona rural de Antioquia.

En este contexto, las familias Uribe Vélez y Castaño Gil fueron socializadas en medio de un ferviente proyecto cultural regional fundamentado en la Colonización Antioqueña, el cual se cimentaba en una cultura arraigada en un pasado compartido, en

---

<sup>25</sup> Según Ernesto Báez, comandante de las Autodefensa Unidas de Colombia, “el padre de Carlos Castaño fue un conservador laureanista y por mucho esfuerzo que éste haga no puede disimular su condición de ultragodo (Aranguren, 2001: 179).

un pasado idílico, por medio del que se exaltaba la imagen del antioqueño como un hombre de empuje y tesón que fue capaz de dominar y poblar la cordillera de los Andes centro-occidentales y de colonizar el occidente colombiano<sup>26</sup>.

La creencia en la pujanza y habilidad superior para la producción, el comercio y los negocios se fundaron en las leyendas de conquistadores atraídos inicialmente por la riqueza de las minas de oro ubicadas en Antioquia, luego por los conquistadores del Gran Caldas y actualizadas con la sociedad industrial en ciernes a mediados del siglo XX. Pero también en la exaltación de los valores familiares, la religión católica, una fuerte admiración del campesino como trabajador de su propia tierra y el culto al trabajo, sobre lo cual se hizo corriente un refrán popular: “ser pobre no es pecado. Pecado es no trabajar”.

En este ambiente cultural compartido, ambas familias sustentaban que sus ancestros habían sido campesinos, arrieros, labradores del campo y propietarios de tierra. La vida del campo se convertía para ellos en un estilo de vida y la tierra sería uno de los bienes culturales, económicos y sociales más apreciados por ellos. Este origen común contribuyó para que dichas familias tuvieran como rasgos centrales la disciplina en el trabajo, la creencia en los valores católicos y la exaltación de la familia.

Pero es importante resaltar también que los procesos de socialización de los agentes Álvaro Uribe y Carlos Castaño ocurrieron en el marco de relaciones de fuerza, de competencia y de lucha dentro de campos previamente establecidos, los cuales al configurarse en estructuras estructurantes contribuyeron en la transmisión y reproducción de las percepciones, apreciaciones y acciones dominantes dentro de estos campos.

**Encuentro entre condiciones subjetivas y objetivas: la confluencia de las familias Uribe Vélez y Castaño Gil con las relaciones de fuerza y de violencia imperantes en el campo de poder estatal y regional a mediados del siglo XX.**

---

<sup>26</sup> Fue así como desde el siglo XIX se había construido un mito sobre las aptitudes superiores del antioqueño para las labores de la minería, el comercio, la caficultura y la empresa. Sobre este mito se sustentaba la creencia de ser una “raza superior”, distinta a la del resto del país, una ‘raza’ predestinada para dominar" (Melo, 2013).

Tal como lo señala Pierre Bourdieu el agente sólo puede entender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en su época, es por ello que requiere conocer las transformaciones más impersonales y remotas junto con las características más íntimas y subjetivas, así como observar las relaciones entre ambas.

Las relaciones de fuerza, de violencia y de oposición que se presentaron en el campo político, militar y de poder durante la segunda mitad del siglo XX, primero entre Liberales y Conservadores, luego entre el Estado y las Guerrillas comunistas, no estuvieron ausentes en los procesos de socialización de los agentes Álvaro Uribe y Carlos Castaño.

Por el contrario, sus familias no sólo se asentaron en la periferia del departamento de Antioquia, lugares donde se presentó directamente el conflicto violento de la segunda mitad del siglo XX, sino que también terminaron involucradas dentro de las luchas y las estrategias por el dominio del campo de poder.

Fue así como los grupos armados legales e ilegales y los conflictos que ellos representaban no sólo rondaron las propiedades de sus familias en los municipios de Salgar o Yarumal y en Amalfi o Segovia, sino que se entremezclaron en la vida cotidiana y en las estrategias que estos agentes adoptaron para conservar su posición social y familiar dentro de dichos campos.

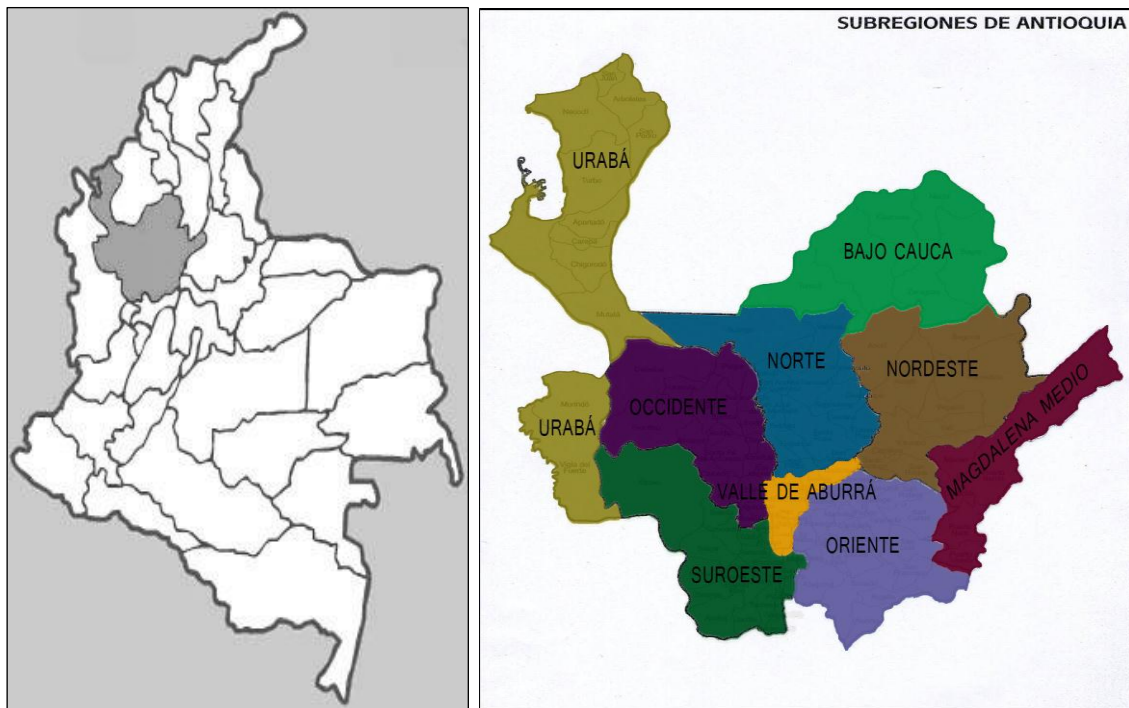
### ***Socialización en medio de la Violencia Bipartidista y el conflicto armado entre el Estado y las Guerrillas Comunistas.***

En Antioquia, entre 1946 y 1957, fueron asesinadas aproximadamente 26.000 personas en medio de la violencia bipartidista, lo que llevó a este departamento a convertirse en el tercero con más muertes violentas del país, además generó el desplazamiento forzado de aproximadamente 117.000 campesinos de la región.

La Violencia de este periodo se orientó a establecer la hegemonía del Partido Conservador y a imponer los valores propios de la élite antioqueña en las regiones periféricas del departamento, que no eran controladas por las élites políticas y económicas de Medellín, las cuales, por un lado, poseían importantes recursos naturales

y, por otro, no cumplían con los criterios de socialización antioqueña, debido a que eran zonas principalmente de asentamientos afrocolombianos, indígenas o de población proveniente de departamentos como la costa Atlántica, el Choco, Bolívar y Santander.

Mapa No 1  
Colombia y Subregiones de Antioquia

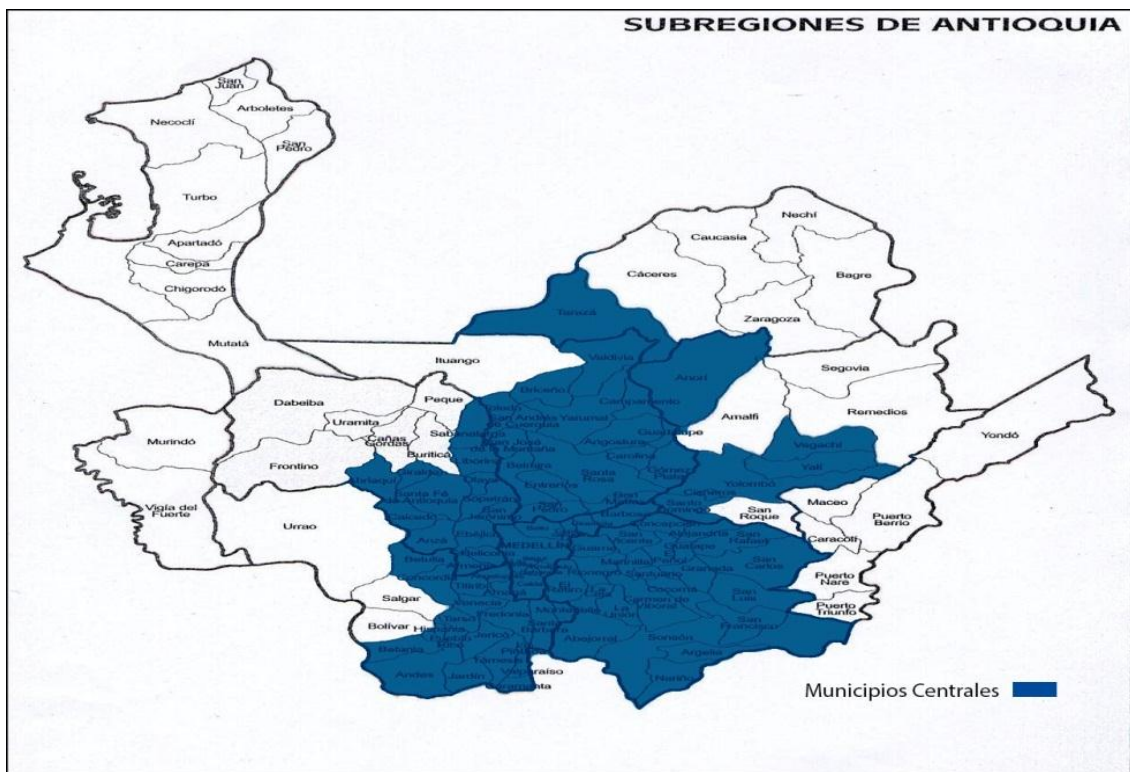


Fuente: Gobernación de Antioquia, 2012.

Durante este periodo, La Violencia afectó de manera diferenciada al departamento de Antioquia. En primer lugar, en las zonas tradicionalmente cafeteras del departamento, donde las élites políticas pudieron obtener legitimidad y una fuerte capacidad de cohesión, se garantizaba un mínimo de movilidad social y económica, así como el acceso a la pequeña propiedad sobre la tierra y se compartían fuertes creencias alrededor del catolicismo y de los valores regionales.

## Mapa No 2

### Municipios Céntricos Departamento de Antioquia 1946 – 1957



Fuente: Roldán, 2003: 25 – 26.

En estas zonas, que cubren los municipios de Medellín, Bello, Envigado, las zonas del sur y suroeste (Andes, Fredonia), el oriente (Sonsón, Cocorná, San Carlos) y el norte cercano (Santa Rosa, Yarumal), la violencia bipartidista fue leve y no amenazó la posición dominante de la dirigencia política. Allí prevaleció la cultura del café, un fuerte regionalismo, las familias numerosas y los pequeños propietarios, así como el imaginario de ser una región de pujantes colonos y de arraigados católicos.

Se trataba de una forma de gobierno paternalista y liderado por la élite, en la cual la participación popular era limitada, pero que permitía una cierta protección, educación, empleo, movilidad social, inversión pública y desarrollo en una época en la cual el Estado central no estaba todavía en condiciones de garantizarlo. A cambio, el Estado departamental exigía de sus ciudadanos la conformidad con un conjunto específico de valores tales como la observancia de los rituales católicos, el matrimonio, la disciplina de trabajo, el capitalismo y la moderación política (Roldán, 2002: 52).



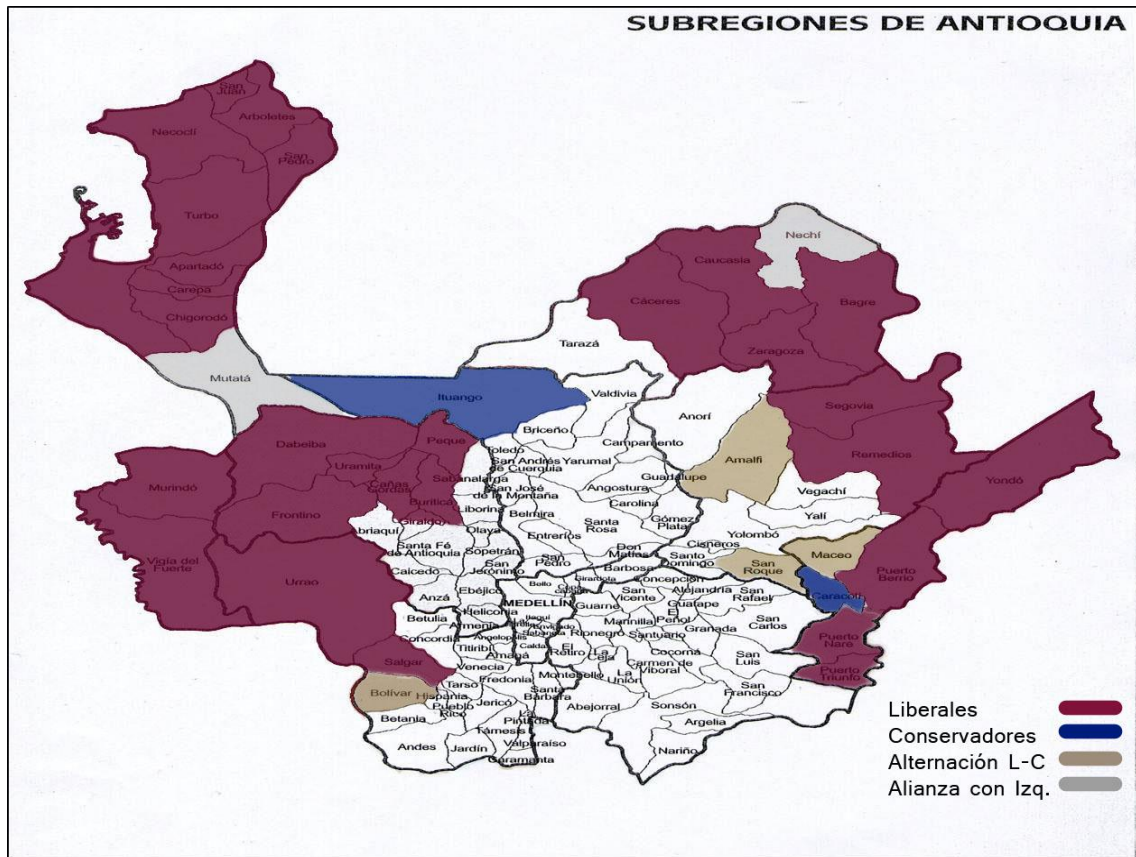




cuales se habían constituido en mayoría liberal, se encontraban escasamente articulados al proyecto de pueblo región antioqueño y eran concebidos como ingobernables por parte de las élites políticas y económicas de Medellín.

Mapa No 5

Regionalización electoral Municipios Periféricos de Antioquia durante el periodo de la  
Violencia



Fuente: elaboración propia con datos de Roldán, 2003 y Pinzón de Lewin 1989

Cuando los esfuerzos de conversión resultaron poco exitosos, los conservadores crearon fuerzas civiles armadas, conocidas como pájaros o contrachusmas, y las desplegaron hacia las zonas periféricas donde la élite regional tenía poco apoyo, pero donde podían conseguir una importante influencia clientelista. La reacción a esta política oficial a nivel departamental fue la creación de guerrillas liberales en Urabá, Urrao, Bajo Cauca, Valle del río Magdalena y el Nordeste antioqueño, especialmente entre 1949 y 1953, lo que les permitió ofrecer resistencia al gobierno conservador.



conservadores laureanistas y militantes liberales en el nordeste de Antioquia, que afectó los municipios de Amalfi, Segovia y Remedios. Uno de los hijos de la familia Uribe Vélez registró así una de las situaciones que vivieron durante este periodo:

Nadie estaba a salvo. Y la violencia llegó a mi familia. Mi abuelo materno, Martín Vélez, y varios de sus hermanos fueron obligados a abandonar su casa... Una tarde, yo tenía entonces cinco o seis años, más de 300 guerrilleros liberales llegaron a la finca exigiendo alimentos y refugio. Los recuerdo muy bien: hombres sucios y acosados, con sombreros y zamarros de cuero que reían a carcajadas desde la altura de sus caballos criollos. Los dirigía el famoso capitán Franco, un hombre carismático que poco después del asesinato de Gaitán había incursionado en la política; pasó algún tiempo en la cárcel y al salir fundó un grupo de resistencia armada.

Vi cómo mi madre –mujer comprometida y con una incipiente carrera política gracias a sus propios méritos- cocinaba para esos hombres, y cómo mi padre –hombre orgulloso y democrático- hablaba con esos bandidos armados. Y aunque las intenciones de los hombres del capitán Franco eran relativamente pacíficas (el Frente Nacional, el acuerdo político que pondría un fin temporal a este capítulo de violencia colombiana, estaba muy cerca) recuerdo haber anhelado, en el nivel más puro y primario, vivir en una Colombia donde los hombres armados no invadieran nunca nuestra finca, donde mi familia estuviera segura y donde nadie tuviera que encerrarse dentro de su casa, mirando aterrorizado por la rendija de la puerta (Uribe, 2012: 53-54).

Otro de los hijos, Santiago, relata una situación de esta época, lo que refleja como la violencia permeó la vida cotidiana de estas poblaciones.

Me decía mi mamá un día, naciste entre las balas, cuando te estaba esperando (embarazada) a finales del 56 y principios del 57, me tocó muchas veces, con un revólver en la mano hacer disparos al aire para que no nos robara la chuzma de ese entonces, el café, las mulas y todo lo que teníamos (entrevista a Santiago Uribe, documental Canal Bio).

Por su parte, la familia Castaño Gil vivió en el municipio de Amalfi donde se presentó un conflicto similar al de municipios del Bajo Cauca, el Magdalena Medio y zonas mineras del nordeste antioqueño, caracterizado por la escasa e inefectiva presencia del Estado, así como por los conflictos alrededor de la tierra, los recursos naturales y la lucha por parte de dirigentes conservadores laureanista por acceder al poder político y económico a nivel local, en regiones caracterizadas por tener importante adscripción liberal.

En este contexto, las familias Uribe Vélez y Castaño Gil vivieron de forma cercana La Violencia bipartidista, puesto que en esta región se desarrolló de manera aguda la

represión oficial conservadora, la incursión de los “pajaros” y la respuesta de las guerrillas liberales.

Pero poco tiempo después, entre 1958 y 1974, entró en vigencia los acuerdos del Frente Nacional y los antagonismos bipartidistas se transformaron en alianzas de gobierno compartido entre liberales y conservadores, los cuales fueron reproducidos a nivel regional.

Durante el periodo del Frente Nacional la élite política de Medellín puso en práctica las disposiciones relacionadas con la distribución paritaria de los cargos públicos entre los dos partidos políticos tradicionales, la conformación de redes clientelistas como mecanismos para mantenerse en el poder y, a su vez, continuó con la reproducción de los principios de visión y división del mundo social sustentados en el mito del “pueblo antioqueño”, como factores cohesionadores de la sociedad regional.

Pero este proyecto político de integración de la sociedad antioqueña por medio del bipartidismo, la expansión de las redes clientelistas y la actualización del mito del “pueblo antioqueño” no logró transmitirse e imponerse en todo el departamento de Antioquia, sino principalmente en los municipios céntricos<sup>28</sup>. Fue así como en las regiones periféricas del departamento se desarrolló, a partir de la década de los sesenta, el conflicto violento entre las élites dominantes del campo de poder estatal y regional frente a las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL<sup>29</sup>.

Lo que significa que a nivel regional el nuevo conflicto armado reprodujo las características sociológicas del conflicto violento anterior: mayor cohesión social en la región céntrica controlada por las élites políticas y económicas de Medellín, así como mayor violencia física en las áreas periféricas de menor integración, las cuales desafiaban política y militarmente el proyecto dominante de las élites del campo de poder estatal y departamental.

Estos territorios periféricos con presencia guerrillera, especialmente las regiones de Urabá, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio, proveían zonas selváticas y

---

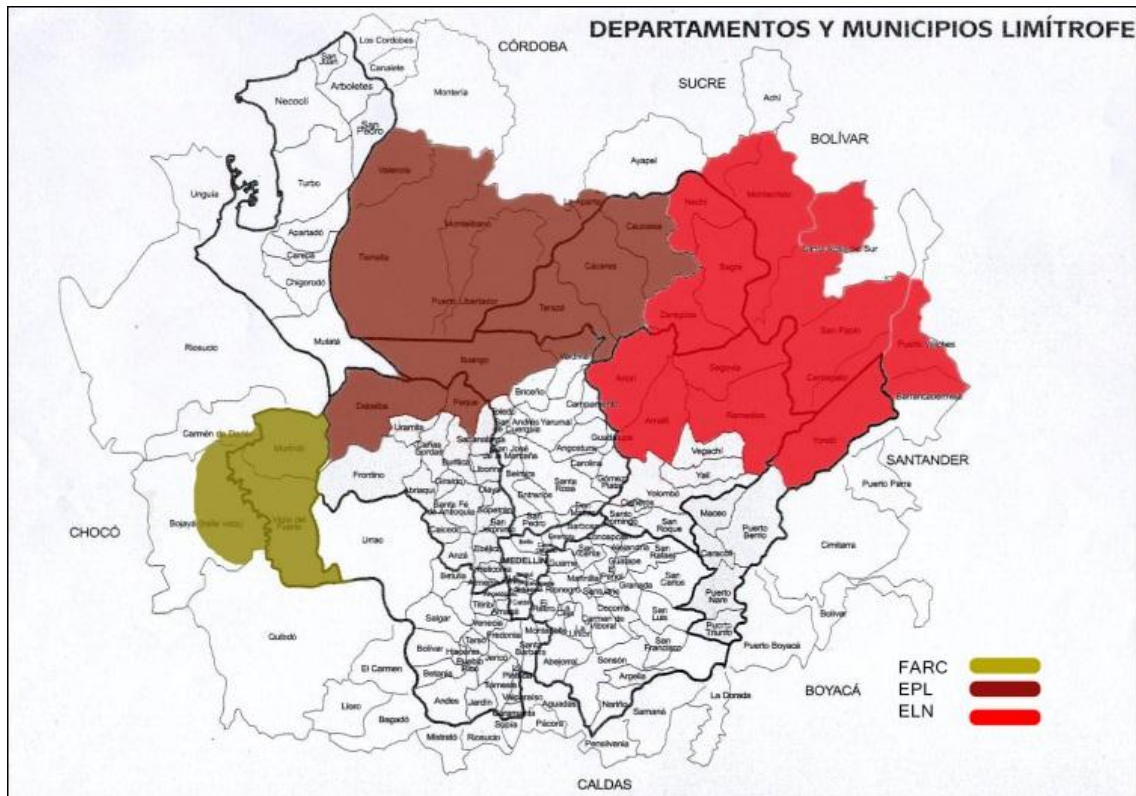
<sup>28</sup> Medellín, Valle de Aburrá y los municipios tradicionalmente cafeteros del centro del departamento.

<sup>29</sup> Especialmente el Urabá antioqueño, el Magdalena Medio, el Nordeste y el Bajo Cauca.

montañosas para el refugio de los grupos armados en los momentos de ofensiva militar, ofrecían el acceso a población con experiencia guerrillera, especialmente desmovilizados de las guerrillas liberales, fueron también espacios excepcionales para el proselitismo político del Partido Comunista debido a la presencia de importantes conflictos agrarios, lo que contribuyó a la implementación en estos territorio de autodefensas campesinas promovidas tanto por el Partido Comunista como por las FARC y el EPL.

### Mapa No 7

Distribución de las organizaciones guerrilleras en el departamento de Antioquia entre 1966 y 1974



Fuente: García 1998: 73-74

Pero especialmente éstas fueron zonas donde se agudizaron los conflictos relacionados con la exclusión política y la exclusión económica, en el marco de una ausencia histórica del Estado en estos territorios.

En primer lugar, las regiones periféricas del departamento no lograron ser controladas por el Partido Conservador y el Partido Liberal de Antioquia, por el contrario, el Partido

Comunista consiguió consolidar allí una importante base social de apoyo, por medio de la cual buscó promover un reformismo agrario a través de la creación de ligas campesinas y sindicatos agrarios. En este periodo el Partido Comunistas estaba excluido de la participación política, puesto que con los acuerdos del Frente Nacional se le impidió participar en elecciones, pero este movimiento promovió allí la conformación de comités de autodefensa campesina, movimientos y sindicatos de resistencia agraria. Estos hechos contribuyeron en la agudización del conflicto con las élites bipartidistas departamentales y nacionales.

En segundo lugar, en los territorios periféricos se desarrollaron agudos conflictos por la tenencia de la tierra, el acceso y comercialización de recursos naturales, así como por la introducción del capitalismo agroindustrial. Dichos conflictos se agudizaron por el crecimiento de los procesos de colonización, los cuales al no ser promovidos ni controlados por el Estado generaron mayores tensiones y violencias.

Finalmente, las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio, así como el sur de Córdoba, se configuraron como zonas donde históricamente el Estado nacional y departamental estuvo ausente o su presencia fue débil, cuando buscó ejercer soberanía en estos territorios lo hizo intermitente a través de las Fuerza Militares, lo que conllevó, en la práctica, a que los pobladores de estas regiones no contaran con las garantías constitucionales de acceso a la justicia, la seguridad y a los derechos políticos, económicos y sociales garantizados por el Estado de derecho.

Este conjunto de conflictos contribuyeron para que campesinos, obreros de la agroindustria y algunos estudiantes universitarios de la región, ingresaran en los ejércitos de las FARC, el ELN y el EPL como medio para exigir la inclusión política impedida por los acuerdos del Frente Nacional, la promoción de la Reforma Agraria y la mejora de las condiciones laborales en la industria agrícola, así como la constitución, en el mediano plazo, de un Estado de carácter comunista.

Las guerrillas de las FARC, el EPL y el ELN se establecieron y consolidaron en estas zonas periféricas de Antioquia durante los años sesenta y setenta, la misma región donde no sólo se desarrolló La Violencia bipartidista, sino también donde se habían

asentado las familias Uribe Vélez y Castaño Gil, las cuales durante este periodo adquirieron varias propiedades rurales en la región.

### Mapa No 8

Principales propiedades rurales familias Uribe Vélez y Castaño Gil entre los años cincuenta y ochenta del siglo XX



Fuente: Uribe, 2012; Aranguren, 2001 y entrevistas en prensa.

En este contexto, desde las décadas de los sesenta y setenta tanto Álvaro Uribe como Carlos Castaño crecieron en un entorno rural y de conflicto armado donde hacía presencia activa las nacientes guerrillas comunistas. No tardó mucho tiempo para que estas familias se encontraran de nuevo frente a frente con los agentes inmersos en el conflicto armado.

Finalizando la década de los sesenta, las nacientes guerrillas del EPL incursionaron en la Hacienda La Carolina de Alberto Uribe Sierra, según afirmó Álvaro Uribe, su padre “con la esperanza de llevar una vida más tranquila, en 1961 se trasladó al extremo norte de Antioquia; pero el destino quiso que esa zona fuera el lugar de nacimiento del Ejército Popular de Liberación. A mediados de los años sesenta, tenía yo doce o trece



años, el EPL llegó una noche a la finca, destruyó la maquinaria agrícola, se robó el ganado y quemó nuestra casa” (Uribe, 2012: 19).

Posteriormente, en los años setenta compraron la hacienda Guacharacas entre los municipios de San Roque y Yarumal “pero en la década de 1980 la zona comenzaba a convertirse en el fortín de un reducto de las FARC” (Uribe, 2012: 18-19). Fue en esta Hacienda donde en 1983 ocurrió el asesinato de Alberto Uribe Sierra por parte de guerrilleros de las FARC.

La relación entre la familia Uribe Vélez y las guerrillas asentadas en el departamento de Antioquia fue desde el inicio conflictiva, cada una de ellas se representaba con los valores opuestos de la otra y reflejaban posiciones distintas dentro del campo de poder estatal y regional.

Por un lado, la familia Uribe Vélez era una familia terrateniente y ganadera de la región, perteneciente a la dirigencia local del Partido Liberal, en conjunto promovían la defensa de la propiedad privada, la economía capitalista y apoyaban la continuidad del Estado constituido desde el Frente Nacional. Por su parte, las guerrillas promovían una reforma agraria, la cual afectaba directamente los intereses del sector ganadero y terrateniente del país, defendían la instauración de un Estado comunista y propendía por mejores condiciones laborales en la agroindustria, además financiaban parte de su aparato de guerra a través de la extorsión a medianos y grandes propietarios.

Estos hechos los llevaron a entablar una lucha a vida y a muerte con estas organizaciones, Alberto Uribe Sierra afirmaría “mejor muerto que secuestrado”, lo que reflejaba no sólo su antagonismo frente a las guerrillas sino también su disposición de lucha, legado que Álvaro Uribe heredará.

Por otra parte, Carlos Castaño tendría su primer encuentro con las guerrillas siendo muy joven y en compañía de su padre, cerca de la finca en la que vivió su niñez.

Yo sólo tenía catorce años cuando salíamos con mi papa de la finca La Blanquita. Nos movilizábamos en un camioncito para Amalfi, mi pueblo, y de repente saltaron unos hombres del matorral hacia la carretera. Era la guerrilla con intención de parar el carro. Recuerdo que me dio terror. Pero mi padre me calmó al decirme: “Tranquilo, Carlitos. No se preocupe, que esa gente no nos va hacer nada”. Después de pasar ese

retén sin problemas, le perdí el miedo a la guerrilla. Minutos más tarde, papá pronunció la única frase que yo le oí decir en contra de las FARC: “Estos son unos sinvergüenzas que no trabajan” (Aranguren, 2001: 57).

Inicialmente la familia Castaño Gil no contempló a las guerrillas como organizaciones peligrosas a las cuales tuvieran que temer, por el contrario, debido a la cercanía de los guerrilleros en las propiedades de los Castaño pudieron llegar a relacionarse, especialmente en la finca El Hundidor, ubicada en el municipio de Segovia.

Mi hermano Ramiro estaba influido por esa ola juvenil y romántica de la izquierda. Escuchaba Radio Habana en la noche y hasta leía China Reconstruye, una revista comunista que llegaba a la casa... Manuel (otro hermano) anduvo con los guerrilleros del Cuarto Frente de las FARC. Inclusive fue amigo de Gilberto Aguilar, alias Montañez uno de los comandantes. Manuelito nunca fue guerrillero, pero sí le gustaba hacer con ellos grandes travesías, visitar las minas desde Segovia hasta el sur de Bolívar o ir de pesca. Cuando ellos iban de paso, mi padre los dejaba acampar en la finca El Hundidor. Uno amanecía y ahí se veía los toldos, las carpas y las hamacas... Mi hermano Fidel tenía un bar en Segovia que frecuentaba la guerrilla y se llamaba “Bar el Minero”. Al llegar los subversivos, él les decía: “Bueno mis muchachos, me entregan las pistolas si se van a emborrachar”. Cuando las pedían para pelear, las ocultaba y los mandaba a dormir a un reservado que tenía en el bar. Éramos amigos de los guerrilleros por la sensibilidad social que trataban de inculcar, pero, viéndolo bien, esa era otra guerrilla, algo idealista (Aranguren, 2001: 58).

En este sentido, la familia Castaño Gil no asumió una posición de antagonismo y de confrontación inicial con las organizaciones guerrilleras, debido a que no las identificó como un enemigo que pusiera en peligro su posición dentro del campo de poder. Por una parte esta familia se había constituido como mediana propietaria de tierra, donde su productividad dependía especialmente del trabajo familiar, eran más bien campesinos propietarios de tierra que grandes terratenientes y ganaderos.

Este hecho, les permitió compartir no sólo un espacio geográfico sino también un espacio social de interacción, de encuentro y de socialización entre los guerrilleros y los hermanos Castaño. La lucha armada y el desafío al Estado no fue percibido por los Castaño Gil como una traición a los valores compartidos por los agentes con una posición homologa dentro del campo. Esta situación cambió drásticamente con el secuestro y asesinato de Jesús Antonio Castaño por parte de una cuadrilla de las FARC, situación que los convirtió en acérrimos enemigos.

Finalmente las guerrillas allí asentadas lograron consolidarse a finales de los años setenta y sobre la base de una estrategia nacional de toma del poder estatal<sup>30</sup> optaron, a comienzos de los años ochenta, por expandirse de la periferia geográfica y económica del país y del departamento hacia regiones de mayor productividad e importancia económica, geográfica y política.

A partir de los años ochenta todos los grupos guerrilleros, incluidas las FARC, una vez consolidadas sus áreas de influencia en las regiones de colonización concebidas como retaguardias estratégicas, dan un salto hacia regiones con significación en el plano económico, con objeto de buscar el control directo en la explotación de recursos naturales o la extorsión a sus productores... Regiones productoras de banano, oro, petróleo o carbón comienzan a sufrir la presión de los guerrilleros, quienes buscan, mediante la apropiación directa o la extorsión a los productores, obtener recursos sustanciales para fortalecer sus planes estratégicos (Pizarro, 2011: 202).

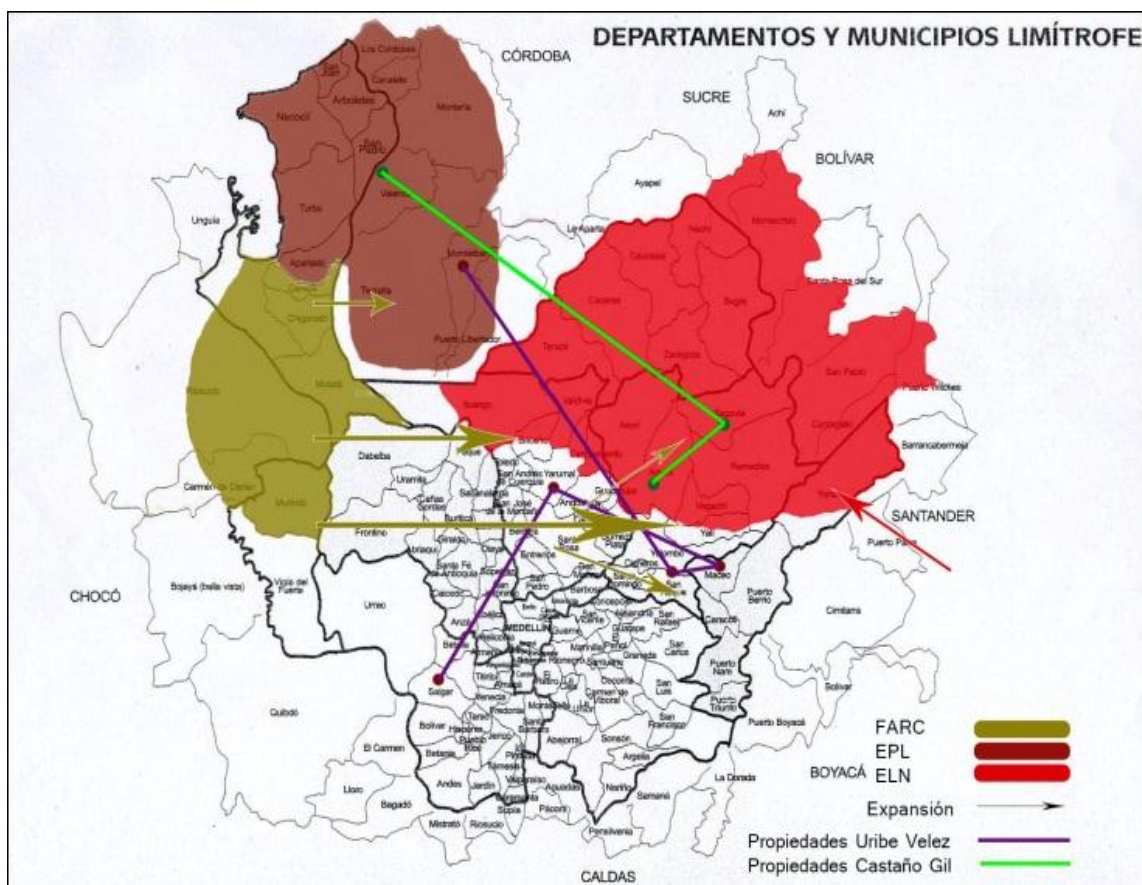
Lo anterior se reflejó, a nivel regional, en el crecimiento de las guerrillas comunistas en los departamentos de Antioquia y Córdoba, situación que afectó directamente a las propiedades adquiridas por los Uribe Vélez y Castaño Gil entre los años setenta y ochenta.

---

<sup>30</sup> La guerrilla que más claramente definió dicha estrategia fue las FARC que en 1982 en su Séptima Conferencias definió el programa para acceder al poder, allí se formuló un plan estratégico el cual preveía que mediante una fuerte campaña militar las FARC estarían en capacidad de acceder a la toma del poder en ocho años. “Por primera vez desde que surgió en Marquetalia la guerrilla revolucionaria, la Séptima Conferencia le dio al movimiento una clara concepción operacional y estratégica como ejército revolucionario, lo que marcó un reajuste de todos sus mecanismos de dirección y mando” (Pizarro, 2011: 194). Esta estrategia fue adoptada también por las guerrillas del ELN y el EPL, esta última en la Primera Conferencia Nacional celebrada en el departamento de Córdoba en 1981 (Romero, 1998).

## Mapa No 9

### Expansión guerrillera y propiedades familias Uribe Vélez – Castaño Gil<sup>31</sup>



Fuente: elaboración propia con datos de García, 1998 e información autobiografías Uribe, 2012; Aranguren, 2001.

Para poder llevar a cabo esta estrategia de expansión territorial, las organizaciones guerrilleras de las FARC, el ELN y el EPL tuvieron que crear una economía de guerra sobre la cual sostener su capacidad bélica. Esta economía se fundamentó en acciones de extorsión, secuestro, cobro de impuestos a los productores de las regiones y a narcotraficantes, además en las zonas bajo su dominio las guerrillas optaron por apropiarse de los recursos municipales.

Este flujo sin antecedentes de recursos económicos va a permitir el fortalecimiento de los tres grupos guerrilleros de “primera generación (Farc, Eln, Epl)”. En el caso de las FARC, su despegue económico provendría fundamentalmente del impuesto a los productores de drogas ilícitas y a las prácticas de secuestro, los cuales le van a permitir a este movimiento gestar nuevos frentes armados, ahora con criterios ante todo estratégico-militares: por ejemplo, el control de la cordillera oriental para intentar

<sup>31</sup> Las líneas morada y verde hacen referencia a la secuencia cronológica de adquisición de las propiedades por parte de Álvaro Uribe y Carlos Castaño, comenzando por Salgar y Amalfi respectivamente, lo que también refleja la movilidad de estos agentes dentro del territorio rural en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

cercar y estrangular a Bogotá... Al lado de esta expansión hacia zonas de interés económico y militar, el ELN inicialmente y más tarde las FARC, comenzaron un proceso de control municipal mediante la expulsión de la fuerza pública, el asesinato o la cooptación de los líderes políticos locales y el dominio de los presupuestos municipales, lo que fue denominado con acierto como “el clientelismo armado” (Pizarro, 2011: 203-204).

Por su parte, como lo señala Mauricio Romero:

El hostigamiento de la guerrilla en contra de los ganaderos alcanzó niveles extremos durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990). Las contribuciones exigidas “crecieron tan arbitrariamente, que uno de los ex comandantes del EPL recuerda que un hombre con cincuenta vaquitas o con una finca media, ya se le catalogaba de rico (Romero, 1998: 87-89).

Lo anterior conllevó a que las acciones de secuestro y extorsión se generalizaran en todo el país y en Antioquia desde finales de los años setenta, las cuales afectaron principalmente a los grandes y medianos propietarios de tierra, los ganaderos y los empresarios agroindustriales. Entre los afectados de esta estrategia se encontraron las familias Uribe Vélez y Castaño Gil que tenían sus propiedades rurales justo en las zonas de expansión guerrillera.

### **Secuestro y Extorsión**

Fue en el marco de este proceso de expansión y de configuración de una economía de guerra que las FARC realizaron en 1979 el secuestro de Jesús Antonio Castaño y el intento de extorsión y secuestro de Alberto Uribe Sierra en 1983, acciones que terminaron con el asesinato de ambas agentes.

En el primer caso, el secuestro (1979) y asesinato (1980) de Jesús Antonio Castaño se presentó en la finca El Hundidor ubicada cerca del municipio de Segovia en Antioquia.

El secuestro de mi padre inició a las tres de la madrugada, cuando siete hombres armados llegaron a la finca El Hundidor y se escondieron durante dos horas en un pequeño cañaduzal, detrás de la humilde casa hecha en cancel y tejas de aluminio... Él se colocó en la cintura su habitual revólver Colt, calibre 32, le quitó el seguro a la puerta y, al abrirla cinco centímetros, desde afuera la extendieron a patadas mientras le gritaban: “no se mueva, manos arriba”. De inmediato se le tiraron encima, cual pirañas, dos guerrilleros. Lo derribaron y, después de desarmarlo y amarrarlo con cabuyas, le decían entre otros insultos: “Oligarca hijueputa”...

Fidel buscaba desesperado los primeros veinte millones de pesos que le pedían las FARC. Mi padre comenzó a enfermar durante el cautiverio, pues había decidido no comer nada y no hablar con sus captores. Duró meses sin pronunciar una palabra... A finales del mes de agosto, dos meses después del secuestro, mi hermano completó el primer pago y confiado, le entregó a las FARC el dinero....

Hasta que llegó la segunda boleta. Las FARC pedían cincuenta millones de pesos más por el rescate de mi padre. Con esta respuesta, Fidel presintió que la situación tendía a agravarse... Fidel no tenía ese dinero. Sin embargo, entre amigos y la Caja Agraria, obtuvo en un mes treinta millones prestados. La guerrilla recibió el dinero por segunda vez en octubre y sólo hasta los primeros días de diciembre, nos dio la fecha de entrega.

Mi padre decidió revelarse y no caminar más. Ya no comía y continuaba enfermo. Cada día estaba peor. En ese instante se presentó una escaramuza entre ellos y un frente del ELN que bajaba por el río Arenas Blancas, una lamentable equivocación. Los guerrilleros del cuarto frente de las FARC creían que se trataba de un operativo militar y estimaban que nosotros teníamos alguna influencia. Presionaron al viejo a caminar pero él continuó rehusándose. Si le hubieran dado oportunidad, estoy seguro de que se les hubiera volado.

Los guerrilleros del frente se reunieron a analizar la determinación de mi viejo y le consultaron a un comandante guerrillero que hoy hace parte del secretariado de las FARC. Éste, de manera cobarde, no dudó en ordenar la muerte de papá por radioteléfono. Antes de ser asesinado, lo insultaron repetidamente. (Aranguren, 2001: 60-64)

El segundo caso se presentó en 1983 con el asesinato de Alberto Uribe Sierra en su finca Guacharacas ubicada entre los municipio de Yolombó y San Roque del departamento de Antioquia.

Después de hacer un barrido rápido de la zona, el helicóptero aterrizó en Guacharacas hacia las cuatro de la tarde. Mi padre esbozó una sonrisa, miró a los trabajadores y frunció el ceño. Se dirigió a la casa sin decir una palabra. Tenía algo que buscar. Entre tanto, el capitán Rivera terminó de apagar el helicóptero...

Entonces hombres armados salieron de detrás de los árboles. Con la agilidad de una persona veinte años más joven, mi padre se levantó. Sacó la Walther de su cinturón y comenzó a disparar sin descanso. ¡Don Alberto, no!, gritó el capitán, ¡son muchos! ¡Lo van a matar! Así será, contestó mi padre mientras se refugiaba en la cocina, ¡asegúrate de que toda mi familia y mis trabajadores escapen! ... Ahora yo era parte de la mitad de los colombianos que habían perdido a un ser querido debido a la violencia que azotaba al país.

Mi padre fue asesinado en la tarde del 14 de junio de 1983 durante un intento de secuestro. Le dispararon dos veces; una en la garganta y otra en el pecho, el disparo que lo mató. Tenía cincuenta años. De acuerdo con los testimonios de nuestros vecinos y de los trabajadores de Guarachas, el crimen fue cometido por cerca de doce hombres del llamado Frente 36 de las FARC. Esa noche creímos que los sicarios habían secuestrado a mi hermana, pero para nuestro alivio descubrimos que una profesora la protegió por varias horas; la lealtad hacia mi padre la llevó a arriesgar su

propia vida. Santiago Permaneció varios días en estado crítico en el hospital; fue un milagro que hubiera sobrevivido. (Uribe, 2012: 26-30).

A partir de este momento se inició una guerra a vida y a muerte entre las familias Castaño Gil y Uribe Vélez en contra de las organizaciones guerrilleras asentadas en la región, pero cada uno de ellos tomó decisiones diferentes y movilizó capitales distintos, por medio de los cuales se enfrentaron a las organizaciones guerrillas.

Ambas acciones que terminaron con el asesinato de los padres de Álvaro Uribe Vélez y Carlos Castaño Gil, hicieron parte de una estrategia generalizada de las organizaciones guerrilleras que buscaban aumentar su capital económico, a través de la extorsión y el secuestro, para transformarlo en capital militar (ejércitos, armas) y sobre la base de ambos capitales lograr su objetivo político de sustituir el Estado vigente, es decir, que las guerrillas orientaron su acción hacia la transformación de su posición dentro del campo de poder estatal con el objetivo de llegar a dominarlo.

En este contexto, la guerra como manifestación de la dinámica y de las estrategias imperantes dentro del campo de poder se tornó en una fuerza muy poderosa que influyó en la acción de Álvaro Uribe y Carlos Castaño, puesto que, inicialmente, independientemente de su voluntad, se vieron abocados a participar en ella, debido a que el conflicto armado no sólo afectó a las élites estatales o a las guerrillas en sí misma, sino también a los bienes materiales y los valores culturales más apreciados por ellos, como lo son la tierra, la defensa de la familia y de la propiedad rural, así como el valor del patriotismo, los cuales se habían configurado históricamente como bienes y valores compartidos por la población terrateniente y ganadera, especialmente en una región de tradición colonizadora.

De esta manera, las relaciones de poder y de violencia llevadas a cabo en el enfrentamiento entre el Estado y las guerrillas comunistas afectaron directamente a ambos agentes, los cuales no sólo definieron a las guerrillas como su enemigo personal y familiar sino que además terminaron articulándose a las estrategias de los agentes dominantes del campo de poder estatal para enfrentar a las organizaciones subversivas.

Pero su elección no fue una elección completamente autónoma, puesto que si bien la guerra era una situación previa a su ingreso como agentes activos dentro del campo de poder, el conflicto que ello representaba terminó por permear sus percepciones, apreciaciones y acciones.

En síntesis, el conflicto armado desarrollado durante este periodo enfrentó, principalmente, a dos facciones de clase rurales del país, por un lado, a campesinos y obreros agroindustriales que luchaban por el acceso a tierras, la inclusión dentro del sistema político y la configuración de un Estado comunista, por otro lado, a terratenientes y ganaderos que promovían la defensa de la propiedad privada rural, se oponían a la reforma agraria y aprobaban la vigencia del Estado frente nacionalista.

### **Estrategias personales de lucha contra las guerrillas y su articulación con las estrategias de conservación de los agentes dominantes del campo de poder estatal.**

Después del asesinato de su padre, Carlos Castaño dejó de estudiar, tenía quince años y cursaba primero de bachillerato, desde ese momento su vida dio un giro radical, puesto que con su hermano Fidel y otros familiares iniciaron una venganza contra los asesinos de su padre.

¿De ahí que surge? Un odio pero con todo lo que uno puede odiar a un enemigo. Un odio que habría podido irse desvaneciendo, de no haber sido por la personalidad de Fidel, alguien tan recio, tan estricto en su comportamiento. Él dijo: “No señores. Esto no es así”. Y comenzamos a decir, vamos a pelear contra la guerrilla. No estudié más. Otros dos hermanos tampoco (Castro, 1996: 151-152).

Durante los primeros meses, los hermanos Castaño se dedicaron a investigar sobre los autores del secuestro y homicidio de Jesús Antonio Castaño, así fue como la captura de un guerrillero los conducía a otro, y poco a poco fueron descubriendo lo sucedido con su padre, la información acumulada les permitió capturar y asesinar a la mayoría de los perpetradores del asesinato.

Describe Carlos Castaño, en una especie de paciente y detallada catarsis, en medio de una de las entrevistas brindadas a Mauricio Aranguren, que el primer guerrillero que encontraron fue Conrado Ramírez, pero luego ubicaron al negro Clemente, Miguel



Gonzales, Gilberto Gallego, entre otros, quienes fueron asesinados. El homicidio de Conrado Ramírez ilustra esos primeros momentos de sed de venganza y de toma de la justicia por sus propias manos.

Un día identificamos plenamente a un guerrillero de nombre Conrado Ramírez, lo identificamos como el tipo que fue por el viejo Castaño al Hundidor. Nosotros lo vimos en un bar de Segovia y corrimos hasta el Ejército, hablamos con un capitán que estaba de comandante de la base. Él fue y lo detuvo. Pero Conrado Ramírez salió libre al día siguiente por la tarde porque a un trabajador de nuestra finca le dio temor decir “Sí, yo lo vi. Es él”. No hubo pruebas. Lo soltaron.

Entonces nosotros decíamos esa tarde: ¿Qué es la justicia? ¿Cómo funciona la justicia? Y cómo no la encontramos, Fidel dijo simplemente: “A este hombre ¡hay que matarlo!”. Recuerdo que lo dijo así con esa misma expresión. Y, efectivamente, el hombre se murió al día siguiente. Fidel personalmente lo esperó en la puerta de residencias Fujiyama, y se murió Conrado Ramírez. Créame que yo entendí que eso era justo. Y consideré que estaba en todo mi derecho. Hoy sé que eso es un asesinato<sup>32</sup> (Castro, 1996: 152-152).

Con los quince años que tenía en ese momento, Carlos Castaño no tardó mucho tiempo en encontrarse frente a frente con Idelfonso, el hermano de uno de los guerrilleros que secuestró a su padre, en ese instante la decisión de asesinarlo o no se convertía en su propia toma de conciencia sobre ser apto o no para la guerra que iniciaba.

Yo había presenciado ejecuciones, pero no me había involucrado directamente como ejecutor. Además, Fidel no quería que me metiera en nada de eso... Y a decir verdad, a mí no se me había ocurrido empuñar un arma para hacer una acción militar. Pero ese día no hubo forma de esperar. Me fui armado con un revólver Colt 32, largo, de cinco tiros. Mi primera intención no era ejecutarlo; quería espialo. Pasaba por el frente de la casa y justo en ese momento el tipo abrió la puerta y salió a la acera. Yo estaba en la mitad de la calle, en todo el frente de la puerta cuando el guerrillero me miró y, de inmediato, me reconoció. Él sabía que los Castaño los buscábamos.

Entonces gritó: ¡Mija, el revólver! Mi reacción fue inmediata. Saqué el revólver y le disparé, fallé y al ver que no había acertado, pensé: “Este hijueputa me mata de aquí para abajo”. Idelfonso entró nuevamente a la casa por el extenso y oscuro corredor que conducía a la sala, y yo ya iba en la puerta corriendo tras él. Cuando lo alcancé en el solar de la casa, estaba agachado sacando una rula. Lo del revólver era mentira. Recuerdo, como si fuera hoy, lo que le grité: “No creas que me vas a matar a traición y amarrado como a mi papá, hijueputa”.

---

<sup>32</sup> Esta acción no sólo es un reflejo de una situación de venganza personal, sino también la de ausencia y efectividad de las instituciones del Estado como garantes de la administración de justicia y en la mediación de los conflictos. De igual manera refleja la incapacidad de las instituciones estatales para inculcar principios de visión del mundo social acordes con la justicia y la sociedad promovidas por el Estado mismo.

Con la rula en la mano, volteó y me miró aterrado. Yo le apunté a la cabeza y le metí un disparo en el cuello. El hombre dio dos pasos atrás y se recostó en la pared. Ahí le metí tres tiros más en la cabeza, los únicos que me quedaban. Era tanta la rabia, que le seguí martillando en seco con los ojos cerrados. Yo solo oía el tic, tic, tic.

Con los ojos aún cerrados, di la vuelta para salir... Corrí, corrí y corrí sin parar. Pasé por las últimas casa del pueblo como un caballo desbocado. Trataba de cansar el cuerpo para descansar el alma. Lejos del pueblo, paré y me senté sin saliva al borde de la trocha; en medio de una oscura noche sin luna. La ausencia de saliva no era producto del cansancio, era del terror que me produjo mirar a ese hombre. Cuando lo vi, no sé por qué pensé que así había quedado mi padre (Aranguren, 2001: 70).

Desde ese momento Carlos Castaño ya había pasado la prueba necesaria para ser un hombre de guerra, él y sus hermanos tenían la habilidad para vincularse a un cuerpo armado, sus habitus guerreros estaban siendo puestos en práctica y no tardó mucho en irse desarrollando la creencia de que su lucha personal los trascendía, que el asesinar a los guerrilleros era algo “justo” y que debían hacerlo por un “interés” general, fundamento para crear una organización con cohesión interna, como fueron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

Durante el primer año fuimos una organización de espíritu exclusivamente vengativo, y cuando ya habíamos ejecutado a la mayor parte de los asesinos de mi padre, comenzamos a ser justicieros. La venganza como tal no conduce a nada. Pretendíamos también hacer justicia, lo que siempre ha faltado. No queríamos ver a otras familias sufrir la tragedia que padecimos con nuestro padre. Nos enfrentamos a la guerrilla a muerte. Decidimos proteger a la familia cercana: primos y tíos; comenzamos a preguntarnos ¿qué le puede pasar al papá de este amigo o de este otro que nos ha ayudado tanto? Descubrimos que existía un grupo de personas que defender; encontramos una causa (Aranguren, 2001: 65).

Sin ser completamente conscientes de ello, las estrategias de venganza familiar de los Castaño Gil se articularon directamente con las luchas que se presentaban en el campo de poder estatal desde los años sesenta entre las élites dominantes de este campo y las guerrillas comunistas, por ello rápidamente encontraron que sus estrategias particulares de venganza se articulaban a la política de manejo coactivo del orden público liderada por las Fuerzas Militares, en un contexto de Guerra Fría, las cuales promovían el involucramiento de civiles en la lucha contrainsurgente.

En este sentido, Carlos Castaño y sus hermanos se integraron en las luchas propias del campo militar, es decir, a la guerra librada a punta de fusiles contra las guerrillas y que se orientaba a defender el status quo de la élite dominante del campo de poder estatal.

Por su parte, Álvaro Uribe Vélez había iniciado su carrera política desde la década de los setenta, primero con su participación en las juventudes del Partido Liberal y el activismo político realizado en la Universidad de Antioquia, luego tuvo su primera elección a un cargo público en 1974 como Concejal del Municipio de Salgar y en 1982 fue Alcalde de Medellín, designado por el presidente Belisario Betancur. En el momento en que la guerrilla de las FARC asesinó a su padre, Álvaro Uribe ya era un agente activo dentro del campo político colombiano.

En 1983, cuando mi padre fue asesinado, yo tenía treinta años. Comenzaba a ascender en la vida pública: había desempeñado ya varios cargos, entre ellos el de la alcaldía de Medellín. Una vez quedó atrás el dolor inicial por el asesinato de mi padre, acepté el nombramiento del presidente Belisario Betancur para formar parte de una comisión de paz en Antioquia... En los años siguientes hablé lo menos posible del asesinato de mi padre. Fui elegido concejal y senador, llegué a gobernador de Antioquia y luego a presidente de Colombia, y muy rara vez mencioné a mi padre en discursos o reuniones (Uribe, 2012: 32).

Desde su posición dentro del campo político inicialmente buscó reforzar el papel de los militares en la lucha contrainsurgente<sup>33</sup> y afirmó que “lo que ha hecho mi familia toda la vida en problemas de orden público es acudir a la Fuerza Pública” (Uribe, 2012).

Durante las exequias, Álvaro Uribe declaró a la prensa que el Ejército precisaba de más medios para ganarle la partida a las diversas guerrillas entonces activas en su desafío al Estado, la mayoría de las cuales profesaban ideologías de extrema izquierda (Barcelona Centre For International Affairs, 2008: 3).

Después del asesinato de su padre Álvaro Uribe comenzó a desarrollar su concepción de la seguridad como un problema de interés superior y para ello buscó transformar su tragedia personal en un problema de interés nacional, la seguridad se convirtió así en su causa y la desarrolló como un proyecto político desde los años ochenta.

Primero lo hizo como Alcalde de Medellín: “nuestro compromiso con los temas de seguridad empezó mucho antes de la muerte de mi padre. Cuando me desempeñé como alcalde de Medellín comenzamos un programa llamado Metroseguridad, mediante el cual se implementaba y recolectaba un impuesto especial para financiar las fuerzas de

---

<sup>33</sup> Desde comienzos de los años ochenta Álvaro Uribe y su familia han tenido serias denuncias de colaboración con el narcotráfico, especialmente con el Cartel de Medellín y de financiamiento directo a grupos paramilitares que surgieron alrededor de sus haciendas La Carolina y Guacharacas en el departamento de Antioquia. Este tema será abordado en un capítulo más adelante.

seguridad” (Uribe, 2012: 33). Luego como Gobernador de Antioquia promovió la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privadas, Convivir:

Decidí, finalmente, que era urgente una ayuda adicional para luchar contra la violencia. Muy a mi pesar y frustración constante, el Ejército y la Policía no tenían armas y personal para contrarrestar los recursos cada vez mayores –provenientes de la cocaína- de los narcoterroristas... Por otra parte, estaba fuera de mi control asignar más recursos a los militares, y las Convivir podían ofrecernos un marco para que la población civil desempeñara un papel activo en la seguridad general, mediante el suministro de información. Siempre he creído que en un país con las dificultades geográficas y sociales de Colombia, la seguridad no sería posible si era responsabilidad exclusiva de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y que todos los ciudadanos tienen la obligación de ayudar a garantizar la permanencia del Estado de Derecho (Uribe, 2012: 101-102).

Finalmente como candidato y presidente de la república promovió un discurso sobre la seguridad democrática.

La seguridad no se alcanza sólo con los esfuerzos de la Fuerza Pública. Este va a ser un esfuerzo de todo el Estado, de todos los colombianos. Una estructura estatal fuerte, apoyada en la solidaridad ciudadana, garantiza el imperio de la ley y el respeto de los derechos y libertades.

El imperio de la ley es también garantía de desarrollo y prosperidad económica. Cada vez que hay un secuestro se afecta profundamente la confianza de los inversionistas, se dispersan los capitales y se pierden fuentes de empleo. Cuando la Seguridad Democrática desarrolla una política para eliminar el secuestro, está defendiendo al pueblo y las garantías sociales básicas (Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, 2003: 7).

Por lo tanto, Álvaro Uribe consideraba que las Fuerzas Armadas debían contar con el apoyo incondicional de los partidos políticos y de los gremios económicos, lo que reforzaba los acuerdos del Frente Nacional, fundamento de su posición dominante en el campo de poder estatal. Además aseguraba que la vinculación de los civiles a la lucha contrainsurgente era benéfica para el desarrollo económico y social del país, con lo cual respaldaba las estrategia de lucha contrainsurgente llevadas a cabo por las Fuerzas Militares del país desde mediados del siglo XX.

De esta manera, la propuesta política de Uribe Vélez se articulaba con la estrategia desarrollada por los agentes dominantes del campo de poder estatal que promovía el desarrollo de un Estado capitalista, administrado por los partidos políticos tradicionales y defendido por las Fuerzas Militares.

Finalmente y en conclusión: si bien la lucha librada por los hermanos Castaño Gil contra las guerrillas comunistas fue a través de fusiles, municiones, tácticas contrainsurgentes (capital militar) y bajo la dinámica presentada dentro del campo militar desde mediados del siglo XX, así como la guerra librada por Álvaro Uribe fue, por su parte, a través de la búsqueda de legitimación política de la lucha contrainsurgente (discurso político) y de acceso a órganos de poder dentro del campo político (alcaldía, senado, gobernación, presidencia) para promover desde ellos el fortalecimiento de la alianza entre las élites dominantes del país en la guerra contra las guerrillas, con los cual ambos se articularon a las estrategias de los agentes dominantes del campo de poder estatal.

De igual manera es importante resaltar que la diferencia entre las estrategias y trayectorias de los agentes Álvaro Uribe y Carlos Castaño no son sólo la expresión de sus disposiciones subjetivas hacia la guerra y/o hacia la política, sino también de sus posibilidades objetivas, las cuales determinaron las elecciones que podían tomar en medio del conflicto armado. En este sentido, el origen social y familiar, así como los saberes y capitales heredados, se configuraron como condicionantes sociales que influyeron en la determinación de Carlos Castaño para iniciar un proyecto paramilitar y de Álvaro Uribe para desarrollar una carrera política.

Teniendo en cuenta lo anterior, en los siguientes capítulos profundizaremos sobre las distintas estrategias, relaciones de poder, apuestas y capitales acumulados por parte de Álvaro Uribe en el campo político regional, durante la década de los ochenta, con el objetivo de entender cómo se desarrolló y en qué consiste su proyecto político. Posteriormente se analizará el campo militar en Antioquia y el desarrollo del proyecto paramilitar de Carlos Castaño en este mismo periodo. Por último se reflexionará en qué medida ambos fenómenos se relacionaron, así como el impacto que tuvieron en las relaciones fuerzas, las posiciones y la dinámica del campo de poder regional, durante los años ochenta, la lucha entre estos nuevos agentes y las guerrillas.

## SEGUNDA PARTE

### REPRODUCCIÓN SOCIAL Y AGENCIA LA CONFLUENCIA DE LO POLÍTICO Y LO MILITAR EN LAS BIOGRAFÍAS RELACIONALES

#### Introducción

Después del estudio de la dinámica de los campos político, militar y de poder en Colombia durante el periodo del Frente Nacional y del análisis del origen social de Álvaro Uribe Vélez y Carlos Castaño Gil, a continuación se investigará su trayectoria como agentes activos dentro del campo político y del campo militar, respectivamente, durante la década de los ochenta del siglo XX.

En este sentido, sobre la base del entendimiento de las estrategias, habilidades y capitales desplegados por estos agentes, la reflexión se orientará a develar también los conflictos, relaciones de poder, antagonismos, alianzas y dinámicas de los campos donde ellos fueron activos. Por lo tanto, el estudio de las trayectorias de los agentes se configura como un valioso medio para la comprensión tanto de los campos, los capitales y las dinámicas de lucha, así como de las estrategias de los agentes para conservar o subvertir su posición y el orden dominante o dominado dentro de los campos donde se hallan inmersos.

Los agentes sociales no son «partículas» mecánicamente atraídos y empujados por fuerzas exteriores. Son más bien portadores de capital y, según su trayectoria y la posición que ocupan en el campo en virtud de su dotación en capital (volumen y estructura), propenden a orientarse activamente, ya sea hacia la conservación de la distribución del capital o hacia la subversión de dicha distribución (Bourdieu; Wacquant, 1995: 72).

Por medio de esta localización de las trayectorias personales en el espacio social de las relaciones históricas, de conflicto y de luchas, se podrá hacer comprensible no sólo las estructuras sociales que los constriñe, presiona y oprime, sino también su capacidad de agencia y transformación.

La estructura del campo es un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones implicados en la lucha, o si se prefiere así, de la distribución del capital

específico que, acumulado en el curso de las luchas anteriores, orienta las estrategias ulteriores... Los que, en un estado determinado de las relaciones de fuerza, monopolizan, más o menos completamente, el capital específico, fundamento del poder o de la autoridad específica característica de un campo, se inclinan por las estrategias de conservación, tienden a la defensa de la ortodoxia, mientras que los menos provistos de capital, que son también frecuentemente los recién llegados y, por tanto, generalmente, los más jóvenes, se inclinan por las estrategias de subversión, las de la herejía (Bourdieu, 2003: 113 -114).

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos teórico metodológicos, en el capítulo III analizaremos la trayectoria de Álvaro Uribe en el campo político, posteriormente en el capítulo IV la trayectoria de Carlos Castaño en el campo militar, finalmente en el capítulo V estudiaremos la convergencia de ambos agentes dentro del campo de poder regional.

En el trabajo empírico el determinar qué es el campo, cuales son los límites, y determinar qué especies de capital actúan en él, dentro de qué límites ejerce sus efectos, etc., es una misma cosa. Se ve que las nociones de capital y de campo son estrechamente interdependientes. Es en cada momento el estado de las relaciones de fuerza entre los agentes lo que define la estructura del campo. (Bourdieu; Wacquant, 1995: 65).

En este sentido, recordemos que en el primer capítulo de la presente investigación se argumentó que los acuerdos del Frente Nacional fueron esenciales para el desarrollo de tres campos estrechamente relacionados: el campo político orientado hacia la lucha por el monopolio del aparato burocrático del Estado, el erario y la administración pública, por su parte, el campo militar se orientó a la lucha por el monopolio de la violencia física y el control territorial, finalmente, el campo de poder se configuró como un espacio social de relaciones de fuerza y de lucha orientadas hacia la obtención del monopolio de la violencia física y la dominación política, con el objetivo de inculcar o imponer el orden estatal dominante en todo el territorio del país.

Pero es importante reconocer que los conceptos de campo político, campo militar y campo de poder hacen referencia a un conjunto de luchas y de relaciones de poder tan estrechamente relacionadas entre sí que, en la práctica, la separación entre las luchas políticas, las luchas militares o las luchas por el dominio del territorio y del Estado pueden ser muy porosas, casi ficticias, lo que dificulta reconocer los límites de dichos campos, pero lo que nos interesa es utilizar estos conceptos como medios analíticos para entender tanto las disposiciones, habilidades, capitales y estrategias que los agentes

utilizan para participar en cada uno de ellos, así como la manera en que estos campos influyen en los agente, lo que nos ayudará a conocer mejor tanto sus articulaciones como sus fronteras.

Los límites del campo se formula siempre dentro del campo mismo y, en consecuencia, no admite una respuesta a priori... De este modo, las fronteras del campo no pueden determinarse sino por una investigación empírica. Toman sólo raramente la forma de fronteras jurídicas, incluso si los campos conllevan «barreras a la entrada», tácitas o institucionalizadas (Bourdieu; Wacquant, 1995:67).

En este sentido, las biografías relacionales de Álvaro Uribe y Carlos Castaño nos ayudarán a comprender mejor estos campos, sus fronteras, relaciones y diferencias, así como las disposiciones, objetos de luchas y tipos de agentes que participan en ellos.



## **CAPÍTULO III**

### **TRAYECTORIA DE UN POLÍTICO REGIONAL EN ASCENSO**

#### **Introducción**

A continuación estudiaremos la trayectoria de Álvaro Uribe Vélez dentro del campo político regional durante la década de los ochenta del siglo XX, con el objetivo de entender las relaciones de poder, de alianza y de antagonismo desarrolladas dentro del campo, así como las estrategias, habilidades y capitales desplegados por este agente, lo cual nos permitirá comprender los fundamentos de su proyecto político.

La noción de campo relativamente autónomo obliga a plantear la cuestión del origen de las acciones políticas y obliga a decir que si deseamos comprender lo que hace un político, debemos por su puesto averiguar quién votó por él, cuál es su base electoral, su origen social y no debemos olvidar buscar la posición que ocupa en el microcosmos y que explica una gran parte de lo que hace. Está claro que se trata de casos en los que el principio de la toma de posición está ligado a la ocupación de una posición en un espacio de posiciones que es precisamente el campo político (Bourdieu, 2001: 15).

En este objetivo será fundamental el análisis de la socialización política, es decir, de la transmisión de los conocimientos que le permiten al agente comportarse adecuadamente dentro del campo político, aprender sus reglas tácitas y la manera de participar en la confrontación política.

El político local, de base, puede ser “natural” en los pequeños pueblos o en las pequeñas ciudades; puede conformarse con una competencia política elemental en la medida en que se trata de conocer bien a sus ciudadanos y de ser “bien visto por ellos”. Apenas se pasa al nivel del Consejo General, de una asamblea departamental, las adhesiones a un partido comienzan a jugar un papel y los antiguos socializan a los nuevos y les enseñan a no reaccionar brutalmente con una simple política espontánea, que no es una política en el sentido de campo político. Se debe aprender el lenguaje estereotipado, la tetras, las relaciones de fuerza, cómo tratar con los adversarios. Esta cultura específica debe ser dominada de manera práctica... Este sentido del juego político es lo que hace que se pueda negociar un pacto, que se guarde silencio sobre algo que habitualmente se diría, que se sepa proteger de manera discreta a los amigos, que se sepa hablar a los periodistas (Bourdieu, 2002: 15-16).

Por lo tanto, el campo político es un microcosmos social, relativamente autónomo, dentro del cual los partidos y los políticos rivalizan para obtener el monopolio del capital político.

Hablar de campo político es decir que el campo político es un microcosmos, un pequeño mundo social relativamente autónomo en el interior de un gran mundo social (campo de poder). Allí encontramos un cúmulo de propiedades, relaciones, acciones y procesos que encontramos en el mundo global; pero estos procesos, estos fenómenos, tendrán aquí una forma particular (Bourdieu, 2001: 10).

En Colombia, particularmente el campo político se configuró como un espacio social de relaciones de poder y de luchas orientado hacia la obtención del monopolio del aparato burocrático del Estado, los recursos oficiales y la administración pública. Este campo también se configuró como el lugar de producción, reproducción y apuesta de una competencia específica, de un sentido propio del juego y de la habilidad política.

### **El campo político en Antioquia y la trayectoria política de Álvaro Uribe**

Álvaro Uribe Vélez tuvo un origen social vinculado con la participación política dentro del Partido Liberal, sus padres no sólo fueron liberales sino que también participaban activamente en política, su madre como candidata al concejo del municipio de Salgar, su tía como congresista conservadora y su padre patrocinando campañas políticas, esto le generó un sentimiento de adhesión a la participación electoral y la competencia política.

Este capital político heredado de su origen social le permitió ir construyendo redes dentro del Partido Liberal, sobre las cuales fue ascendiendo desde la participación activa dentro de las juventudes liberales hasta llegar a tener una reconocida carrera política en las ramas del poder ejecutivo y legislativo del Estado, tanto a nivel departamental como nacional.

Inicialmente, para poder participar en la contienda política colombiana, Álvaro Uribe se vinculó desde muy joven a uno de los dos partidos tradicionales dominantes del campo político, el Partido Liberal. La importancia de su integración a este partido radica en el dominio electoral e institucional que los dos movimientos políticos habían conseguido tener durante todo el siglo XX.

En su estudio sobre Regionalización electoral entre 1930 y 1982, Patricia Pinzón de Lewin estableció que en Colombia existía fuerte lealtad partidista y que la tradición política era de origen local. Concluyó que para 1982 el 80% de los municipios mantenían un comportamiento tradicional de apego a un partido mayoritario, es decir



Durante este periodo, en el Directorio Liberal de Antioquia, fueron importantes las carreras políticas de Bernardo Guerra Serna, William Jaramillo, Hernando Agudelo Villa y Federico Estrada Vélez. De igual forma, en el Directorio Conservador de Antioquia sobresalieron como importantes dirigentes regionales Álvaro Villegas Moreno, Ignacio Vélez Escobar y Javier Emilio Valderrama<sup>36</sup> (Franco, 2006).

En conjunto, estos dirigentes lograron construir extensas carreras políticas que se extendieron más de treinta años y fueron quienes lideraron las diferentes fracciones dentro de los partidos a nivel regional. Los principales dirigentes emergentes en este periodo fueron Bernardo Guerra Serna en el Partido Liberal y Javier Emilio Valderrama en el Partido Conservador.

Esa generación es la de los hijos de los campesinos ricos de los pueblos pobres y apartados, que migraron a estudiar al “centro” urbano donde se concentraba la dinámica política, las instituciones universitarias y la actividad industrial, y con todo ello las posibilidades de una carrera política, de ascenso e inserción en el mundo del trabajo (Franco, 2006: 191-192).

El surgimiento de estos líderes políticos emergentes dentro del Partido Liberal y del Partido Conservador en Antioquia se constituyó en una forma de integración de dirigentes políticos provenientes de las juventudes de cada partido o de los militantes activos de los municipios pequeños y pobres del departamento, lo que significaba para ellos el desarrollo de una carrera política, acceder a fuentes de recursos económicos y finalmente tener un ascenso social.

No se trató de un asalto o irrupción repentina, porque estos provincianos eran parte de la base de la estructura partidaria. Ellos tenían como antecedente su articulación a los directorios municipales de los partidos o a los comandos de juventudes de los mismos. Su ascenso debe entenderse, por consiguiente, como integración a los sitios de poder en la esfera de la política regional, dentro de los cuales se cuentan: en primer lugar, los directorios departamentales de los partidos; y en segundo lugar, los cargos de representación en las corporaciones públicas (Concejo, Asamblea, Cámara y Senado) o las instancias de gobierno (alcaldía y gobernación) y los cargos directivos en las entidades descentralizadas o empresas del Estado (Franco, 2006: 211).

---

<sup>36</sup> Sobre la base de las redes de poder y las facciones políticas construidas por parte de estos agentes emergentes de los años sesenta ingresaron posteriormente jóvenes dirigentes políticos como Álvaro Uribe, Fabio Valencia Cossio y Luis Alfredo Ramos.

La configuración de sus propias redes de poder político-clientelistas les permitió a los dirigentes emergentes integrarse a las estructuras de poder partidistas y convertirse así en la base de la configuración de un campo político clientelista como fundamento de la cohesión política.

El nuevo líder político viene de abajo, casi siempre de sectores sociales sin mayores recursos económicos. Es un claro producto del sistema político, de los mecanismos clientelistas que le han dado al líder los medios para escalar posiciones, generalmente en concordancia con su capacidad de interpretar y utilizar la racionalidad del sistema. Más aún: el moderno cacique es parte substancial del sistema clientelista, ya que, debido a la reciente configuración de éste, fue uno de sus creadores e innovadores. En la medida en que tiene éxito dentro del sistema, es decir, que construye una red de relaciones articulada horizontal y verticalmente, sobre la base del intercambio de favores con los recursos oficiales, con el fin de reproducir un capital electoral, el moderno líder asciende en status social. Hoy en día, la política es factor de frecuente movilidad social para los líderes de base, lo cual raramente acontecía en el pasado... Esta forma de profesionalismo, con proyección hacia el plano nacional, fue posible gracias al deterioro de las antiguas autoridades supremas del bipartidismo. Fue el ascenso del regionalismo bipartidista, como sustituto del viejo y elitista liderazgo nacional. (Leal, 1989: 12).

Estos dirigentes emergentes, por lo tanto, no rompieron con las estructuras de sus partidos políticos, sino que, por el contrario, se integraron a ellas y fueron importantes en la medida en que lograron atraer un significativo caudal electoral a los partidos políticos tradicionales.

Fue específicamente en medio de esta dinámica del campo político, que se abrió la posibilidad de entrada de dirigentes emergentes como Bernardo Guerra Serna y Javier Emilio Valderrama durante el Frente Nacional, así como posteriormente, desde mediados de los años setenta, el ingreso de una nueva generación de dirigentes políticos en el Partido Liberal y en el Partido Conservador, entre ellos Álvaro Uribe Vélez, quiénes consolidaron sus carreras políticas en estos movimientos tradicionales.

Aún durante la fase de predominio político de aquellos dirigentes, se fue formando una nueva generación, venida de los sectores pudientes de los pueblos y de los barrios periféricos de la ciudad o de sectores profesionales en ascenso social –gracias a su inserción en la educación universitaria–. Ésta es encarnada por personajes que actuaron como sublíderes de las facciones formadas a lo largo de los setenta y dentro de las cuales se cuentan Fabio Valencia Cossio, Luis Alfredo Ramos, Álvaro Uribe Vélez, entre otros (Franco, 2006: 197-198).

En el ingreso de Álvaro Uribe Vélez al campo político como agente activo influyeron, entre otros elementos, su militancia en las juventudes del Partido Liberal, la participación activa en el Instituto de Estudios Liberales de Medellín, su activismo estudiantil en la Universidad de Antioquia y su liderazgo carismático.

Los primeros cargos públicos los realizó como representante del Partido Liberal de Antioquia en el nivel nacional, lo que le permitió crear una importante red de relaciones sociopolíticas con las élites del campo de poder estatal, primero como secretario general del Ministerio de Trabajo en 1977, nombrado por el presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978), posteriormente, en 1980 fue designado director del Departamento de Aeronáutica Civil<sup>37</sup> por parte de Julio Cesar Turbay (1978-1982) y en 1982 Belisario Betancur (1982-1986) lo posesionó como alcalde de Medellín, cargo en el que duró cinco meses.

Según los periodistas Joseph Contreras y Fernando Garavito, el ingreso de Álvaro Uribe a la Alcaldía se debió a que:

En la lista de los cuadros que se subastaron en Medellín para financiar la campaña (presidencial) de Belisario Betancur, figura que Alberto Uribe Sierra compró una de las obras por veinte millones de pesos. Veinte millones de pesos de 1982 equivalen a 310 mil dólares de 2002. Pero el comprador sabía con precisión que adquiriría otros bienes intangibles. Y he ahí que el nuevo presidente, una vez posesionado, nombró a su hijo Álvaro como Alcalde de Medellín (Contreras y Garavito, 2002: 38).

Pero la trayectoria de Álvaro Uribe en la Alcaldía de Medellín fue muy corta debido a escándalos relacionados con el narcotráfico.

Esta primera incursión dentro del campo político reflejó la confianza de los dirigentes liberales nacionales y antioqueños en Álvaro Uribe Vélez, con quienes continuó desarrollando su carrera política. En este sentido, el acceso a estos primeros cargos fue sinónimo de representación política y su elección no se realizó por mecanismos meritocráticos, lo que reproducía el acuerdo bipartidista de repartición milimétrica del aparato burocrático del Estado entre liberales y conservadores.

---

<sup>37</sup> Después del asesinato del director de la Aerocivil en 1980, Fernando Uribe Senior (ex alcalde y concejal de Medellín), por parte del narcotráfico como represalia por el cierre de varias de sus pistas, el presidente Julio Cesar Turbay, nombró en su reemplazo al joven liberal Álvaro Uribe Vélez del grupo de Bernardo Guerra en Antioquia.

Álvaro Uribe Vélez consolidó su posición en el campo político regional con el apoyo del “Barón electoral” Bernardo Guerra Serna, coordinador del Directorio Liberal de Antioquia, y de los políticos Hernando Agudelo Villa y Diego Calle Restrepo, con quienes participó en el movimiento Antioquia Liberal en Marcha, una facción dentro de este partido político.

Yo hacía política con Hernando Agudelo Villa y con Diego Calle Restrepo: Antioquia Liberal en Marcha. Ellos hicieron la unión con el Directorio Liberal de Antioquia, que presidía el doctor Bernardo Guerra, y el doctor Guerra me puso a encabezar un Concejo de Medellín (en 1984). Después, yo abrí mi propio directorio, el Sector Democrático, con el cual llegué al Senado de la República (1986). Estuve poco allá. Con Bernardo Guerra tuve diferencias sobre la manera de hacer política, pero me parece un hombre honorable (El Tiempo, abril 21 de 2002).

La prensa regional describe el inicio de Álvaro Uribe en el campo político de la siguiente manera:

Su ingreso definitivo a las grandes ligas de la política lo hizo en 1983, al unirse a las filas del Directorio Liberal de Antioquia, bajo el mando del cacique electoral Bernardo Guerra Serna, quien lo puso de primero en una lista al Concejo de Medellín para el periodo 1984-1986. Pero discrepancias con el barón electoral lo llevaron a él y a William Vélez Mesa, a armar una lista disidente que lo llevó de nuevo a ocupar un escaño en el Concejo de la ciudad y a propinarle un duro golpe a quien era considerado en esa época un gran barón electoral (Series El Colombiano: Uribe, primero la autoridad).

Bernardo Guerra Serna ingresó al campo político regional durante el Frente Nacional, el sistema político clientelista le permitió convertirse en el “barón electoral” más importante del Partido Liberal, llegando a dirigir el Directorio Liberal de Antioquia durante los años setenta y noventa del siglo XX.

Bernardo Guerra Serna fue probablemente el mayor de los caciques electorales en los últimos treinta años. En 1974, año en el cual inició la construcción de su feudo electoral en Antioquia, obtuvo 230 mil votos, lo cual se tradujo en 4 senadores, 9 representantes y 12 diputados. Entre 1988 y 1990 su poder alcanzó niveles inusitados: en la primera elección popular de alcaldes obtuvo 55 de las 120 alcaldías en disputa en todo el departamento, por lo cual el gobernador le entregó el manejo de 8 de las 10 secretarías del departamento. En 1990, su lista para el Senado alcanzó 190.000 votos. “Llegue a manejar 25 mil puestos en el departamento”, subraya Guerra Serna con fiereza en una entrevista reveladora (El Tiempo, 1998: 16A). En 1992 comenzó el declive: apenas obtuvo 28.000 votos e ingresó por residuo y raspando; en 1998 no pudo ingresar ni por residuo. El rey había muerto (Pizarro, 2002: 12).

Por otra parte, debido a la hegemonía de Bernardo Guerra en el Directorio Liberal de Antioquia, se crearon facciones que reflejaban un descontento con el manejo directivo del partido, así como del dominio que tenía Guerra Serna en la conformación de listas electorales y la designación de cargos burocráticos, en este contexto surgieron el Movimiento Izquierda Popular Liberal liderado por William Jaramillo y Antioquia Liberal en Marcha por Hernando Agudelo Villa.

La faccionalización también fue producto de la inconformidad con el modelo monocrático de conducción política del Directorio Liberal de Antioquia, en el que una jefatura llegó a concentrar la potestad de definir las listas de las candidaturas y adquirió gran prerrogativa en la negociación de la designación de los gobernantes y la alta burocracia. A este respecto, la exigencia formulada por el movimiento Antioquia Liberal en Marcha al momento de su surgimiento era la de aplicar el principio de colegialidad, que le garantizara a los notables una participación paritaria en el Directorio; sin embargo, el interés del guerrismo por la preservación del poder obtenido, negó dicha posibilidad y condujo a que las otras facciones liberales adoptaran estrategias de coaligación en contra del mando monocrático (Franco, 2006: 248 - 249).

La facción política Antioquia Liberal en Marcha estuvo liderada por Hernando Agudelo Villa, la cual agrupaba a agentes tradicionales del campo desplazados de la conducción del Directorio Liberal de Antioquia como fueron Diego Calle Restrepo, Jorge Valencia Jaramillo, Germán Vélez Gutiérrez, entre otros. Este movimiento y su dirigente se caracterizaron por la cercanía a la Dirección Nacional Liberal, lo que favoreció su competencia con el Directorio Liberal de Antioquia, coordinado por Bernardo Guerra.

Un personaje como Hernando Agudelo Villa logró lugares de privilegio en las listas liberales para varios periodos, aun en contra de los intereses de la directiva regional, le bastaba el guiño de la Dirección Nacional Liberal (Arenas y Ospina, 2006: 141).

La relación de Álvaro Uribe con Hernando Agudelo Villa y Diego Calle Restrepo se remontaba a su juventud cuando asistía a los encuentros liberales en el municipio de La Ceja en el suroriente antioqueño, que desde el año 1966 habían sido organizados por este político antioqueño. Es relevante la trayectoria política de Agudelo Villa y Calle Restrepo por su influencia en la política económica del país, puesto que ellos fueron: Ministros de Hacienda, de Desarrollo, dirigentes de Planeación Nacional, hicieron parte de gremios económicos como la Federación Nacional de Comerciantes y representaron al país en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, lo



que refleja la temprana socialización de Álvaro Uribe en los postulados del liberalismo económico, así como en la implementación del modelo económico capitalista en el país.

En el periodo 1984 – 1986 Álvaro Uribe fue Concejal de Medellín y recibió el apoyo político tanto del Directorio Liberal de Antioquia como de Antioquia liberal en Marcha. Pero para las elecciones al Congreso de la República de 1986 se presentó por medio de su propia facción política, el Sector Democrático, creado ese mismo año por su primo Mario Uribe Escobar y por William Vélez Mesa.

Tabla No 1  
Trayectoria política de Álvaro Uribe Vélez

<b>ÁLVARO URIBE VÉLEZ</b>	<b>PERIODO</b>	<b>EDAD AL INICIO DEL CARGO</b>
Concejal Municipio de Salgar	1974	22 años
Jefe de Bienes Empresas Públicas de Medellín	1976	24 años
Secretario General Ministerio de Trabajo	1977-1978 <sup>38</sup>	25 años
Director Aeronáutica Civil	1980-1982	28 años
Alcalde de Medellín	1982-1983	30 años
Concejal de Medellín	1984-1986	31 años
Senador de la República	1986-1990	34 años
Senador de la República (2º Periodo)	1990-1994	38 años
Gobernador de Antioquia	1995-1997	43 años
Presidente de la República	2002-2006	50 años
Presidente de la República (2º Periodo)	2006-2010	54 años

Fuente: elaboración propia con datos de Uribe, 2002 y Uribe 2012.

Por medio de esta facción dentro del Partido Liberal en Antioquia, Álvaro Uribe fue Senador de la República y su primo Mario Uribe Escobar llegó a la Cámara de Representantes en dos legislaturas consecutivas (1986-1990; 1990-1994), desde ese momento consolidaron su plataforma política en Antioquia, el Sector Democrático, con proyección a nivel nacional.

Después, cuando Uribe abrió tordo aparte en el liberalismo, tampoco rompió con la estructura del partido. Ha sido muy cercano a los ex presidentes Julio César Turbay Ayala y Alfonso López Michelsen. De concejal, en 1986 Uribe —aún desde su disidencia— pegó un salto del que pocos han logrado salir ilesos: fue elegido senador de la República sin haber pasado primero por la Cámara de Representantes. Su primo Mario Uribe resulto electo representante por el mismo movimiento. En esa competencia contra Guerra Serna, Uribe ganó de lejos. Es que Uribe Vélez es un competidor por excelencia. "Se ha aplicado toda su vida a ganar competencias", dice un contemporáneo suyo (Reportaje Semana: Un hombre complejo, mayo 26 de 2002).

<sup>38</sup> Este es el mismo año que se gradúa como abogado de la Universidad de Antioquia.

En este sentido, la trayectoria política de Álvaro Uribe en el campo político regional se fundamentó en el apoyo y creación de alianzas con políticos profesionales liberales con relevante peso regional (Bernardo Guerra) y nacional (Hernando Agudelo Villa, Diego Calle), así como de cercanos familiares y amigos (Mario Uribe, William Vélez) que aseguraban una lealtad a su proyecto político en consolidación.

Todo político profesional que logre colocarse en primera línea de los procesos regionales de acumulación de capital electoral, se materializa en una facción. De esta forma, cualquier decisión que implique movilización de recursos estatales, tiende a tener el adjetivo de un partido y la identidad de una facción y su respectivo jefe. Bajo este panorama, el normal usufructo colectivo o con fines sociales de los recursos del Estado queda en manos de las facciones políticas, en la medida en que se legitimen ante los gobiernos (central, departamental o municipal), de acuerdo con la cantidad de votos que obtengan y mantengan (Leal, 1989).

Tabla No 2

Red de relaciones políticas de Álvaro Uribe Vélez

NOMBRE	TRAYECTORIA POLÍTICA
<b>Bernardo Guerra Serna</b>	Diputado en la Asamblea Departamental (1960-1992; 1984-1990), Concejal de Medellín (1976-1978; 1982-1984), Dirigente del Directorio Liberal de Antioquia (1967-1998), Representante a la Cámara (1968-1978), Gobernador de Antioquia (1986) y Senador de la República (1978-1998). En 2010 recibió la Orden Nacional del Mérito por parte de Álvaro Uribe.
<b>Hernando Agudelo Villa</b>	Director Federación Nacional de Comerciantes (1947- 1958), Representante a la Cámara (1958; 1966) Ministro de hacienda (1958-1961), Ministro de Desarrollo Económico (1972-1973), Director del Banco Interamericano de Desarrollo en representación de Colombia, Venezuela y Chile, en 1962. Fundador de la facción Antioquia Liberal en Marcha y promotor de los Encuentros Liberales de la Ceja Antioquia. En 2003 recibió la Cruz de Boyacá por parte de Álvaro Uribe.
<b>Diego Calle Restrepo</b>	Ministro de Hacienda, Director Departamento Nacional de Planeación (1962-1966), Director Ejecutivo BID (1966-1970), Senador de la República, Gobernador de Antioquia (1970-1973), gerente EPM (1976-1985), miembro de la facción política Antioquia Liberal en Marcha.
<b>Mario Uribe Escobar</b>	Concejal del municipio de Andes entre 1976 y 1982, posteriormente fue diputado de Antioquia (1982-1986), Representante a la Cámara (1986-1994) y Senador de la República (1994-2007). Co-fundador de la facción liberal Sector Democrático en Antioquia. En el año 2008 la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento por el escándalo de la parapolítica y fue condenado a siete años y seis meses de cárcel por haber realizado alianzas con paramilitares.
<b>William Vélez Mesa</b>	Concejal de envigado, diputado de Antioquia, Representante a la Cámara. Co-fundador de la facción liberal Sector Democrático en Antioquia. Fue investigado en los años ochenta por presuntos vínculos con Pablo Escobar y dos décadas después por presunto apoyo a los paramilitares comandados por Salvatore Mancuso.

Fuente: elaboración propia con datos de Franco, 2006.

Durante su período como senador de la República Álvaro Uribe Vélez promovió la aprobación de leyes como la Reforma Pensional, la Reforma Laboral, y la Reforma a la Seguridad Social, lo que lo convirtió en uno de los legisladores más comprometidos con la implementación del modelo neoliberal en Colombia desde los años noventa del siglo XX.

Siendo senador en los 90 sacó adelante como ponente leyes espinosas como la 50, que acabó con la retroactividad de las cesantías para los trabajadores; la 100, que amplió la cobertura en salud con el concurso de entidades privadas, y creó los fondos privados de pensiones, y la 11 de 1988, que autorizó el ingreso subsidiado del servicio doméstico al Seguro Social. Su paternidad de la Ley 50 le ocasionó gran oposición entre los sindicatos durante su campaña a la gobernación. En la plaza pública se enfrentó a la multitud desafiante de militantes sindicales y él se defendió a puro verbo (Reportaje Semana: Un hombre complejo, mayo 26 de 2002).

La nueva generación de políticos emergentes en Antioquia, entre los que se encontraban Álvaro Uribe Vélez, Fabio Valencia Cossio y Luis Alfredo Ramos se adaptó de mejor manera a las reformas de apertura democrática de finales del siglo XX, como fueron la elección popular de alcaldes a partir de 1988, la elección popular de gobernadores desde 1992 y los mecanismos de participación de la Constitución Política de 1991<sup>39</sup>.

Además de la elección popular de alcaldes que se aprobó desde 1986, varias de las reformas de la Constitución de 1991 tuvieron por propósito explícito permitir la entrada de nuevos jugadores y espacios de competencia electoral, y reducir las fuentes de poder excluyente de las elites regionales y bipartidistas. Decisiones derivadas del proceso constituyente de 1991, como facilitar la creación de nuevos partidos políticos, posibilitar mayores garantías electorales -como el tarjetón y la financiación pública de campañas-, crear nuevos cargos de elección popular, como, por ejemplo, curules en Cámara para los antiguos territorios nacionales y las gobernaciones, y el cambio de la forma de elección del Senado, de una circunscripción regional a una nacional, tenían como objetivo abrir y democratizar el sistema político y dar mayores garantías para la competencia electoral (López, 2010: 41).

Estas nuevas reglas del juego político beneficiaron a esta generación de líderes políticos emergentes debido a que por medio de sus propias facciones políticas, como en el caso de Sector Democrático, crearon acuerdos con otras facciones dentro del Partido Liberal así como con facciones del Partido Conservador, lo cual les permitió conseguir desde los años noventa cargos de elección popular a nivel local y regional, por fuera de los

---

<sup>39</sup> La Constitución Política de 1991 a parte de consagrar mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referendo, la consulta popular o la revocatoria del mandato, también avaló la posibilidad de formar nuevos movimientos y partidos políticos diferentes al Liberal y al Conservador.

parámetros establecidos por los jefes políticos regionales imperantes desde el Frente Nacional, como era el caso de Bernardo Guerra en el Partido Liberal.

Comenzando la década de los noventa, la facción liberal dirigida por los primos Mario Uribe Escobar y Álvaro Uribe Vélez, denominada el Sector Democrático, se presentó a elecciones regionales por medio de la coalición Antioquia Unida, la cual no sólo reunía a militantes del partido liberal, sino que también a integrantes del partido conservador y de la izquierda democrática. Esta coalición no sólo era un reflejo de la transformación de las antiguas reglas de juego frentenacionalistas sino que fueron el soporte para la consolidación de líderes emergentes que habían entrado en competencia con los directorios departamentales de los partidos políticos tradicionales.

De esta coalición electoral, que evidenciaba el proceso de disolución de las tradicionales fronteras partidarias, hicieron parte en 1991 dos facciones del conservatismo (Coraje y Unionismo), organizaciones que venían de la izquierda (Esperanza Paz y Libertad, Alianza Democrática AD M-19), una facción del liberalismo (Liberales Independientes) y la organización política de los indígenas (Alianza Social Indígena). En 1994 se sumaron a dicha coalición otras facciones del conservatismo (villeguismo y progresismo conservador, Movimiento de Salvación Nacional), otros sectores de izquierda (la Unión Patriótica específicamente se adhirió a la candidatura de Sergio Naranjo a la alcaldía de Medellín que sólo al final respaldó dicha coalición), algunas facciones del liberalismo (Movimiento Todos por Caldas del Directorio Liberal Jaramillista, Cambio 2000, Movimiento Cívico Liberal y algunos sectores de adscripción subregional), entre otros (Franco, 2006: 256).

Bajo la coalición Antioquia Unida lograron elegir a Juan Gómez Martínez como Gobernador de Antioquia en 1991 y a Luis Alfredo Ramos como Alcalde de Medellín en 1992, pero en las elecciones de gobernador en 1994 Antioquia Unida apoyó la candidatura de Alfonso Núñez Lapeira, por ello el Sector Democrático realizó una nueva alianza con la facción del conservatismo Nueva Fuerza Democrática para impulsar la candidatura de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia, quien resultó electo para el periodo comprendido entre 1995 y 1997.

En este sentido, Álvaro Uribe logró adaptarse a las reglas de juego del campo político para transformar su posición dentro de él, al convertir a las alianzas con facciones de diferentes vertientes políticas (liberal, conservador, izquierdas) en una poderosa estrategia para ganar elecciones y participación en la repartición del aparato burocrático del Estado.

## **El capital político de Álvaro Uribe y las estrategias para su acumulación**

Según Pierre Bourdieu:

La posesión de una configuración particular de propiedades es lo que legitima el derecho de entrar en un campo. Uno de los objetivos de la investigación es identificar esas propiedades activas, esas características eficientes, es decir, esas formas de capital específico. Estamos así ubicados frente a una especie de círculo hermenéutico: para construir el campo, hay que identificar las formas de capital específico que serán eficientes en él, y para construir esas formas de capital específico, hay que conocer la lógica específica del campo. Es un vaivén incesante, dentro del proceso de investigación, largo y difícil (Bourdieu y Wacquant, 1995: 72).

Dentro del campo político colombiano la participación en elecciones y la creación de facciones políticas al interior de los partidos tradicionales fueron los medios a través de los cuales se luchó por el capital político en disputa que permitía el acceso a la administración pública y a los recursos oficiales.

Las elecciones y sus resultados son para los militantes de una facción algo más que cifras consignadas en las urnas. Las reclaman como apoyo popular, las presentan como fortalezas ante sus competidores, a partir de ellas obtienen puestos de mando o pueden regatear por cargos burocráticos. Y con todo ese conjunto de activos, vuelven a iniciar un ciclo de reproducción de sus prácticas en el escenario local (Arenas y Ospina, 2006: 150).

Cada una de las facciones políticas buscaba influir, por lo tanto, en las de decisiones de los directorios departamentales de los partidos políticos frente a la definición de candidaturas a los cargos de elección popular (Concejo, Asamblea, Cámara y Senado), la designación de gobernantes (alcalde de Medellín, Gobernador de Antioquia) y la distribución de altos cargos de la burocracia departamental (secretarías municipales y departamentales, Empresas Públicas de Medellín, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Beneficencia de Antioquia, Empresas Departamentales de Antioquia, Fabrica de Licores de Antioquia, etc.) y burocracia estatal (ministerios, embajadas, entidades descentralizadas, empresas del Estado, entre otros).

En este contexto, las estrategias de Álvaro Uribe le permitieron participar en dos de las facciones más importantes del Partido Liberal a nivel regional, el Directorio Liberal de Antioquia y Antioquia Liberal en Marcha, hasta que logró constituir su propia facción política denominada el Sector Democrático.

Por medio de estas facciones políticas pudo participar en elecciones, acceder a la administración pública, ganar espacios burocráticos y manejar recursos oficiales, lo cual complementó con la creación de redes políticas y sobre todo explotó su liderazgo carismático como mecanismo para acumular legitimidad y apoyo político.

Los resultados electorales de Álvaro Uribe Vélez reflejaron un creciente apoyo político regional y nacional, puesto que inicialmente ganó las elecciones para concejo municipal con 31.205 votos en 1984, los cuales incrementó a 258.284 en 1994 cuando ganó la Gobernación de Antioquia, convirtiéndose en un fenómeno electoral colombiano cuando ganó la Presidencia de la República, en primera vuelta, con 5.862.655 de votos, lo que le permitió ir acumulando una importante influencia en el campo político regional y nacional, campo en el cual promovió su proyecto político fundamentado en los temas de seguridad y crecimiento económico.

Tabla No 3

Resultados electorales de Álvaro Uribe

	<b>VOTOS</b>	<b>FACCIÓN POLÍTICA</b>
Concejal Municipio de Salgar (1974)	- <sup>40</sup>	Directorio Liberal de Antioquia
Concejal de Medellín (1984-1986)	31.205 <sup>41</sup>	DLA y Antioquia Liberal en Marcha
Senador de la República (1986-1990)	38.392 <sup>42</sup>	Sector Democrático
Senador de la República (1990) <sup>43</sup>	71.002 <sup>44</sup>	Sector Democrático
Senador de la República (1991-1994)	68.993 <sup>45</sup>	Sector Democrático
Gobernador de Antioquia (1995-1997)	258.284 <sup>46</sup>	Sector Democrático
Presidente de la República (2002-2006)	5.862.655 <sup>47</sup>	Primero Colombia
Presidente de la República (2006-2010)	7.397.835 <sup>48</sup>	Primero Colombia

<sup>40</sup> Sin datos, elecciones realizadas el 21 de abril de 1974, los resultados del escrutinio departamental fueron publicados por *El Colombiano* el martes 28 de mayo de 1974, página 19, sólo se mostraron las cifras para presidente, senado, cámara y asamblea; por municipios fueron publicados únicamente los de Medellín.

<sup>41</sup> Elecciones realizadas el 11 de marzo de 1984 publicados por *El Colombiano* el martes 13 de marzo.

<sup>42</sup> Elecciones realizadas el 9 de marzo de 1986 publicados por *El Colombiano* el martes 11 de marzo.

<sup>43</sup> En 1990 la Asamblea Nacional Constituyente revocó el mandato de los congresistas y llamó a elecciones el 27 de octubre de ese mismo año para un nuevo periodo legislativo entre 1991 y 1994.

<sup>44</sup> Elecciones realizadas el 11 de marzo de 1990 publicados por *El Colombiano* el martes 13 de marzo.

<sup>45</sup> Elecciones realizadas el 27 de octubre de 1991 publicados por *El Colombiano* el martes 29 de octubre.

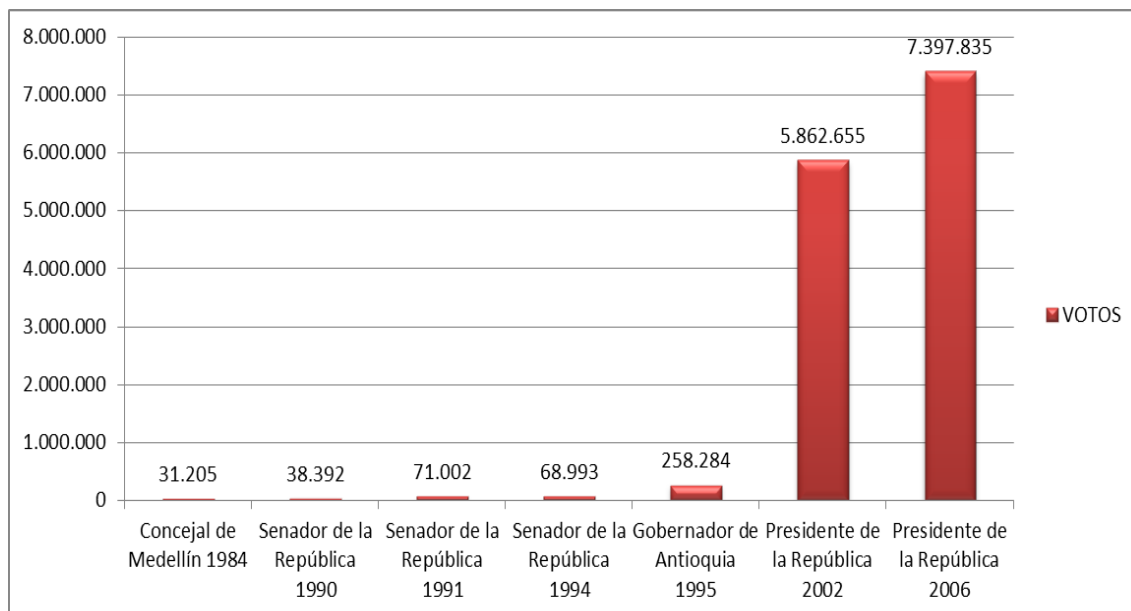
<sup>46</sup> Elecciones realizadas el 30 de octubre de 1994 publicados por *El Colombiano* el miércoles 9 de noviembre.

<sup>47</sup> <http://web.registraduria.gov.co/2002PRP1/e/vpresidente0.htm?1>

<sup>48</sup> <http://web.registraduria.gov.co/resprelec2006/0528/index.htm>

Fuente: elaboración propia con datos del periódico *El Colombiano* y Registraduría Nacional del Estado Civil.

Gráfico No 1  
Resultados electorales de Álvaro Uribe



Fuente: Elaboración propia, con datos del periódico *El Colombiano* y la Registraduría Nacional.

Por lo tanto, la trayectoria de ascenso de Álvaro Uribe Vélez dentro del campo político se fundamentó en la creación de una red de relaciones y alianzas con importantes políticos profesionales regionales y nacionales, la incorporación en facciones políticas del Partido Liberal hasta que logró crear su propia facción política, así como la explotación de su liderazgo carismático, lo que en conjunto le permitió acumular un importante capital político y transformar su posición dentro del campo.

### **Álvaro Uribe Vélez: ganadero, caballista y terrateniente de Antioquia y Córdoba**

El ganadero y terrateniente Alberto Uribe Sierra fundó, durante los años setenta, la sociedad Inversiones Uribe Vélez, entidad dedicada a la compra y venta de tierras, por medio de la cual logró adquirir 25 haciendas ubicadas en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca, la mayoría de ellas fueron vendidas después de su muerte para pagar las deudas que él había adquirido.

Por su parte, la familia Uribe Vélez explotó, habitó e interactuó principalmente en las haciendas “La Pradera”, “La Carolina”, “La Mundial”, “Guacharacas” y “El Ubérrimo”, ubicadas en las regiones periféricas de los departamentos de Antioquia y Córdoba, zonas que durante los años ochenta estuvieron en medio del conflicto entre guerrillas, militares, terratenientes, paramilitares y narcotraficantes.

Tabla No 4

Haciendas de la familia Uribe Vélez

HACIENDAS	UBICACIÓN	PERIODO
La Pradera	Municipio de Salgar – Antioquia	Años cincuenta
La Carolina	Municipio de Yarumal - Antioquia	1977
La Mundial	Municipio de Maceo – Antioquia	1977
Guacharacas	Entre los municipios de Yarumal y San Roque – Antioquia	1978
El Ubérrimo	Corregimiento El Sabanal cerca de Montería – Córdoba	1982

Fuente: Elaboración propia.

Fue en este entorno rural y de grandes propietarios de tierra, donde se desarrolló a nivel familiar una pasión y gusto por los caballos, los toros y las ferias de exposición, también fueron lugares donde transmitieron y adquirieron habilidades para el oficio de ganaderos y caballistas. Por ejemplo, Alberto Uribe Sierra fue un reconocido rejoneador y caballista antioqueño, dueño de la ganadería brava “La Carolina”, su hijo Santiago era juez de caballos y Álvaro ganó varios concursos de jinetes durante su niñez por montar caballos de paso fino.

Una anécdota de Álvaro Uribe como Presidente de la República refleja su origen social terrateniente:

Voy a montar un caballo alrededor de la pista mientras sostengo una taza de café, ¡y no voy a derramar ni una gota! - El presidente Hugo Chávez de Venezuela sonrió. – ¿Realmente puedes hacer eso, Uribe? –Apostemos unos cuantos barriles de petróleo y veamos– le dije con una sonrisa. - El presidente Chávez rio con ganas y aceptó mi propuesta. Los asistentes murmuraron. - Llamamos al jinete y nos trajo el caballo. Mientras me montaba, pedí a mis escoltas que me trajeran una taza de café. Estaba llena hasta el borde. Bebí un pequeño sorbo para darme cuenta apenas un pequeño margen de error y comencé a montar el caballo alrededor de la pista. Después de dos vueltas, terminé sin haber derramado una gota, tal como había anunciado. - Con una amplia sonrisa, el presidente Chávez aplaudió. –Uribe –gritó–. ¡Tú ...eres como un centauro! - Nos reímos mucho. Todavía me debe los dos barriles de petróleo” (Uribe, 2012).



En este espacio social y agrícola rural, Álvaro Uribe Vélez construyó una red de relaciones sociales con ganaderos, hacendados, caballistas y terratenientes, con quienes frecuentemente socializaba en las más importantes ferias ganaderas y de toros del país, en ellas no sólo desarrollaba sus actividades de ganadero sino también eran un escenario para hacer política, lo que le permitía construir lealtades con los asistentes y forjar redes políticas con sus pares ganaderos.

El día después de nuestra boda (con Lina Moreno) fuimos a la feria de ganado en La Ceja. Como tenía, y aún tengo, por costumbre, me introduje entre la multitud para estrechar las manos de la gente y preguntar por sus familias y empresas; a todos los llamaba por su nombre. Lina permanecía atrás: miraba la escena con sorpresa creciente y no poca consternación. “Estaba horrorizada” comentó después con una sonrisa irónica “Pensé que iba a casarme con un ganadero y ese día me di cuenta que me había casado con un político”.

Exageraba un poco pues, a fin de cuentas, ¿ese día compré una yegua! En chiste le dije a Lina que era la “ñapa” para celebrar nuestra boda. Tenía, sin embargo, razón: al crecer inmerso en la filosofía democrática de mis padres y en el activismo de mi madre, el ejercicio político ha sido en mí como una segunda naturaleza. La escena de aquel día en la feria fue simplemente otra ocasión en la que hice lo que he hecho siempre: conseguir amigos, establecer alianzas, interesarme en los asuntos y bienestar de los demás (Uribe, 2012: 62-63).

Esta fue una actitud frecuente en sus campañas políticas, en las cuales reconocía el auditorio, se mimetizaba en él, hablaba directamente con la gente, los escuchaba mirándolos a los ojos, pronunciaba los discursos exponiendo su propuesta sobre estado comunitario y fortalecimiento de la seguridad, con frecuencia, finalmente, realizaba acciones que salían del protocolo, las cuáles buscaban acercarlo a sus electores y ganar legitimidad con ellos.

La pasión por la vida de terrateniente, por el mundo de los caballos y del ganado por parte de Álvaro Uribe Vélez se vio reflejada con la compra, a comienzos de los años ochenta, de la hacienda El Ubérrimo, la cual estaba ubicada en el departamento de Córdoba, muy cerca de las otras propiedades en Antioquia.

El Ubérrimo se extiende desde el corregimiento de El Sabanal hasta el municipio de San Carlos, cubre 2.000 hectáreas de tierra plana y fértil dedicada principalmente a la actividad de la ganadería.

Poco después de casarnos compramos una finca ganadera en las exuberantes llanuras tropicales cerca de la costa caribeña, en el departamento de Córdoba. La llamamos El Ubérrimo. Era la oportunidad de afianzar mis raíces, disfrutar del amor por las actividades del campo, llevar una vida más lenta y escapar, cada tanto, de la agitada vida política que llevaba en Bogotá y en Medellín... Los hijos y yo trabajábamos todo el día y nuestros descansos eran cortas siestas debajo de un árbol o sobre un piso de cemento para refrescarnos.

Amaba la austeridad del lugar y el ejercicio de la faena agropecuaria. Me levantaba en la madrugada para asistir al ordeño y en el día adiestrábamos potros y atendíamos las necesidades del ganado. Por las noches nadábamos largamente, tal como lo hacía de niño por exigencia de mi madre. Hemos procurado tener una ganadería con creciente productividad y sostenibilidad ambiental (Uribe, 2012: 65)

El departamento de Córdoba, donde está ubicada la hacienda el Ubérrimo, se caracterizó por convertirse en una región de ganadería extensiva y de agricultura comercial, allí los ganaderos se consolidaron como el sector social, económico y político más importante de la región, la ciudad de Montería fue declarada la Capital Nacional de la Ganadería y sede de la Feria de la Ganadería desde 1960.

Este departamento también se caracterizó por ser una región con alta presencia de organizaciones guerrilleras, inicialmente del EPL en los años sesenta y posteriormente de las FARC desde los años noventa.

Cuando compramos El Ubérrimo sabíamos que estar en Córdoba suponía un cierto riesgo. A fin de cuentas estaba situado en la zona donde el grupo armado ilegal EPL había invadido la finca de mi padre y quemado la casa cuando yo era adolescente. Durante varios años dormí con una escopeta y un revólver a mi lado (Uribe, 2012: 65)

Pero también fue el lugar donde se asentaron y consolidaron las Autodefensas de los hermanos Castaño Gil con el apoyo de propietarios rurales, empresarios y políticos de la región, entre ellos Salvatore Mancuso, un reconocido ganadero y terrateniente de Córdoba que se convirtió en comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

La experiencia compartida de las élites en organizar su propia defensa y protección en contra de las guerrillas y de la movilización social en esta región del país, y la cooperación para oponerse a las políticas de paz y a las propuestas de reformas redistributivas de tierras desarrolló fuertes lazos de identificación entre los participantes en esta empresa. Alrededor de esta colaboración se formó también un proyecto de orden rural corporativo con una visión clara del papel y posición de esas

élites y su protagonismo histórico en ese orden regional en formación (Romero, 2003: 77).

Dentro de los factores que influyeron en el crecimiento y la evolución del conflicto armado en Córdoba se encuentran: la oposición de militares y ganaderos al proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancurt (1982-1986) y las organizaciones guerrilleras, el incremento de las acciones de secuestro y extorsión, la inequitativa distribución de la tierra, y la rápida concentración de la propiedad rural por parte de narcotraficantes.

Álvaro Uribe incursionó en este departamento, por lo tanto, a comienzos de los años ochenta, no sólo como ganadero y terrateniente sino que también entabló relaciones políticas con los dirigentes regionales. Cuando ganó las elecciones a la Presidencia de la República estos políticos de la región le pidieron un ministro cordobés y Uribe les respondió: “para qué necesitan un ministro si tienen un presidente”.

Finalmente, como lo señala Marco Palacios, Álvaro Uribe Vélez no sólo se convirtió en un consumado caballista, sino sobre todo en un importante empresario de la tierra y miembro de la clase ganadera del país.

Uribe nunca ha perdido la vocación ganadera ni el amor por los caballos. Posee una sólida visión agropecuaria del mundo y del país. Lejos de ser uno de los grandes ganaderos de Colombia, sí es un importante empresario del ramo. En su finca El Ubérrimo, en el noreste del municipio de Montería, capital del departamento de Córdoba y capital nacional de los paramilitares, engordan unas mil reses y se mantienen unos sesenta caballos finos. En las condiciones de la ganadería superextensiva colombiana, uno puede suponer que el dueño de El Ubérrimo es uno de los 2.300 colombianos propietarios de más de 2.000 hectáreas y que acaparan entre todos unos cuarenta millones de hectáreas. Para ponerlo en la balanza colombiana, digamos que cerca de dos millones y medio de pequeños propietarios (de menos de cinco hectáreas) tienen apenas cuatro millones y medio de hectáreas<sup>49</sup> (Palacios, 2002).

En conclusión, este origen social permeado por lo rural y ganadero es un elemento clave para entender la trayectoria y el proyecto político de Álvaro Uribe, como el apoyo frecuente que el gremio de los ganaderos le ha ofrecido, la centralidad de su propuesta

---

<sup>49</sup> Esta concentración de la propiedad de la tierra, una de las mayores del planeta según el Banco Mundial, ha aumentado en la última década. Cambio ligado a la inseguridad, al poder fáctico que ejercen guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y políticos clientelistas en territorios como los de Córdoba (Palacios, 2002).

en la defensa de la propiedad privada, la firmeza en la postura de la lucha contra las guerrillas y en el apoyo a las acciones militares orientadas hacia una guerra contrainsurgente que involucre a los civiles como el medio por excelencia para superar el conflicto.

En este sentido, el origen social de Álvaro Uribe reproduce las percepciones, apreciaciones y acciones, así como los principios de visión y división del mundo, de los sectores ganaderos, caballistas y terratenientes de las regiones periféricas de Antioquia, para quienes la tierra, la familia, la propiedad privada, el honor y el patriotismo son valores fundamentales en su forma de percibir el mundo y de actuar en él. Estos valores compartidos, redes familiares y amistades construidas desde la niñez fueron esenciales para las posteriores alianzas entre el político Álvaro Uribe Vélez y dichas élites rurales regionales.

Bajo este contexto, mientras que en los municipios centrales y en la capital del departamento, las élites políticas y económicas urbanas promovían un desarrollo basado en los procesos de urbanización, industrialización y secularización, en los municipios periféricos, las élites rurales se orientaban por promover un orden tradicional, terrateniente, agrícola y católico.

Cuando el conflicto armado entre el Estado y las guerrillas afectó directamente a las élites políticas y económicas rurales del departamento de Antioquia, a través de acciones como el secuestro y la extorsión, también afectó a la familia Uribe Vélez, los cuales, en conjunto, comenzaron a compartir los intereses por impulsar económica y políticamente la defensa de la propiedad privada rural, la producción agroindustrial, así como la lucha antisubversiva. El mismo Álvaro Uribe centró su propuesta política en estos intereses compartidos.

Por ello cuando Álvaro Uribe ascendió en el campo político regional, también se consolidaron con él las problemáticas, los conflictos, las propuestas y los intereses de las élites periféricas del departamento, como representantes de un poder rural y tradicional.

## Redes de poder y articulaciones entre lo legal y lo ilegal

En la medida en que las guerrillas de las FARC, el EPL y el ELN comenzaron a tener mayor presencia en las regiones periféricas de los departamentos de Antioquia y Córdoba e incrementaron sus acciones de secuestro, extorsión y asesinato, también empezaron a aumentar las denuncias sobre apoyo por parte de ganaderos, terratenientes y políticos hacia las organizaciones paramilitares, así como del surgimiento de poderosos narcotraficantes en la región.

Tabla No 5

Acciones guerrilleras violentas contra la familia Uribe Vélez durante las décadas de los sesenta a los noventa del siglo XX

LUGAR	PERIODO	GUERRILLA	SUCESOS
Hacienda La Carolina	Mediados de los años sesenta	EPL	El EPL quemó la casa, destruyó maquinaria y mató ganado.
Hacienda Guacharacas	1983	FARC	Las FARC asesinaron a Alberto Uribe Sierra.
Hacienda Guacharacas	1995	ELN	El ELN incendió la casa principal, robaron 600 reses y media docena de caballos.
Hacienda El Ubérrimo	1998	EPL	El EPL intentó extorsionar y secuestrar a Álvaro Uribe <sup>50</sup> .

Fuente: elaboración propia con datos de Uribe, 2012.

En este contexto, Álvaro Uribe y su familia no estuvieron exentos tanto de las acciones violentas por parte de las guerrillas como de las denuncias de relacionarse con narcotraficantes del Cartel de Medellín, así como de promover y apoyar a las organizaciones de autodefensa a nivel regional.

Más allá de definir si estas denuncias son verdaderas o falsas, labor que corresponde al sistema judicial colombiano, la información acumulada revela una cercanía espacial, temporal y social de Álvaro Uribe, sus familiares y amigos, con emergentes narcotraficantes y paramilitares de la región.

Frente a estas acusaciones de vínculos con el narcotráfico, apoyo a organizaciones paramilitares y complicidad en la ejecución de masacres, la familia Uribe Vélez ha

---

<sup>50</sup> Álvaro Uribe afirma haber sobrevivido por lo menos a quince atentados de las guerrillas durante su carrera política (Uribe, 2007: 8).

respondido que no son ciertas, carecen de validez o hacen parte de un plan para deslegitimar la labor política realizada por Álvaro Uribe, en el marco de una venganza criminal llevada a cabo por sus opositores políticos.

En medio de la socialización en el mundo de los caballos, el ganado y los toros Álvaro Uribe Vélez afirma haber conocido a la familia Ochoa Vásquez perteneciente al Cartel de Medellín. El Clan Ochoa compuesto por Fabio Ochoa Restrepo y sus hijos Jorge Luis, Fabio y Juan David, eran parte de una reconocida familia terrateniente de Antioquia, dedicada a la crianza de caballos de paso y al negocio de los restaurantes, los cuales se asociaron con Pablo Escobar en las actividades de tráfico internacional de cocaína y se convirtieron en la segunda fuerza del Cartel de Medellín.

Con frecuencia, durante la infancia asistí con mi padre y mis hermanos a los espectáculos de caballos que se realizaban los fines de semana. Eran oportunidades para satisfacer nuestra pasión por los caballos y socializar con los participantes en un ambiente único. Establecimos contacto con muchas personas de todo el departamento, entre ellas con una familia que compartía nuestro amor por los caballos y cuyos lazos con la nuestra se remontaba a varias generaciones. Sus apellidos eran Ochoa Vásquez y tres de los hermanos alcanzarían fama mundial: a comienzos de los años ochenta figuraron entre los cabecillas del cartel de las drogas de Medellín.

Al principio no logré percibir la magnitud de lo que ocurría, pero de un momento a otro vi como algunos conocidos que tenían más o menos mi edad –poco más de veinte o treinta años- compraban carros lujosos, mansiones, caballos de exposición, entre otras cosas; demostración de riqueza repentina y extrema. A este derroche inicial le siguió la aparición de guardaespaldas, de nuevos amigos e, inevitablemente, de oscuros socios provenientes del bajo mundo criminal. Muchos de estos jóvenes pertenecían a familias respetadas y sus actividades causaron grandes sufrimientos... El narcotráfico penetró con su dinero nuestra economía y nuestra comunidad (Uribe, 2012: 69-71).

Álvaro Uribe reconoce que su familia ha tenido relaciones de amistad, de varias generaciones, con los Ochoa puesto que sus bisabuelos, abuelos y padres no sólo eran tradicionales terratenientes y ganaderos de la región, sino que además compartían el gusto por las fincas, el ganado y realizaban cabalgatas juntos. Esto le permitió a Álvaro Uribe ser compañero de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa.

Sí. Tuvimos amistad, por los caballos. Era amigo de ellos. Eso lo publicó muy bien la revista Semana. Es todo lo que tengo que decir y ahí están ellos para que les pregunten (El Tiempo, abril 21 de 2002).

Fabio Ochoa en su libro *Mi vida en el mundo de los caballos* se expresa de la familia Uribe Vélez de la siguiente manera:

Alberto Uribe debía ser Ministro de Agricultura de por vida, pues este sí ha palpado, vivido y sufrido los problemas del campo, la reforma agraria, la violencia, etc., tantas güevonadas que inventaron los políticos y demagogos que no han salido de la carrera séptima; su hijo Álvaro es otro exponente de talla presidencial y Santiago ni se diga, y con El Pecoso (Jaime hermano de Álvaro) que se tengan, fue el que más le heredó. Liberal, descendiente del indio Uribe, a Alberto sí se le puede decir paisa, liberal y macho (Contreras y Garavito, 2002: 24).

En el libro *Los jinetes de la cocaína* el periodista Fabio Castillo<sup>51</sup> vinculó directamente a Alberto Uribe Sierra con el negocio del narcotráfico en Medellín y señala a Álvaro Uribe de aprobar licencias de vuelo a aeronaves del narcotráfico cuando era director de Aeronáutica Civil a comienzos de la década de los ochenta.

También es oriundo de Antioquia el Senador Álvaro Uribe Vélez –cuyo padre, Alberto Uribe Sierra, era un reconocido narcotraficante–, quién le otorgó licencias a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil. Uribe (Sierra) estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizábal Guevara, entonces secretario de Gobierno de Medellín, logró que lo pusieran en libertad (Castillo, 1987: 72).

Frente a la acusación de aprobación de licencias de vuelo para narcotraficantes Álvaro Uribe señaló:

Siendo yo director, ningún trámite de la aeronáutica se podía realizar sin que el interesado entregara dos requisitos: el certificado de estupefacientes del Ministerio de Justicia y el visto bueno de la Brigada de la Jurisdicción (Reportaje Caracol y RCN, 17 de febrero de 2002).

El 10 de Marzo de 1984 el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla<sup>52</sup> autorizó un operativo militar, a cargo de la Policía Nacional y del Departamento Antidrogas de Estados Unidos, DEA, contra el laboratorio para el procesamiento de cocaína más

---

<sup>51</sup> Fabio Castillo fue un periodista y jefe del equipo de investigación del periódico El Espectador durante la segunda mitad de los años ochenta, junto con su director Guillermo Cano y otros colegas como Ignacio Gómez, hicieron importantes denuncias sobre la infiltración del narcotráfico en la política colombiana, por estos hechos Pablo Escobar Gaviria ordenó el asesinato de Guillermo Cano, que se llevó a cabo el 17 de diciembre de 1986. En 1987 Fabio Castillo publicó el libro *Los Jinetes de la Cocaína* que tenía la intención de “desnudar ante el país a quienes se pretende en ocasiones exhibir como modernos Robin Hoods, cuando sus propias historias los muestra como asesinos inclementes” (Castillo, 1987: 13).

<sup>52</sup> Rodrigo Lara Bonilla fue miembro y dirigente del movimiento político Nuevo Liberalismo, coordinado por Luis Carlos Galán, ambos políticos iniciaron una lucha frontal contra los Carteles de la Droga durante los años ochenta. Rodrigo Lara fue asesinado el 30 de abril de 1984 y Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 por sicarios del Cartel de Medellín.

grande de América Latina, propiedad del Cartel de Medellín, conocido con el nombre de Tranquilandia, ubicado en las selvas del Yari en el departamento de Caquetá y que cubría una extensión de tierra de 500 hectáreas.

Este laboratorio poseía ocho pistas de aterrizaje, numerosas aeronaves, sofisticados equipos de comunicación, así como 19 factorías cuya capacidad de producción era de alrededor de catorce toneladas de cocaína semanal, valorada en 1,2 millones de dólares. Entre las aeronaves encontradas estaba un helicóptero Hugues-500 propiedad de la empresa Aerofoto Amórtegui, cuyo principal socio era Alberto Uribe Sierra. Frente a estos hechos Álvaro Uribe respondió:

Mi padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando la guerrilla lo asesinó, ese helicóptero quedó medio destruido y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa y esa empresa salió de los restos de ese helicóptero. Mi familia no lo tuvo en su poder. Hombre, por Dios! Eso lo hizo mi hermano Jaime y todos confiábamos en él, que se murió el año pasado de cáncer en la garganta... Después, la Policía decomisó ese helicóptero u otro con los mismos números (Semana, mayo 26 de 2002).

Poco tiempo después del operativo de Tranquilandia, el 30 de abril de 1984, fue asesinado el Ministro Rodrigo Lara Bonilla por sicarios del Cartel de Medellín. Este suceso llevó al presidente Belisario Betancur a declarar el Estado de Excepción, promover y aprobar la extradición de Colombianos a Estados Unidos e iniciar una guerra frontal contra el Cartel de Medellín. En julio de ese mismo año la hermana del Ministro, Cecilia Lara Bonilla, señaló ante el Juez 77 de instrucción criminal de Bogotá, quien llevaba el caso del homicidio, que en una conversación con su hermano Rodrigo Lara Bonilla, él dijo:

Lo de Tranquilandia era muy grave y comprometía a gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era del papá de Álvaro Uribe Vélez... Fue entonces cuando me dijo, en ese momento: “La mafia ha entrado en todos los estamentos del país, no sólo a la política sino a la economía”<sup>53</sup> (Reyes, 2007).

---

<sup>53</sup> En entrevista con el diario El Nuevo Herald en 2007 Cecilia Lara Bonilla afirmó que se ratificaba “en todas y cada una de las palabras” de su testimonio ante el juez que llevaba el caso de su hermano, además señaló “yo creo que él si tenía muchas dudas de Uribe. Él no las manifestó claramente” (Reyes, 2007).



Por otra parte, desde finales de los años ochenta comenzó a cuestionarse la cercanía de Álvaro Uribe con los comandantes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, quienes dirigían ejércitos privados en el nordeste de Antioquia, sur de Córdoba y Urabá antioqueño, frente a lo cual Álvaro Uribe manifestó no conocer a Carlos Castaño, pero sí a Salvatore Mancuso.

Del señor Mancuso, qué puedo decir. Lo vi una o dos veces cuando era ganadero en Montería, hace muchos años. Al señor Castaño no lo conozco. No me he reunido con los paramilitares ¿Negocios con Mancuso? No, hombre. Lo vi una o dos veces. Los negocios míos son muy elementales, unos negocios agropecuarios, prehistóricos llamo yo. Además, pendejo no soy. Habría sido un tonto si hubiera construido relaciones con los paramilitares que me hubiera afectado la política de autoridad en Antioquia (El Tiempo, abril 21 de 2002).

Otra situación se presentó en el municipio de Yarumal del departamento de Antioquia, a comienzos de la década de los noventa, momento en el que se incrementó la violencia y los asesinatos selectivos llevados a cabo por organizaciones paramilitares, específicamente, allí se cometieron alrededor de cincuenta homicidios por parte de un grupo de autodefensa denominado "Los Doce Apóstoles"<sup>54</sup>.

Sobre este acontecimiento, en mayo del año de 2010, Juan Carlos Meneses, un mayor retirado de la Policía Nacional de Colombia, realizó una confesión en Argentina sobre su colaboración con la organización paramilitar conocida como "Los Doce Apóstoles" frente al premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel<sup>55</sup>, quien se encontraba acompañado de reconocidos activistas de derechos humanos argentinos<sup>56</sup>, los cuales recibieron su declaración. El ex militar afirmó que el grupo paramilitar fue una organización de "limpieza social" organizada y dirigida por Santiago Uribe, hermano del político Álvaro Uribe Vélez y que la Hacienda la Carolina fue un centro de entrenamiento de esta organización.

---

<sup>54</sup> Según Olga Behar para ese mismo periodo, comienzos de los noventa, ya había una fuerte presencia de las FARC y el ELN en esa región, lo cual había generado una puja por el poder de la zona de Yarumal (Behar, 2011: 27-28).

<sup>55</sup> El sacerdote jesuita Javier Giraldo, reconocido defensor de los derechos humanos en Colombia y director del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, después de escuchar la declaración de Juan Carlos Meneses, le recomendó reunirse con el Nobel de Paz Argentino. Paralelamente Meneses realizó entrevistas en el diario The Washington Post y en el informativo Noticias Uno.

<sup>56</sup> En la reunión se encontraban Beinusz Smuckler, de la asociación Americana de Juristas; Eduardo Moró, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Luis Zamorano, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos también de la Liga Argentina por los derechos del hombre; y el juez Eduardo Freiler.

En su relato, Meneses dijo que de inmediato comenzó a colaborar con el grupo paramilitar al ser asignado a comandar a la Policía de Yarumal a principios de 1994. Santiago Uribe era el recaudador de fondos principal y estrategia detrás del grupo, dijo Meneses, que describe las reuniones en las que los dos discutieron quién sería asesinado después. Meneses dijo que su papel era simple: Él se aseguró de que sus policías estaban muy lejos de donde un asesinato iba a tener lugar (The Washington Post, mayo 24 de 2010).

También afirmó que en la realización de las actividades de “limpieza social” ellos tenían protectores del más alto nivel<sup>57</sup>.

Sentíamos mucha tranquilidad, porque sabíamos que el que nos protegía y estaba metido en todo era el futuro gobernador. En esos meses, Álvaro Uribe Vélez ganó la Gobernación de Antioquia. Su hermano, Santiago, siempre nos dio tranquilidad. Nos decía que ellos tenían muchos amigos en la fiscalía, amigos magistrados, que eso no iba a pasar a mayores, porque ellos quedarían salpicados en el momento en que se abriera una investigación, ellos iban a ser los perjudicados y eso no lo iban a permitir. Entonces ellos siempre nos inspiraron confianza (Behar, 2011: 18).

Frente a estos hechos “Santiago Uribe negó que él o su hermano estuvieran involucrados en crimen alguno. Dijo que las acusaciones son parte de una campaña cuidadosamente orquestada para hacerle daño al Presidente” (The Washington Post, mayo 24 de 2010).

En septiembre del año 2012 el Consejo de Estado condenó a la Nación por el homicidio de Luis Armando Holguin llevado a cabo el 12 de agosto de 1993 en el municipio de Yarumal, así mismo esta institución volvió a condenar al Estado colombiano en junio de 2013 por el homicidio de Ovidio Alfonso Ardila cometido el 29 de septiembre de 1993, que fue realizado por parte de la organización “Los Doce Apóstoles”.

Según la sentencia de junio de 2013, la organización paramilitar fue financiada por comerciantes de la región y contó con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército y un sacerdote católico.

La decisión responsabilizó a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa por los asesinatos colectivos realizados en esa región de Antioquia en los años 1993 y 1994, en donde amparados en un afán de limpiar la región, realizaron más de 30 crímenes

---

<sup>57</sup> Según Olga Behar las acciones de esta organización tenían, entre otros, “un componente rural cuyo objetivo era arrasarse con todo lo que oliera a guerrilla. Ante simples rumores o sospechas de que algún habitante colaboraba o se relacionaba con la subversión, los sicarios actuaban para erradicar el “mal” de raíz” (Behar, 2011: 31).

contra prostitutas, indigentes, drogadictos, entre otras personas, argumentando que no eran personas gratas para la sociedad (Semana, junio 20 de 2013).

Así mismo el magistrado del Consejo de Estado señaló que hubo negligencia por parte del Estado colombiano, en especial de la Fiscalía, para investigar los crímenes cometidos en Yarumal, lo que permitió que no se conocieran los autores intelectuales de los homicidios.

Se inició una investigación contra varios civiles y miembros de la Policía y si bien es cierto que éstos fueron absueltos en consideración a la pobre instrucción del ente acusador en el proceso, no se puede desconocer que existían graves indicios en su contra (...). Se lamenta que el proceso penal no contara con los elementos suficientes para haber esclarecido el total de las circunstancias en que sucedió toda esa barbarie, así como la incompetencia de las instituciones para encarar semejante investigación (El Espectador, junio 20 de 2013).

Finalmente, teniendo en cuenta el conjunto de la información, puede observarse que los espacios sociales, los territorios y los negocios de importantes ganaderos, hacendados, caballistas y terratenientes de la región, como los de la familia Uribe Vélez, empezaron a ser permeados y cooptados por emergentes narcotraficantes como la Familia Ochoa Vásquez y de paramilitares como Salvatore Mancuso, con quienes compartían un origen social común rural y gustos alrededor de las actividades económicas y culturales de la ganadería y de las haciendas.

En este contexto, se puede observar que tanto las élites políticas y económicas rurales de la periferia de Antioquia y Córdoba como los emergentes narcotraficantes y paramilitares de la región, comenzaron a compartir no sólo un origen social rural permeado por la ganadería, la agricultura y la tauromaquia, sino que también habían construido una red de relaciones y de espacios sociales, como las ferias ganaderas y las corridas de toros, donde podían socializar en torno a intereses comunes, como fueron el fortalecimiento de la lucha contrainsurgente y la oposición a una reforma agraria, intereses que para mediados de los años ochenta se convirtieron en un poderoso proyecto político y económico rural, el cual logró articular a élites legales tradicionales con agentes y organizaciones ilegales emergentes.



## CAPÍTULO IV

### TRAYECTORIA DE UN PARAMILITAR

#### **El Campo Militar colombiano**

Pierre Bourdieu afirma que el Estado “reivindica con éxito el monopolio del empleo legítimo de la violencia física y simbólica en un territorio determinado y sobre el conjunto de la población correspondiente” (Bourdieu, 1994: 98). Para lograrlo, el Estado moderno requirió, en primer lugar, la concentración de capital de fuerza física (capital militar) en un grupo especializado, especialmente comisionado para este fin, claramente identificado en el seno de la sociedad, centralizado y disciplinado, es decir, en un ejército nacional profesional.

El Estado naciente tiene que afirmar su fuerza física en dos contextos diferentes: en el exterior, en relación con otros Estados, actuales o potenciales en y a través de la guerra por la tierra, que requiere la creación de ejércitos poderosos; en el interior, en relación con unos contrapoderes y unas resistencias. Las fuerzas armadas se diversifican progresivamente en, por un lado, las fuerzas militares, destinadas a la competencia interestatal, y, por otro, las fuerzas de policía, destinadas al mantenimiento del orden interior.

En las sociedades sin Estado como la Cabilia antigua o la Islandia de las Sagas, no hay delegación del ejercicio de la violencia en un grupo especializado, claramente identificado en el seno de la sociedad. De lo que resulta que no se puede escapar de la lógica de la venganza personal, vendetta, o de la autodefensa (Bourdieu, 1994: 101).

Al respecto, en Colombia se presentaron dos fenómenos completamente articulados que caracterizaron la dinámica del campo militar durante la segunda mitad del siglo XX: en primer lugar, el Estado no logró, por medio de las Fuerzas Militares, reivindicar con éxito el monopolio de la violencia física ni tampoco controlar completamente todo el territorio nacional; en segundo lugar, en varias regiones del país, surgieron ejércitos privados tanto de organizaciones guerrilleras como de paramilitares y narcotraficantes que impidieron el establecimiento del Estado en dichas regiones, debido a que estas organizaciones lograron controlar militarmente parte de estos territorios y propendieron por el control de las poblaciones allí asentadas.

Este hecho generó un espacio social de oposición y de lucha entre los grupos armados antagónicos, en el cual la competencia por el capital militar estuvo determinada por la

orientación del Estado y las Fuerzas Militares hacia la obtención del monopolio de las armas y el control de todo el territorio nacional, así como por el desarrollo y consolidación de otros agentes y organizaciones armadas con capacidad de disputarle el dominio sobre dicho capital. En este sentido, el monopolio sobre los medios de violencia física no es algo dado, es un capital por el que se lucha, es un terreno en disputa.

Hay que reconocer que la autoridad y el control de los medios de coerción no es un atributo natural, permanente ni dado de los Estados. Ese monopolio sobre el ejercicio de la violencia es socialmente constituido y reproducido, no sólo a través de las prácticas de los agentes estatales, sino también por la legitimidad y efectividad de esos agentes para hacer cumplir el orden normativo que apoyan, en el territorio que reclaman. Así, esa exclusividad o monopolio es más bien el resultado de un conflicto y negociación permanentes. En este sentido, la soberanía como última autoridad en un territorio no es un atributo inherente del Estado, sino resultado de un proceso histórico; además, también es acreditada por otros Estados o entes similares en la arena internacional<sup>58</sup> (Thompson, 1994)

Por lo tanto, el campo militar en Colombia se configuró como el espacio social de enfrentamiento y de lucha entre las Fuerzas Militares y los ejércitos privados contraestatales o paraestatales, principalmente de las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes, entre los cuales se desarrollaron complejas relaciones tanto de confrontación y de antagonismo violento<sup>59</sup> como de cooperación y alianzas estratégicas<sup>60</sup>.

Los 48 miembros iniciales de las FARC se habían convertido en 8 mil a finales de los 80 y hoy se cuentan unos 16.500 combatientes efectivos, distribuidos en 62 frentes y siete bloques que cubren casi todo el territorio nacional. El ELN duplicó su pie de fuerza entre 1991 y 2001 cuando alcanzó 4.500 combatientes, distribuidos en 41 frentes y cinco bloques. Las Autodefensas pasaron de 1.800 en 1990 a cerca de 10.5000 en 2001, organizadas en diez bloques. Dicho de otra manera, “en los últimos diez años, el crecimiento de los principales actores ilegales del conflicto ha sido de 157%” mientras la población ha crecido al ritmo del 1,9% anual.

---

<sup>58</sup> En este sentido, teóricamente se ha dado por sentado que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero, a menudo, aparecen evidencias de que el Estado no es poseedor de ese monopolio, entonces, la idea del monopolio de la violencia no corresponde siempre con la experiencia empírica del orden social (Alonso y Vélez, 1998: 46).

<sup>59</sup> Especialmente entre las Fuerzas Militares y los Paramilitares contra las Guerrillas comunistas.

<sup>60</sup> Como en los casos de cooperación entre militares, narcotraficantes y paramilitares en la lucha contrainsurgente; de paramilitares y narcotraficantes frente a la guerra del Estado contra el narcotráfico; de narcotraficantes y las guerrillas como medio para la producción y procesamiento de droga en territorios de dominio guerrillero, así como para la financiación de la confrontación armada por parte de las guerrillas; de narcotraficantes y paramilitares en este último sentido.

Así que hoy tenemos unas 32 mil personas bien armadas y equipadas como tropa permanente de los ejércitos irregulares, esto es, un potencial de destrucción y muerte de veras muy temible. Si se suman los 240 mil integrantes de la fuerza pública, los 183 mil vigilantes privados y los quizá tres mil “gatilleros” al servicio del narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas urbanas, tendríamos que la violencia organizada emplea al 2,5% de los trabajadores colombianos y, en especial, a casi 9% de la población ocupada en el área rural (PNUD, 2003: 83-84).

Esta expansión en el número de ejércitos, combatientes y confrontación armada ocurrió paralelamente a la configuración de disposiciones subjetivas, habilidades y conocimientos para la guerra. Por lo tanto, en medio de la dinámica prolongada del conflicto armado en Colombia se fueron produciendo y reproduciendo percepciones, apreciaciones, habilidades y acciones, es decir, habitus guerreros, acordes con la dinámica de confrontación y reproducción de la violencia dentro del campo militar.

En este sentido, este campo es un campo de batalla, en el cual se llevan a cabo estrategias de guerra, como los son: control de territorios, control de población, operaciones contrainsurgentes, acciones cívico militares, declaración de estados de excepción, juicios en tribunales militares, juicios de guerra, operaciones de guerrillas móviles, conformación de autodefensas campesinas armadas, asesinatos selectivos, masacres, secuestros y desplazamiento forzado, entre otras.

A su vez, el capital militar es el capital de la coacción física, por medio de él se puede garantizar la soberanía jurídica y territorial del Estado o también defender proyectos de resistencia alternativos a los propuestos por las élites dominantes del campo de poder estatal (por ejemplo, los de las guerrillas comunistas, los carteles del narcotráfico y el de las Autodefensas). Este capital está compuesto por la capacidad de acceso a armamento (fusiles, municiones, explosivos, equipos de inteligencia, entre otros), creación de ejércitos y formación de los integrantes en técnicas y tácticas militares (transmisión de conocimientos y habilidades para la guerra).

Fue en el marco de este escenario de relaciones de poder y de confrontación en el campo militar que Carlos Castaño realizó su trayectoria como comandante paramilitar con la cual no sólo propendió por la venganza personal, sino que también por medio de ella logró controlar militarmente territorios estratégicos de los departamentos de Antioquia y Córdoba así como a las poblaciones que en ellas habitaba.

## **El campo militar en Antioquia y la trayectoria paramilitar de Carlos Castaño**

Desde la década de los ochenta del siglo XX, Carlos Castaño comenzó una lucha militar contra las guerrillas comunistas, especialmente frente a las FARC y el EPL, con presencia en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Urabá antioqueño y sur de Córdoba, lo cual le permitió construir relaciones con militares, ganaderos, terratenientes, políticos y narcotraficantes, quienes apoyaron y promovieron una lucha contrainsurgente en el país sobre la base del involucramiento de civiles en la guerra.

El ingreso de Carlos Castaño al campo militar se originó precisamente en el año 1980, después del asesinato de su padre por parte de la guerrilla de las FARC, momento en el cual él y sus hermanos tomaron la decisión de vengar la muerte de su progenitor y asumir la justicia por su propia mano.

Comenzamos a atacarlos: los cuatro y doce trabajadores de la finca y como nueve primos, sobrinos, todo aquel que ya podía soportar un fusil. Gente de Amalfi se nos unió y afortunadamente hubo uno o dos suboficiales retirados del Ejército, a quienes ya conocíamos, que nos acompañaron en esa labor. A ellos sí les pagábamos. Para funcionar, íbamos vendiendo el ganado que quedó... Trabajábamos en el área de Segovia: Yalí, Yolombó, Remedios, Santa Isabel y un sitio que se llama Machuca, pequeño corregimiento entre Segovia y el Bagre (Castro, 1996: 152).

Esta estrategia de venganza familiar de los Castaño Gil rápidamente se articuló con la lucha armada que se presentaba en el campo militar entre las guerrillas comunistas y las Fuerzas Militares colombianas, las cuales en un contexto internacional de Guerra Fría definieron a dichas guerrillas como el enemigo interno, por ello promovieron una lucha contrainsurgente que propendía por el involucramiento de civiles en el conflicto armado, cuyo objetivo era el control nacional del orden público y la derrota militar de las organizaciones guerrilleras.

En este marco de Guerra Fría y sobre la base de la acelerada expansión de las guerrillas durante los años ochenta las Fuerzas Militares colombianas fortalecieron la iniciativa de involucrar a la población civil en el conflicto armado, a través de la implementación de las denominadas Autodefensas Campesinas.



El respaldo de las fuerzas de seguridad del Estado a las Autodefensas se manifestaba en los salvoconductos, alguna capacitación militar, apoyo frente a la ofensiva de concentraciones guerrilleras y soporte en telecomunicaciones; a cambio las Autodefensas prestaban valiosos servicios de inteligencia y se encargaban de eliminar los apoyos clandestinos de la insurgencia. Para los miembros del Ejército y la Policía Nacional, que se encontraban en medio de una lucha contra la expansión del comunismo, el respaldo de los grupos paramilitares les reportaba mayores éxitos al ser más efectivos en la contención de la insurgencia y les evitaba tener que cometer ellos mismos acciones lesivas al derecho humanitario con los subsiguientes riesgos judiciales (Duncan, 2006: 243-244).

Bajo esta estrategia contrainsurgente liderada por las Fuerzas Militares colombianas fue posible que los hermanos Castaño Gil se alistaran como informantes y guías del Batallón Bomboná, perteneciente al Ejército Nacional, en 1981. Elemento que se reforzó con la creciente preocupación por parte de los altos mandos militares sobre el aumento de la protesta e inconformidad social, fenómeno paralelo a la expansión de la insurgencia armada, lo que conllevó, durante los años ochenta, al respaldo de la estrategia orientada a la vinculación activa de la población civil en el conflicto social y armado del país.

El Batallón Bomboná fue uno de los pioneros en implementar la lucha contrainsurgente por medio de la dotación de armas y entrenamiento a las primeras organizaciones de Autodefensas Civiles, inicialmente en el Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño, estrategia que se fue extendiendo a otras zonas del país como Santander, Boyacá, Cundinamarca y los Llanos orientales.

Nos fuimos a la base militar de Segovia que pertenece al Batallón Bomboná. Todos juntos. Cuatro hermanos: Fidel, Reinaldo, Eufacio y mi persona. Llegamos allí y les contamos nuestra tragedia ¡por Dios! y les dijimos: “nosotros conocemos estos sitios por donde se desplaza la guerrilla. Que yo conozco una casa donde duermen. Que yo conozco una donde les dejan el mercado. Que yo sé por qué camino cruzan”. Y el ejército nos integró como guías. Hicimos muchísimas operaciones con buenos resultados. No fueron muchas bajas, pero sí mucho encontrarles donde tenían abundante comida almacenada, una imprenta, y hubo lugares donde se emboscó la tropa porque nosotros les dijimos cuál era el sitio adecuado y se presentaron bajas de la guerrilla (Castro, 1996: 152).

La colaboración con las Fuerzas Militares y su articulación en una estrategia internacional contrainsurgente y anticomunista, les permitió a los hermanos Castaño obtener un conocimiento sobre estrategia militar, construir redes de apoyo y generar, con ello un capital militar.

Con frecuencia las alianzas entre paramilitares y oficiales del ejército se forjan en el terreno: un teniente o un capitán quiere mostrar resultados a sus superiores sin arriesgar la vida de sus hombres y sin empapelarse con investigaciones de la Procuraduría. Un jefe paramilitar ofrece sus servicios a cambio de inteligencia militar y armas para sus hombres. El enemigo, al fin y al cabo, es el mismo. Ambos ganan en el corto plazo: las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas bajan casi en la misma proporción en que suben las de las autodefensas, como ha venido sucediendo en los últimos años. En el largo plazo, la relación se vuelve más complicada, pues los paramilitares terminan acumulando tanto poder que un día es el jefe de las autodefensas quien pone a su servicio al teniente del batallón (León, 2004).

Inicialmente los hermanos Castaño Gil realizaron operaciones contrainsurgentes en la subregión del nordeste antioqueño, cerca de los municipios de Amalfi, Segovia y Remedios, lugares donde habían crecido y tenían sus propiedades, entre ellas la Finca EL Hundido y el Bar de Fidel en Segovia, así como era el lugar donde operaba la columna de las FARC que asesinó a su padre y también existía una fuerte presencia del ELN.

Con esta primera experiencia contrainsurgente, Fidel y Carlos Castaño fueron construyendo poco a poco una organización armada que si bien contaban con el apoyo de las Fuerzas Militares no dependía totalmente de ella, organización por medio de la cual podían no sólo llevar a cabo su venganza familiar sino también ofrecer servicios de “seguridad” a otros sectores de la sociedad como narcotraficantes, ganaderos, terratenientes, empresarios agroindustriales y políticos regionales.

Como habíamos estado cerca de un año en el rollo del ejército, contábamos con alguna capacitación militar. Ya habíamos aprendido a disparar armas, ya habíamos aprendido a saber quién nos vendía armas, quién nos vendía munición. Es que allí uno conoce al sargento que se retira, al cabo que se va, al soldado que se roba unos tiritos, ese tipo de cosas, y dijimos: “Vamos a empezar a combatir. A crear un grupo nuestro” (Castro, 1996: 153).

La creación de este ejército privado, les permitió a los hermanos Castaño profundizar su relación con el Cartel de Medellín, tanto en lo referente a la protección del negocio de la droga y la seguridad de los narcotraficantes y sus familias, así como en la instalación de algunos laboratorios para financiar el grupo armado.

Cualquiera que pretendiera ser un capo local del narcotráfico necesitaba de paramilitares que se encargaran de dos tipos de servicios trascendentales para el éxito

del negocio en Colombia: la protección y los robos de la guerrilla y la violencia contra facciones de narcotraficantes competidoras (Duncan, 2006: 257).

En este contexto, Fidel Castaño había conocido, desde mediados de la década de los setenta, a Pablo Escobar Gaviria, líder máximo del Cartel de Medellín, con quién logró entablar una profunda amistad. Desde este periodo Pablo Escobar lo vinculó a las actividades de tráfico internacional de narcóticos.

Fidel Castaño es una muestra de ese tipo de personajes que surgieron alrededor de una serie de negocios ilegales, llámese contrabando de esmeraldas, llámese los primeros vuelos que se hicieron de importación de pasta de coca desde Bolivia y Perú hacia Colombia para refinarla acá. (Entrevista a Mauricio Romero, documental canal Discovery Channel: Paramilitares en Colombia, la historia de los hermanos Castaño).

Su relación se estrechó aún más cuando en 1981 un comando del M-19 secuestró de Martha Nieves Ochoa, hija del narcotraficante y caballista Fabio Ochoa Restrepo, uno de los capos del Cartel de Medellín, la respuesta a esta acción fue la creación de la organización Muerte a Secuestradores, MAS, que tenía como objetivo rescatar a Martha Nieves y ajusticiar a los secuestradores, a esta organización se vincularon Fidel y Carlos Castaño<sup>61</sup>.

El 1 de diciembre de 1981, los hermanos de Martha Nieves Ochoa (Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez) convocaron a un encuentro de urgencia que se realizó en el Hotel Intercontinental de Medellín al que asistieron 223 personas. El objetivo de esta reunión era crear un proyecto que contrarrestara las acciones de los grupos guerrilleros, y en el que los asistentes dieron cada uno 2 millones de pesos y 10 de sus mejores hombres. De esta manera nació el MAS, un ejército privado de 2.230 hombres y un fondo de 446 millones de pesos para recompensas, ejecuciones y equipo (Verdad Abierta, 2011).

El MAS comenzó a torturar y asesinar a miembros del M-19, secuestró a veinticinco personas cercanas a Gabriel Bernal Villegas, considerado el autor intelectual del secuestro, lo que permitió la liberación de Martha Nieves sin el pago de la extorsión.

Para el primer año de gobierno del presidente Betancurt (1982), el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, dirigido por el ex canciller conservador Alfredo Vásquez Carrisoa, documentó 181 asesinatos reclamados por el MAS, 146 por grupos similares y 187 atribuidos a los servicios de seguridad del Estado. Además

---

<sup>61</sup> El MAS contó con el apoyo y liderazgo del Cartel de Medellín, entre ellos participaron Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder, los hermanos Ochoa Vásquez y los hermanos Castaño Gil, al igual que empresarios y miembros de las Fuerzas Militares. En 1983 el Procurador General de la Nación Carlos Jiménez Gómez hizo público un informe sobre el MAS, en el cual se identificó a 163 personas como pertenecientes a esta organización, de los cuales 59 eran miembros activos de las Fuerzas Militares (CINEP, 2004). De esta manera, el MAS se desarrolló en el marco de los principios de guerra generalizada promovida por la Doctrina de Seguridad Nacional.

la procuraduría señaló que durante el mismo periodo, el número de desaparecidos llegaba a 150, casos en los cuales también había una importante responsabilidad de fuerzas de seguridad (Romero, 2006: 362).

Después de cumplir con su objetivo, la organización Muerte a Secuestradores desapareció pero el Cartel de Medellín siguió requiriendo los servicios de ejércitos privados para brindar seguridad y sostenibilidad a su negocio ilícito, especialmente después de comenzar una guerra contra la guerrilla.

Los escoltas de un narcotraficante estaban en capacidad de defender a su patrón en un atentado o en un intento de secuestro, pero no de contener la expansión del control territorial de las guerrillas. Este objetivo exigía estructuras armadas más complejas y organizadas y, lo más grave, sería que exigiría también su respectiva respuesta violenta contra todos los soportes de las redes clandestinas y la clase política de las guerrillas. Fue en el contexto de estos enfrentamientos que los narcotraficantes se hicieron al control definitivo de los grupos paramilitares. Lo que en sus inicios eran aparatos armados subordinados a un equilibrio de distintos poderes pasó a ser en esencia una máquina de guerra bajo la dirección de grandes capos de la droga (Duncan, 2006: 254).

Este requerimiento de ejércitos privados se reforzó desde mediados de la década de los ochenta cuando los carteles de la droga entraron en una guerra contra el Estado colombiano en el marco de la lucha internacional contra el narcotráfico, liderada por Estados Unidos.

Durante estos mismos años, élites económicas y políticas rurales, especialmente ganaderos, terratenientes, políticos y empresarios locales vieron amenazada su posición social, política y económica debido a la expansión militar y territorial de la guerrilla, así como su seguridad personal debido al crecimiento de la extorsión y el secuestro, por lo cual promovieron una política de mano dura contra estas organizaciones, al igual que hacia los movimientos políticos y sociales críticos al modelo dominante.

A su vez, estas élites políticas y económicas se opusieron a las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las guerrillas, puesto que por medio de esta negociación se llegaron a los Acuerdos de la Uribe en 1984, entre el Gobierno y las FARC, a través de los cuales se pactó una tregua militar bilateral y la creación del partido político, Unión Patriótica, UP, integrado por líderes de las FARC y aliados de diversos sectores, entre ellos, miembros del Partido Comunista y líderes de

sectores liberales e independientes, así mismo el Gobierno desarrolló un Diálogo Nacional con el M-19, el EPL y la Auto Defensa Obrera, ADO.

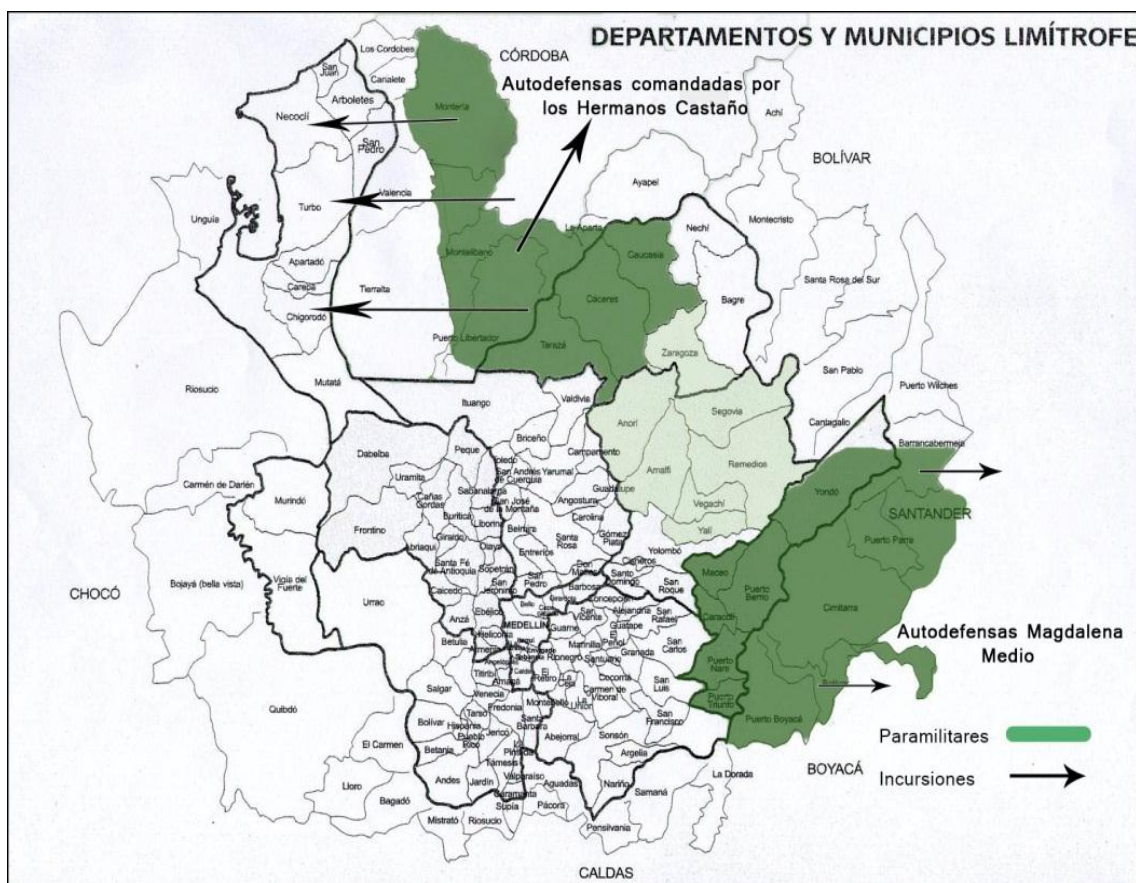
La administración de Betancur optó por dialogar y empezar un proceso de paz con las guerrillas, acompañado del otorgamiento de amnistías para los delitos políticos de sedición y asonada. Con ello, se marcaba un importante giro en la política oficial frente al tratamiento del orden público y al reconocimiento político de los alzados en armadas. Este experimento encontró toda suerte de resistencias sociales e institucionales entre los mandos militares, la mayoría de los gremios económicos y buena parte del establecimiento político nacional, pero también entre las élites regionales que percibían como una amenaza el avance electoral de la izquierda y el asedio guerrillero que se manifestaba en las extorsiones y los secuestros (Grupo de Memoria Histórica, 2013: 135).

En el contexto político nacional, el ingreso de la guerrilla a la participación política y democrática podía no tener un gran impacto en torno a la situación estratégica del conflicto político, pero para las élites locales, especialmente los políticos, ganaderos, terratenientes o narcotraficantes significaba una situación de riesgo frente a la posibilidad de pérdida de las bases de su poder: el control de las redes clientelares, de las votaciones, de los puestos públicos, así como de las tierras, los laboratorios de droga o los ejércitos privados. Por lo tanto, este proceso de apertura democrática fue percibido por las élites políticas y económicas regionales en zonas de conflicto como una amenaza a sus intereses.

Este fue el caso de élites regionales del Magdalena Medio, Nordeste, sur de Córdoba y Urabá antioqueño, que promovieron el desarrollo del proyecto paramilitar en sus zonas de dominio, con el apoyo de las Fuerzas Militares y de narcotraficantes pertenecientes al Cartel de Medellín, que dieron origen, en primer lugar, a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y, luego, a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. En ambos procesos participaron los hermanos Castaño Gil.

## Mapa No 11

### Autodefensas Departamento de Antioquia 1983-1990



Fuente: García, 1998: 84

### Las Autodefensas del Magdalena Medio y la incursión de los hermanos Castaño Gil en el proyecto paramilitar

Desde el año 1982 se comenzó a desarrollar en el municipio de Puerto Boyacá, ubicado en el Magdalena Medio, una importante experiencia piloto de conformación de autodefensas civiles armadas, con el apoyo de militares, políticos, ganaderos y narcotraficantes de la región. Los asociados en este proyecto propendieron por el control político y militar de un territorio ubicado en la periferia rural de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander, así como la promoción de lo que denominaron el “derecho a la legítima defensa”.

Esta iniciativa antisubversiva se llevó a cabo en el mismo momento en que las guerrillas habían aumentado significativamente su presencia tanto en la periferias de Antioquia como en el sur de Córdoba y habían implementado una estrategia de extorsión y

secuestro para financiar la guerra contra el Estado, así mismo se produjo durante el periodo en el que el presidente Belisario Betancur (1982-1986) desarrolló diálogos de paz con las guerrillas.

Dicho proyecto paramilitar en ciernes se orientó a fortalecer la alianza entre Fuerzas Militares, la población civil y las organizaciones narcotraficantes, en el marco de una estrategia de lucha contrainsurgente, lo que permitió convertir a Puerto Boyacá en la “Capital Antisubversiva de Colombia”.

Una confluencia de poderes y circunstancias convirtió a Puerto Boyacá en un cierto Vaticano del Paramilitarismo entre 1982 y 1989: la creación de la Brigada No. 14 del ejército y su ubicación en Puerto Berrío (1982-83); la asignación a dicha brigada del Batallón Bárbula, ubicado en Puerto Boyacá (1983); la mentalidad de los comandantes de estas unidades, identificados con los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional; el apoyo irrestricto que les brindaron sus superiores jerárquicos a los más altos niveles; el liderazgo de los alcaldes militares y civiles, gestores del proyecto; el apoyo económico de los ganaderos de la zona y de otras gentes adineradas; el respaldo de los líderes políticos de la zona, favorecido por sus jefes liberales de rango ministerial; los abusos y extorsiones del Frente No. 9 de las FARC que operaba en la región (CINEP, 2004).

La estrategia antisubversiva adoptada se orientó principalmente contra las organizaciones sociales y organizaciones políticas de izquierda a través de acciones como la amenaza, la eliminación física, la estigmatización y la represión armada.

Las operaciones conjuntas del grupo paramilitar y el Ejército Nacional centra su atención inicialmente en la desarticulación del trabajo y la organización política del Partido Comunistas colombiano y las FARC, para hacerlo, ejercen una brutal represión contra la población campesina y urbana; en forma sistemática y selectiva, persiguen activistas y dirigentes sindicales, cívicos y políticos, a campesinos y ganaderos y a toda persona que en alguna forma tenga relación con esas organizaciones o puedan servirles de apoyo: “fumigan” el Municipio, hasta hacer una limpieza general. Luego proyectan su acción sobre las zonas limítrofes de los Departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Santander (Medina, 1990: 175).

Las primeras organizaciones de autodefensa funcionaron como grupos armados que garantizaban la seguridad de los miembros de las élites rurales y de los medianos propietarios campesinos, así como de los narcotraficantes, además complementaban la acción de las Fuerzas Militares en la región.

Para las élites nacionales los avances de la guerrilla desde las zonas de frontera hacia zonas más integradas a los circuitos económicos de la nación, representaba un campanazo de alerta del poder desestabilizador de la guerrilla. Cualquier medida, por inconstitucional que fuera, que ayudara a frenar el avance de las fuerzas insurgentes, podía ser acogida. Además, detrás de los grupos paramilitares estaba el poder de influencia de las Fuerzas Armadas bajo la Doctrina de Seguridad Nacional y la clase política regional con su representatividad en el cuerpo legislativo que reclamaba el derecho a la “defensa propia” como legítimo cuando el Estado no era capaz de hacerlo (Duncan, 2006: 245).

Desde mediados de los años ochenta, se articularon en este proyecto antisubversivo reconocidos narcotraficantes del Cartel de Medellín, como fueron: Gonzalo Rodríguez Gacha, Fabio Ochoa y Pablo Escobar, quienes habían comenzado a invertir las ganancias del narcotráfico en la compra de tierras en las regiones periféricas de Antioquia y Córdoba.

Después del asesinato del ministro Lara Bonilla (1984), que les cerró temporalmente otras formas de incorporación social y política, muchos de estos narcotraficantes efectuaron compras masivas de tierras en diferentes regiones del país. Esta conversión de los narcotraficantes en terratenientes, a través de una verdadera contrarreforma agraria, respondió no sólo a una mecánica clásica de “lavado” de dólares, sino que se inscribió también en una estrategia de búsqueda de seguridad y de legitimación social y política. Las grandes haciendas constituyeron no sólo inversiones rentables y de gran liquidez sino también símbolos de poder y prestigio, centros de refugio para los grandes traficantes y regiones de consolidación política. Así, el reciclaje de los capitales del narcotráfico a través de la vía terrateniente no sólo agravó el problema agrario sino que además permitió que se configurara una alianza entre grupos de las mafias, las capas más retardatarias de la clase terrateniente y sectores militares, que vieron en los señores de la droga poderosos aliados en la lucha contrainsurgente (Uprimny, 2001b: 376).

Este hecho transformó a los narcotraficantes del Cartel de Medellín en terratenientes de la región, quienes para esta época ya contaban con alto volumen de capital económico y militar para defender, a sangre y fuego, sus nuevas propiedades y los laboratorios de procesamiento de droga.

Las cosas parecían ir bien para las Autodefensas y mejorarían cuando los narcotraficantes que progresivamente adquirían más tierra comenzaron a inyectar enormes volúmenes de dinero, armas, entrenamiento y contactos para combatir a la insurgencia. A partir de entonces la capacidad militar de las Autodefensas del Magdalena Medio crecería a ritmos impensables, se volvieron comunes los fusiles, los RPG y hasta las avionetas. No había punto de comparación con el armamento y la dotación tan precarios que estaban en condiciones de ofrecer los patrocinadores de las empresas legales (Duncan, 2006: 248).



Pero en este proyecto piloto también participaron los hermanos Castaño Gil, los cuales habían adquirido experiencia antiterrorista en el Batallón Bomboná y en la organización Muerte a Secuestradores, promovida por el Cartel de Medellín. El mismo Carlos Castaño afirmó que los padres de la autodefensa paramilitar en Colombia fueron el mayor del Ejército Nacional Alejandro Álvarez Henao<sup>62</sup>, los ganaderos Ramón Izasa, Gonzalo de Jesús Pérez y su hijo Henry Pérez, así como Fidel Castaño y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano.

Por la misma época nosotros veníamos actuando en Antioquia y empezamos a oír historias de gente que venía de esa zona (Puerto Berrio y Puerto Boyacá), de los vendedores de ganado, los arroceros y los mineros. Entonces Fidel dijo: “tenemos que unirnos, estamos prácticamente en la misma zona”. Había que atravesar el cerro de Las Mujeres, cuatro días subiendo y tres bajando para llegar a Puerto Berrio, frontera con el Magdalena Medio. Llegamos a Puerto Berrio y en el Batallón Bomboná nos presentaron al mayor Álvarez, que nos contactó con “Caruso” (Gonzalo de Jesús Pérez, ganadero y agricultor de la región). Una Autodefensa con más recursos, dos camperos Land Rover y un automóvil pequeño Dodge Polara. Ahí comenzamos a realizar acciones conjuntas, les pedimos prestados hombres para incursiones en Antioquia y les colaborábamos a ellos en la zona del Medio Magdalena. Cambiábamos hombre porque, manteniendo las tropas en una zona, la guerrilla terminó por conocerlos y los eliminaban día a día. Las relaciones con Caruso prosperaron (Aranguren, 2001: 87-88).

Finalmente, a esta confluencia de militares, ganaderos, terratenientes y narcotraficantes en el proyecto antiterrorista, se le adicionó la participación de dirigentes políticos de Puerto Boyacá pertenecientes al Partido Liberal.

En el periodo comprendido entre 1984 y 1988, la actividad política se desarrolló en el Municipio a través del Liberalismo, que allí adquiere una característica particular y es la de ser anticomunista. Durante este periodo, los dirigentes regionales desarrollaron con las banderas del anticomunismo la lucha electoral, con las que llevaron a su máximo dirigente Pablo Emilio Guarín de la Asamblea Departamental a la Cámara de Representantes (Medina, 1990: 225).

Además de Pablo Emilio Guarín en la Cámara de Representantes, contaron con el apoyo del Ministro de Gobierno Jaime Castro Castro (1984-1986), del alcalde de Puerto Boyacá, Luis Alfredo Rubio (1984 y 1988), del Consejo Municipal y tuvieron también cuotas políticas en la Gobernación de Boyacá. Según el comandante paramilitar Ernesto

---

<sup>62</sup> Señala igualmente que este “mayor comenzó a preparar y a capacitar gente en Puerto Boyacá. Nunca supe si ese paramilitarismo fue política del batallón, o de quien era, pero el mayor hacía todo ilegal, conseguía carros, prestaba pistolas, daba instrucción con algunos sargentos y otros soldados”(Aranguren, 2001:87-88).

Baez para esta época “Pablo Guarín ya era una figura política, e hizo una alianza con Jaime Castro, el ex ministro y luego alcalde de Bogotá. Ese trabajo político lo llevó hasta el Congreso de la República, como Representante a la Cámara, ya la Autodefensa como proyecto político estaba funcionando” (Aranguren, 2001: 97).

El poder político ha permitido ejercer a determinados niveles influencia de la posición anticomunista, y ha contribuido de distintas formas a su fortalecimiento. Con el Concejo Municipal y la Alcaldía anticomunista los recursos presupuestales e infraestructurales se colocan al servicio del afianzamiento de tal posición. Además, a través de las influencias y relaciones políticas se buscan partidas nacionales y departamentales que permitan la realización de obras que fortalezcan ante la opinión pública el proceso local (Medina, 1990: 226).

La coordinación del conjunto de acciones de la autodefensa civil armada, que contaron con el apoyo de militares, ganaderos, políticos y narcotraficantes, se realizó por medio de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio, ACDEGAM, dentro de las cuales estuvieron el desarrollo de proyectos socioeconómicos orientados a garantizar el apoyo de la población al proyecto antisubversivo, el adoctrinamiento de campesinos y jóvenes de esta zona<sup>63</sup>, así como el control político y militar de la región, sobre la base de lo que denominaron “el derecho legítimo de la población a protegerse de la agresión comunista”.

A pesar de que no se acepta públicamente y se niega con insistencia, regionalmente, todo el mundo afirma y sabe que ACDEGAM es la entidad a través de la cual se organizan, preparan, coordinan y operan los grupos de autodefensa, en Puerto Boyacá y su área de influencia en el Magdalena Medio. Esta entidad posee una importante infraestructura logística de guerra, personal preparado política y militarmente para adelantar acciones contrainsurgentes y recibe orientaciones de las FF.MM. y organizaciones anticomunistas como T.F.P. (Sociedad Colombiana para la defensa de la Tradición, Familia y Propiedad). En alguna medida ACDEGAM es la respuesta política, a través de la cual se legalizan los grupos paramilitares y de autodefensa en Puerto Boyacá (Medina, 1990: 219-220).

En este sentido, el desarrollo del proyecto antisubversivo y paramilitar de Puerto Boyacá se orientó a contrarrestar la expansión de las organizaciones guerrilleras en el

---

<sup>63</sup> Según Ernesto Baez, comandante y dirigente político de las Autodefensas, en este proyecto antisubversivo “se construyeron cuarenta y dos escuelas y los profesores eran pagados por ACDEGAM; además se montaron diez puestos de salud y se comenzaron a realizar brigadas de atención básica. La población ya estaba de nuestro lado y el espíritu anticomunista se regó... A los profesores de colegio se les instruía en darle especial importancia a la clase de cívica... En la emisora teníamos un programa de poesía antisubversiva... Los curas fueron fundamentales en este procesos; en un país tan católico apareció el padre Ciro, quien desde el pulpito y el confesionario, en la calle y en las reuniones con la comunidad pregonaba el temor marxista, influido por el nuevo papa Juan Pablo II y su posición anticomunista” (Aranguren, 2001: 96-97).

Magdalena Medio, con lo cual transformó la dinámica dentro del campo militar puesto que con la creación de un importante ejército privado articulado a la lucha contrainsurgente, coordinada por las Fuerzas Militares, se orientó a contrarrestar, en el nivel local, la estrategia expansiva guerrillera y ganar con ello el control territorial y de la población a nivel regional.

Pero por otro lado, con el apoyo que tuvo esta iniciativa por parte de narcotraficantes del Cartel de Medellín, convertidos ahora en terratenientes, así como de sectores del Partido Liberal que adoptaron la lucha anticomunista como medio para hacer política y ganar elecciones, esta estrategia terminó también afectando tanto la dinámica del campo político como del campo de poder regional.

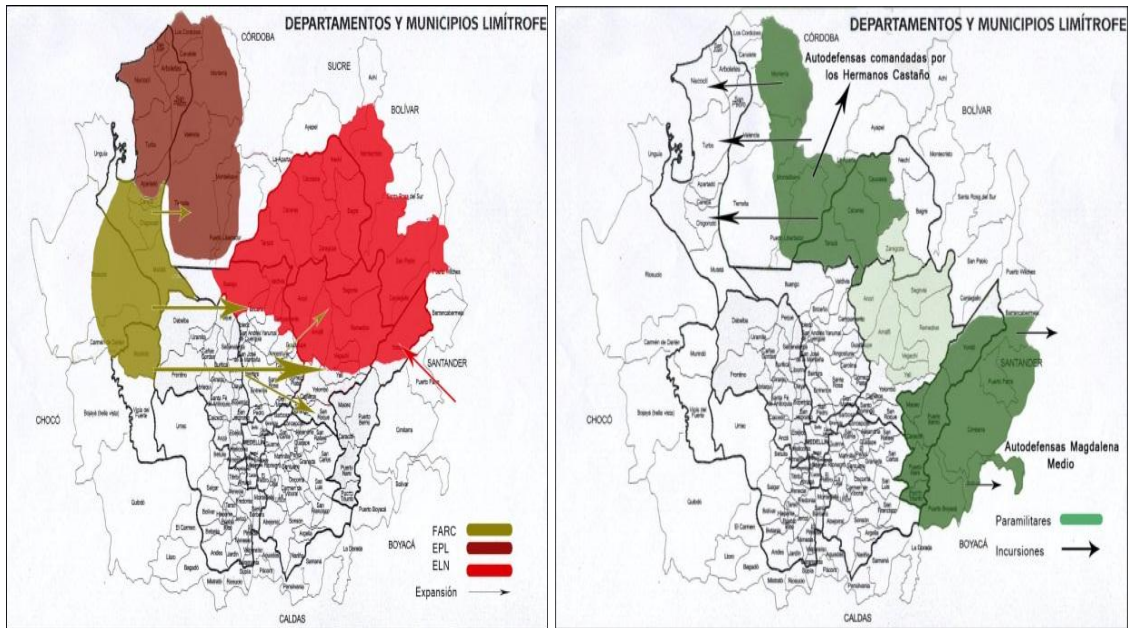
La experiencia del Magdalena Medio, liderada por Gonzalo y Henry Perez, Ramón Izasa, Fidel Castaño, militares del Batallón Bombona, con el apoyo del Cartel de Medellín, fue esencial para la posterior creación de las Autodefensas de Córdoba y Urabá por parte de los hermanos Castaño Gil, puesto que les permitió a las dos autodefensas compartir hombres, entrenamiento militar, adquirir experiencia operativa y conseguir apoyos políticos y económicos para su causa, lo que en definitiva influyó en la expansión del proyecto paramilitar desde el Magdalena Medio al nordeste antioqueño, sur de Córdoba y la región de Urabá, zonas de importancia económica, política y militar a nivel regional y nacional. Uno de los primeros objetivos de la expansión paramilitar de los hermanos Castaño fue el Nordeste antioqueño.

### **Muerte a Revolucionarios del Nordeste antioqueño: expansión paramilitar y consolidación del Ejército de los hermanos Castaño Gil.**

De la experiencia de las Autodefensas del Magdalena Medio, salieron los hombres con formación en lucha antsubversiva que extendieron el proyecto paramilitar al norte de Antioquia, con el apoyo de élites políticas, económicas y militares de esas región. En ese contexto, hacia mediados de la década de los ochenta Fidel y Carlos Castaño concentraron sus acciones paramilitares en el Nordeste, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, que contaba con fuerte presencia del EPL, el ELN y las FARC.

## Mapa No 12

### Organizaciones Guerrilleras y Paramilitares en Antioquia durante los años ochenta del siglo XX



Fuente: García, 1998.

Durante este tiempo, la organización de los hermanos Castaño fue conocida como Muerte a Revolucionarios del Nordeste, MRN, la cual realizó acciones de amenaza a la población por medio de comunicados, cartas y grafitis, así como a través de asesinatos selectivos y de masacres. Estas acciones se incrementaron debido a que el proceso de Paz entre el presidente Belisario Betancur y las guerrillas permitió la creación del movimiento político Unión Patriótica, lo cual les brindaba la posibilidad de participar en elecciones e ingresar como agentes activos dentro del campo político, aspecto que había sido negado históricamente con la institucionalización del Frente Nacional. Este hecho generó una fuerte oposición por parte de élites locales, así como de las crecientes organizaciones paramilitares.

El surgimiento del MRN coincide con la creación de la Unión Patriótica en 1985, agrupación que en el primer año de participación electoral, 1986, obtuvo 14 congresistas, 14 diputados y 350 concejales en todo el país, hecho que fue reconocido con la autorización presidencial para nombrar 23 alcaldes pertenecientes a este nuevo grupo en diferentes zonas del país. La UP ganó la Alcaldía de Segovia y de Remedios en la primera elección de alcaldes en marzo de 1988, a pesar de la violencia y amenazas en su contra (Romero, 2003: 122).

Los resultados electorales de la Unión Patriótica en la primera elección popular de alcaldes generó un debilitamiento de la hegemonía del Partido Liberal en el nordeste antioqueño, debido a que en municipios como Segovia la Unión Patriótica no sólo obtuvo la Alcaldía, sino también siete de los trece concejales. Según la Corte Suprema de Justicia colombiana:

El Municipio de Segovia, hace parte del nordeste antioqueño, una zona convulsionada social y políticamente por la presencia de múltiples grupos armados ilegales de las más diversas tendencias; al punto que, precisamente en 1988, y aún antes, como consecuencia de tantos procesos políticos fallidos, las agudas contradicciones dejaron en evidencia la intemperancia de grupos de ultraderecha frente a partidos que al decir de unos, tenían respaldo de organizaciones subversivas y que en nombre de la Unión Patriótica irrumpieron en el escenario político para entonces dominado, según había sido la tradición, por dos partidos proverbiales. En efecto, Segovia conjuga la historia de caciquismos y de liderazgos locales, compatibles con un orden constitucional excluyente y centenario que limitaba la participación política (Corte Suprema de Justicia, 2013: 35-36).

Esta constitución de un gobierno local de izquierda constituía un gran obstáculo para los políticos tradicionales de Segovia y también para la familia Castaño, que tenían propiedades en la región. Para esta época, Fidel Castaño era dueño de tierras (entre ellas la finca El Hundidor), bares, billares, gallos de pelea y prostíbulos en el pueblo y comenzaba a ser reconocido como narcotraficante (León, 2004), por lo que se opuso militarmente a la participación electoral de la UP y el movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste incrementó sus acciones.

En abril de 1988, luego de los comicios del 13 de marzo, el MRN amenazó de muerte a los alcaldes electos de los municipios de Apartadó, Mutatá, Remedios, Segovia y Yondó, como también a 7 concejales electos en Segovia y 5 en Remedios, todos ellos pertenecientes a la UP. Estas amenazas se concretaron con el asesinato del alcalde electo de Remedios Elkin de Jesús Martínez Álvarez en la ciudad de Medellín el 16 de mayo de 1988. De igual manera, la concejala electa en Segovia Jael Cano de Ortiz sufrió dos atentados contra su vida: el primero el 28 de abril y el segundo el 14 de julio de 1988, ambos en su propia casa (Grupo de Memoria Histórica – CNRR, 2010: 50-51).

La facción política tradicional más afectada por la nueva competencia electoral, fue la del político liberal César Augusto Pérez García, quien había sido concejal de Medellín, diputado de Antioquia y Representante a la Cámara en cinco ocasiones (1974-1978, 1982-1986, 1986-1990, 1990-1994 y 1991-1994), este hecho permitió una alianza entre el dirigente político con los comandantes paramilitares Fidel Castaño y Henry Pérez para debilitar el apoyo mayoritario que tenía la nueva organización de izquierda y así

retomar el control político de la región. Esta confluencia de intereses entre políticos, militares y paramilitares conllevó al desarrollo de la “Masacre de Segovia”, realizada en las horas de la noche del 11 de noviembre de 1988.

Hombres armados recorrieron el centro de Segovia en tres camperos, asesinaron a 43 personas y dejaron 50 heridos, con la total pasividad de la Policía y el Ejército. Este último contaba con 154 efectivos y equipos de transporte, los cuales permanecieron inmóviles en el Batallón Bomboná a pesar de que los tres camperos en los que se movilizaron los paramilitares circundaron sus instalaciones luego de la matanza... Aunque es más aberrante el caso de la Policía. El Comando estaba ubicado a 100 metros del bar Jhony Kay, donde hubo el mayor número de muertos y, como si fuera poco, uno de los automotores en el que los sicarios se movilizaron pasó sin inconveniente alguno frente a la Estación. El oficial de la Policía a cargo, en lugar de defender a la población, se atrincheró en el Comando «a pesar de que los criminales se pasearon muy cerca para cometer sus despropósitos y, además, sólo cuando éstos abandonaron el poblado, el oficial y restantes miembros de la Policía salieron de su refugio para supuestamente defender la ciudadanía atacada»<sup>64</sup> (Romero, 2003: 122)

Por estos hechos, el político liberal César Augusto Pérez fue condenado a treinta años de cárcel por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia condenatoria, la Procuraduría señaló:

En Remedios y Segovia, municipios del nordeste antioqueño, la Unión Patriótica consiguió en las elecciones populares para elegir alcaldes por primera vez, destronar la hegemonía Liberal liderada por César Pérez García, proceso que se desarrolló en medio de una contienda hostil, rodeada de amenazas y de muertes selectivas por la acción de grupos paramilitares.

(La Procuraduría) considera que existe evidencia de nexos entre el acusado con los grupos paramilitares que le demostraron su apoyo y que fueron artífices de esas intimidaciones, prueba de lo cual sería la carta enviada por la organización ilegal a los ciudadanos de Segovia, donde abiertamente manifiestan su respaldo al mencionado en precedencia.

Estima, además, que están probadas igualmente una serie de circunstancias que indican que el partido liberal perdió el liderazgo político en el municipio de Segovia y que Pérez García, máximo líder de ese grupo, cedía de esa manera su poder y hegemonía, de ahí que tal situación explica la razón por la cual encontró una causa común con la estructura ilegal paramilitar que ejecutó la operación criminal en la citada población.

---

<sup>64</sup> Según lo relata el Grupo de Memoria Histórica, el viernes 11 de noviembre de 1988 un grupo de hombres fuertemente armados y movilizadados en tres camperos llevaron a cabo una masacre en la cabecera municipal del municipio de Segovia y en el área urbana del corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios. Los ataques cobraron la vida de 46 personas, entre ellas 10 mujeres, 4 menores de edad y un adulto mayor. Las víctimas fueron atacadas con armas de fuego de largo alcance y alto calibre, y con granadas de fragmentación. De igual manera, la acción criminal también dejó cuantiosos daños materiales por la afectación de inmuebles y vehículos públicos y particulares (Grupo de Memoria Histórica – CNRR, 2010: 62).

En ese sentido, la declaración de Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, miembro y líder del aparato paramilitar que consumó la acción delictiva, señaló en detalle cómo se planeó y ejecutó el operativo, a los determinadores y autores materiales de la denominada “Masacre de Segovia”, entre los que mencionó al procesado.

Pero no solamente “Vladimir” fue quien le atribuyó un rol preponderante como determinador de los hechos a aquél, pues esa afirmación tiene un gran soporte en otras pruebas testimoniales, documentales, y en publicaciones de libros y del diario El Tiempo, que denotan que las acusaciones en su contra provienen de diferentes fuentes que convergen a demostrar la responsabilidad del procesado, el ejército y los paramilitares en lo acaecido el 11 de noviembre de 1988 (Corte Suprema de Justicia, 2013: 7-8).

Las acciones realizadas por la organización paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste, MNR, que contaron con el apoyo de políticos y militares locales, le permitió al Partido Liberal mantener su hegemonía electoral en esta subregión de Antioquia y a los hermanos Castaño Gil lograr obtener un dominio territorial estratégico, desde el cual expandir su proyecto paramilitar hacia el departamento de Córdoba. De esta manera, como lo señala la investigadora Juanita León el municipio de “Segovia interesaba a los distintos bandos por su valor estratégico: era un corredor hacia el Magdalena Medio y el Bajo Cauca y una fuente de riqueza por las minas de oro y plata y por el oleoducto que atraviesa la región” (León, 2004).

### **La lucha por el control del sur de Córdoba y la consolidación de la estrategia de guerra paramilitar**

Los recursos obtenidos por actividades de narcotráfico, las donaciones realizadas por empresas privadas, así como de terratenientes, ganaderos y particulares afines con el proyecto paramilitar, o de los “aportes obligatorios a la seguridad” por parte de los empresarios y comerciantes dentro de sus zonas de dominio, le permitió a Fidel y Carlos Castaño financiar sus ejércitos y comprar grandes extensiones de tierra, especialmente en zonas con poca presencia del Estado y en disputa con las guerrillas, como fue el caso del sur de Córdoba, las cuales en ese momento se encontraban devaluadas como consecuencia del conflicto armado.

Según Carlos Castaño, Fidel compró fincas “por un valor de siete mil millones de pesos y a cada finquero le abonó una considerable cantidad de dinero, el resto lo quedó debiendo. Se hacía el negocio así la guerrilla tuviera ocupadas las tierras” (Arangure,

2001: 1003), lo que le permitió convertirse en uno de los mayores terratenientes de la región e invertir en ganadería, principal actividad económica del departamento de Córdoba.

Una de las primeras zonas controladas por los hermanos Castaño fue la hacienda las Tangas, ubicada en la rivera del río Sinú, en el municipio de Valencia en Córdoba, este fue uno de los más importantes centros de operaciones y de entrenamiento de paramilitares en la región, por ello inicialmente se les conoció como los “Tangueros”.

Con Fidel buscábamos un sitio que nos diera las garantías, queríamos un lugar cerca de las plantaciones de banano en la zona de Urabá, pero esa zona resultaba impenetrable en 1985. Necesitábamos una zona equidistante, un eje donde nuestra Autodefensa pudiera expandirse, aspirábamos tener salida al mar y frontera con los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó... Estar cerca de la capital del departamento de Córdoba (Montería), conllevaba sus ventajas. Nos ofrecía extensiones de tierra abandonadas, a buenos precios y, sobre todo, fértiles (Aranguren, 2001: 103).

En este departamento, los hermanos Castaño rápidamente encontraron apoyo de sectores políticos, económicos y militares de la región propensos a la defensa de la lucha contrainsurgente y que estaban en contra de la participación política de las guerrillas, así como de las movilizaciones sociales.

Por una parte, desde los años setenta las élites regionales, pertenecientes al Partido Liberal y Conservador de Córdoba, así como los ganaderos y los terratenientes, confluyeron en su oposición al desarrollo de una Reforma Agraria y, por el contrario, promovieron la consolidación tanto de la agricultura comercial como de la ganadería extensiva.

En este contexto, un importante apoyo que tuvieron las autodefensas de los hermanos Castaño en esta región, provino de la Federación Nacional de Ganaderos y de la Federación de Ganaderos del Departamento de Córdoba, el gerente regional de este gremio, el hacendado Rodrigo García Caicedo, manifestó públicamente que “las Autodefensas de Córdoba, lideradas por Fidel Castaño, se recordarán siempre como las libertadoras de la región” (Aranguren, 2001), él se convirtió en un consejero personal y orientador político de Carlos Castaño, después de la muerte de Fidel. Frente al apoyo de su gremio al proyecto de las autodefensas, Rodrigo García afirmó:



Las ausencias totales y vergonzosas del Estado colombiano nos llevaron a pensar que la única opción para sobrevivir, era Fidel Castaño, que con un número pequeño de hombres había golpeado a la guerrilla en Córdoba como el ejército aún no lo lograba. Se sumó que el gobierno finalmente envió la primera brigada móvil a Córdoba. Bien equipada y comandada. En dos meses y medio temblaba la guerrilla en Córdoba y Fidel por su lado conseguía derrotas certeras a la subversión. Entre la Fuerza pública y Fidel se erradicó la guerrilla de aquí. Después entregó sus armas y quiso vivir en paz pero el gobierno retiró la brigada móvil y el ejército nunca ocupó los espacios que dejó el EPL y las Autodefensas. Se nos vino encima las FARC, el ELN y un grupo disidente del EPL. Recuerdo que Fidel retomó los fusiles y me comentó “Don Rodrigo, se da cuenta porque yo no quería entregar las armas”.... El problema nuestro son las alternativas absurdas que nos quedan: la esclavitud con el señor Tirofijo. La autodefensa que no es la solución de fondo tampoco. O lo que es peor, la dictadura del clientelismo (Aranguren, 2001: 188-191).

Posteriormente, durante los años ochenta, las élites políticas cordobesas se opusieron al proceso de paz del Gobierno Betancur con las guerrillas, el cual consideraron como una traición, ésta oposición que conllevó al apoyo abierto al proyecto paramilitar de los hermanos Castaño, especialmente en el momento en que entraron en vigencia las reformas de apertura democrática de finales de los ochenta lo que finalmente generalizó la práctica de la “guerra sucia” en el departamento de Córdoba.

La primera elección de alcaldes por voto directo se realizó en 1988, y las posibilidades de que los frentes electorales de la izquierda con aprobación de la guerrilla —UP y Frente Popular— ganaran alcaldías puso al rojo la disputa por el poder político y burocrático local... En septiembre de 1987 fue asesinado el primer dirigente del Frente Popular. Era directivo del magisterio y candidato a la Alcaldía de Tierralta por ese movimiento. Luego siguió una racha de atentados en los que la UP y A Luchar también fueron el blanco. Caen candidatos al concejo o en ejercicio, sindicalistas, maestros, dirigentes campesinos, indígenas, profesores universitarios y periodistas radiales.

Los candidatos de la izquierda elegidos en 1988 son sometidos a intensa presión por la Brigada XI, con frecuentes interrogatorios en las instalaciones militares, además de amenazas anónimas de muerte. En abril de 1988 se inician los asesinatos colectivos: 37 campesinos son asesinados en el corregimiento de Mejor Esquina, y luego son cometidas aproximadamente 20 masacres más. En suma, entre 1988 y 1990 se registraron en información de prensa nacional cerca de 200 asesinatos políticos y un poco menos de 400 presumiblemente políticos en Córdoba (Romero, 2003: 88-89).

Para mantener el control tanto del Nordeste como del sur de Córdoba, así como para expandirse hacia la región del Urabá antioqueño, los ejércitos de los hermanos Castaño Gil extendieron una estrategia de guerra centrada en el ataque sistemático a la población

civil, la cual se estructuró en torno a la política de tierra arrasada, las masacres, los asesinatos selectivos y el desplazamientos forzados.

La táctica fue golpear los diferentes “anillos de apoyo” de lo que se consideró como sostén civil de la subversión, es decir, asesinar líderes, activistas y simpatizantes de izquierda o de organizaciones sociales, para eliminar su pilar social, y así, según esta teoría contrainsurgente, aislar a la guerrilla. Suponiendo una conexión automática y directa entre organizaciones guerrilleras y frentes legales de lucha social y política, los paramilitares, las autodefensas y las fuerzas de seguridad arremetieron contra diversos sectores de población civil desarmada en zonas de conflicto. Al mismo tiempo, eliminaron las posibilidades de oposición política en Córdoba y otras regiones del país, sin lesionar la capacidad de los aparatos armados de la insurgencia, supuesto objetivo de su reacción. Las FARC se replegaron a zonas más altas en el nudo de Paramillo y en la serranía de Abibe, en los límites entre Antioquia y Córdoba, mientras que el EPL, dada la dinámica interna que buscaba participación en un movimiento legal más amplio, imitando el ejemplo del M-19, siguió la senda de la desmovilización (Romero, 2003: 87).

En este contexto, entre 1988 y 1998 los ejércitos de los hermanos Castaño llevaron a cabo las mayores acciones contrainsurgentes hacia la población guerrillera o población civil sospechosa de serlo, el mismo Carlos Castaño reconoce que en estas acciones de las Autodefensas la población civil fue el centro de su actuación.

Si no podemos enfrentarnos cuando están en el grupo armado porque no tenemos ni la capacidad militar ni el armamento, pues entonces vamos a ir a quedarnos en el pueblo. Allí si nos podemos proteger porque en el pueblo no son capaces de matarnos. Y vamos a ir comenzando a darle de baja a todos los que vayan llegando. Si no podíamos combatir donde estaban acantonados, sí podíamos neutralizarles las personas que les llevaban comida, droga, razones, aguardiente, prostitutas y todo ese tipo de cosas que les llevaban a ellos a los campamentos. Y nos dimos cuenta que conseguíamos aislarlos y vimos que era una estrategia que daba muy buenos resultados (Castro, 1996: 154).

En este escenario, sobre la población civil y sobre la población sospechosa de colaborar con las guerrillas se ejecutaron acciones como amenazas, asesinatos selectivos, desapariciones, torturas y desplazamiento forzado, con lo cual se generalizó la práctica de la justicia privada en las regiones dominadas por los paramilitares.

Los actores armados atacan a la población civil como parte de sus estrategias para obligarla a transferir o a mantener sus lealtades y a servir como proveedora de recursos. Atacar a la población es, para los actores armados, una forma de debilitar al adversario y, al mismo tiempo, de acumular fuerzas. La población civil es para los actores armados una fuente de respaldo político, económico, moral y logístico, que suma en el resultado final del conflicto. Para los victimarios, poco importa si ese respaldo es consentido o forzado (Grupo de Memoria Histórica, 2013: 37).

Una de las acciones contrainsurgentes más utilizadas por las Autodefensas de los hermanos Castaño Gil fue la ejecución de masacres en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Bolívar como preámbulo de la incursión en nuevos territorios, así como forma de castigo frente a la movilización social y política de izquierda en algunos municipios, especialmente desde la primera elección popular de alcaldes en 1988.

Dentro de la estrategia paramilitar, la masacre ha sido importante como modalidad de violencia. Debido a su visibilidad y crueldad, ha desafiado y subvertido la oferta de protección de la guerrilla dentro del territorio. En su función de teatralización de la violencia, lleva —desde la perspectiva del perpetrador— un mensaje aleccionador para la población. Con la disposición espacial de los cuerpos de las víctimas y las huellas de sevicia en los cadáveres expuestos advierte sobre el costo de colaborar con la guerrilla. Pero también ha advertido a las guerrillas acerca del tipo de guerra que los paramilitares estaban dispuestos a librar para obtener el control total del territorio (Grupo de Memoria, 2013: 48).

En el marco de esta estrategia de guerra se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes masacres, que son el reflejo de una táctica de guerra que busca, por medio del asesinato masivo de personas, la destrucción de su entorno físico y simbólico, así como de la generación de terror y miedo, debilitar al oponente sin atacarlo directamente en sus grandes campamentos, para desplazarlo o derrotarlo y así controlar su territorio.

Tabla No 6

Principales masacres ejecutadas por paramilitares bajo el mando de los hermanos Castaño Gil en Antioquia y Córdoba entre 1988 y 1997

MASACRE	FECHA	LUGAR	DESCRIPCIÓN
La Mejor Esquina	26 de marzo de 1988	Buenavista Córdoba	36 campesinos del caserío Mejor Esquina fueron asesinados por 10 hombres armados.
La Masacre de Currulao	4 de marzo de 1988	Urabá Antioquia	Masacre de 20 trabajadores de las fincas “Honduras” y “La Negra”, realizada por 30 paramilitares fuertemente armados.
Vereda Villavicencio	Octubre de 1988	Valencia Córdoba	
La Masacre de Segovia y la Cruzada	11 de noviembre de 1988	Segovia Antioquia	Fueron asesinadas 46 personas (CNMH, 2010: 34) luego de que un grupo de paramilitares entraran al municipio en camperos y abrieran fuego contra los pobladores.
Pueblo Bujo	Noviembre de 1989	Montería Córdoba	Asesinadas 11 personas.
Pueblo Bello	14 de enero de 1990	Turbo-Urabá Antioquia	Asesinato de 42 campesinos. En 2006 la CIDH condenó al Estado y ordenó reparar a los familiares de las víctimas.
Masacre la	23 de enero de	Apartadó -	35 personas asesinadas en el barrio la Chinita del

Chinita	1994	Urabá Antioquia	municipio de Apartadó.
Masacre el Aracatazo	12 de agosto de 1995	Chigorodó Urabá Antioquia	Fueron asesinadas 18 personas. Las FARC en retaliación asesinan 15 campesinos en la finca Los Cunas.
Masacre de la Paz y el Tigrito	22 de abril de 1996	Segovia Antioquia	14 víctimas fatales (CNMH, 2010: 34)
La Granja	11 de junio de 1996	Ituango Antioquia	Los paramilitares asesinaron y torturaron a 5 campesinos.
El Aro	22 de octubre de 1997	Ituango Antioquia	Los paramilitares asesinaron y torturaron a 14 campesinos. La masacre de la Granja y el Aro dejó 712 desplazados. El Estado fue condenado por la CIDH en 2009.

Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo de Memoria Histórica, 2010 y 2013; VerdadAbierta.com, Colectivo Memoria y Dignidad.

Estas acciones fueron complementadas con la práctica de los asesinatos selectivos<sup>65</sup>, las desapariciones y los desplazamientos forzados<sup>66</sup>. Este conjunto de acciones llevadas a cabo dentro del campo militar contribuyeron en la consolidaron del proyecto paramilitar de los hermanos Castaño Gil en las regiones del Nordeste, sur de Córdoba y en el Urabá antioqueño, lo que les permitió tanto controlar el territorio como la población, proceso que se consolidó durante los años noventa.

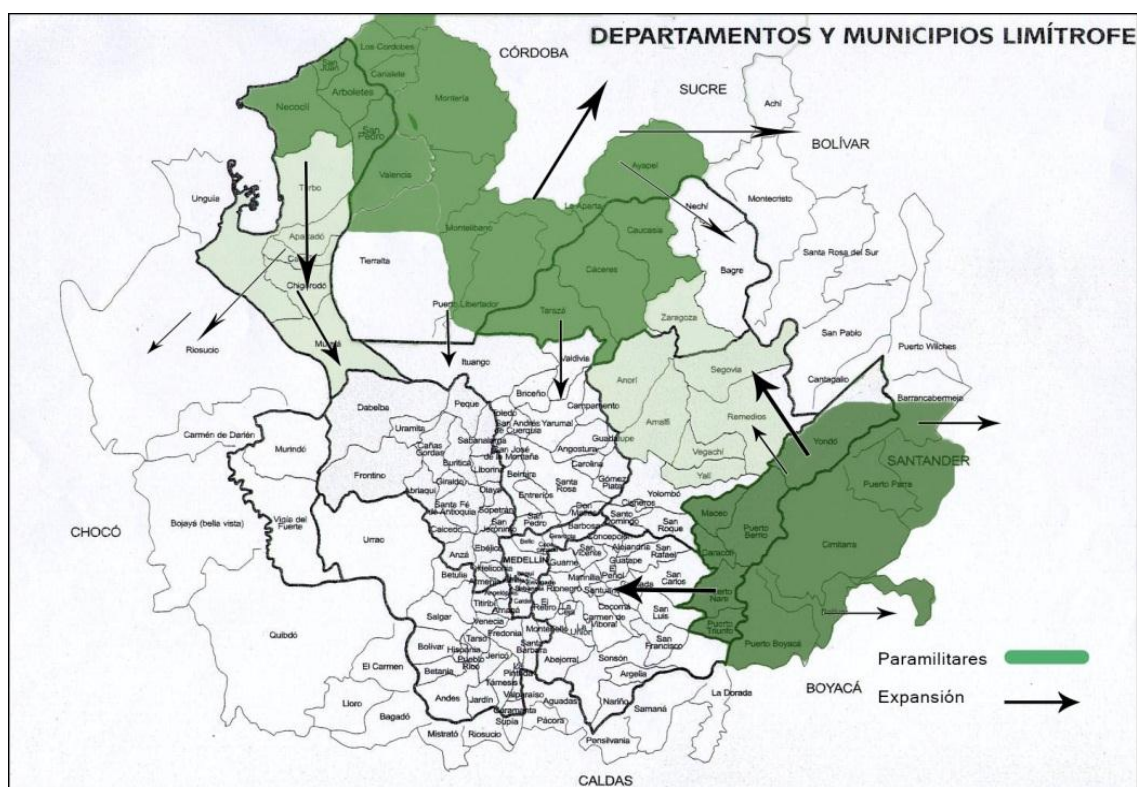
---

<sup>65</sup> Los asesinatos selectivos dificultan la identificación del grupo armado que lo ejecuta, por ello se convirtió en la modalidad de violencia que más muertes ocasionó en el país a final de siglo, el Grupo de Memoria Histórica las calcula en 150.000 personas y concluye “que nueve de cada diez homicidios de civiles en el conflicto armado fueron asesinatos selectivos” (GMH, 2013).

<sup>66</sup> El desplazamiento masivo sirvió para reestructurar la distribución general de la propiedad de la tierra. Los terratenientes que prestaron su concurso para fortalecer el paramilitarismo lo veían como una fórmula expedita para evitar más tomas en sus haciendas, recuperar y asegurar la tenencia de la tierra. Los narcotraficantes lo usaban para comprar a buen precio grandes extensiones. (Cepeda y Rojas, 2008: 42).

## Mapa No 13

### Organizaciones Paramilitares en Antioquia 1993 – 1997



Fuente: García, 1998; Romero 2003; Grupo Memoria Histórica, 2013

Pero en este mismo momento, comienzos de los años noventa, uno de los mejores aliados en la consolidación de las Autodefensas, el Cartel de Medellín, se encontraba en el momento más álgido de una guerra contra el Estado. La lucha contra el narcotráfico liderada por Estados Unidos presionó al Gobierno colombiano para definir a los carteles de la droga como el nuevo enemigo interno<sup>67</sup>, lo que posteriormente conllevó a un resquebrajamiento de la alianza con Pablo Escobar y en 1992 los hermanos Castaño Gil ya se entraban en una confrontación armada contra el líder del Cartel de Medellín<sup>68</sup>.

<sup>67</sup> Esta guerra inició desde mediados de los años ochenta, cuando Pablo Escobar dio la orden de asesinar al Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (1984), al Coronel de la Policía Jaime Ramírez Gómez (1987), al director del periódico El Espectador Guillermo Cano (1987), el precandidato presidencial Luis Carlos Galán (1989), entre otras personalidades. Pablo Escobar se enfrentó directamente con el Estado para evitar la extradición a Estados Unidos y defender su imperio de la droga, por medio de la “ley del plomo y de la plata” que combinó la utilización de carros bombas, asesinatos selectivos a través de sicarios y la generalización de la corrupción a funcionarios públicos.

<sup>68</sup> Este hecho generó un carácter dual del paramilitarismo frente al Estado, amigo en la lucha contrainsurgente y enemigo en la lucha contra el narcotráfico.

## **La guerra contra Pablo Escobar y transformación del proyecto paramilitar a mediados de la década de los noventa del siglo XX**

En este periodo, Fidel Castaño lideró la creación de la organización ilegal denominada los Perseguidos por Pablo Escobar, los PEPES, que reunía a un grupo de narcotraficantes y paramilitares que dejaron de apoyar económica y militarmente a Pablo Escobar en su guerra contra el Estado, lo que los convirtió en objetivos militares del capo del Cartel de Medellín. Esta organización acordó apoyar al Bloque de Búsqueda de las Fuerzas Militares para asesinar a Pablo Escobar.

En el segundo semestre de 1992, a mediados de agosto, hacía cerca de 30 días se había fugado Escobar y decidimos declararle la guerra abierta, y conformamos con mi hermano Fidel y “Don Berna”, el grupo de los PEPES, perseguidos por Pablo Escobar. Esto fue semanas después de la muerte de los Galeano y los Moncada, cuando Fidel se convenció de lo que yo le decía, pues Pablo Escobar desató una persecución mortal a sus mejores amigos y socios, entre los que estaba Fidel Castaño. A mi hacía rato me quería matar. Quince meses después, el dos de diciembre de 1993, Pablo Escobar estaba muerto gracias a los PEPES y su unión con el Estado (Aranguren, 2001: 142).

La persecución a Pablo Escobar, auspició el establecimiento de una estrecha alianza entre miembros de la Fuerza Militares, el Cartel de Cali y los hermanos Castaño. Según Gustavo Duncan, ante la amenaza que suponía el líder del Cartel de Medellín, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) no reparó en que la Policía y el Ejército colombiano aceptaran la ayuda de reconocidos narcotraficantes y criminales para dar de baja a Escobar.

Pese a que los Pepes se disolvieron enseguida fue dado de baja Escobar, su proceso de conformación y experiencia operativa traería consigo un fortalecimiento del proyecto de autodefensas de Carlos Castaño. A la consecución de una autonomía y un poder propio con respecto a los narcotraficantes urbanos y el establecimiento de contactos valiosos en las fuerzas de seguridad del Estado, habría que sumar la formación de cuadros vitales para la construcción de un ejército capaz de organizar el Estado y el orden social de regiones enteras bajo el mando de un “hombre fuerte” (Duncan, 2006: 276-277)

Por lo tanto, con la derrota de Pablo Escobar y el desmantelamiento posterior de los Carteles de Medellín y de Cali, las Autodefensas de los hermanos Castaño Gil demostraron no sólo su capacidad militar para enfrentar directamente al narcotraficante más poderoso del país, sino también, su capacidad para dominar a los demás narcotraficantes, monopolizar el negocio de la droga en sus zonas de dominio. Pero

además los ejércitos privados de los hermanos Castaño comenzaron a tener la capacidad de controlar territorios donde históricamente las guerrillas se había consolidado.

Entre los años 1993 y 1994, el proyecto paramilitar entró en una nueva fase evolutiva, la de construcción de ejércitos regulares capaces de disputar a la guerrilla el control territorial de regiones enteras durante periodos de tiempo indefinidos a partir del apoderamiento de las funciones de Estado. (Duncan, 2006: 294).

En este contexto, después de finalizar la guerra contra el Cartel de Medellín, los hermanos Castaño retomaron la estrategia de expansión paramilitar, ahora desde el sur del departamento de Córdoba hacia la región del Urabá antioqueño, territorios históricamente dominados por las guerrillas, en el norte por el EPL y en el sur por las FARC. Uno de los principales centros de disputa fue el eje bananero, la región más productiva del Urabá, comprendido por los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo. Con esta expansión territorial, las autodefensa buscaron controlar un importante y extenso corredor estratégico comprendido por el eje Meta, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Córdoba y Urabá.

En 1994 fue asesinado Fidel Castaño y su hermano Carlos continuó coordinando el proyecto paramilitar y, junto con otros jefes paramilitares como Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez”, Carlos Mauricio García conocido como “Rodrigo Doble Cero”, Diego Fernando Murillo alias “Don Berna”, Freddy Rendón conocido como “el Alemán” y Salvatore Mancuso, fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, que se caracterizaron por la construcción de un conjunto de ejércitos cohesionados y disciplinados, con doctrina e iconografía propia.

En el departamento de Córdoba y en la vecina Urabá, las temidas ACCU, la organización paramilitar y contrainsurgente más consolidada del país, sentaron su cuartel general y construyeron una sólida red de apoyo e influencia local y regional que va más allá del dominio ejercido directamente por los aproximadamente 6.000 combatientes organizados bajo su dirección. Con esta fuerza, además de protección para sus asociados, las ACCU han aterrorizado a lo que sus dirigentes llaman «los guerrilleros de civil», población desarmada con diferentes tipos de relación con la guerrilla, sus planteamientos, o simplemente coincidente con ésta en el campo de la oposición política y la movilización social.. Al funcionar como una organización político-militar, las ACCU han forjado una «comunidad política imaginada» que compite con las lealtades al Estado central y al proyecto político de la insurrección guerrillera. Aquéllas han liderado las AUC, una organización con perspectiva nacional, financiada por ganaderos, comerciantes, transportadores, agroexportadores y narcotraficantes, que actúa en cooperación o con el consentimiento tácito de sectores de las Fuerzas Armadas y la Policía (Romero, 2003: 75-76).

La creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en 1994 y de las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997, les permitió a los paramilitares transformar la dinámica y las relaciones de poder dentro del campo militar colombiano, sobre la base de su articulación con las estrategia antisubversiva de las Fuerzas Militares, su inmersión en las actividades del narcotráfico, así como del apoyo que obtuvieron de las élites políticas y económicas rurales en las zonas donde se consolidaron.

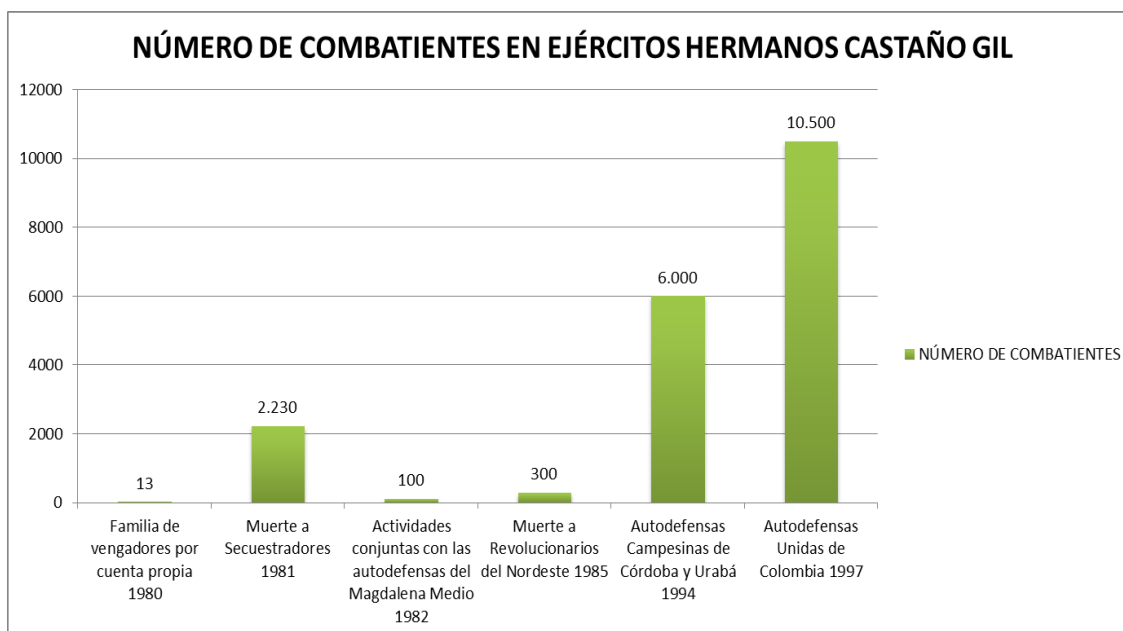
En este sentido, es importante resaltar que la fuente del poder paramilitar de los hermanos Castaño Gil se fundamentó en la acumulación de capital militar y capital económico, los cuales fueron esenciales en su capacidad para controlar territorios.

Carlos Castaño aumentó su capital militar de 13 familiares orientados a hacer justicia por su propia mano en 1980 a un ejército de 110 hombres armados en 1982 que ayudaron en labores conjuntas contra la subversión con las Autodefensas del Magdalena Medio, hasta que logró, en el año 1994 concentrar 6.000 hombres entrenados, cohesionados, con disciplina y clara organización jerárquica en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. El capital militar, reflejado en el número de hombres entrenados, armados, con habilidades y disposiciones para la guerra, fue la base de su estrategia antisubversiva que se centró en los asesinatos selectivos, las masacres, los desplazamientos forzados y en la política de tierra arrasada.



Gráfico No 2

Número de combatientes en Ejércitos de los hermanos Castaño Gil entre 1980 y 2001



Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, 2003; Romero, 2006; Castro, 1996.

Pero la acumulación de este capital militar también requirió la acumulación de capital económico, lo que demandó el desarrollo de una economía de guerra. Durante su trayectoria paramilitar los hermanos Castaño configuraron una economía de guerra que inicialmente se fundamentó en actividades de contrabando, robo, explotación ilegal de recursos, pero rápidamente comenzó a depender de las donaciones de sus promotores, los impuestos a la seguridad de los empresarios ubicados en sus zonas de dominio<sup>69</sup>, hasta que terminó dependiendo de los recursos del narcotráfico.

En materia de finanzas, los documentos del gobierno revelan que la organización le cobra una cuota mensual a los ganaderos y hacendados de las regiones hasta donde ha llegado su influjo. La cuota pagada por los narcotraficantes es mucho mayor y, según algunos testimonios, los paramilitares se estarían financiando casi exclusivamente con las contribuciones de los "capos", pues las mensualidades de los hacendados no narcotraficantes tendrían casi un carácter simbólico y difícilmente bastaría para cubrir los gigantescos gastos que han aumentado no sólo por cuenta del armamento y la infraestructura de transporte y comunicaciones, sino de los sueldos que reciben los distintos empleados de la organización<sup>70</sup> (Semana, Dossier Paramilitar, Mayo 08 de 1989).

69

70 Según el investigador Camilo Echandía "entre los factores que explican la presencia de las autodefensas, el narcotráfico es el principal" (Echandía, 2013: 14).

En este sentido, Carlos Castaño afirmó que:

Lo primero que uno descubre es que ninguna guerra se financia lícitamente. ¡Jamás!... Tuvimos una mina de oro en Amalfi, con papeles y todo, no daba oro, pero justificaba los robos de mercancía que hacía Fidel en Medellín... Un día robaban llantas, otro plantas eléctricas, después lotes de motobombas. Con la mina de oro se justificaba la plata y toda se le invertía a la guerra... Eso fue al principio, después surgieron las ayudas y las donaciones de la gente, víctima de la guerrilla. Algunas casi en secreto: hoy el sistema de donaciones de simpatizantes antiguerrilleros es más moderno. Siempre están circulando en el país cincuenta cuentas a nombre de gente nuestra, los números de cuenta pasan anotados en papelitos de simpatizantes a simpatizante, de reunión en reunión, de coctel en coctel, y el que quiere enviarle dinero a la autodefensa, lo hace a través de una consignación anónima o en efectivo. (Aranguren, 2001: 84).

Por medio de esta confluencia de capitales y de relaciones con élites rurales regionales, los hermanos Castaño Gil transformaron su proyecto paramilitar antsubversivo en un proyecto político, económico y militar en los territorios bajo su control.

¿Qué hacemos entonces aquí (en los territorios “liberados”)? Comenzamos por darle trabajo a toda esta gente que vive tan dispersa. Nosotros los reunimos para que vivan mucho más cerca. Les procuramos el agua haciéndoles represas. Les prestamos una retroexcavadora y en dos horas hacen un pocito, mientras se busca el lugar para hacerles una represa grande. Se les lleva agua para que tengan donde bañarse, para que dejen de sufrir una cantidad de necesidades y, una vez aglutinados se les hace la escuela y el puesto de salud. Con esto estamos consiguiendo algo de infraestructura... Es que la guerrilla argumenta que ellos están donde no hay Estado. Nosotros decimos lo mismo, pero yo pienso que la guerrilla busca eso como pretexto para asentarse en algún lugar... Es que yo entiendo que el gobierno en gran parte tiene responsabilidad en el abandono de regiones como esta” (Castro, 2006: 199-200).

Al respecto, Gustavo Duncan señala que los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, no sólo se apropiaron de una parte de los excedentes de la producción local a manera de cobro de un impuesto por regular las transacciones y los derechos de propiedad, sino que “también dieron forma a la economía local, al proyectar los ingresos del narcotráfico y las transferencias públicas como principales fuentes de producción de riqueza, al determinar los sectores y la proporción de los recursos que se destinan para el consumo y la inversión, al imponer la naturaleza de la distribución de la riqueza entre la población y, en definitiva, al decidir el tipo de bienes que la sociedad produce y aquellos que está en capacidad de importar desde otras economías” (Duncan, 2006: 39-40).

Por su parte, en términos políticos, Carlos Castaño afirma que en estos territorios “no tengo políticos subalternos, y no importa el que gane. El que sea elegido tiene que tenerme en cuenta” (Aranguren, 2001: 56), sobre lo cual Salvatore Mancuso complementa:

No sólo nos interesa derrotar a la guerrilla, también deseamos el progreso de nuestras zonas y si esto implica que se le acabe el fortín a numerosos políticos se les acabará. Los que más se quejan son los corruptos de la región pues ahora les resulta imposible mantener sus intereses particulares... En algunas regiones, la Autodefensa ha demostrado que es posible mejorar las vías, la salud, el empleo, tener maestros y generar progreso en la región. Logramos lo que los políticos nunca alcanzaron, tener la región en el momento de desarrollo que nosotros la tenemos” (Aranguren, 2001: 248-249).

Por lo tanto, con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, de Carlos Castaño, se desarrolló una nueva etapa del paramilitarismo en Colombia, en primer lugar porque contaba con un aparato militar con capacidad de controlar territorios, había desarrollado un modelo coactivo para controlar poblaciones, de igual forma creó un ejército masivo cohesionado bajo un riguroso mando y finalmente comenzaba un proceso de monopolización del negocio y de los excedentes del narcotráfico, con lo cual pudo optar por un control autónomo de regiones enteras.

Es sólo entre 1994 y 1996, cuando surgen las ACCU, que los aparatos coercitivos en las regiones colombianas se convierten en una fuente de poder superior al resto de los actores sociales. Sobre las comunidades se impondría un ejército con capacidad suficiente para amenazar y proteger a la población durante periodos de tiempos indefinidos. Los anteriores aparatos violentos que existían en las regiones no estaban en condiciones de imponerse sobre otras fuerzas sociales, económicas y políticas, eran dependientes de algún otro tipo de poder... El principal símbolo de la nueva hegemonía de los ejércitos sobre las comunidades locales sería la manera como su presencia sobre la vida cotidiana adquiriría un carácter de visibilidad, que se reflejaba en su función de guardianes del orden cotidiano (Duncan, 2006: 47).

En este sentido, el proyecto de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá terminó orientándose a la configuración de un orden social, político y económico en los territorios bajo su dominio, con lo cual trascendió la dinámica del campo militar y sus luchas hicieron parte también del campo de poder regional y estatal.

Desde que Carlos Castaño y los demás miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, a mediados de los noventa, introdujeron una nueva doctrina para la construcción de ejércitos privados al servicio de los “hombres fuertes” de las comunidades y difundieron su creación, un nuevo orden social se impuso en muchas de las regiones rurales y semiurbanas del país. Se trataba del *Estado* de los señores de

la guerra, de toda una revolución en las relaciones de poder, de una nueva forma de extraer tributos, de regular la economía, de administrar justicia, de brindar protección, de organizar la prestación de servicios básicos y de ejercer el monopolio de la coacción (Duncan, 2006:15).

De esta manera, las Autodefensas de los Hermanos Castaño Gil se transformaron de una organizaciones paramilitar orientada a la defensa y control territorial, hacia una organizaciones armadas con un proyecto alternativo de desarrollo y de dominio regional que competía no sólo con el orden propuesto por las guerrillas comunistas, sino que también terminó compitiendo con las élites regionales y nacionales.

Finalmente, se puede concluir también que el desarrollo de poderes emergente locales y regionales, como el de los paramilitares, las guerrillas y los narcotraficantes, terminaron generando un espacio social y de lucha por imponer, en los territorios bajo su control, el orden político, económico y social que cada uno de ellos representaba, lo cual terminó entrando en tensión o en competencia con el orden regional tradicional así como con el orden estatal dominante.

## **CAPÍTULO V**

### **LA “PACIFICACIÓN DE URABÁ”**

#### **Introducción**

En la segunda parte de la presente investigación se ha llevado a cabo un estudio de las trayectorias de Álvaro Uribe dentro del campo político y de Carlos Castaño dentro del campo militar a nivel regional, sobre esta base a continuación analizaremos la confluencia de ambas trayectorias de vida, así como de las luchas políticas y militares orientadas al control territorial y de poblaciones, presentada en la región de Urabá a mediados de la década de los noventa del siglo XX.

Si bien esta confluencia fue un fenómeno que se presentó en varias regiones del departamento de Antioquia, el caso de Urabá permite observar con mayor claridad cómo el proyecto político uribista y el proyecto paramilitar de Carlos Castaño se entrecruzaron espacial y temporalmente en medio de la confrontación armada sostenida contra las guerrillas comunistas. Pero, a su vez, su estudio permite comprender la existencia de un campo de poder regional donde se articularon el conjunto de luchas políticas, económicas y militares orientadas hacia el control de territorios y de poblaciones por parte de élites regionales y nacionales, organizaciones guerrilleras, paramilitares y narcotraficantes.

#### **Urabá: una historia de reproducción de violencia**

Durante la segunda mitad del siglo XX la región de Urabá se convirtió en un territorio en disputa por parte de diversas agrupaciones políticas, económicas y militares con importante influencia en el departamento de Antioquia. En primer lugar, por parte de élites rurales periféricas y de campesinos sin tierra de la región que buscaron acceder a sus recursos naturales y tierras productivas para dedicarlos a actividades de ganadería y agricultura, a través de un violento proceso de apropiación. De igual forma por parte de élites económicas y políticas de Medellín y Bogotá que buscaron implementar una economía agroindustrial con el apoyo de multinacionales bananeras, así como la explotación de sus recursos naturales y del puerto marítimo que ella ofrecía. Finalmente

por los ejércitos estatales, contra estatales y paraestatales que tenían presencia en la región, entre ellos las Fuerzas Militares, las guerrillas de las FARC y del EPL, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, así como ejércitos privados del narcotráfico, los cuales pretendían consolidarse en este estratégico territorio que históricamente se caracterizó por estar poco integrado al proyecto de “pueblo región antioqueño”.

En Urabá el conflicto armado se consolidó debido a su importancia geoestratégica, el escaso o ausente control del Estado sobre este territorio, sus importantes recursos naturales, la heterogeneidad cultural de agentes que poblaron la región (indígenas, afrodescendientes, campesinos migrantes de la Costa Atlántica, Chocó, Bolívar, Santander, Córdoba y Antioquia, jornaleros, terratenientes, ganaderos, empresarios agroindustriales) y su escasa cohesión social. Factores que fueron determinantes en la estrategia de controlar militarmente este territorio por parte de organizaciones guerrilleras, Fuerzas Armadas, élites regionales y paramilitares, lo que conllevó a que Urabá se convirtiera en una de las regiones más violentas del país.

Entre 1960 y 1988 se incrementó en esta región el proceso de colonización y cambiaron las características propias de una zona de frontera, puesto que el Urabá se configuró como una zona agroindustrial ligada al mercado internacional, se fortaleció la economía campesina y comenzó un proceso de urbanización que continúa hoy en día (Aramburo y García, 2011: 269). En el marco de estas transformaciones se instauró el proyecto revolucionario de las guerrillas comunistas, el cual comenzó siendo agrarista y posteriormente dio un giro hacia las problemáticas urbanas, especialmente por los conflictos de la agroindustria y del proceso de urbanización presentado en el Eje Bananero (subregión comprendida por los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo), lugares donde se concentró la mayor riqueza y desarrollo de la región<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Desde finales de la década de los años cincuenta, el desarrollo agroindustrial de la región de Urabá se basó en la producción bananera, proceso que estableció una economía agroindustrial que ocupó alrededor de 30.000 hectáreas de tierra de la zona central del Urabá, allí surgió, por lo tanto, una economía de enclave, actividad de extracción sin mayor regulación por parte del Estado, lo cual repercutió posteriormente en una serie de conflictos sociales y laborales.

Las guerrillas de las FARC y el EPL se establecieron en Urabá desde los años sesenta del siglo XX, en el marco de conflictos por el acceso a la tierra y a la explotación laboral presentada en las empresas agroindustriales bananeras. Allí lograron establecer un proyecto político militar guerrillero hasta los años noventa (momento en el que se agudizó la confrontación con los paramilitares), fue así como el EPL consolidó su influencia en el norte de Urabá y en municipios fronterizos del departamento de Córdoba, por su parte, las FARC controlaron el sur de Urabá y municipios vecinos del departamento del Chocó, finalmente ambas guerrillas hicieron presencia en el Eje Bananero.

Para acumular poder, las FARC y el EPL requerían bases sociales. Se insertaron con los nuevos pobladores con una propuesta agrarista durante los años más álgidos de afluencia de población. Procedieron a la distribución ordenada de invasiones de tierra urbana y rural, a definir derechos de explotación y posesión de recursos madereros y pesqueros, a dirimir conflictos entre vecinos, controlar la delincuencia menor y a protegerse de ataques externos. Con la llegada del capital agroindustrial sumaron a sus objetivos agraristas la lucha en contra del capital, entablaron relaciones extorsivas con el empresariado agroindustrial y, en los años ochenta, se enfocaron hacia los centros urbanos del eje bananero infiltrándose en los sindicatos para acumular poder, fortalecer sus bases de apoyo, manipular las relaciones obrero patronales, influenciar la política partidista para controlar las administraciones locales e involucrarse en los movimientos sociales urbanos en demandas por servicios públicos y ciudadanos (Aramburo, 2009: 96).

En este contexto, debido a las condiciones laborales en las empresas agroindustriales bananeras, el incumplimiento en los pagos de salarios y prestaciones, los abusos en el trato por los vigilantes de las haciendas se creó un terreno propicio para que las guerrillas se consolidaran en la región y ganaran una base social de apoyo importante.

Durante la década de los sesenta y principios de los setenta, la economía de la región fue impulsada por el auge de inversiones por parte de grandes empresarios, que contrastaba con las condiciones precarias que tenían los obreros agrícolas, lo que generó un crecimiento notable de las organizaciones sindicales. Esta situación de tensión se vio incrementada a finales de los setenta, en el marco de exigencias por parte del mercado internacional que demandaba procesos más competitivos y con mejores técnicas que disminuyeran los costos de producción, lo que llevó a desmejorar aún más las condiciones laborales. En este marco, se dio además una emergencia violenta de luchas por la recuperación de la tierra protagonizada por organizaciones campesinas, acompañada de movimientos de pobladores urbanos. Sindicalistas y pobladores radicalizaron sus posiciones y promovieron paros cívicos, apoyados por grupos políticos de izquierda. Esta dinámica comenzó a ser influida de manera significativa por la guerrilla, provocando que el escenario de las confrontaciones entre “patrones y obreros” se confundiera con la disputa por el poder político y control territorial (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2006: 7-8).

La estrategia de las FARC y el EPL conllevó, por una parte, a un aumento de su base social de apoyo, pero, a su vez, generó mayor violencia debido a que desarrolló acciones de secuestro y extorsión a propietarios de las plantaciones, amenazas a capataces y vigilantes, así como una presión armada al empresariado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores bananeros.

Paralelamente, estas guerrillas se orientaron a incrementar su poder político en la región, lo que se materializó en el control de los sindicatos bananeros, el EPL con Sintagro y las FARC con Sintrabanano, así como posteriormente de los movimientos políticos Esperanza, Paz y Libertad del EPL y la Unión Patriótica impulsado por las FARC, los cuales fueron creados en el marco de las políticas de apertura democrática desarrolladas por el gobierno de Belisario Betancur.

El poder obtenido por las guerrillas aumentó durante los años setenta y ochenta lo que les permitió ejercer un importante control territorial y poblacional en el Urabá. Según la investigadora María Teresa Uribe, en los territorios bajo su control, las organizaciones guerrilleras se convirtieron en “un verdadero poder, dirimen los conflictos, manejan el orden público, aplican un modelo primario de justicia y reciben un apoyo real de los pobladores, quienes los reconocen como Estado, es decir, como principio de orden y organización” (Uribe, 1992: 250).

Pero durante la década de los noventa, las relaciones de poder en la región de Urabá se transformaron completamente. En primer lugar, se desarrolló una confrontación armada entre las guerrillas de las FARC y del EPL, debido a la desmovilización de este último grupo armado como producto de un proceso de paz con el Gobierno<sup>72</sup>, por otro lado, las Autodefensas de los hermanos Castaño se consolidaron en el departamento de Córdoba, desde donde comenzaron a incursionar en el Urabá antioqueño con el apoyo tanto de empresarios, políticos y narcotraficantes, como de comandos del EPL que se

---

<sup>72</sup> “La entrada de los desmovilizados del EPL a la vida política y electoral, organizados en el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, fue considerada por las FARC como un alineamiento de ese grupo con el Estado. Tal polarización se incrementó con la aparición de los comandos populares, compuestos por desmovilizados del EPL, y con la incorporación de algunos de sus excombatientes al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Ante la violencia de las FARC contra los esperanzados del reinsertado EPL y la violación de los acuerdos de no agresión entre ellos, se produjo el alineamiento de los comandos populares con los paramilitares, que obtuvieron así el tiquete de entrada a la región de Urabá” (Grupo de Memoria Histórica, 2013: 162).



encontraban en guerra con las FARC, finalmente durante la gobernación de Álvaro Uribe (1995-2007) se desarrolló el proyecto de “pacificación del Urabá antioqueño”, que fue coordinado por el general Rito Alejo del Río.

En este contexto, a mediados de la década de los noventa, confluyó espacial y temporalmente el proyecto paramilitar de Carlos Castaño con el proyecto político de Álvaro Uribe, el primero como comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el segundo como Gobernador de Antioquia.

La consolidación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá como actor contrainsurgente ocurrió en un contexto político muy particular. En efecto, Álvaro Uribe Vélez fue elegido gobernador de Antioquia para el periodo 1995 – 1997, y al mismo tiempo, el general Rito Alejo del Río fue nombrado comandante de la XVII Brigada del Ejército con sede en Carepa, en el Urabá antioqueño, a finales de 1995. El Eje de la propuesta de seguridad del gobernador Uribe y de su secretario de gobierno Pedro Juan Moreno, antiguo gerente de la Federación Antioqueña de Ganaderos, FEDEGAN, fue la militarización y las Asociaciones Comunitarias Convivir, también conocidas como cooperativas de seguridad... Con estas dos herramientas, insistentemente mencionadas por las Fuerza Militares como condiciones para el éxito de su trabajo, se buscaba hacerle frente a las guerrillas (Romero, 2006: 369).

Ambos proyectos coincidieron tanto en una oposición a la negociación política del conflicto armado entre el Estado y las guerrillas, como en la justificación y promoción de una derrota militar de las organizaciones guerrilleras como medio único para la solución del conflicto armado.

Por lo tanto, a continuación analizaremos la convergencia tanto de estos proyectos como de sus trayectorias de vida en el marco de la estructuración y consolidación de un campo de poder regional caracterizado por el entrecruzamiento de las luchas políticas, económicas y militares orientadas al control territorial y de poblaciones.

### **Confluencia del proyecto paramilitar de Carlos Castaño y del proyecto político de Álvaro Uribe**

La región de Urabá, desde mediados de la década de los ochenta, se convirtió en una zona estratégica para los objetivos político-militares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, puesto que este territorio no sólo había sido históricamente dominado por la guerrilla sino que también era esencial en su proyecto de expansión

hacia otras regiones del departamento, pero a su vez, porque se ubicaba geográficamente en una posición estratégica que permitía construir un corredor paramilitar con acceso al mar desde el Meta y Magdalena Medio hasta el Golfo de Urabá, necesario para el tráfico de armas y de narcóticos, elementos esenciales en la economía de guerra y en la estrategia de control territorial paramilitar.

Para Carlos Castaño el debilitamiento de las FARC en Urabá no era sólo un problema de los cuantiosos recursos que esta guerrilla recolectaba dentro de las fincas exportadoras, sino también de seguridad para los territorios consolidados por las ACCU en la serranía de Abibe. Para las ACCU era importante disputarles esos recursos de la zona bananera a las FARC, crear un anillo de seguridad en torno a los territorios consolidados y al hábitat de los miembros del Estado Mayor, cerrar vías de abastecimiento de armas y municiones, así como evitar la permanencia en el poder institucional local de sectores políticos con afinidades o coincidencias con la agenda política de la guerrilla (Romero, 2003: 126).

El mismo Carlos Castaño justificó su ingreso al Urabá antioqueño señalando que debía “atacar la parte económica de la guerrilla que es el Eje bananero. Allí es donde más se financian, pues durante toda la vida las bananeras le han dado un aporte en dinero a la guerrilla. La guerrilla en Urabá se ha fortalecido mucho también porque, por miedo, las autoridades civiles han sido tolerantes” (Castro, 1996: 230).

En este proyecto de expansión hacia el Urabá antioqueño las Autodefensas contaron con el apoyo económico, político y militar de empresarios bananeros, terratenientes, ganaderos y comerciantes de la región, así como de sectores de las Fuerzas Militares y élites políticas de Antioquia y Córdoba que buscaban derrotar el dominio guerrillero en esta estratégica región.

Según el jefe paramilitar y coordinador financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Raúl Hasbún, las operaciones antsubversivas de los paramilitares en la región contaron con la financiación de empresarios bananeros, ganaderos y de comerciantes, quien señaló ante tribunales de Justicia y Paz:

A mí me daban tres centavos de dólar mensuales por caja de banano y me entraban más o menos 400 millones al mes. Sumé otros 200 de los ganaderos y otros 100 de los comerciantes. Eran 600 millones de pesos mensuales, que anualmente serían 7.200 millones de pesos. Eso me entraba a mí al año solo de Urabá (Semana, marzo 31 de 2012).

Este capital social y económico acumulado por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá era esencial para el control político y territorial de la región.

Desde su llegada a principios de la década de 1990, los paramilitares tuvieron la intención de apoyar a la empresa y al Estado y cancelar el forcejeo entre los proyectos económico y revolucionario. Con sus estrategias, cambiaron las formas de coerción, defendieron a sangre y fuego el estatus quo y plantearon una lucha de autoritarismos entre bandos amigos y enemigos. Fue una disputa violenta por el control territorial, las organizaciones, la acción colectiva, las instituciones, el Estado, las rentas, la dinámica económica, los partidos, los poderes locales y los mismos sujetos. La intensa escalada paramilitar entre 1990 y 1998 tuvo como fin conquistar la zona norte y centro de Urabá lo que significó un repliegue de la guerrilla hacia el occidente antioqueño, la costa del Chocó, la Serranía del Abibe y el Atrato (Aramburo, 2009: 109).

Las acciones contrainsurgentes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá se orientaron a expulsar a las organizaciones guerrilleras por medio del ajusticiamiento de sus simpatizantes o de población sospechosa de serlo, la intimidación de la población, el control de territorio a través del desplazamiento forzado, la concentración de la propiedad rural abandonada, así como el progresivo control de los poderes locales mediante la manipulación de candidatos y elecciones.

De 1994 a 1998, los paramilitares, al mando de los hermanos Vicente y Carlos Castaño, exterminaron a la Unión Patriótica y a los simpatizantes del Partido Comunista en la región, para frenar el avance de las FARC hacia el norte y aislar al eje bananero de las zonas de retaguardia estratégica de las FARC. Del mismo modo, intentaron apaciguar la protesta laboral y reorientar a los sindicatos; transformaron el mapa político de la zona, dando vida al fenómeno que años más tarde tomaría el nombre de parapolítica (Grupo de Memoria Histórica, 2013: 163).

Según Mauricio Romero, en Urabá la fuerza electoral mayoritaria a finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, la UP, fue eliminada del escenario político como resultado de la violencia en contra de sus militantes y simpatizantes, por el contrario, el Partido Liberal, principal rival político de la UP en Urabá, recuperó parte del espacio electoral dejado por la desaparición de ésta. En la actualidad el Partido Liberal comparte esa mayoría con Esperanza, Paz y Libertad (Romero, 2003: 103).

En general, la estrategia de las Autodefensas no se centró en la confrontación armada directa contra las guerrillas sino en la acción coactiva hacia la población civil. Para las Autodefensas todo campesino que ha colaborado con la guerrilla, es clasificado como enemigo militar y, por lo tanto, es objeto de agresiones mortales, de desplazamiento forzoso, amenazas y de otros tipos de persecución, con ello no sólo se ataca a los

presuntos colaboradores de la guerrilla sino también a los líderes políticos y dirigentes sociales representantes de la población marginada (Huhle, 2001). El mismo Carlos Castaño reconoció que esta confrontación violenta conllevó a una compleja degradación del conflicto armado:

Los momentos más violentos se comenzaron a vivir en 1995 y 1996, cuando la guerra de las FARC y el EPL se recrudeció. Las Autodefensas aprovecharon este conflicto y ejecutaron selectivamente a individuos colaboradores de las FARC y EPL, prolongándose el enfrentamiento militar entre ambas guerrillas y nosotros hasta la extinción del EPL. Las guerras no son limpias y ninguna puede serlo. Parte del EPL se rindió ante las Autodefensas y algunas disidencias se convirtieron en nuestros aliados en la guerra contra las FARC, los Comandos Populares y su líder "El Pecos" trabajaron para la Autodefensa. La degradación del conflicto alcanzó el máximo al hacerse excesivas las masacres. Se provocaban como carambolas, un golpe incitaba a otro golpe. Cada fin de semana los grupos armados nos contestábamos entre sí con ejecuciones masivas de colaboradores o simpatizantes. Aquella época fue terrible para mí como persona y comandante. Se vivió una guerra de una orda contra otra orda, bestias contra bestias. Confieso que no era capaz de ver los noticieros y creo que allí fallecieron tanto inocentes como culpables (Aranguren, 2001: 222).

Paralelamente a la expansión y consolidación del proyecto paramilitar de Carlos Castaño en la región de Urabá, se desarrolló la campaña política de Álvaro Uribe Vélez a la Gobernación de Antioquia que finalizó con su victoria sobre el candidato conservador Alfonso Nuñez Lapeira, con una diferencia de tan sólo 480 votos.

En 1994 Álvaro Uribe Vélez por medio de su facción política el Sector Democrático, perteneciente al Partido Liberal, realizó una alianza con la facción conservadora Nueva Fuerza Democrática para impulsar su candidatura como gobernador de Antioquia. Esta alianza le permitió ganar las elecciones del 30 de octubre de 1994 con 258.284 votos. Durante su mandato gobernó a través de un estratégico reparto del aparato burocrático entre diversos sectores que se adhirieron a su proyecto político, entre ellos, liberales, conservadores, guerrilleros desmovilizados e indígenas, lo que reflejó su habilidad para generar cohesión política por medio de los recursos y la burocracia del Estado.

Durante su gobernación se rodeó de tecnócratas y de políticos. De liberales y de conservadores. De reinsertados del M-19 y del EPL. De indígenas y de mujeres. "Uribe dice que hay que darle un poquito de poder a todo el mundo y así lo hizo durante su mandato", afirma Roberto Hoyos, presidente del gremio bananero Augura. Trabajó inclusive con sus contrincantes políticos. En esa ocasión, por ejemplo, Luis Alfredo Ramos no lo apoyó y, sin embargo, Uribe le dio tres cargos importantes en el gobierno. Durante su campaña a la Presidencia convocó por igual a Laura Pizarro, la viuda del ex comandante del M-19, y al general retirado Rito Alejo del Río, un recalcitrante antisubversivo. Incluir a personas de distintas tendencias políticas es en el

fondo una estrategia de un hombre pragmático (Reportaje Semana: Un hombre complejo, mayo 26 de 2002).

El 2 de enero de 1995 Álvaro Uribe se posesionó como Gobernador de Antioquia y durante su mandato, reprodujo de manera radical una tendencia histórica de las élites políticas y económicas de Medellín, relacionada con combinar la práctica del consenso político hacia los territorios y poblaciones que se adhirieron al proyecto de “pueblo región antioqueño”, junto con la práctica de coerción hacia los territorio y poblaciones más violentas y menos integradas al proyecto de dominación de las élites de Medellín, que especialmente se ubicaron en la periferia del departamento (Urabá, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio).

No sólo la administración del conceso en torno a la idea de pueblo-región antioqueño ha sido parte nodal de las prácticas hegemónicas de la coalición política dominante. También lo ha sido, y de manera muy importante, el ejercicio de la coerción, que se ha preservado como una continuidad y revela el carácter conflictivo del proceso de configuración regional. A lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX, el uso y la amenaza de la violencia ha servido para diversos fines. Ha sido un instrumento privilegiado para la conservación del control del aparato de Estado, la preservación de lo acumulado o la acumulación, y la adecuación infraestructural del territorio en el marco de situaciones conflictivas. Por consiguiente, ha funcionado como estrategia de contención y/o resolución de conflictos, y de disciplinamiento de la sociedad regional subalterna (Franco, 2005: 171).

Para enfrentar la consolidación de las guerrillas en el Urabá antioqueño, el gobernador Álvaro Uribe utilizó dos estrategias que conllevaron a una profunda militarización de la política de orden público en el departamento de Antioquia, por un lado, promovió la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privadas, CONVIVIR, y por otro lado, declaró la región como zona especial de orden público, así mismo nombró alcaldes militares en las zonas de mayor conflicto armado a nivel departamental.

Las cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privadas, conocidas como CONVIVIR, tuvieron como base legal el decreto 356 de 1994 que comenzó su trámite durante el Gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994) pero fueron aprobadas en el periodo presidencial de Ernesto Samper Pisano (1994-1998). Las cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privadas, CONVIVIR, se orientaron a incrementar la colaboración de la población civil con las autoridades militares para enfrentar a la guerrilla, su cooperación podía ser como informante o como organización armada y debían ser vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Llegaron a existir 414 Cooperativas de Vigilancia<sup>73</sup>. Apenas el 10 por ciento tenía armas... No obstante, las que tenían armas estaban con ellas hasta los dientes. Según registros oficiales, en 1996 había en poder de estas organizaciones 422 subametralladoras, 373 pistolas 9 mm, 217 escopetas de repetición, 17 ametralladoras mini Uzi, 70 fusiles, 109 revólveres 38 largo, y 41 armas de uso restringido –que podían ir desde fusiles Galil hasta ametralladoras M-60, lanzacohetes, granadas de fragmentación, rockets y morteros–. Esto quiere decir que una minoría de Convivir se había convertido en un verdadero ejército en capacidad de hacer operaciones ofensivas (Semana, abril 14 de 2007).

Según el investigador Rainer Huhle “los esfuerzos del Gobierno para controlar las acciones de las Convivir, y particularmente el tipo de armamento que usaban, eran prácticamente nulas. La aprobación de armas largas para un número considerable de Convivir por parte de la Superintendencia de Vigilancia Privada tendió a borrar aún más los límites entre el accionar legal de ellas y los grupos de autodefensa ilegales” (Hule, 2001: 76).

En Antioquia fueron autorizadas alrededor de 65 Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, por medio de las cuales se legalizó la participación de la población civil en el conflicto armado como cooperantes de las Fuerzas Militares en la lucha contrainsurgente, según Álvaro Uribe Vélez:

Decidí, finalmente, que era urgente una ayuda adicional para luchar contra la violencia. Muy a mi pesar y frustración constante, el Ejército y la Policía no tenían armas y personal para contrarrestar los recursos cada vez mayores –provenientes de la cocaína- de los narcoterroristas. Por otra parte, estaba fuera de mi control asignar más recursos a los militares, y las Convivir podían ofrecernos un marco para que la población civil desempeñara un papel activo en la seguridad general, mediante el suministro de información. Siempre he creído que en un país con las dificultades geográficas y sociales de Colombia, la seguridad no sería posible si era responsabilidad exclusiva de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y que todos los ciudadanos tienen la obligación de ayudar a garantizar la permanencia del Estado de Derecho (Uribe, 2012: 100-101).

El gobernador Álvaro Uribe y su Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno fueron los principales promotores de las Convivir en Antioquia, para ello crearon en la Gobernación una oficina para asesorar a las personas o asociaciones interesadas en la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, así como para el otorgamiento de la personería jurídica.

---

<sup>73</sup> Número de Convivir por departamento en 1997: Santander 106; Cundinamarca 83; Antioquia 65; Boyacá 65; Córdoba 19; Caldas 12; Cesar 8; Meta 8; otros 49; Total 414 (Romero, 2003: 64).

¿Por qué si las Convivir estuvieron en todo el país, se cree que fueron un invento de Álvaro Uribe? Cuando éstas se crearon le cayeron como anillo al dedo a Uribe, que era gobernador de Antioquia, y a Pedro Juan Moreno, su secretario de Gobierno. Ambos se encargaron de promoverlas con vehemencia porque siempre concibieron la seguridad como un asunto que involucra a toda la comunidad, no como una guerra de bandos enfrentados. Incluso Uribe defendió la necesidad de que las Convivir tuvieran armamento y pudieran reaccionar contra la guerrilla cuando no estuviera la Fuerza Pública (Semana, abril 14 de 2007).

Poco tiempo después de su creación, las Convivir fueron señaladas de contribuir al fortalecimiento de las organizaciones paramilitares, puesto que en la práctica podían ser una forma de legalizar las Autodefensas o de financiarlas<sup>74</sup>.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Amnistía Internacional, los obispos de la Conferencia Episcopal (con quienes Uribe tenía excelentes relaciones), Fabio Valencia Cossio, la alcaldesa de Apartadó de la época, Gloria Cuartas, y periodistas como la directora de El Colombiano, Ana Mercedes Gómez, criticaron públicamente los abusos de las Convivir e invitaron a Uribe Vélez a replantear su estrategia. Pero él —famoso por su tozudez— no la rectificó sino que la profundizó, creando incluso dos Convivir en Urabá pese a las peticiones en contra que le hicieron Cuartas y el desaparecido monseñor Isaías Duarte Cancino (Reportaje Semana: Un hombre complejo, mayo 26 de 2002).

La Directora del Programa América de Amnistía Internacional, Susan Lee, realizó, el 2 de diciembre de 1996, una fuerte crítica a la política impulsada por la Gobernación de Antioquia de fomento de las Convivir, al concebirlas como organizaciones que podían permitir el crecimiento y legalización de los grupos paramilitares.

En un artículo publicado en SEMANA del 15 de octubre de 1996 bajo el título de “Mano dura”, se cita una declaración del gobernador de Antioquia, señor Álvaro Uribe Vélez, en la cual asegura que Amnistía Internacional, en su reciente visita a Colombia, no encontró nada que objetar en cuanto a las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir). Amnistía Internacional se siente en el deber de aclarar ante los lectores de su revista y ante la ciudadanía colombiana en general, que muy por el contrario de lo señalado por el señor Uribe Vélez, la organización considera el surgimiento de las Convivir como un hecho muy preocupante dentro del contexto de los derechos humanos en Colombia y del aumento de la actividad paramilitar, y así lo señalamos en diciembre de 1994 cuando el gobierno colombiano lanzó el Plan Integral de Seguridad Rural, que incluía la creación de las Convivir. En dicha oportunidad, Amnistía Internacional expresó su preocupación en el sentido de que dichos grupos podrían convertirse en el vehículo ideal para el crecimiento y legitimación disfrazados de los grupos paramilitares... La declaración dada por el señor Uribe Vélez a su

---

<sup>74</sup> Al respecto afirma Raúl Hasbún, estratega financiero de las Autodefensas “uno veía todos los días por las noticias la promoción de las Convivir, entonces se nos ocurrió a nosotros, junto con Vicente y Carlos Castaño, que era una buena idea, porque veíamos que podía haber un problema si un hombre se torcía y contaba que las empresas daban la plata en efectivo... Las Convivir no eran para matar gente, eran para legalizar los pagos de las empresas” (Semana, marzo 31 de 2012).

revista en el sentido de que "se dotará a las Convivir con armas de largo alcance con el fin de convertirlas en grupos de reacción inmediata en apoyo de las Fuerzas Armadas", es sintomática del grado de presión que existe para convertir a dichas asociaciones en un ambiguo recurso de creación estatal, cuya forma de operar se acerca a la de los grupos paramilitares (Semana, diciembre 02 de 1996).

Sobre la base de las denuncias hechas por excesos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Convivir, a finales del año 1997 la Corte Constitucional limitó su funcionamiento.

Cuando la Corte Constitucional inició el trámite de la demanda de inconstitucionalidad en 1997 y declaró inexecutable los artículos del Decreto que permitían el porte de armas largas y las labores de inteligencia, las Convivir transitaron masivamente a la clandestinidad para engrosar los brazos del paramilitarismo. De hecho, reconocidos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Diego Vecino y Rodrigo Peluffo, alias Cadena, fueron representantes legales o integraron las Convivir, llegando a perpetrar con sus armas varios crímenes (Grupo de Memoria Histórica, 2013: 158).

Paralelamente a la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, el Gobernador de Antioquia tomó la decisión de designar alcaldes militares en las regiones con mayor conflictividad armada dentro del departamento.

Las FARC y el ELN se habían empeñado en expulsar a los alcaldes y a todos los representantes del Estado elegidos democráticamente para, así, garantizar el resultado de sus actividades delictivas. Para nuestra consternación, muchos otros alcaldes fueron secuestrados o asesinados... Frustrados y sin los recursos para afrontar el problema del modo adecuado, decidimos ensayar una solución no tradicional: en aquellos municipios donde los terroristas secuestraran o asesinaran a un alcalde, nombraríamos en su reemplazo a un oficial del ejército. Tal como esperábamos esta política fue un poderoso factor de disuasión. Por dos razones: 1) un alcalde militar significa mayor presencia del ejército en la zona y, por lo tanto, una mayor presión sobre los terroristas y sus operaciones de contrabando de drogas, y 2) por lo general, la designación disgustaba a los habitantes del pueblo, que, con razón, valoraban el derecho de elegir a sus representantes civiles; por lo tanto el posible nombramiento de un militar tuvo el efecto de hacer impopulares a los terroristas. (Uribe, 2012: 96).

Poco tiempo después la Corte Constitucional dictaminó que la política de nombramiento de alcaldes militares era inconstitucional. Complementariamente, el gobernador declaró, el 24 de junio de 1996, la región de Urabá como Zona Especial de Orden Público, lo que profundizó la apuesta por la militarización y manejo coactivo del orden público.

Con esta medida de excepción, se limitaron las garantías constitucionales de los ciudadanos con el objetivo de facilitar las acciones de las Fuerzas Militares en contra de



la subversión. La estrategia de militarización por parte de la Gobernación y las Fuerzas Armadas en el Urabá estuvo a cargo del general Rito Alejo del Río, conocido como “el pacificador de Urabá”, quien fue el comandante de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, desde el año 1995. Al respecto señaló el Gobernador:

Nadie mejor que el General del Río comprendió que a Urabá había llegado la hora de la paz, el Estado, la ciudadanía, y a fe que avanzó notablemente. Causas de índole social y política, también la debilidad del Estado, habían permitido que la guerrilla se estableciera allí durante años imponiendo su régimen de terror. Con la posterior llegada de los grupos de autodefensa se dio, entre ambos, una guerra que parecía no tener fin, y que primero mi gobierno y después el General del Río, encontraron en su apogeo. Para finalizarla y recuperar la paz se tenía que imponer el Estado y la comunidad y eso fue lo que procuramos hacer (Uribe, 2002: 75).

Durante esta labor el general Rito Alejo del Río recibió varios señalamientos de permitir el libre desplazamiento y actuación de grupo paramilitares al interior de la zona de orden público. El mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo un enérgico pronunciamiento en contra del general Rito Alejo y la libre operación de los grupos paramilitares en regiones bajo control militar. Este hecho provocó la decisión del presidente Andrés Pastrana de retirar a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán del servicio militar activo (Romero, 2003).

La Brigada XVII del Ejército, en algunos episodios por acción y en otros por omisión, desempeñó un papel clave en este proceso (de exterminio de la Unión Patriótica y apaciguamiento de la protesta laboral), tal como lo muestra el proceso penal que se adelantó contra el general Rito Alejo del Río y como lo afirma la sentencia contra Ever Veloza, alias HH, jefe paramilitar de Urabá que se acogió al proceso de Justicia y Paz. En la sentencia se afirma que miembros de esta Brigada suministraban información a los paramilitares, “capacitaban a los civiles que se asociaban a las Convivir” y aprobaban “la entrega de material bélico” (Grupo de Memoria Histórica, 2013: 163).

Posteriormente, en el mes de agosto de 2012 el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 25 años y 8 meses de prisión al General (R) Rito Alejo del Río por el asesinato del campesino Mariano López Mena en el marco de la Operación Génesis, realizada en la región del Urabá chocoano (caserío Bijao, municipio de Riosucio), dentro de la estrategia general de la “pacificación” de la región de Urabá. Al respecto la resolución proferida por el Juez Guillermo Sanabria Cruz señaló:

El entonces General Del Río llega como comandante de la Brigada XVII en diciembre de 1995 y emprende toda una estrategia para devolver la paz a la región, tal como el

mismo lo señala en las distintas versiones rendidas a lo largo del proceso. Si bien el anterior propósito resulta acorde a la constitución y la ley, lo demostrado es que el General del Río equivocó los medios para llevarlo a cabo, como quiera que, entre otras cosas, el militar optó por proteger y favorecer a los grupos paramilitares de la región, y en lugar de combatirlos prefirió diseñar con ellos una estrategia conjunta a efecto de atender el objetivo común de erradicar la guerrilla de la zona. Al respecto se tiene que diversas pruebas allegadas al proceso dan cuenta que el citado militar sostuvo varias reuniones con jefes paramilitares de la región (Castaño, Doble Cerro, Mancuso, H.H. etc) a efecto de intercambiar información y diseñar una estrategia común para combatir a la guerrilla... Lo cierto es, tal como lo sostiene la Fiscalía y lo demuestra la prueba ya referenciada, en el propósito común de combatir la guerrilla, surge un “contubernio” entre algunos militares de la Brigada XVII, y los grupos de autodefensa de la región. Conforme a las versiones llegadas al plenario no es difícil entender que tal grupo mixto tenía como Comandantes o Jefes, además de Castaño, Mancuso y el Alemán, etc., al mismo General Del Río Rojas, quien por tanto era uno de los encargados de diseñar la estrategia y los operativos junto con aquellos, así como asignar responsabilidades a los comandantes de segunda línea (Capitanes y Tenientes, o paramilitares como “Casarrubia”, “Yunda”, etc.) quienes a su vez transmitían las órdenes a los comandantes de los grupos operativos o ejecutores (Sargentos y Cabos del Ejército, y paramilitares como Luis Muentes y alias “Pantera”, estos últimos integrantes del grupo que ingresó a Bijao), todo lo cual demuestra una verdadera organización piramidal [...] (Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, 2012: 15-17)

Por su parte, en la Resolución de acusación proferida por la Fiscal 14 delegada ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se afirmó:

Señala el ente instructor que la muerte de Marino López Mena no puede entenderse como la simple muerte de un campesino agricultor, sino como un medio para la consecución de un fin mayor, esto es la consolidación del proyecto paramilitar de Castaño y la victoria militar del General del Río, mediante causación de terror, la toma de territorio y el sometimiento de un enemigo común. Dice la Fiscalía que el mencionado militar actuó a través de una verdadera empresa criminal (un “contubernio” producto de la unión de militares y paramilitares), esto es, un aparato organizado de poder con división de funciones, siendo el mencionado el responsable por el homicidio ya referido [...] (Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, 2012: 4)

El 29 de abril de 1999 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá un homenaje de desagravio a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, quienes habían sido llamados a calificar servicio por el presidente Andrés Pastrana, en este homenaje el ex-gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue el principal orador, donde afirmó:

A finales de 1995 llegó a Antioquia el Brigadier General Rito Alejo del Río para hacerse cargo de la Brigada con sede en el municipio de Carepa, región de Urabá. Lideró la decisión de las fuerzas del Estado de jugarse un punto de honor en el área a través de producir el desalojo de los violentos y ganar la confianza de la población

civil. Los horribles hechos de los años anteriores, me condujeron a proponer desde la gobernación de aquel terruño, que se buscara un proyecto de cooperación internacional con presencia de las fuerzas multinacionales de paz de las Naciones Unidas para proteger a la comunidad. Por fortuna, al rechazo oficial de la propuesta sucedió la tonificación de la fuerza pública, que entendió que la violencia no puede ser un mal soportable por siempre... Además de fortalecerla, la fuerza pública requiere apoyo de la ciudadanía y especialmente del estado que contribuye a integrar. Se exige motivarla. Justamente es esta una de las razones del acto que nos congrega: reiterar como civiles nuestro respaldo a las instituciones en cuyas manos se depositan las armas de la República y rendir nuestro testimonio de gratitud a los generales del Rio y Millán (Uribe, 2002: 75).

En este contexto, se puede observar que la estrategia de pacificación de la región de Urabá contó con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, las Fuerzas Militares, las organizaciones paramilitares y empresarios locales, orientados a controlar militarmente un territorio dominado históricamente por las guerrillas, así como a sus pobladores, con el objetivo de inculcar e imponer un proyecto político, económico y militar opuesto al promovido por las organizaciones subversivas.

En el marco del desarrollo de esta estrategia que articuló a élites políticas y económicas rurales regionales, mandos militares y organizaciones paramilitares, tanto Álvaro Uribe como Carlos Castaño coincidieron en afirmar que la militarización y la lucha antisubversiva permitieron el desarrollo económico de la región.

En este sentido, el primero afirmó “los empresarios pudieron regresar luego de una década de ausencia y, con ellos, las prácticas gerenciales en beneficio de la productividad y el empleo. Del borde de la desaparición de la industria bananera, que apenas producía 1.300 cajas por hectárea año se hizo el viraje hacia su estabilidad y el rescate de la competitividad con resultados cercanos a las 3 mil cajas. La concertación entre empresarios y trabajadores vivió momentos formidables” (Uribe, 2002: 77). Mientras que el segundo señaló:

Las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá entraron en el escenario y se intensificó la guerra. Derrotamos a los que quedaban del EPL y con su ayuda expulsamos a las FARC de Urabá. Después de entonces la región ha mejorado considerablemente, desde hace tres años no han ocurrido paros en el eje bananero y los sindicatos unidos de Sintrainagro trabajan hombro a hombro con los empresarios para impulsar la zona... Se ve el progreso y se aprecia la multiplicación de las inversiones, incluso de multinacionales. (Aranguren, 2001: 226).

Pero esta estrategia de lucha contrainsurgente que se orientó a eliminar tanto el control territorial como el dominio político y económico de las guerrillas en la región de Urabá, por medio de una ofensiva Militar coordinada por el Ejército (Brigada XVII), con el apoyo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y de los comandos populares del EPL, así como con el patrocinio de empresarios bananeros, ganaderos y de políticos regionales, conllevó a un aumento de los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado y las masacres, lo que convirtió a la población civil en el objetivo principal de las acciones armadas.

En este periodo, el Eje Bananero experimentó una de las arremetidas más violentas, tras lo cual las FARC retiraron sus núcleos armados de las ciudades y una parte se replegó hacia la serranía de Abibe, mientras que el contingente más grueso lo hizo hacia Mutatá, Dabeiba y Ríosucio. En 1995, también se registró en el municipio de Necolí, la muerte de 130 personas, otras 122 desaparecidas y 2.500 desplazados... En el año 1997, las ACCU iniciaron una ofensiva con el fin de tomar el control del Nudo de Paramillo, lo que se tradujo en asesinatos, masacres y desplazamientos, donde tanto las FARC como las autodefensas, actuaron por medio de acciones que se dirigieron contra la población, mientras que los enfrentamientos directos fueron escasos (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2006: 11-12).

En este escenario de guerra, entre 1994 y 1998 se desarrolló en el Urabá antioqueño el periodo de mayor violencia de toda su historia, tanto los homicidio, las desapariciones y el desplazamiento forzado llegaron a los niveles más alarmantes de todo el país, lo que finalmente conllevó a una compleja crisis humanitaria.

El periodo de la gobernación de Uribe Vélez ha sido el más violento en la historia de Urabá: “se pasó de algo más de 400 homicidios en 1994, a más de 800 en 1995, a más de 1.200 en 1996 y se bajó a algo más de 700 en 1997 y a cerca de 300 en 1998” (Dávila et al., 2001). La tasa de homicidios por 100.000 habitantes osciló alrededor de 500 en esos años en los cuatro municipios del eje bananero, cuando el promedio nacional estaba cercano a los 60, y esto era motivo de desconcierto y alarma nacional e internacional (Romero, 2006: 370).

Pero este conflicto armado no sólo incrementó el homicidio sino también el desplazamiento forzado, puesto que al inicio de la ofensiva militar en 1994 se registraron tan sólo 86 casos, fenómeno que aumentó a 9.431 en 1996, para finales del año 1997 ya habían llegado a 12.625 casos, desarrollándose la situación más crítica en el año 2001 cuando se registraron 15.413 desplazamientos forzados en Urabá (Aramburo y García, 2011).

En este sentido, la violencia fue la representación más radical de los antagonismos históricamente configurados en el Urabá antioqueño, los cuales fueron llevados a su máxima expresión durante la estrategia de “pacificación del Urabá”, lo que reflejó que este territorio, sus recursos y pobladores fueron objeto de disputa por parte de poderosos agentes legales e ilegales como el Estado, las Fuerzas Militares, las élites políticas y económicas regionales, las organizaciones guerrilleras y los grupos paramilitares.

En el marco de este histórico conflicto desarrollado en el Urabá antioqueño tanto Carlos Castaño como Álvaro Uribe confluyeron en el interés de acabar militarmente con el control territorial y el dominio político-militar de la guerrilla en esta región, así mismo sus percepciones, apreciaciones y acciones coincidieron en afirmar una oposición a la negociación política del conflicto armado entre el Estado y las organizaciones subversivas, en la justificación de la derrota militar de las guerrillas como principal estrategia para la solución del conflicto armado, así como en concebir que tanto la militarización como la lucha antisubversiva permitirían el desarrollo económico de la región<sup>75</sup>.

Finalmente este espacio social y de conflicto configurado en Urabá, pero que se extiende a varias regiones de los departamentos de Antioquia y Córdoba, fue una expresión de lo que conceptualmente denominamos como el campo de poder regional, entendido este último como un espacio social de luchas, de antagonismos y de relaciones de poder por parte del Estado, las Fuerzas Militares, las élites políticas y económicas rurales regionales, las organizaciones guerrilleras y los grupos paramilitares, orientadas tanto al control territorial como al control de poblaciones, así como hacia la configuración de un “orden” político, económico y militar en estos territorios.

---

<sup>75</sup> El 4 de septiembre de 2013 los magistrados Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón, de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, compulsaron copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigara al ex presidente Álvaro Uribe Vélez de participar “en la promoción, organización y apoyo a grupos paramilitares y asociaciones Convivir ligadas a ellos directamente, por acción y omisión y concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia, sino después como presidente” (El Espectador, Septiembre 07 de 2013; VerdadAbierta, Septiembre 05 de 2013; Semana, Septiembre 09 de 2013).

En el siguiente capítulo analizaremos cómo las biografías relacionales y el estudio de los campos político y militar nos permitieron conocer la existencia del campo de poder regional en los departamentos de Antioquia y Córdoba, sobre la base de esta reflexión proponemos una definición de dicho campo, posteriormente analizaremos la relación entre el campo de poder regional y la configuración del Estado colombiano, para finalmente terminar con una discusión sobre los aportes y límites de la presente investigación.

# CAPÍTULO VI

## EL CAMPO DE PODER REGIONAL

### CONCLUSIONES

#### **Introducción**

En los departamentos de Antioquia y Córdoba, entre mediados y finales del siglo XX, se desarrolló y consolidó un campo de poder regional, entendido como el espacio social de relaciones de fuerza y de antagonismo orientadas al control militar del territorio, así como hacia la imposición e inculcación de un orden social, político y económico en él, por parte de élites del campo de poder estatal, élites regionales, organizaciones guerrilleras, carteles del narcotráfico y agrupaciones paramilitares, las cuales a partir de la acumulación de suficiente capital político, económico y militar lograron convertirse en agentes activos de este campo<sup>76</sup>.

Varios fueron los acontecimientos históricos que influyeron en la configuración del campo de poder regional en los departamentos de Antioquia y Córdoba, los cuales, en conjunto, reforzaron la importancia de las regiones en el proceso de constitución del Estado colombiano:

En primer lugar, los acuerdos del Frente Nacional que permitieron, en términos políticos, el tránsito de los jefes “naturales” nacionales del bipartidismo hacia los “barones” regionales o “caciques” de los partidos tradicionales y, en términos militares, la autonomía en el manejo del orden público por parte de las Fuerzas Armadas, las cuales se orientaron hacia la búsqueda del monopolio de la violencia física por medio de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, la promoción de alianzas con élites regionales para fortalecer la lucha antsubversiva y una aguda oposición a los procesos de paz.

---

<sup>76</sup> Históricamente, la literatura especializada en Colombia ha buscado caracterizar este fenómeno de control territorial y de poblaciones con nociones como: “Estados de facto” (PNUD, 2003: 88), “Paraestados locales” (Medina, 2005 :78), “Estados fallidos” (Tokatlian, 2008: 67), “Estado de los Señores de la Guerra” (Duncan, 2006:15), “Repúblicas Independientes” (discurso del político conservador Laureano Gómez), “colapso parcial del Estado en sus funciones estratégicas de seguridad y justicia” (Pizarro, 2011), existencia en Colombia de “más territorio que Estado” (García y Revelo, 2010: 31), entre otros. En la presente investigación, haciendo uso de la propuesta teórico y metodológica de Pierre Bourdieu, proponemos el concepto de campo de poder regional como un medio analítico con la capacidad de contribuir a la comprensión holística de esta realidad.

En segundo lugar, el fortalecimiento de las élites económicas y políticas regionales rurales, específicamente de los terratenientes, ganaderos y dirigentes de los partidos políticos tradicionales, quienes asumieron funciones del Estado en los territorios periféricos por ellos ocupados.

Por último, el desarrollo prolongado del conflicto armado interno que a nivel regional se concentró y agudizó en el Magdalena Medio, Nordeste, Bajo Cauca, Urabá antioqueño y sur de Córdoba, allí el enfrentamiento armado entre el Estado, las organizaciones guerrilleras FARC, EPL y ELN, el Cartel de Medellín, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá generó no solamente una crisis humanitaria sino también la apuesta por parte de estas organizaciones del control militar, político, económico y social del territorio y de sus poblaciones.

La comprensión de la existencia de este campo de poder regional se logró a partir de la elaboración de una biografía relacional de Álvaro Uribe Vélez y de Carlos Castaño Gil, puesto que cada uno de ellos creció y fue socializado en el espacio social de relaciones de poder y de competencia donde se desarrollaron los conflictos rurales en torno al acceso a la tierra, a los recursos naturales y al poder político local, así como los conflictos obrero-patronales en la agroindustria, específicamente en las regiones periféricas de los departamentos de Antioquia y Córdoba, territorios que se caracterizaron por una ausencia histórica del Estado, lugares donde simultáneamente surgieron y se consolidaron las élites rurales regionales, las organizaciones guerrilleras, el narcotráfico y las agrupaciones paramilitares.

Pero también fue el espacio social y cultural donde cada uno de ellos llevó a cabo acciones y estrategias que les permitió ingresar como agentes activos en el campo político y en el campo militar respectivamente, así como confluir en el campo de poder regional entre las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX.

Por lo tanto, sus biografías expresan simultáneamente la pertenencia y reproducción de un orden regional, estructural y social establecido, como a su vez, manifiestan la capacidad de dichos agentes para transformarlo, por medio de las disposiciones y



habilidades adquiridas en su origen social, los capitales acumulados, las estrategias y alianzas que establecieron en un entorno de relaciones de fuerzas, de violencia y de competencia dentro de los campos donde participaron activamente.

### **De las biografías relacionales al campo de poder regional**

Las relaciones de fuerza, de violencia y de oposición que se presentaron en los campos político, militar y de poder colombianos a mediados del siglo XX, primero entre Liberales y Conservadores, luego entre el Estado y las Guerrillas comunistas, no estuvieron ausentes en los procesos de socialización de los agentes Álvaro Uribe y Carlos Castaño.

Por el contrario, sus familias no sólo se asentaron en la periferia del departamento de Antioquia, lugar donde se presentó directamente el conflicto violento de la segunda mitad del siglo XX, sino que también terminaron involucradas dentro de las luchas y las estrategias por el dominio del campo de poder estatal y regional.

En este contexto, las familias Uribe Vélez y Castaño Gil vivieron de forma cercana La Violencia bipartidista de mediados de siglo, puesto que en las regiones periféricas de Antioquia y Córdoba se desarrolló de manera aguda la represión oficial conservadora, la incursión de los “pajaros” y la respuesta de las guerrillas liberales.

Pero poco tiempo después, entre 1958 y 1974, entraron en vigencia los acuerdos del Frente Nacional y los antagonismos bipartidistas se transformaron en alianzas de gobierno compartido entre liberales y conservadores, los cuales fueron reproducidos a nivel regional.

Durante el periodo del Frente Nacional, la élite política de Medellín puso en práctica las disposiciones relacionadas con la distribución paritaria de los cargos públicos entre los dos partidos políticos tradicionales, la conformación de redes clientelistas como mecanismos para mantenerse en el poder y, a su vez, promovió la reproducción de los principios de visión y división del mundo social sustentados en el mito del “pueblo antioqueño”, como factores cohesionadores de la sociedad regional.

Pero este proyecto político de integración de la sociedad antioqueña por medio del bipartidismo, la expansión de las redes clientelistas y la actualización del mito del “pueblo antioqueño” no logró transmitirse e imponerse en todo el departamento de Antioquia, sino principalmente en la región céntrica: Medellín, Valle de Aburrá y los municipios tradicionalmente cafeteros. Fue así como en las regiones periféricas del departamento se concentró, a partir de la década de los sesenta, el conflicto violento entre las élites dominantes del campo de poder estatal y regional frente a las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL.

Las subregiones antioqueñas de Urabá, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio, así como el sur de Córdoba, se configuraron como zonas donde históricamente se agudizaron los conflictos relacionados con la exclusión política y económica de sus pobladores, además en estos territorios el Estado nacional y departamental estuvo ausente o su presencia fue débil, cuando buscó ejercer soberanía lo hizo intermitente a través de las Fuerza Militares, lo que conllevó, en la práctica, a que los habitantes de estas regiones no contaran con las garantías constitucionales de acceso a la justicia, la seguridad y a los derechos políticos, económicos y sociales garantizados por el Estado de derecho.

Este conjunto de conflictos contribuyeron para que algunos campesinos, obreros de la agroindustria y estudiantes universitarios de la región, ingresaran en los ejércitos de las FARC, el ELN y el EPL como medio para exigir la inclusión política impedida por los acuerdos del Frente Nacional, la promoción de la Reforma Agraria y la mejora de las condiciones laborales en la industria agrícola, así como la constitución, en el mediano plazo, de un Estado de carácter comunista.

Las organizaciones guerrilleras allí asentadas lograron consolidarse a finales de los años setenta y su estrategia nacional de toma de poder estatal terminó por afectar directamente a las familias Uribe Vélez y Castaño Gil, luego del secuestro, extorsión y asesinato de Alberto Uribe Sierra y Jesús Antonio Castaño, ganaderos y propietarios de tierra de la región.

Estos acontecimientos que llevaron a una confrontación a vida y a muerte entre estas familias y las organizaciones subversivas, era, a su vez, la expresión de la agudización

de la confrontación armada entre el Estado, las élites regionales y las guerrillas comunistas.

Esta confrontación se mantuvo constante durante los años sesenta y setenta del siglo XX, pero a comienzos de los años ochenta cuatro hechos históricos transformaron la dinámica y las relaciones de fuerza dentro del campo de poder estatal y regional:

1. Las organizaciones guerrilleras, surgidas en un contexto de conflictos agrarios, explotación laboral y exclusión política, decidieron expandirse de sus zonas de dominio en las regiones periféricas y de colonización del país hacia regiones de mayor productividad económica y de importancia política y militar. Para poder llevar a cabo esta expansión requirieron desarrollar y consolidar una economía de guerra, la cual se fundamentó en la extorsión, el secuestro, actividades relacionadas con el narcotráfico y posteriormente captaron recursos públicos locales. Este capital económico era necesario para incrementar su capital militar y así poder controlar tanto el territorio como la población en las regiones bajo su dominio. Su crecimiento acelerado y capacidad militar les permitió tener presencia en la mayor parte del territorio nacional, así como sostener combates prolongados con las Fuerzas Militares, lo que se reflejó en su capacidad para desafiar el estatus quo de las élites dominantes del campo de poder estatal, pero a su vez, esta estrategia de expansión guerrillera afectó profundamente los intereses de élites políticas y económicas rurales, especialmente ganaderos, terratenientes y empresarios agroindustriales, quienes se opusieron política y militarmente a su consolidación, factor que agudizó el conflicto armado interno.
2. El gobierno del presidente Belisario Betancurt (1982-1984) realizó negociaciones de paz con las guerrillas, especialmente con las FARC, que permitieron llevar a cabo una tregua militar bilateral, la creación de la Unión Patriótica y el acuerdo para la elección popular de alcaldes, posteriormente se realizaron otras reformas de apertura democrática como la descentralización político administrativa, la elección popular de gobernadores y los mecanismos de participación ciudadana de la Constitución de 1991. Tanto la negociación política con las guerrillas como las reformas de apertura democrática fueron consideradas como una amenaza para las élites políticas y económicas regionales, así como para las Fuerzas Militares. Por un

lado, para los barones electorales regionales el ingreso de la guerrilla a la contienda política y democrática podía significar la pérdida de su dominio electoral o de sus redes clientelistas; para los ganaderos y terratenientes una reforma agraria producto de las negociaciones de paz podía afectar sus propiedades y finalmente para las Fuerzas Militares las negociaciones de paz no sólo eran una victoria de las guerrillas sino una pérdida en la autonomía que habían adquirido en el manejo del orden público, por lo cual, en conjunto, se opusieron directamente a las negociaciones de paz y no apoyaron al gobierno nacional en su estrategia de solución política del conflicto.

3. Las organizaciones de narcotraficantes que habían surgido desde los años setenta se consolidaron en los ochenta y los grandes capos de la droga se organizaron en los Carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, principalmente. El narcotráfico se caracterizó por generar una alta rentabilidad y capital económico lo que permitió el ascenso social de agentes vinculados a la ilegalidad, los cuales lavaron sus activos económicos, entre otras actividades, por medio de la compra de tierras, lo que los convirtió en los nuevos terratenientes del país. El narcotráfico al ser una actividad ilegal conllevaba una confrontación con el Estado, por ello los carteles extendieron la práctica de la corrupción (ley de la plata) y de la violencia (ley del plomo) contra funcionarios públicos. Con el objetivo de legitimar sus acciones los narcotraficantes, especialmente del Cartel de Medellín, se articularon a la lucha contrainsurgente del Estado contra las guerrillas (con ello evitaban también ser afectados por una reforma agraria producto de un acuerdo de paz), pero la presión de Estado Unidos y la violencia del Cartel de Medellín conllevó a la guerra del Estado colombiano contra el narcotráfico (así como al posterior desmantelamiento de los carteles).
4. Las organizaciones paramilitares, específicamente las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, surgieron en medio de la expansión de las guerrillas, la consolidación del narcotráfico y el desarrollo del proceso de paz con el Gobierno Betancur. En este contexto, varios agentes promovieron la creación de organizaciones paramilitares, en el marco de una política contrainsurgente coordinada por las Fuerzas Armadas, que tenía como fundamento el involucramiento de la población civil en el conflicto

armado a través de su colaboración como informantes o como personal civil armado, cuyo objetivo era derrotar a las guerrillas comunistas. Entre los promotores de las Autodefensas se encontraron: terratenientes y ganaderos afectados directamente por las acciones de extorsión y secuestro de las guerrillas; élites políticas vulnerables al crecimiento del capital político de estas organizaciones no tradicionales; narcotraficantes enfrentados con las guerrillas por el cobro de impuestos, negocios de narcotráfico y control territorial; así como Fuerzas Militares que habían definido al comunismo como el enemigo interno. El capital económico necesario para sostener estos ejércitos de paramilitares provino de donaciones, recursos del narcotráfico, impuestos a la “seguridad” y de los recursos públicos locales, con los cuales las Autodefensas pudieron también controlar territorios y poblaciones en el marco del desarrollo de un “orden paramilitar”.

Estos hechos conllevaron a que el proyecto dominante construido por medio los acuerdos del Frente Nacional se fragmentara sensiblemente a finales de los años ochenta, lo que conllevó a una crisis de gobernabilidad, incapacidad para generar cohesión social y política, lo que finalmente se reflejó en el uso sistemático de la coacción física para mantener el orden establecido.

Fue precisamente en este escenario de conflicto y de relaciones de fuerza dentro del campo de poder estatal y regional donde surgió, durante los años ochenta del siglo XX, el proyecto político de Álvaro Uribe y el proyecto paramilitar de Carlos Castaño.

Por un lado, Álvaro Uribe se convirtió en un político profesional y compitió para acceder a cargos del poder ejecutivo y del poder legislativo del país, lo que le permitió influir determinadamente en la política económica, social y militar del departamento de Antioquia, posteriormente en todo el territorio nacional, a través del acceso a los recursos y las instituciones estatales, con el apoyo de élites políticas, económicas y militares rurales y regionales. Su proyecto político se orientó a promover el mantenimiento del orden rural tradicional, el desarrollo económico capitalista, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, la articulación de la población civil en la lucha contrainsurgente y la oposición a los procesos de paz entre el Estado y las guerrillas. Estos elementos le permitieron convertirse en un agente activo dentro del campo político regional.

Por su parte, Carlos Castaño se articuló inicialmente al proyecto familiar de venganza contra las organizaciones subversivas, posteriormente se vinculó a la estrategia de las Fuerzas Militares orientada a impulsar la conformación de Autodefensas Campesinas, con el apoyo de terratenientes, políticos y narcotraficantes regionales, cuyo objetivo era enfrentar los procesos de expansión de las guerrillas comunistas, pero también le permitió ofrecer servicios de seguridad al Cartel de Medellín e involucrarse en el negocio del narcotráfico, así como controlar territorios y poblaciones. Estos elementos le permitieron convertirse en un agente activo dentro del campo militar regional.

Finalmente, las trayectorias de Álvaro Uribe y de Carlos Castaño confluyeron en el campo de poder regional, espacio social y de antagonismo en donde se articularon el conjunto de luchas políticas, económicas y militares orientadas al control territorial y a la imposición de un orden social en los departamentos de Antioquia y Córdoba, lugar también donde sus proyectos políticos y militares se orientaron a garantizar la conservación del orden rural tradicional, la permanencia del Estado capitalista y eliminar a las guerrillas comunistas, específicamente durante los años ochenta y noventa del siglo XX.

### **El campo de poder regional y los “Ordenes” en disputa**

Las luchas dentro del campo de poder regional no son sólo luchas por el control territorial y el control poblacional por parte de los agentes en disputa, sino también por las instauración de un orden económico, político y militar en ellos. Por lo tanto, los agentes con capacidad para controlar militarmente territorios terminan también asumiendo funciones de Estado dentro de las regiones dominadas, como son: la administración de justicia, la regulación de la explotación económica, el control poblacional, la gestión de servicios básicos o la distribución de recursos, así mismo estos agentes influyen en la organización social y política de los territorios.

A nivel regional, estas relaciones de poder y los diferentes “ordenes” en disputa se entrecruzaron territorialmente, en especial en la periferia rural, lo que conllevó a una agudización de la confrontación armadas debido a la coexistencia de una pluralidad de soberanías, leyes y cosmovisiones antagónicas del mundo, así como por el desarrollo de

complejas negociaciones y/o luchas a vida y muerte entre élites nacionales, élites regionales, organizaciones guerrilleras, narcotraficantes y paramilitares.

En este campo de poder regional tres capitales se convirtieron en esenciales para transformar las relaciones de fuerza y las posiciones dentro dicho campo, estos fueron: el capital militar (hombres entrenados y armados movilizados para la guerra interna), el capital económico (dinero, tierra, medios de producción agrícola, recursos del erario público, acumulados en el marco de la confluencia de una economía de guerra y de una economía legal) y el capital político (votos, acceso al aparato burocrático del Estado, conformación de redes clientelistas, orientados al control de la administración pública en los municipios dominados).

La acumulación de capital económico y de capital militar se convirtió en un elemento fundamental para la afirmación del dominio dentro de un territorio determinado, puesto que el primero ofrece la fuentes de financiamiento de los ejércitos y el segundo la capacidad militar para controlar coactivamente el espacio y la población allí asentada, así como para el acceso a nuevos recursos económicos sustentados en las riquezas de los territorios controlados y los impuestos a los pobladores. Por su parte, el capital político fue fundamental para capturar la administración pública local, desde donde se podía impulsar los principios de visión y división del mundo social de los agentes que dominan dicho territorio, promover planes de cohesión política para adherir a parte de la población al proyecto económico, político y social del agente dominante, así como para acceder a capital económico proveniente del erario público.

Por lo tanto, las relaciones de fuerza y de dominación presentadas dentro del campo de poder regional se enmarcaron en una competencia por controlar militarmente territorios y poblaciones, así como por inculcar o imponer el orden político, económico y militar de los agentes dominantes en ellos, así como sus principios de visión y división del mundo social. Los cinco órdenes que estuvieron en disputa y competencia en los departamentos de Antioquia y Córdoba fueron: el orden estatal dominante, el orden rural tradicional, el orden guerrillero, el orden mafioso y el orden paramilitar.

**Orden Estatal Dominante:** por medio de los acuerdos del Frente Nacional y de la adopción de los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, los dirigentes de los

partidos Liberal y Conservador, los directivos de los gremios económicos y los altos mandos militares se orientaron, desde mediados del siglo XX, hacia la configuración y consolidación de un Estado capitalista, bipartidista y anticomunista, para ello estos agentes dominantes del campo de poder estatal se dividieron entre ellos la coordinación y el monopolio de funciones centrales del Estado. Específicamente los dirigentes nacionales del bipartidismo controlaron la administración pública y el reparto milimétrico del aparato burocrático del Estado (fenómeno extendido hasta los años noventa y la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991), los dirigentes de los gremios económicos orientaron el desarrollo económico capitalista del país y promovieron la apertura económica en la década de los noventa, finalmente las Fuerzas Militares asumieron la coordinación y el control de la política de manejo del orden público bajo los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Este proyecto de las élites nacionales dominantes se vio limitado por el creciente poder adquirido por las tradicionales élites políticas y económicas regionales, así como por el fortalecimiento de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y narcotraficantes.

**Orden Guerrillero:** en el marco del desarrollo del prolongado conflicto armado colombiano las guerrillas fueron consolidando territorios bajo su dominio, en ellos ofrecieron funciones estatales como administrar justicia<sup>77</sup>, prevenir delitos, castigar infractores, así mismo establecieron relaciones de intercambio económico con la población civil y cooptaron la administración pública en los municipio de dominio guerrillero<sup>78</sup>. Estos agentes promovieron la configuración de un orden comunista y se caracterizaron por promover tanto una reforma agraria como la transformación del sistema político bipartidista.

---

<sup>77</sup> La administración de justicia “es una función importante de los actores armados en sus zonas de influencia porque, a diferencia del servicio oficial, es expedita y eficaz. Para granjear simpatía entre los pobladores, una de las primeras acciones de la guerrilla o de los paramilitares al llegar a una región es la muerte o expulsión de delincuentes comunes y demás “indeseables”. Más adelante expiden o divulgan su “código de convivencia”, similar pero más intrusivo y a veces más prolijo que el código de policía. La justicia litigiosa o penal es impartida por el jefe militar o comandante de frente” (PNUD, 2003: 68).

<sup>78</sup> Las guerrillas “implementaron una serie de medidas políticas y militares que buscaban intervenir en la democracia local y ampliar los territorios sin presencia del Estado. Establecieron relaciones de intercambio con la población civil al realizar acuerdos con candidatos a alcaldes, con el fin de permitir o no el desarrollo de actividades proselitistas a cambio de beneficiar determinadas zonas con obras, desarrollar clientelismos, entre otros aspectos. Así mismo, ejercieron vigilancia a las administraciones locales, en varios casos enjuiciando, secuestrando y asesinando a los alcaldes de distintos municipios” (Grupo de Memoria Histórica, 2013: 165).



A nivel regional, las organizaciones guerrilleras de las FARC, el EPL y el ELN buscaron constituir este orden a partir del fortalecimiento de su aparato militar, ejerciendo funciones como las de dirimir conflictos entre los pobladores, ofrecerles protección armada, controlar a los jefes políticos locales, cobrando impuestos de guerra a los miembros de los territorios bajo su control y promoviendo una socialización política a fin a su ideología.

**Orden Rural Tradicional:** las élites políticas y económicas de la periferia de Antioquia y Córdoba que habían ganado autonomía en la administración municipal y en el desarrollo de proyectos agrícolas, agroindustriales y ganaderos, compartieron con sus homologas élites nacionales la promoción del Estado capitalista en el país pero se opusieron abiertamente a las reformas de apertura democrática y a la inclusión de las organizaciones guerrilleras en la contienda electoral, a partir de la reinserción de sus militantes y la creación de movimientos políticos propios.

Esta oposición tuvo como objetivo no perder los feudos electorales que habían adquirido a partir de la aplicación de los acuerdos del Frente Nacional a nivel regional, los cuales promovían la alianza bipartidista y la exclusión de otros agentes políticos, así mismo se opusieron a la negociación de una reforma agraria con las guerrillas para no poner en peligro su propiedad privada rural y capital económico, esto conllevó a la defensa de su posición social por medio del uso de la fuerza física, lo que reproducía la tradicional exclusión política y económica. Estos agentes promovieron la configuración de un orden tradicional, terrateniente y clientelista que se orientó a evitar la redefinición de la estructura de poder rural.

Las tensiones más fuertes entre élites nacionales y élites regionales se presentaron durante los procesos de paz entre el Estado y las guerrillas comunistas, particularmente en las negociaciones llevadas a cabo por los presidentes Belisario Betancur a comienzos de los años ochenta y de Andrés Pastrana a finales de los noventa. Las élites regionales rechazaron el reformismo del gobierno central y se opusieron a las negociaciones de paz, desafiando así las directrices nacionales.

Las Fuerzas Militares, aliadas históricas de las élites políticas y económicas nacionales abiertamente se opusieron a la negociación política del conflicto armado<sup>79</sup>, por el contrario, debido a la autonomía que habían adquirido en el manejo del orden público y a la adopción de los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, optaron por favorecer una política coactiva de control poblacional y manejo del orden público, por ello promovieron la creación de autodefensas civiles armadas con el apoyo de las élites rurales y de los emergentes narcotraficantes. Con esta estrategia contribuyeron directamente a la consolidación del orden tradicional, terrateniente y clientelista de las élites rurales, e indirectamente al posterior desarrollo del orden mafioso y paramilitar.

**Orden Mafioso:** los grandes narcotraficantes, durante los años ochenta, acumularon altos volúmenes de capital económico, lo que les permitió invertir en los principales negocios relacionados con el lavado de activos, generando con ello una mayor actividad económica en los municipios bajo su dominio, de igual forma invirtieron en la compra de tierras y en la creación de ejércitos privados para la protección tanto de sus propias vidas, propiedades, como del negocio de la droga, pero paulatinamente también fueron transformando su capital económico y militar en capital político, por medio de la financiación de campañas y actividades proselitistas de políticos profesionales, alterando así las relaciones clientelistas regionales y las lealtades políticas<sup>80</sup>.

Para poder mantener su actividad ilegal los narcotraficantes se orientaron a corromper o intimidar a funcionarios públicos, entre ellos jueces, políticos y organismos de seguridad locales, puesto que el éxito de su negocio requería limitar las funciones de justicia y seguridad del Estado colombiano, por ello promovieron la configuración de un

---

<sup>79</sup> Los Militares culparon al presidente Belisario Betancur de haber frustrado su triunfo militar y de haber sembrado la semilla del fortalecimiento guerrillero. La autonomía militar que habían adquirido durante el anterior gobierno de Julio Cesar Turbay se limitó con la nueva visión gubernamental, debido a que la política de paz era un claro intento por limitar la autonomía castrense en el manejo del orden público. Pero el problema no fue sólo la decisión de intentar una solución negociada, sino que el presidente ignoró a los militares en su decisiones sobre el proceso de paz (Leal, 2002: 61-62). Las Fuerzas Armadas rechazaron las negociaciones de paz, oponiéndose públicamente y favoreciendo el uso de técnicas contrainsurgentes (Romero, 2003:9).

<sup>80</sup> “El poder corruptor del narcotráfico permeó a la clase política y a distintas instituciones del Estado, configurando un antecedente de cooptación del Estado que allanó el camino para los actores armados, porque antes de la parapolítica fue la narcopolítica y en muchos sentidos la primera es la prolongación histórica de la segunda. Esta cooptación mafiosa del Estado y la política deterioró los referentes éticos de la acción política y la gestión pública” (Grupo de Memoria Histórica, 2013: 143). En este sentido, la conquista de un espacio de poder económico local por parte de los narcotraficantes reclamaba su correspondiente espacio de poder político y social como medio para asegurar la viabilidad del negocio y su posición dentro de él.

orden mafioso basado en la cultura de la ilegalidad, la corrupción y la violencia como medio para garantizar el éxito individual.

**Orden Paramilitar:** las organizaciones paramilitares que inicialmente crearon ejércitos desarticulados, débilmente formados y con poca capacidad militar, subordinados tanto a los intereses de élites políticas, económicas y militares regionales como de narcotraficantes, posteriormente evolucionaron hacia ejércitos articulados en una organización jerárquica, con doctrina propia, identidad, disciplina interna y dependientes de las ordenes de los máximos comandantes, los cuales en sus zonas de dominio terminaron subordinando a sus mandatos tanto a los antiguos patrocinadores como a los pobladores de los territorios dominados.

Este orden paramilitar manifestó una transformación en las relaciones de poder regional, puesto que en los territorios consolidados extrajeron tributos, regularon la economía, administraron justicia, brindaron protección a cambio de dinero, organizaron también la prestación de algunos servicios básicos y ejercieron coacción física. Estos agentes promovieron la configuración de un orden contrainsurgente, capitalista y mafioso.

Pero una característica de estos cinco órdenes fue su volatilidad, puesto que cambian según las relaciones de fuerza, capitales acumulados y estrategias de los agentes dentro del campo de poder regional y de la capacidad de cada uno de ellos para conservar su dominio específico. Fenómeno que contribuyó a generar una compleja dinámica de relaciones de fuerza, de enfrentamiento, competencia, diálogo y/o cooperación entre dichos agentes por la conservación o transformación de su posición dentro del campo.

Finalmente, en el marco de la configuración del campo de poder regional, así como de las luchas y competencias por imponer o inculcar estos “ordenes”, se puede develar que el monopolio de la violencia física, la dominación política, la soberanía territorial y el control de poblaciones no es un elemento dado, natural o permanente al Estado, por el contrario, es el producto de relaciones de fuerza y de dominación históricamente configuradas tanto dentro del campo de poder estatal como del campo de poder regional.

## **El campo de poder regional y la configuración del Estado colombiano**

En Colombia, durante la segunda mitad del siglo XX, varios acontecimientos históricos impidieron la configuración de un Estado centralizado, con el monopolio de la violencia física y con la capacidad para inculcar un proyecto de dominación política en todo el territorio nacional, lo que conllevó a que el Estado no pudiera ejercer una soberanía territorial y una soberanía jurídica en todas las regiones del país.

En primer lugar debido a que se consolidaron poderosos agentes legales e ilegales a nivel regional, como sucedió en la periferia rural de los departamentos de Antioquia y Córdoba, donde élites políticas y económicas regionales, organizaciones guerrilleras, carteles del narcotráfico y paramilitares confluyeron en una lucha por el control territorial, el control de poblaciones y la imposición de un orden político, económico y militar en las zonas bajo su dominio. Fue en estos territorios donde dichos agentes terminaron ejerciendo funciones del Estado como las de seguridad, administración de justicia, extracción de tributos, explotación económica, prestación de algunos servicios básicos y control político militar del territorio.

En segundo lugar porque a pesar de que las élites dominantes del campo de poder estatal (dirigentes del Partido Liberal y del Partido Conservador, de los gremios económicos y altos mandos de las Fuerzas Militares ) propendieron por legitimar un orden capitalista y bipartidista a nivel nacional a través de las alianzas entre las élites políticas nacionales y regionales (orientación hacia un proyecto político nacional orientado por los principios del Frente Nacional) y de un papel muy activo de las fuerzas militares (búsqueda de monopolio de la violencia física), su proyecto dominante no logró inculcarse e imponerse en todo el territorio nacional, lo que fortaleció el creciente y disperso poder de las regiones.

De esta manera, los agentes dominantes del campo de poder estatal terminaron por convertirse en un jugador más, si bien muy poderoso pero no el único, en la dinámica de competencia y de lucha por el control político, económico y militar del territorio colombiano.

Por lo tanto, puede concluirse que en amplias regiones de la geografía nacional el Estado colombiano no logró hacer una presencia física a través de sus instituciones y no tuvo la capacidad de reproducir simbólicamente su cosmovisión del mundo en dichos territorios, lo que en la práctica se reflejó en una incapacidad histórica de transmitir y legitimar un proyecto de dominación política a lo largo de toda la geografía nacional, fenómeno paralelo a la prevalencia del uso de la fuerza física como medio esencial para mantener el orden establecido.

Finalmente, si bien la teoría sociológica del Estado propuesta por Pierre Bourdieu, tomando como base el proceso histórico de consolidación de los Estados Nación europeos, señala que el Estado “reivindica con éxito el monopolio del empleo legítimo de la violencia física y simbólica en un territorio determinado y sobre el conjunto de la población correspondiente” (Bourdieu, 1994: 98), la presente investigación permitió establecer que el monopolio de la violencia física, la dominación política y el control territorial no son elementos connaturales o dados del Estado, por el contrario, son objetos de lucha y de competencia por su consecución, apropiación y centralización.

### **Aportes de la teoría de los campos a la comprensión del fenómeno estudiado, límites y nuevos problemas de investigación**

La combinación del abordaje metodológico de las biografías relacionales con la teoría de los campos de Pierre Bourdieu nos permitió conocer tanto las condiciones objetivas como las disposiciones subjetivas de Álvaro Uribe y Carlos Castaño, las cuales les aportaron y transmitieron tanto conocimientos como habilidades para entender, decidir y actuar en los campos político, militar y de poder donde fueron agentes activos desde los años ochenta del siglo XX, pero, a su vez, este abordaje teórico metodológico permitió trascender a los agentes y entender la dinámica y las relaciones de poder imperante en cada uno de estos campos.

De igual manera tuvo la ventaja de permitir relacionar diferentes elementos del objeto de estudio que tradicionalmente habían sido analizados y comprendidos de manera separada, lo que posibilitó una interpretación holística y profunda del conjunto de conflictos y hechos históricos que contribuyeron en el desarrollo del campo de poder regional en los departamentos de Antioquia y Córdoba donde confluyeron el proyecto político de Álvaro Uribe y el proyecto paramilitar de Carlos Castaño:

Esto se debió, en primer lugar porque fue posible analizar de manera relacionada los estudios sobre la estructura política, militar y social con las investigaciones biográficas. En segundo lugar porque permitió articular entre sí trabajos caracterizados por la especialización en una determinada área pero no articulados entre ellos, como las investigaciones sobre los campos político, militar y de poder, logrando generar así una visión más integral de estos campos. Finalmente porque facilitó la confluencia analítica e interrelacionada de los estudios nacionales con las investigaciones regionales.

Este conjunto de elementos permitieron elaborar una investigación que involucró simultáneamente el análisis de los procesos estructurales de socialización, reproducción y relaciones históricas de poder, combinado con el estudio de las disposiciones subjetivas de los agentes, sus estrategias y tomas de posición, factores centrales para entender no sólo el sentido de las trayectorias de vida sino también el significado de un periodo histórico.

Por otra parte, en el desarrollo de la presente investigación se encontraron varios temas que no lograron ser abordados y que requieren ser estudiados en posteriores trabajos investigativos, entre los cuales se encuentran los siguientes:

- Elaboración de un estudio que profundice en la comprensión del impacto dentro del campo político y del campo de poder regional de los movimientos sociales, especialmente de campesinos, trabajadores y estudiantes, así como de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, los cuales tuvieron un papel activo durante la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que habían acumulado un escaso capital político, económico y militar.
- Desarrollo de una completa investigación que permita establecer la estructura y dinámica del campo económico regional con el objetivo de comprender mejor las características socioeconómicas de las fracciones de clase en confrontación dentro del campo de poder regional, como lo fueron campesinos, jornaleros, estudiantes, terratenientes y ganaderos, así como entender el impacto que tuvo dentro de este campo la economía ilegal tanto en la emergencia como en el fortalecimiento de otros agentes como los narcotraficantes, los paramilitares y las organizaciones

guerrilleras, finalmente para develar la articulación de la economía ilegal con la economía y la política legal. Esta labor excedía los objetivos y el tiempo del presente estudio, pero la triangulación de estos nuevos datos con la información acumulada sobre los campos político y militar servirá para profundizar mucho más en la comprensión de la dinámica del campo de poder regional.

- La presente investigación se puede complementar y mejorar con el desarrollo de otras biografías relacionales que le den mayor voz a las guerrillas y al Cartel de Medellín lo que ampliaría la comprensión de las subjetividades y condicionamientos sociales de los diversos agentes activos dentro del campo de poder regional.
- Será necesario elaborar estudios sobre otros campos de poder regionales en el país y compararlos entre sí para entender sus semejanzas y diferencias, así como la influencia que han tenido en la estructuración del campo de poder estatal colombiano.
- Finalmente es importante desarrollar una investigación que permita entender la dinámica que hizo posible la expansión del proyecto político de Álvaro Uribe y del proyecto paramilitar de Carlos Castaño desde el campo de poder regional hasta campo de poder estatal entre finales de los años noventa y la primera década del siglo XXI.

Estas son algunas de las temáticas que requieren ser estudiadas por medio de otros proyectos de investigación, lo que, en conjunto, evidencia la existencia de un campo sociológico abierto a nuevas investigaciones, así como la importancia de seguir profundizando en el entendimiento de los campos de poder regional.

## BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, Manuel Alberto. (1997). *Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Alonso, Manuel Alberto; Vélez, Juan Carlos. (1998). “Guerra, soberanía y ordenes alternos”. *Revista Estudios Políticos*. No 13: 41-71.
- Aramburo, Clara Inés. (2009). “La tensa interacción entre las territorialidades y el conflicto armado, Urabá 1960-2004”. *Revista Controversia*. No. 192: 81-119.
- Aramburo, Clara Inés; García, Clara Inés. (2011). *Geografías de la guerra, el poder y las resistencias. Oriente y Urabá antioqueño 1990-2008*. Bogotá: INER, Colciencias, Odecofi.
- Aranguren Mauricio. (2001). *Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos*. Bogotá: Editorial Oveja Negra.
- Arenas, Juan Carlos; Ospina, Martha Cecilia. (2006). “Retóricas sobre el fraccionamiento del Partido Liberal en Medellín”. *Revista Estudios Políticos*. No 29: 123-152.
- Archila Neira, Mauricio. (2000). Las luchas sociales del post - Frente Nacional 1975 – 1990. *Revista Controversia*. No 176.
- \_\_\_\_\_. (1992). “Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio”. *Revista Estudios Políticos*. No 2: 87-112.
- Ayala Osorio, Germán; Duque Sandoval, Óscar; Hurtado Vera, Guido. (2006). *De la democracia radical al unanimismo ideológico*. Cali: Universidad Autónoma de Occidente.
- Barcelona Centre For International Affairs. (2008). *Álvaro Uribe Vélez. Presidente de la República*. CIDOB.
- Barreiro, Katalina. (2002). “La agenda política exterior Ecuador – Estados Unidos”. En: *El Orfeo en el infierno. Una agenda de política exterior ecuatoriana*. Ecuador: Flacso.
- Behar, Olga. (2011). *El Clan de los Doce Apóstoles. Conversaciones con el mayor Juan Carlos Meneses*. Colombia: Icono Editorial Ltda.
- Bejarano, Ana María. (1998). “La violencia regional y sus protagonistas: el caso de Urabá”. *Revista Análisis Político*. No 4: 54-68
- Bourdieu, Pierre. (1988). *La Distinción*. Madrid: Editorial Taurus.



- \_\_\_\_\_ (1994). *Razones prácticas, sobre la teoría de la acción*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- \_\_\_\_\_ (1997). *Sobre la televisión*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- \_\_\_\_\_ (2000). *Poder, derecho y clases sociales*. Bilbao: Editorial Desclée.
- \_\_\_\_\_ (2001). *El campo político*. La Paz: Plural Editores.
- \_\_\_\_\_ (2003). *Cuestiones de sociología*. Madrid: Ediciones Istmo.
- Bourdieu, Pierre; Wacquant, Loic (1995). *Respuestas para una antropología reflexiva*. México: Editorial Grijalbo.
- Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean Claude; Passeron, Jean Claude (2008). *El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos*. México: Siglo XXI.
- Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean Claude. (1969). *Los estudiantes y la cultura*. Barcelona: Editorial Labor.
- Castro Caycedo, Germán. (1996). *En Secreto*. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial.
- Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. (2004). *Deuda con la humanidad: paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003*. Bogotá.
- Constitución Política de Colombia. (1986). Santafé de Bogotá: Editorial Temis S.A.
- Comisión Andina de Juristas, Seccional Colombia. (1988). *Derecho a la justicia*. Lima, Perú. Editorial Mimeo.
- Contreras, Joseph; Garavito, Fernando. (2002). *El señor de las sombras. Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez*. Bogotá: Editorial Oveja Negra.
- Corte Suprema de Justicia. (2013). *Sentencia ex congresista César Pérez García*. Bogotá.
- Dávila, Andrés; Escobedo, Rodolfo; Gaviria, Adriana, y Vargas, Mauricio (2001), “El Ejército colombiano durante el período Samper. Paradojas de un proceso tendencialmente crítico”. *Colombia Internacional* No 49-50, Centro de Estudios Internacionales, Universidad de los Andes.
- Dávila Ladrón de Guevara, Andrés. (1992). “¿Del bipartidismo a un nuevo sistema de partidos?: crisis, constituyente y reconstrucción de un orden político democrático en Colombia”. *Revista América Latina Hoy*. No 3: 35-42.
- Díaz Londoño, Jorge Andrés. 2011. *Estado, poder y neoliberalismo en Colombia. Análisis sociológico a finales del siglo XX*. Manizales: Editorial Universidad de Caldas.

- Duncan, Gustavo. (2006). *Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Bogotá: Editorial Planeta.
- \_\_\_\_\_ (2005). “Reflexiones y propuestas sobre el fenómeno paramilitar”. En: *Revista Arcanos*, No 11. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris.
- Echandía, Camilo. (2013). *Narcotráfico: génesis de los Paramilitares y herencia de las bandas criminales*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- Elias, Norbert. (1989). *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y ontogenéticas*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Franco, Vilma Liliana. (2006). *Poder regional y proyecto económico: el caso de la ciudad metropolitana de Medellín y su entorno regional 1970-2000*. Medellín, Antioquia: Instituto Popular de Capacitación.
- Forero, Jorge Enrique. (2012). *Economía política del paramilitarismo colombiano*. Quito: FLACSO – Ecuador.
- Galindo Hernández, Carolina. (2005). “De la seguridad nacional a la seguridad democrática: nuevos problemas, viejos esquemas. *Revista Estudios Socio Jurídicos*. No. 099: 496 – 543.
- \_\_\_\_\_ (2007). “Neopopulismo en Colombia: El caso de Álvaro Uribe Vélez”. *Revista Iconos* No. 27: 147-162.
- Garay, Luis Jorge. (2008). *La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia*. Bogotá: Fundación Método.
- García, Clara Inés. (1998). “Antioquia en el marco de la guerra y la paz: transformaciones de la lógica de los actores armados”. *Revista Foro*. No 172: 72-97.
- \_\_\_\_\_. (1994). “Urabá: conflictos que hacen región”. *Revista Foro*. No 25: 96-104).
- García Duarte, Ricardo. “Elecciones parlamentarias 1994: el mercado político y la lógica de clientela”. *Revista Foro*. No 23.
- García Peña, Daniel. (2005). “La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico”. *Revista Análisis Político* No 53: 58-76.
- García Reyes, Paola. (2011). “La paz pérdida. Territorios colectivos, palma africana y conflicto armado en el pacífico colombianos”. Disertación doctoral, FLACSO. México.

- García Villegas, Mauricio. (2001). “Constitucionalismo perverso: normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 1957-1997”. En: DE SOUSA SANTOS, Boaventura. *El caleidoscopio de las justicias en Colombia*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- \_\_\_\_\_ (2009). *Mayorías sin democracia: desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009*. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.
- García Villegas, Mauricio; Revelo, Javier Eduardo. (2010). *Estado Alterado: clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia*. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
- Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna. (2005). *La violencia en Colombia*. Bogotá: Taurus.
- Gobernación de Antioquia. (2012). *Plan de Desarrollo Departamental 2012 - 2015: Antioquia la más educada*.
- Grupo de Memoria Histórica. (2013). *¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Colombia: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- \_\_\_\_\_ . (2010). *Silenciar la democracia: las masacres de Remedios y Segovia 1982 – 1997*. Bogotá: CNRR - Ediciones Semana.
- Gutiérrez, Francisco. (2007). *¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia 1958 – 2002*. Bogotá: Norma.
- Gutiérrez Sanín, Francisco; Dávila, Andrés. (2000). “Paleontólogos o politólogos ¿Qué podemos decir hoy sobre los dinosaurios?”. *Revista Estudios Sociales*. No 6: 39-49.
- Huhle, Rainer. (2001). “La violencia paramilitar en Colombia: historia, estructuras, políticas del Estado e impacto político”. *Revista del CESLA*. No 2: 64-81.
- Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. (2012). *Sentencia General (R) Rito Alejo Del Rio Rojas*. Bogotá.
- Lara Romero, Héctor. (1992). *Historia Contemporánea de Colombia*. Escuela Superior de Educación Pública ESAP.
- Leal Buitrago, Francisco. (1990). *Clientelismo: el sistema político y su expresión regional*. Bogotá: IEPRI.
- \_\_\_\_\_ . (1989). “El sistema político del clientelismo”. *Revista Análisis Político*. No 8: 8-32.

- \_\_\_\_\_ . (1984). *Estado y política en Colombia*. Colombia: Editorial Siglo XXI.
- León, Juanita. (2004). “Las traiciones de Segovia”. *Revista el Malpensante*. No 57.
- Gilhodés, Pierre. (1988). *Las luchas agrarias en Colombia*. Bogotá: ECOE.
- López, Claudia. (2007). “La ruta de expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia”. En: Romero, Mauricio (Editor). *Parapolítica: La ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos*. Bogotá: Corporación Arco Iris.
- \_\_\_\_\_ . (2011). “Conflicto, crimen organizado y procesos de construcción de Estado en Colombia”. *Anuarios Seguridad Regional en América Latina*. Vol. 1: 215-231.
- López Hernández, Claudia. (2010). “La refundación de la patria”, de la teoría a la evidencia. En: *Y refundaron la patria... De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Colombia: Corporación Nuevo Arco Iris.
- López, Claudia; Sevillano, Oscar. (2008). “Balance político de la parapolítica”. En: *Revista Arcanos*, No 14. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris.
- Machado, Abasolón. (2001). “El café en Colombia a principios dl siglo XX”. En: *Desarrollo económico y social en Colombia. Siglo XX*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Medina Gallego, Carlos. (1990). *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación : el caso "Puerto Boyaca"*. Bogotá: Documentos Periodísticos.
- \_\_\_\_\_ . (2005). “La economía de guerra paramilitar: una aproximación a sus fuentes de financiación”. *Revista Análisis Político*. No 53: 77-87.
- Medina Gallego, Carlos; Téllez Ardila, Mireya. (1994). *La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia*. Bogotá: Rodríguez Quito
- Mesa Hurtado, Gustavo Adolfo (2009). “Religión y violencia en documentos de los años cincuenta en Colombia. Las cartas del Capitán Franco”. *Anuario colombiano de historia social y de la cultura*. Vol. 36, No 2: 65-89.
- Ministerio de Defensa. (2002). *Los grupos ilegales de autodefensa*. Reporte confidencial.
- Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH. (2006). *Dinámica reciente de la confrontación armada en el Urabá antioqueño*

- Ocampo López, Javier. (2001). *Mitos y leyendas de Antioquia la grande*. Bogotá: Editores Colombia S.A.
- Ortiz, Carlos Miguel; Cubides, Fernando, Olaya, Ana Cecilia. (1998). *La violencia y el municipio colombiano 1980-1997*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Palacios, Marco. (2000). “Colombia: ni estado de guerra ni estado de paz; estado en proceso de paz”. *Foro Internacional*. Vol. 40, No 1: 15-40.
- \_\_\_\_\_ (2002). “Un presidente de a caballo”. *El país*, Agosto 07. Sección Opinión.
- Pécaut, Daniel. (2008). *Las FARC: ¿Una guerra sin fin o sin fines?* Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- \_\_\_\_\_. (2006). Guerra, proceso de paz y polarización política. En: *Crónica de cuatro décadas de política en Colombia*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Pinzón de Lewin, Patricia (1989). “Pueblos, regiones y partidos. La regionalización electoral”. En: *Atlas electoral colombiano*. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Pizarro Leongómez, Eduardo. (2011). *Las FARC (1949-2011). De guerrilla campesina a máquina de guerra*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- \_\_\_\_\_ (2002). *La atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las microempresas electorales*. Kellogg Institute.
- \_\_\_\_\_ (1989). “Los orígenes del movimiento armado comunista en Colombia”. *Revista Análisis Político* No 7: 7-31.
- PNUD (2003). *El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003*. Bogotá, Colombia.
- Presidencia de la República; Ministerio de Defensa Nacional. (2003). *Política de Defensa y Seguridad Democrática*.
- Reyes, Gerardo. (2007). “Cabos sueltos en la muerte de Lara Bonilla”. *El Nuevo Herald*, Septiembre 12. Sección Opinión.
- Richard, Eugenie. (2008). Álvaro Uribe: la comunicación por la imagen. *Revista Opera*. No. 8: 73-99
- Rivera, Fredy. (2012). *La Seguridad Perversa*. Quito: FLACSO Ecuador.
- Rodríguez, Clara Rocío. (2010) ¿Quiénes son las organizaciones partidistas en Colombia hoy? *Revista Política Colombiana*. No. 5: 55-71.

- \_\_\_\_\_ (2005). La reforma política de 2003: motivaciones, definiciones y contenido. En: *Los retos de la democracia: viejas y nuevas formas de la política en Colombia y América Latina*. Bogotá: Fundación Foro Nacional por Colombia.
- Roldán, Mary. (2002). *A sangre y fuego: la violencia en Antioquia, Colombia. 1946-1953*. Colombia: ICAN.
- \_\_\_\_\_ (1989). “Guerrillas, contrachusmas y caudillos durante La Violencia en Antioquia”. *Revista Estudios Sociales* No 4: 57-85.
- Romero, Mauricio. (2003). *Paramilitares y autodefensas 1982- 2003*. Bogotá: Editorial Planeta; IEPRI.
- \_\_\_\_\_ (1998). “Identidades políticas, intervención estatal y paramilitares. Caso del Departamento de Córdoba”. *Revista Foro* No 173: 76-99.
- \_\_\_\_\_. (2006). “Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir”. En: Leal Buitrago, Francisco. *En la encrucijada: Colombia en el siglo XX*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- \_\_\_\_\_ (Edición); Corporación Nuevo Arco Iris. (2011). *La economía de los paramilitares: redes de corrupción, negocios y política*. Bogotá: Random House Mondadori.
- Thomson, Janice. (1994). *Mercenaries, pirates and overeign. State-Building and extraterritorial violence in Early Modern Europe*. Princenton University Press
- Tirado Mejía, Álvaro. (1996). “Colombia siglo y medio de bipartidismo”. En: *Colombia Hoy*. Bogotá: Presidencia de la República.
- Tokatlian, Juan Gabriel. (2008). “La construcción de un “Estado fallido” en la política mundial: el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia”. *Revista Análisis Político*. No 64: 67-104.
- Uricoechea, Fernando. (1986). *Estado y burocracia en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Uprimny Yepes, Rodrigo. Las transformaciones de la administración de justicia en Colombia. En: Sousa Santos, Boaventura de. (2001) *El caleidoscopio de las justicias en Colombia*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- \_\_\_\_\_. El “laboratorio” colombiano: narcotráfico, poder y administración de justicia En: Sousa Santos, Boaventura de. (2001b) *El caleidoscopio de las justicias en Colombia*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

- Uribe de Hincapie, Maria Teresa (1992). *Urabá ¿región o territorio? Un análisis en el contextos de la política, la historia y la etnicidad*. Medellín: INER; Corpourabá.
- Uribe Vélez, Álvaro. (2012). *No hay causa perdida*. New York: New American Library.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Del escritorio de Uribe: textos selectos*. Medellín: Libros de Iela.
- Verdad Abierta. (2011). *Muerte A Secuestradores MAS: los orígenes del paramilitarismo*. Colombia [http://verdadabierta.com/component/content/article/244-auc/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo-]
- Velásquez, Carlos Alfonso. (2002). Medios y periodistas arrollados por una corriente de opinión. *Revista Palabra Clave*. No. 6.
- Velásquez Rivera, Edgar de Jesús. (2007). “Historia del paramilitarismo en Colombia”. En: *Revista história*, Vol. 16, No. 1. São paulo: Universidade Estadual Paulista.
- Wacquant, Loïc (Coord.). (2005). *El Misterio del ministerio. Pierre Bourdieu y la política democrática*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Zovatto, Daniel. (2006) En: *Democracia y desarrollo en América Latina*. <http://socioenlinea.blog.lemonde.fr/2007/07/01/la-abstenciom-electoral-en-colombia/>
- Zuleta, Estanislao. (1990). “La violencia política en Colombia”. *Revista Análisis Político* No 12.